



historia

Cuando hicimos historia

La experiencia de la Unidad Popular

César Alborno - Mario Amorós - Mario Garcés - Franck Gaudichaud
María Angélica Illanes - Tomás Moulian - Julio Pinto - Verónica Valdivia

JULIO PINTO VALLEJOS

(Coordinador - editor)

Cuando hicimos historia : La experiencia de la Unidad Popular [texto impreso] / Julio Pinto Vallejos, Coordinador y Editor; Tomás Moulian; Mario Garcés D.; Franck Gaudichaud; Mario Amorós; María Angélica Illanes O.; César Alborno; Verónica Valdivia Ortiz de Zárate. -- 1ª ed. -- Santiago: LOM Ediciones, 2005.

210 p.: 16 x 21 cm.- (Colección Historia)

ISBN: 956-282-726-7

R.P.I.: 146.532

1. Unidad Popular – Chile 2. Chile Política y Gobierno 1970 - 1973 I. Moulian, Tomás II. Garcés, Mario III. Gaudichaud, Franck IV. Amorós, Mario V. Illanes, María Angélica VI. Alborno, César VII. Valdivia Ortiz de Zárate, Verónica VIII. Título. IX. Serie.

Dewey : 320.983 --- cdd 21

Cutter : C957

Fuente: Agencia Catalográfica Chilena

JULIO PINTO VALLEJOS

(COORDINADOR-EDITOR)

TOMÁS MOULIAN / MARIO GARCÉS D. / FRANCK GAUDICHAUD

MARIO AMORÓS / MARÍA ANGÉLICA ILLANES O.

CÉSAR ALBORNOZ / VERÓNICA VALDIVIA ORTIZ DE ZÁRATE

Cuando hicimos historia

La experiencia de la Unidad Popular



LOM PALABRA DE LA LENGUA YÁMANA QUE SIGNIFICA SOL

© LOM Ediciones
Primera edición, 2005
I.S.B.N: 956-282-726-7

JULIO PINTO VALLEJOS
TOMÁS MOULIAN / MARIO GARCÉS D. / FRANCK GAUDICHAUD / MARIO AMORÓS
MARÍA ANGÉLICA ILLANES O. / CÉSAR ALBORNOZ / VERÓNICA VALDIVIA ORTIZ DE ZÁRATE
Registro de Propiedad Intelectual N°: 146.532

Motivo de la cubierta: Afiche, Cobre Chileno, gentileza de sus autores,
Luis Albornoz y Vicente Larrea.

Diseño, Composición y Diagramación:
Editorial LOM. Concha y Toro 23, Santiago
Fono: (56-2) 688 52 73 Fax: (56-2) 696 63 88

Impreso en los talleres de LOM
Miguel de Atero 2888, Quinta Normal
Fonos: 716 9684 - 716 9695 / Fax: 716 8304

En Buenos Aires EDIN
Paraná 230, 1^{er} piso, oficina N° 12, Cap. Fed.
Fono: 5411-43730980 Fax: 5411-43734210
editoresindependientes@hotmail.com

Impreso en Santiago de Chile.

PRESENTACIÓN

El gobierno de la Unidad Popular, dice Tomás Moulián en un bello artículo publicado a poco de iniciarse nuestra prolongada “transición a la democracia”, fue a la vez fiesta, drama y derrota. La mayoría de quienes se han referido a esta experiencia, sin embargo, ya sea en clave analítica, historiográfica o testimonial, han puesto el acento en el drama y la derrota, casi nunca en la fiesta. Considerando el desenlace que ella tuvo, y todo lo que vino después, el énfasis ciertamente no resulta antojadizo: los errores deben ser reconocidos y los crímenes posteriores denunciados. De tanto insistir en esa dimensión, sin embargo, hemos perdido de vista lo que la Unidad Popular tuvo de “positividad” histórica, de esfuerzo vivo y entusiasta por construir una sociedad más humana, más justa y mejor. Hemos olvidado que quienes creyeron y se jugaron por ese proyecto lo hacían movidos por una aspiración utópica y por la convicción de que las personas de carne y hueso que habitan este país, incluso –o especialmente– los más humildes y postergados, son sujetos plenamente habilitados para hacer historia. Fue esa sensación de apertura y protagonismo, de que no había estructuras demasiado asentadas ni obstáculos demasiado insalvables como para frenar la creatividad colectiva, lo que imprimió a esos mil días su sello más electrizante y más entrañable. La “fiesta” a la que alude Moulián, y que muchos partidarios de esa experiencia evocan hoy con indisimulada añoranza, no es otra cosa que la conciencia de haber hecho historia. De que, al menos por un momento, la historia se convirtió en proyecto a realizar, y no en el dominio eterno e inmovible de poderes fácticos.

Esta colección de estudios históricos se ha propuesto la tarea de rescatar, aunque solo sea fragmentariamente, esa olvidada dimensión del proceso que dio forma al gobierno de la Unidad Popular. A partir del deseo colectivo de sus autoras y autores por marcar precisamente ese énfasis, todos nos internamos en alguna faceta específica en que la “positividad” de esa experiencia se haya hecho manifiesta. Como historiadores que somos, nos propusimos también abordar nuestros respectivos campos temáticos echando mano de informaciones y testimonios de primera fuente, generados por sus propios actores en el momento mismo en que los hechos estaban ocurriendo. Esta opción hace que este libro sea más historiográfico que testimonial, por mucho que, habiendo sido varias personas del equipo también participantes del proceso estudiado, esta última dimensión no esté del todo ausente. Así se entiende

que el tono de los artículos oscile incesantemente entre lo ensayístico y lo propiamente monográfico. Pero al poner el acento en este segundo enfoque, hemos querido testimoniar nuestra convicción de que, más allá de algunos indiscutibles aportes¹, nuestra disciplina está en deuda con el período de la Unidad Popular. Es hora ya, aunque muchas de las pasiones que ella despertó sigan tan vivas como entonces (y tal vez precisamente porque siguen vivas), que la historiografía se comience a ocupar con mayor fuerza de un período que tan profundamente marcó nuestra historia reciente y nuestra convivencia actual.

El libro se abre con un artículo de Julio Pinto que explora y caracteriza la idea de revolución que motivó a quienes vieron en la Unidad Popular una posibilidad de realizar cambios profundos en nuestra organización social. Mucho se ha hablado sobre las divergencias, e incluso contradicciones, que dividieron a quienes fueron parte de este proyecto, y el artículo ciertamente da cuenta de ellas. Pero también enfatiza, y ahí radica tal vez su originalidad, la unanimidad con que unos y otros se dieron a la tarea de hacer la revolución en Chile. Sobre esa comunidad de propósitos fue que se fundó todo lo que de 1970 en adelante hizo parte de la experiencia de la Unidad Popular.

La antología continúa con un artículo de Tomás Moulián, sociólogo de demostrada sensibilidad historiográfica, sobre la vía chilena al socialismo, tal vez el más audaz y singular aporte de la Unidad Popular en el plano de la construcción ideológico-política. Si bien el desenlace de ese experimento podría llevar a conclusiones pesimistas sobre la doctrina que lo sustentó –y eso también ha sido discutido más de alguna vez– nadie podría desconocer la originalidad de una propuesta que rompía, al menos a nivel de su ejecución práctica, con todo lo que la ortodoxia socialista había consagrado como estrategias para hacer la revolución. Si de creatividad histórica se trata, y eso es lo que esta obra ha procurado resaltar, pocas realizaciones resultarían más representativas de esa aspiración que la vía cuya factibilidad Allende dio su vida por demostrar.

Los dos siguientes artículos abandonan el campo de la teoría y de las propuestas para concentrarse en dos actores sociales que fueron verdaderos pilares del protagonismo que el gobierno allendista buscaba relevar. En el primero, Mario Garcés muestra cómo el movimiento de pobladores, desde la mayor de las precariedades materiales, logró levantar un proyecto de habitabilidad popular que a partir de 1970 contó con el apoyo del recién electo gobierno de la Unidad Popular. Potenciados desde abajo y desde arriba, desde sus propias tradiciones de lucha y desde una autoridad política con un nuevo sentido de misión, pobladoras y pobladores se sintieron capaces de tomar la vida y la historia en sus manos. Por su parte, el joven historiador francés Franck Gaudichaud se interna en el mundo del sindicalismo obrero, al que toda la teoría socialista y revolucionaria identificaba como el eje de la añorada transformación social.

¹ Es interesante que la mayoría de éstos provengan de historiadores extranjeros o de chilenos radicados fuera del país. Dentro de Chile, solo unos pocos historiadores, identificados en el cuerpo de este libro, han publicado estudios monográficos sobre la Unidad Popular.

Haciendo pie en el novedoso fenómeno de los cordones industriales, fruto precisamente de las iniciativas y combates librados por sectores obreros comprometidos con el ideal de la revolución, Gaudichaud caracteriza esa forma muy particular de concebir el protagonismo social que se denominó “poder popular”. Unos y otros, obreros y pobladores, constituyen testimonios vivientes del tipo de creatividad histórica que da a esta colección de estudios su razón de ser.

Lo propio hacen, desde un ángulo más “culturalista”, las tres monografías que se desarrollan a continuación. En la primera, el historiador y periodista español Mario Amorós se ocupa de uno de los componentes más originales de la experiencia que culminó en el gobierno de la Unidad Popular, como lo fue el Movimiento de Cristianos por el Socialismo. Tendiendo a través de su propio quehacer un puente entre religión y socialismo, entre revolución y fe, los portadores de esta propuesta ensancharon la convocatoria izquierdista más allá de lo que habían sido sus fronteras tradicionales en nuestro país. La vivencia de los cristianos por el socialismo se constituye asimismo en el punto de partida del artículo de María Angélica Illanes, en el que la corporalidad del sujeto popular se convierte en eje conductor de una reflexión, a la vez ética, política y existencial, sobre la ocupación de territorio y la satisfacción de necesidades básicas como materialización del ímpetu creativo que liberó en la sociedad chilena, y sobre todo en sus clases populares, la llegada de Salvador Allende a la presidencia. Ese mismo ímpetu se despliega, esta vez en el campo de la creación artística y cultural, en el trabajo de César Alborno. Haciendo pie en algunas de las expresiones más emblemáticas de esos años, como lo fueron la Nueva Canción Chilena, la Editorial Quimantú, y diversas iniciativas en el ámbito de la plástica (entre ellas el muralismo), esta colaboración profundiza en uno de los legados más entrañables y recordados de ese período.

La antología se completa con una investigación centrada en uno de los espacios más problemáticos, y también más desconocidos, de la obra desplegada por el gobierno de la Unidad Popular: su vinculación con el aparato y la política militar. La vía chilena al socialismo se definía, precisamente, por su renuncia a alcanzar el poder por el camino armado o insurreccional, lo que según sus detractores constituyó el principal motivo de su fracaso. Lo que argumenta el artículo de Verónica Valdivia, sin embargo, es que esa renuncia no significó una confianza ciega en la lealtad institucional de las fuerzas armadas, sino por el contrario, una opción por ganarse el apoyo, a través de propuestas de desarrollo económico e integración social, de a lo menos el sector más progresista de la oficialidad y suboficialidad. El trágico desenlace del gobierno allendista y la conducta que a partir de entonces desplegaron los institutos armados ciertamente que oscurece e interpela esta visión, y de seguro despertará más de alguna reticencia entre el público lector. Pero lo que a la autora le interesa subrayar es que ése no fue un resultado predestinado y fatal, sino que pudo haber, como lo demuestran los militares que también fueron víctimas de la represión pinochetista, alternativas diferentes. Y de esa plasticidad intrínseca de la historia, de la existencia permanente de opciones a considerar, es precisamente de lo que esta colección se trata.

Es evidente que los ocho estudios que conforman esta obra no hacen justicia a la totalidad de los actores y experiencias que dieron cuerpo a la historia de la Unidad Popular, ni están tampoco cerca de agotar todo lo que sobre ese período queríamos saber. La selección temática estuvo determinada por lo que sus autoras y autores ya habían investigado o estaban en proceso de investigar, lo que derivó en la omisión (esperamos que transitoria) de actores tan relevantes como los campesinos o los estudiantes, y de propuestas tan emblemáticas como la Asamblea Popular o la Escuela Nacional Unificada. Estamos también conscientes de que las interpretaciones y los énfasis propuestos no serán necesariamente compartidos en todos sus aspectos, ni recibidos con unánime aceptación. Más aun: entre los propios integrantes del equipo, y como lo revelará con facilidad una lectura atenta, no existe una visión o una lectura uniforme de los hechos que hemos querido historiar. Pero lo que nos interesaba no era elaborar una “historia oficial” de la UP, ni encontrar una “visión de consenso” que dejara a todos conformes. Más bien al contrario: lo que quisimos fue llamar la atención sobre lo mucho que todavía queda por hacer en este campo, y abrir algunas sendas para la discusión y la exploración futuras. En esa lógica, toda discusión que nuestro libro genere, y toda complementación que sus omisiones estimulen, será una señal de que el esfuerzo no ha sido en vano.

Esta obra entra a la imprenta a pocos días del fallecimiento de la dirigente comunista Gladys Marín, y del notable fenómeno de reconocimiento social y popular que este suceso desató en un Chile que nos hemos acostumbrado a reconocer más en su apatía, su individualismo y su frenesí consumista, que en los valores a los que ella consagró su vida. No es nuestro interés, por cierto, construir una hagiografía en torno a la figura de Gladys Marín, ni silenciar las diferencias y desencuentros que más de alguna vez la alejaron de otros exponentes y expresiones de la izquierda nacional. Pero sí queremos rescatar el simbolismo que su muerte adquirió y la atmósfera que se volvió a respirar durante los días en que su féretro sirvió de elemento unificador. Para quienes estuvimos allí, fue como si una vez más, por un momento, se descorriera el velo del pasado y nos retrotrajéramos a las embriagadoras jornadas del 70 al 73. Fue como si una vez más, por un momento, volviéramos a hacer y ser la historia.

Julio Pinto Vallejos
Coordinador Colección Historia
LOM Ediciones

HACER LA REVOLUCIÓN EN CHILE

Julio Pinto Vallejos
Universidad de Santiago de Chile²

1. La Revolución: objetivo compartido

“El deber de todo revolucionario”, proclamó Fidel Castro en la Segunda Declaración de La Habana, “es hacer la revolución”. La victoria de los guerrilleros cubanos en 1959, en efecto, pareció sacar a la revolución social del ámbito de los horizontes utópicos, instalándola como una propuesta inmediata y viable para los pueblos de América Latina. “¿Qué enseña la Revolución Cubana?”, se preguntaba el propio Castro en ese mismo documento. Y se respondía: “que la revolución es posible, que los pueblos pueden hacerla, que en el mundo contemporáneo no hay fuerzas capaces de impedir el movimiento de liberación de los pueblos”³. “No importa cuál sea el resultado de las luchas de hoy”, agregaba el otro dirigente emblemático de ese proceso, Ernesto Che Guevara; “no importa, para el resultado final, que uno u otro movimiento sea transitoriamente derrotado. Lo definitivo es la decisión de lucha que madura día a día; la conciencia de la necesidad del cambio revolucionario, la certeza de su posibilidad”⁴. Inspirados en esa necesidad y esa supuesta “certeza”, y en las transformaciones prácticas que por aquellos años se ejecutaban en la isla caribeña, miles de revolucionarios latinoamericanos se lanzaron a las selvas o a las calles del continente a reproducir la hazaña. Los acompañaban en tal esfuerzo, además del ejemplo cubano, los escritos y testimonios personales de Régis Debray y el Che Guevara, principales teóricos y defensores de la guerrilla revolucionaria⁵. Los acompañaba también un clima psicológico, no solo latinoamericano sino mundial, en que hasta los cambios más ambiciosos y profundos parecían estar al alcance de la mano; en que los obstáculos más formidables parecían eclipsarse

² Este artículo forma parte del Proyecto Fondecyt N° 1040003, dirigido por Verónica Valdivia Ortiz de Zárate. Se agradece muy especialmente la colaboración de Sebastián Leiva y Karen Donoso.

³ Castro, Fidel. “Segunda Declaración de La Habana”, 4 de febrero de 1962. Texto completo reproducido en www.ciudadseva.com/textos.

⁴ Citado en *Punto Final* N° 44, diciembre de 1967.

⁵ Para el ejemplo guevarista, ver Jorge Castañeda, *La vida en rojo*, Buenos Aires, Planeta, 1997; para sus escritos, Ernesto Che Guevara, *Escritos y discursos*, (9 vols.), La Habana, Ed. de Ciencias Sociales, 1977; el texto más influyente por aquellos años de Régis Debray fue *Revolución en la revolución*, Cuadernos de la revista *Casa de las Américas* N° 1, La Habana, 1967.

frente a la fuerza de un análisis lúcido y una voluntad decidida. “Seamos realistas”, escribían los jóvenes parisinos en los muros de mayo del 68, “pidamos lo imposible”.

También en Chile, país reconocido por su “sobriedad” política y su apego institucional, los años sesenta pusieron en la agenda la inminencia de la revolución. Es verdad que ya desde comienzos del siglo XX se venía hablando en nuestras tierras sobre la viabilidad, la necesidad o el peligro de la revolución, pero la discusión en general no había sobrepasado el plano retórico o programático. Por el contrario: desde los años treinta, hasta los partidos que se definían a sí mismos como intrínsecamente revolucionarios, el Comunista y el Socialista, se habían integrado pacíficamente a un orden político caracterizado más bien por la estabilidad y el respeto a las “reglas del juego”⁶. Todo cambió, sin embargo, con el efecto combinado del triunfo de la Revolución Cubana y el ascenso electoral de la izquierda, la que en 1958 estuvo a punto de llevar a Salvador Allende a la Presidencia de la República. Como nunca antes, por uno u otro camino, surgía en Chile la perspectiva concreta de hacer la revolución. “La revolución socialista”, afirmaba una editorial de la revista *Punto Final*, “es una tarea inesquivable de nuestra generación”⁷.

La década de los sesenta, y con mayor razón los mil días de la Unidad Popular, estuvieron marcados por esa expectativa. Los partidarios de la revolución, más allá de adscripciones o matices, debatieron y pugnaron febrilmente por hacerla realidad, y por definir el carácter que ella tendría en nuestro suelo. Sus enemigos hicieron lo humanamente posible por impedirlo, y luego, cuando pareció momentáneamente triunfar, por derrotarla. Y quienes se ubicaban a medio camino, como el Partido Radical o la Democracia Cristiana, terminaron fracturados precisamente en torno a esa opción, dividiéndose entre partidarios y detractores de la revolución⁸. En el caso de esta última colectividad, que gobernó el país durante buena parte de la década, la seducción revolucionaria se deslizó incluso al interior de sus propuestas electorales: Eduardo Frei Montalva llegó en 1964 a la Presidencia de la República sobre las alas de una “revolución en libertad”, cuyo incumplimiento le sería enrostrado más de una vez no solo por sus opositores de izquierda, sino por muchos de sus propios seguidores. Al llegar las presidenciales de 1970, ambos bloques políticos, la Democracia Cristiana y la Unidad Popular, rivalizaron ante el electorado con planteamientos que al menos en algunos aspectos podían ser calificados de revolucionarios. En el Chile de los sesenta, lo “políticamente correcto” era ser partidario de la revolución.

⁶ Para este tema ver, entre otros autores, Tomás Moulian, *La forja de ilusiones: el sistema de partidos, 1932-1973*, Santiago, ARCIS-FLACSO, 1993; y Julio Faúndez, *Izquierdas y democracia en Chile, 1932-1973*, Santiago, Ediciones Bat, 1992.

⁷ *Punto Final* N° 57, junio de 1968.

⁸ La Democracia Cristiana sufrió en 1969 la escisión del MAPU, y en 1971 la de la Izquierda Cristiana, ambas por adherir al proyecto revolucionario. En el caso del Partido Radical, el apoyo de su directorio al programa de la Unidad Popular provocó la ruptura de una fracción de derecha, dirigida por Julio Durán, que pasó a denominarse Democracia Radical.

¿Pero qué se entendía exactamente, al menos entre sus adherentes declarados, por revolución? No es desconocido que entre las dos principales colectividades de la izquierda chilena de la época, el Partido Comunista y el Partido Socialista, había diferencias más que superficiales en materia estratégica o programática, las que se reproducían más o menos simétricamente en los partidos y agrupaciones más pequeñas que completaban ese campo ideológico. En lo que sí se concordaba, sin embargo, era en el deseo de hacerla, y en el significado último de la palabra. “El objetivo supremo del Partido Comunista”, declaraba en 1969 el programa aprobado en el XIV Congreso de esa colectividad, “es abrir paso a la revolución chilena”. Y precisaba: “concebimos a la revolución chilena como el movimiento de la clase obrera y del pueblo organizado que, mediante la lucha de masas, desplaza del poder a las actuales clases gobernantes, elimina al viejo aparato del Estado, las relaciones de producción que frenan el desarrollo de las fuerzas productivas e introduce transformaciones de fondo en la estructura económica, social y política del país, abriendo camino al socialismo”⁹.

“¿Qué es la Revolución”, se preguntaba por su parte el abogado y futuro intendente socialista Jaime Faivovich, “sino el cambio total del sistema imperante?”. Y se explayaba: “lo que pretendemos es destruir hasta sus cimientos este régimen económico y social, en que no solo el poder económico, sino que también el poder político está en manos de un grupo minúsculo privilegiado. Queremos colectivizar la tierra y entregarla a los campesinos, nacionalizar los bancos y socializar los medios de producción, hacer a Chile dueño y usufructuario de sus riquezas nacionales, eliminar los monopolios y conquistar el poder político para el pueblo”¹⁰. No muy diferente era lo que declaraba el naciente Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fruto él mismo del clima revolucionario imperante, en su Declaración de Principios de agosto de 1965: “La finalidad del MIR es el derrocamiento del sistema capitalista y su reemplazo por un gobierno de obreros y campesinos, dirigidos por los órganos del poder proletario, cuya tarea será construir el socialismo y extinguir gradualmente el Estado hasta llegar a la sociedad sin clases. La destrucción del capitalismo implica un enfrentamiento revolucionario de las clases antagónicas”¹¹. Mucho se debatió y se polemizó durante esos años en Chile, a veces con bastante apasionamiento y violencia, sobre los alcances, formas e implicancias del proyecto revolucionario. Pero por encima de todas las diferencias, afirmaba un lector ariqueño de *Punto Final* que se identificaba con el nombre de “Caliche”, “nuestro fin es el mismo: la revolución marxista”. O como lo dijo la Comisión Política del PC en respuesta a un emplazamiento de su similar del PS: “Nuestros dos partidos tienen como meta el socialismo, por lo tanto sus caminos no son divergentes”¹².

⁹ *El Siglo*, 24 de agosto de 1969.

¹⁰ *Punto Final* N° 17, agosto de 1966, y N° 19, enero de 1967.

¹¹ Reproducido en Pedro Naranjo y otros (eds.), *Miguel Enríquez y el proyecto revolucionario en Chile. Discursos y documentos del Movimiento de Izquierda Revolucionaria*, MIR, Santiago, LOM, 2004, pp. 99-101.

¹² *Punto Final* N° 73, enero de 1969; *El Siglo*, 10 de julio de 1966.

La revolución, entonces, se concebía como una transformación radical (“estructural”, se decía entonces) del régimen político, económico y social vigente, que era, para los efectos chilenos, el capitalismo subdesarrollado o dependiente. Se la concebía también con un apellido y una meta precisos: la revolución chilena debía ser socialista, es decir, inspirada en un modelo de organización social en que no hubieran explotadores ni explotados; en que la riqueza social se apropiara y distribuyera colectivamente (por tanto, aboliendo la propiedad privada); y en que las personas se relacionaran de acuerdo a principios de solidaridad y justicia social, y no de individualismo y competitividad como ocurría bajo el orden capitalista. El apoyo teórico para dicha propuesta, por último, lo brindaba el pensamiento marxista-leninista, al cual, en términos genéricos, adherían prácticamente todos los partidarios chilenos de la revolución¹³. Otra cosa eran las lecturas e implicancias que de esa doctrina se derivaban, materia sobre la cual, como se sabe, había profundas y profusas discrepancias.

Se pensaba, por otra parte, que el socialismo era la única fórmula capaz de liberar a países como los nuestros de su ancestral dependencia colonial o neocolonial, o como se decía por aquel tiempo, del “imperialismo”. “En Chile”, decía el Comité Central del Partido Comunista, “está planteada la necesidad de la revolución. País capitalista, dependiente del imperialismo norteamericano, sometido por más de cuatro siglos a la explotación del hombre por el hombre, ha desembocado en una situación insostenible para la gran mayoría. La imposibilidad de solucionar los problemas del pueblo y de la nación dentro del actual sistema impone la obligación de terminar con el dominio del imperialismo y de los monopolios, eliminar el latifundio y abrir paso hacia el socialismo”¹⁴. “Nuestro país semi-colonial”, concordaba el MIR en el otro extremo del espectro izquierdista, “tanto por su estructura económica como por su dependencia del mercado mundial, necesita enfrentar tareas básicas: la liquidación del imperialismo y la revolución agraria. Tras estas medidas debe movilizarse a la mayoría nacional compuesta por obreros, campesinos y sectores medios empobrecidos. Estas dos tareas de carácter democrático deben estar ligadas íntimamente y de manera ininterrumpida a los objetivos de carácter socialista”¹⁵. Para uno y para otro, entonces, la revolución aportaba simultáneamente una solución para las injusticias internas y para la subordinación externa; se ataviaba al mismo tiempo con ropaje nacionalista y socialista. En un contexto como el chileno o el latinoamericano, solo los revolucionarios podían levantar bandera de auténtico patriotismo.

Pero no eran solo las “estructuras” las destinadas a refundarse gracias a la revolución: ésta también debía proyectarse sobre las complejidades de la subjetividad humana, incluidas sus dimensiones ética y cultural. “El hombre nuevo, el hombre del futuro”, decía un

¹³ Moulián, Tomás. “Evolución histórica de la izquierda chilena: la influencia del marxismo”, en el libro del mismo autor *Democracia y socialismo en Chile*, Santiago, 1983;

¹⁴ *El Siglo*, 24 de agosto de 1969.

¹⁵ “Programa del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)”, septiembre de 1965, reproducido en Pedro Naranjo y otros (eds.), *Miguel Enríquez y el proyecto revolucionario en Chile*, op. cit., pp. 103-105.

redactor de *Punto Final* parafraseando al Che Guevara, “es el objetivo más eminente que persiguen las revoluciones verdaderas”. En ese sentido, continuaba, “lo más cautivante de la Revolución Cubana quizá radique en las conquistas logradas en el campo del intelecto, de la educación, de la verdadera moral”¹⁶. “Para que se produzca la verdadera revolución”, agregaba un lector de la misma revista, antiguo seminarista desencantado del sacerdocio, “debe haber un cambio revolucionario en la mente y en el corazón, en la actitud integral de cada persona”¹⁷. *Estrategia*, la revista teórica del MIR, reproducía en su número 6 un escrito del Che Guevara titulado “El socialismo y el hombre”, donde se destacaba lo que a su juicio caracterizaba al “hombre nuevo” que daría sustento a la sociedad socialista: “Lo importante es que los hombres van adquiriendo cada día más conciencia de la necesidad de su incorporación a la sociedad y, al mismo tiempo, de su importancia como motores de la misma”¹⁸. El cambio estructural, en otras palabras, no era sino un soporte para el despliegue de la verdadera humanización de la sociedad, impedida durante milenios por la explotación de unos sobre otros, y los consiguientes desgarros de la lucha de clases. “Si algo nos enseña la Revolución Cubana”, opinaba al respecto el otro gran teórico de la guerrilla de los sesenta, Régis Debray, es que “en la formación del hombre nuevo nadie está por encima de nadie”. “No hay tarea más humana, más revolucionaria”, remachaba, “que la de edificar desde ahora una moral y una vida cotidiana comunistas”¹⁹.

Había, en suma, entre los partidarios chilenos de la revolución, bastante concordancia respecto a los fines últimos que se perseguían, y al tipo de sociedad que se aspiraba a construir. Ésta debía ser socialista, anti-imperialista (por tanto, genuinamente nacional), humanista e igualitaria. El capitalismo, como orden imperante, debía ser derrotado y destruido, aboliendo así el individualismo, la explotación y la propiedad privada²⁰. Tan ambiciosa tarea, como es obvio, requería que las clases explotadas o simplemente desposeídas se hicieran del poder, pues el principio de la lucha de clases, al cual todos igualmente adscribían, implicaba que las clases dirigentes (la burguesía u oligarquía nacional y el imperialismo) no iban a ceder gratuitamente sus prerrogativas. “Para dar término a su inmenso drama”, decía el programa del Partido Comunista, “al pueblo no le queda otra cosa que poner en movimiento toda su fuerza organizada a fin de desplazar a las clases dominantes, que detentan en la actualidad el poder. Llega a la conclusión que debe alcanzar el gobierno por y para sí mismo, a fin de dar solución a los problemas de todo el país. El poder para el pueblo es su divisa y el único camino”²¹. “El Partido Socialista”, señalaba por su parte dicha

¹⁶ *Punto Final* N° 18, diciembre de 1966.

¹⁷ *Punto Final* N° 51, marzo de 1968.

¹⁸ *Estrategia* N° 6, Santiago, septiembre de 1966.

¹⁹ *Punto Final* N° 13, octubre de 1966.

²⁰ Sobre el impacto que esta materia tuvo en la resistencia a las propuestas revolucionarias, ver el excelente trabajo de Juan Carlos Gómez, *La frontera de la democracia*, Santiago, LOM, 2004.

²¹ *El Siglo*, 24 de agosto de 1969.

colectividad entre las resoluciones de su XXII Congreso, “como organización marxista-leninista, plantea la toma del poder como objetivo estratégico a cumplir por esta generación, para instaurar un Estado Revolucionario que libere a Chile de la dependencia y el retraso económico y cultural e inicie la construcción del socialismo”²². “Como revolucionarios”, concordaba el Tercer Congreso General del MIR, realizado a fines de 1967, “como militantes de un partido que es vanguardia de los oprimidos, establecemos como objetivo único y principal la toma del poder político”²³. Respecto a cómo hacerlo, por cierto, el consenso, como se verá más adelante, dejaba rápidamente de ser tal²⁴.

Vistos estos importantes y, para lo que se suele pensar, relativamente numerosos puntos de convergencia, es interesante constatar que el debate y la teorización izquierdista de la época solía detenerse bastante poco en la caracterización específica de la utopía que se proponía alcanzar²⁵. Así lo hacía notar, sintomáticamente, la opinión de la derecha, que en boca de quien devendría uno de sus ideólogos más influyentes, un todavía joven Jaime Guzmán, llamaba la atención sobre la vaguedad con que la izquierda normalmente abordaba el tema de los fines. Reaccionando al primer mensaje presidencial de Salvador Allende, en mayo de 1971, Guzmán planteaba que “en general, todas las discusiones entre marxistas giran sobre las estrategias que conviene seguir. Es raro verlas centradas en torno a la meta, al modelo social por el cual combaten”. Así y todo, concluía, concordando con lo que aquí se señala, “respecto de los perfiles de este último, prevalece normalmente una adhesión irrestricta, dogmática y hasta reverente”²⁶. En verdad, la unidad en los fines resultó a la larga mucho menos insistente y determinante que el desacuerdo en materias de orden estratégico, táctico y programático, lo que terminaría por configurar lo que Tomás Moulián ha denominado acertadamente un “empate catastrófico”²⁷. Enfrentados a la tarea de hacer la revolución, los partidarios de la utopía socialista se fracturaron en visiones divergentes, a menudo abiertamente antagónicas, sobre los medios, ritmos, marcos y actores que debían orientarla. A la postre, esa fractura resultó ser un componente fundamental en la derrota de la mejor ocasión histórica que ha habido en Chile, hasta la fecha, para hacer la revolución: el gobierno de la Unidad Popular. No es la menor de las ironías de esa experiencia que las discrepancias estratégicas hayan terminado pesando más que la adhesión a una utopía común.

²² Citado en Luis Corvalán Marquéz, *Del anticapitalismo al neoliberalismo en Chile*, Santiago, Sudamericana, 2001, p. 54.

²³ “La estrategia insurreccional del MIR (1967)”, documento N° 039 del Centro de Estudios Miguel Enríquez (en adelante CEME), coordinado por Pedro Naranjo.

²⁴ Tomás Moulián, en su obra *Socialismo del siglo XXI. La quinta vía*, Santiago, LOM, 2000, hace referencia a la “obsesión” de la izquierda chilena –y mundial– con la conquista del poder.

²⁵ Ver el artículo de Tomás Moulián, en este mismo libro.

²⁶ Revista *PEC*, N° 403, 28 de mayo de 1971. Agradezco este dato a Verónica Valdivia.

²⁷ Este es un argumento recurrente de su libro *Conversación interrumpida con Allende*, Santiago, LOM, 1998.

2. ¿Cómo hacer la Revolución?

El debate de la izquierda, entonces, se caracterizó por hacer mucho más hincapié en los medios que en los fines, dando lugar a una serie de “ejes polémicos” que terminaron absorbiendo el grueso de sus energías y propuestas. Para simplificar, se organizará el análisis de estos ejes polémicos en torno a lo que podrían denominarse las dos posturas paradigmáticas en torno a las que se polarizó el pensamiento revolucionario chileno durante los años sesenta y la administración de la Unidad Popular: la gradualista y la rupturista²⁸. La primera era hegemonizada en términos doctrinarios por el Partido Comunista, pero contaba también con el apoyo de un segmento del Partido Socialista, incluido, lo que obviamente no resulta menor, el propio Salvador Allende. Formaba asimismo parte de ella el sector del MAPU que eventualmente, tras el quiebre de ese partido a comienzos de 1973, pasaría a llamarse MAPU Obrero-Campesino, e igualmente lo hacía el Partido Radical. El sector rupturista, por su parte, se conformaba a partir de la mayoría del Partido Socialista, del MAPU que a la postre quedó bajo la conducción de Óscar Guillermo Garretón, de la Izquierda Cristiana, y del MIR, partido este último que, sin ser parte de la Unidad Popular, sí brindó a ese gobierno el apoyo que a su juicio merecía como representante genuino del sentir popular, aunque ello no lo eximiera de críticas que llegaron a ser bastante severas.

Es interesante anotar, para los efectos de este artículo, que para la izquierda rupturista solo ella constituía la opción auténticamente revolucionaria, apelación (“izquierda revolucionaria”) que siempre se dio a sí misma para distinguirse de su contraparte gradualista. Estos últimos, en cambio, eran motejados de reformistas, colaboracionistas u otros conceptos aun menos halagüeños, pero que tenían en común la noción de que no había en ellos un compromiso real con hacer la revolución. Este juicio, que por lo demás ignora lo que los propios gradualistas manifestaban ser su objetivo último y fundamental, no resulta fácil de sustentar. De hecho, más de alguna vez se ha argumentado, por los partidarios de esa corriente y también por analistas posteriores, que la visión más plenamente revolucionaria sería precisamente la gradualista, en tanto su modelo de construcción del socialismo no se había puesto nunca concretamente en práctica. Y esto no solo alude a propuestas estratégicas como la famosa “vía chilena al socialismo”, sino también a aspectos más sustantivos como el de compatibilizar el socialismo con la democracia en su acepción ilustrada clásica²⁹. En materia de “credenciales”, por tanto, no resulta fácil dirimir cuál de las dos posturas

²⁸ Se ha tomado esta nomenclatura del texto de Luis Corvalán Marquéz, *Los partidos políticos y el golpe del 11 de Septiembre*, Santiago, CESOC, 2000.

²⁹ Este argumento ha sido desarrollado con gran profundidad por el historiador brasileño Alberto Aggio en su libro *Democracia e Socialismo. A experiência chilena*, segunda edición, Sao Paulo, Annablume, 2002. Es compartida también, siempre a nivel historiográfico, por Luis Corvalán Marquéz, *op. cit.*, y por Juan Carlos Gómez, *op. cit.*

podía exhibir mayor legitimidad revolucionaria. Las polémicas que las dividían, como se ve, no hipotecaban la consagración a una utopía común.

El primero, y sin duda el más estudiado, de los ejes polémicos que separaron a gradualistas de rupturistas, y que hasta cierto punto da cuenta de esa misma denominación, es el que tenía que ver con las “vías” para llegar desde el capitalismo al socialismo. Al hablar de vías, la discusión hacía también referencia al tema de los ritmos y los tiempos, íntimamente asociado al anterior.

Para la izquierda gradualista, las condiciones políticas y sociales que prevalecían en Chile hacían muy improbable que la revolución pudiese verificarse por la clásica ruta del “asalto al Palacio de Invierno”, o la toma violenta del poder. Había en nuestro país, sostenían los partidarios de esta postura, toda una tradición de respeto a la convivencia pacífica y la legalidad vigente, que ya había pasado a formar parte de una cultura política nacional, compartida y valorada por las clases populares. Los espacios y los logros que estas últimas habían venido “conquistando” desde comienzos del siglo XX, por otra parte, demostraban la factibilidad de utilizar el marco institucional para irse aproximando “gradualmente” (de ahí el concepto de “gradualismo”) a la meta socialista, valiéndose para ello de medios ciertamente menos traumáticos que una insurrección frontal. La “vía pacífica”, como llegó a llamarse (posteriormente se habló de vía “no armada”, para dar cabida a acciones con cierta dosis de violencia social como las “tomas” de terrenos urbanos o rurales)³⁰, hacía justicia también a la caracterización que especialmente el PC había venido elaborando sobre el estado evolutivo de la sociedad chilena, y que hacía hincapié en sus evidentes niveles de atraso. Un país que todavía exhibía, a juicio de ese partido, marcados rasgos feudales, y cuya sujeción al imperialismo lo mantenía sumido en una condición muy próxima al coloniaje, difícilmente podía llegar al socialismo en un plazo breve. Más bien, lo que se requería era completar el tránsito al capitalismo, incluyendo tareas pendientes de la agenda “democrático-burguesa” como la reforma agraria, la industrialización y la recuperación de las riquezas básicas a la sazón bajo control del capital imperialista. Solo desde allí, se argumentaba, podría acometerse con mayores probabilidades de éxito la construcción de la utopía socialista. El camino, por lo tanto, constaba de diversas etapas (de donde emanó el apelativo de “etapismo”, también aplicado a esta corriente), las que debían irse cubriendo sistemáticamente si se quería sentar cimientos sólidos para la sociedad futura³¹.

³⁰ Agradezco esta precisión a Rolando Álvarez Vallejos.

³¹ Esta caracterización corresponde fundamentalmente a los pronunciamientos estratégicos y programáticos del Partido Comunista de Chile, elaborados entre 1958 y 1973. Aparte de los documentos propiamente partidarios, reproducidos en el diario *El Siglo*, resulta útil como referencia la obra de Luis Corvalán Lepe, Secretario General del partido durante el período considerado, *Camino de victoria*, Santiago, Horizonte, 1971. En un plano más analítico, puede consultarse el trabajo de Alonso Daire, “La política del Partido Comunista desde la post-guerra a la Unidad Popular”, en Augusto Varas (comp.), *El Partido Comunista de Chile*, Santiago, FLACSO, 1988; Rolando Álvarez, *Desde las sombras. Una historia de la clandestinidad comunista (1973-1980)*, Santiago, LOM, 2003, capítulo 2; Hernán Venegas, “El Partido Comunista de Chile: (continúa en pág. siguiente)

Esta lectura de la situación histórica y política tenía obvias implicancias en materia de alianzas y objetivos inmediatos, todas las cuales parecían avalar la tesis central de la vía “no armada”. La primera era que, en la tarea de conquistar el poder, la clase protagónica (que para los gradualistas seguía siendo, en la más pura ortodoxia marxista-leninista, el proletariado industrial) podía asociarse no solo a otros sectores populares o explotados, como el campesinado o los pobladores, sino incluso a importantes segmentos de las clases medias y la burguesía que el Partido Comunista definía como “progresista”. Aunque estas últimas posiblemente no abrigaran demasiado entusiasmo por la construcción del socialismo, sí debían hacerlo, al menos según el análisis gradualista, frente a las tareas democráticas y desarrollistas que correspondían a la primera etapa del camino. Después de todo, tanto el “feudalismo” como el imperialismo que aún imperaban en Chile tenían que resultar tan odiosos para esos sectores como para el pueblo explotado, lo que daba pie para pensar seriamente en el establecimiento de una alianza en pro del cambio estructural. Fue en esta óptica que el PC insistió durante estos años en definir la revolución chilena posible como fundamentalmente “antiimperialista, antioligárquica, antimonopolista y agraria (o sea, antilatifundista)”, y “con vistas al socialismo”³², para lo cual podían perfectamente cultivarse grados de entendimiento con sectores “progresistas” de la Democracia Cristiana y el Partido Radical. El socialismo, en esa lectura, quedaba definido como un objetivo no inmediato, y que, en rigor, no obligaba al conjunto de las fuerzas progresistas aliadas, las cuales en todo caso, también conviene aclararlo, quedarían subordinadas a la conducción obrera. Porque como lo decía el programa de gobierno de la Unidad Popular, “las transformaciones revolucionarias que el país necesita solo podrán realizarse si el pueblo chileno toma en sus manos el poder y lo ejerce real y efectivamente”.

A cambio de aceptar esta postergación en la realización del objetivo final, la tesis gradualista confiaba en aglutinar a su alrededor a una fuerza social inobjetablemente mayoritaria, la que haría posible valerse de la vía electoral (y por tanto, obviamente, pacífica) para llegar al poder e implementar sus aspiraciones programáticas. Con ello se zanjaba, a su juicio, el principal riesgo táctico implícito en cualquier fórmula insurreccional, cual era el de la derrota física o militar. Pero a la vez, y en un plano mucho más trascendente, se resolvía el dilema de la legitimación social de un cambio tan radical de las estructuras vigentes, ya fuese que éste se efectuase a corto o mediano plazo. Más de alguna vez se ha argumentado que el peor error de la Unidad Popular fue el de proponerse una redefinición drástica de los parámetros en torno a los que funcionaba la sociedad chilena con, en el mejor de los casos, un 43% de apoyo ciudadano³³. Fue justamente para prevenir esta objeción que el Partido

antecedentes ideológicos de su estrategia hacia la Unidad Popular (1961-1970)”, *Revista de Historia Social y de las Mentalidades*, Año VII, vol. 2, Universidad de Santiago de Chile, 2003.

³² *El Siglo*, 24 de agosto de 1969.

³³ Este argumento ha sido expuesto, entre otros, por Tomás Moulián, quien identifica la incapacidad de la Unidad Popular por ganarse efectivamente el apoyo de las capas medias como uno de los factores claves (continúa en pág. siguiente)

Comunista y quienes compartían su diagnóstico (entre ellos Salvador Allende) impulsaron una política de alianzas que trascendiera los límites de la convocatoria izquierdista tradicional. Ello les permitía, además, reivindicar para sí los principios y valores de la democracia pluralista en su versión ilustrada clásica, claramente uno de los aspectos más problemáticos de los regímenes socialistas históricamente existentes. Precisamente en esta conjunción entre socialismo y democracia, que además se alcanzaría, supuestamente, sin derramamiento de sangre, residía el principal atractivo y originalidad de la vía no armada a la revolución.

Dicha originalidad, en todo caso, no era literalmente absoluta, al menos en términos doctrinarios. Ya desde el XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética (1956), en el que se repudió gran parte del legado stalinista, había quedado establecida la factibilidad, aunque fuese solo teórica, de una conquista pacífica del poder para llevar a cabo la revolución. El nuevo escenario de la política mundial, con la consolidación de un bloque socialista dispuesto a coexistir pacíficamente con las sociedades capitalistas, y con el significativo incremento electoral de la izquierda en algunas de éstas, como Italia o Francia, estimuló al liderazgo soviético a validar discursivamente una vía no violenta de construcción socialista. Para un partido tan atento a mantener lazos armónicos con ese referente como lo era el PC chileno, el gesto ciertamente no resultaba menor. Cuando menos, permitía afianzar la tesis de la vía no armada sin hacer violencia manifiesta a los preceptos del marxismo-leninismo, que seguían siendo el principal soporte conceptual de su identidad política. Y cuando más, permitía hacer el intento, revolucionario por cierto, de hacer lo que en ninguna otra parte se había hecho. Eso fue, a la postre, la gran aventura que se llamó Unidad Popular.

Así, durante los mil días que duró esa inédita experiencia, el Partido Comunista y Salvador Allende se jugaron por demostrarle al mundo que el socialismo podía implementarse sin violentar el “estado de derecho”, respetando estrictamente todas las libertades democráticas, y, por sobre todo, evitando los horrores de una guerra civil. La cautela con que estos actores procuraron aplicar el programa de transformaciones de la Unidad Popular, los repetidos gestos de reconocimiento a la institucionalidad vigente, y la obsesión (a la postre frustrada) por alcanzar acuerdos con sectores de la oposición como la Democracia Cristiana, son elocuente testimonio de la seriedad con que se acometió esta estrategia. La gran apuesta política del gradualismo fue aprovechar la coyuntura favorable para realizar las modificaciones estructurales más urgentes (profundizar la reforma agraria, nacionalizar las riquezas básicas, estatizar las unidades productivas más gravitantes), cultivando a la vez un apoyo social mayoritario que permitiera seguir ganando elecciones y así consolidar la agenda de construcción del socialismo. En ese

en la inviabilidad de su proyecto; ver su *Democracia y socialismo en Chile*, Santiago, FLACSO, 1983, especialmente pp. 43-65. Desde un ángulo distinto, también lo ha planteado el historiador Cristián Gazmuri, en el *Manual de Historia de Chile* elaborado por el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Zig Zag, varias ediciones.

afán, la buena disposición de las clases medias y los sectores “no monopolizados” de la burguesía resultaba un ingrediente irrenunciable³⁴.

Para la izquierda rupturista, toda esta construcción ideológica resultaba, en el mejor de los casos, una ingenuidad, y en el peor, una traición. De acuerdo a su diagnóstico, concordante por lo demás con gran parte de los pronunciamientos clásicos del marxismo-leninismo y con las experiencias revolucionarias concretas, una clase dominante jamás renunciaría a su condición de tal sin oponer resistencia. Más aun: la legalidad burguesa, que era la que imperaba en Chile como en todos los países capitalistas, se había creado expresamente para consagrar esa situación, y muy difícilmente podía prestarse para que los revolucionarios llevaran a cabo su necesaria obra destructora. Pero incluso suponiendo que ese improbable escenario llegara a materializarse, sería la propia burguesía (reforzada, en el caso chileno, por el imperialismo) la primera en repudiar su marco institucional con tal de defender lo esencial: la conservación de la propiedad privada y las relaciones de explotación. Así había ocurrido, señalaban una y otra vez las voces rupturistas, cada vez que en América Latina algún gobierno reformista se había aproximado demasiado a lo que Juan Carlos Gómez ha denominado “la frontera de la democracia”, como en Guatemala en 1954 o en Brasil diez años después. Así lo había declarado también expresamente el gobierno norteamericano, mediante la llamada “Doctrina Johnson”, al justificar el derrocamiento del presidente dominicano Juan Bosch en 1965: Estados Unidos no toleraría una segunda Revolución Cubana dentro de su “esfera de influencia” o, menos eufemísticamente, su “patio trasero”³⁵. Para hacer la revolución en Chile, por tanto, resultaba ineludible asumir la vía de la insurrección armada.

Así lo planteaba ya en una fecha tan temprana como marzo de 1962 el periódico *El Rebelde*, a la sazón órgano oficial de la Vanguardia Nacional Marxista, uno de los grupos que fundarían tres años después el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR): “Nosotros los marxistas dejamos a los trabajadores el que respondan a esta pregunta: ¿en qué parte del mundo, los trabajadores han llegado al poder pacíficamente? En cambio nosotros podemos afirmar rotundamente que

³⁴ Aparte de los discursos del propio Salvador Allende y los documentos y prensa del Partido Comunista, la estrategia gradualista encuentra su mejor exponente en el asesor político de ese gobernante, Joan Garcés. Ver al efecto sus obras *El Estado y los problemas tácticos en el gobierno de Allende*, México, Siglo XXI, 1974; y sobre todo *Allende y la experiencia chilena*, Barcelona, Ariel, 1976. Para un análisis del período en una visión más bien favorable a esta perspectiva, ver Alberto Aggio, *Democracia e socialismo*, op. cit.; Luis Corvalán Marquéz, *Los partidos políticos y el golpe del 11 de septiembre*, op. cit.; Sergio Bitar, *Transición, socialismo y democracia. La experiencia chilena*, México, Siglo XXI, 1979. Ver también Tomás Moulian, *Conversación interrumpida con Allende*, op. cit.

³⁵ Recientemente han aparecido algunos estudios que, desde el medio académico estadounidense, analizan prolija y críticamente las relaciones entre ese país y América Latina, destacando por cierto el candente período posterior a la Revolución Cubana, en cuyo contexto se formuló la mencionada Doctrina Johnson. Esta literatura complementa y actualiza la voluminosa producción latinoamericana de la época, encabezada por los sectores de izquierda y los teóricos de la dependencia. Ver, a modo de ejemplo, Peter Smith, *Talons of the Eagle. Dynamics of U.S.-Latin American Relations*, Oxford University Press, 1996; y Lars Schoultz, *Beneath the United States. A History of U.S. Policy toward Latin America*, Harvard University Press, 1988. Agradezco ambas referencias a Brian Loveman.

solo en forma revolucionaria han surgido Estados Socialistas como la Unión Soviética, China Popular y Cuba³⁶. Ya constituido el MIR como partido con identidad propia, su Declaración de Principios, de agosto de 1965, afirmaba que “el Movimiento de Izquierda Revolucionaria rechaza la teoría de la ‘vía pacífica’ porque desarma políticamente al proletariado y por resultar inaplicable, ya que la propia burguesía es la que resistirá, incluso con la dictadura totalitaria y la guerra civil, antes de entregar pacíficamente el poder. Reafirmamos el principio marxista-leninista de que el único camino para derrocar el régimen capitalista es la insurrección popular armada”. “La violencia revolucionaria”, concordaba el Partido Socialista en su famoso congreso de Chillán de 1967, “es inevitable y legítima. Resulta necesariamente del carácter represivo y armado del Estado de clase. Constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y económico y a su ulterior defensa y fortalecimiento”. Por ese mismo tiempo, la revista *Punto Final*, comúnmente catalogada como portavoz “transversal” de la corriente rupturista, argumentaba rotundamente lo siguiente: “Cada vez se afianza más en la Izquierda la convicción de que la conquista del poder para hacer la revolución y no para instaurar un régimen reformista, no se conseguirá por la vía electoral. Aunque haya discrepancias en cuanto a la oportunidad y los métodos o la táctica, la acción armada es inevitable, en cierta etapa. Entonces, las combinaciones político-electorales carecen de importancia. No resolverán nada³⁷. La Revolución Cubana, referente obligado de todas estas instancias, así como los golpes de Estado con apoyo estadounidense que por entonces proliferaban por todo el continente, no permitían hacerse ninguna ilusión al respecto.

Tan taxativo diagnóstico se apoyaba fundamentalmente sobre una lectura estricta de las teorías marxistas del imperialismo y la lucha de clases. En relación a la segunda, decía la Declaración de Principios del MIR, el “hecho histórico de la lucha de clases” implicaba que la destrucción del capitalismo solo podía lograrse mediante “un enfrentamiento revolucionario de las clases antagónicas”. En tal virtud, toda estrategia orientada a “amortiguar” esa lucha debía rechazarse categóricamente: “Combatiremos toda concepción que aliente ilusiones en la ‘burguesía progresista’ y practique la colaboración de clases. Sostenemos enfáticamente que la única clase capaz de realizar las tareas ‘democráticas’ combinadas con las socialistas, es el proletariado a la cabeza de los campesinos y de la clase media empobrecida”. Caía así por la borda el razonamiento gradualista sobre la necesidad de proceder primero a una revolución nacional-democrática para solo después plantearse la tarea de construir el socialismo: “Rechazamos, por consiguiente, la ‘teoría de las etapas’, que establece equivocadamente que primero hay que esperar una etapa democrático-burguesa, dirigida por la burguesía industrial, antes de que el proletariado tome el poder”. En esa lógica, “las directivas burocráticas de los partidos tradicionales de la izquierda chilena defraudan las esperanzas de los trabajadores; en vez de luchar por el derrocamiento de la

³⁶ *El Rebelde* (Primera Época), 31 de marzo de 1962.

³⁷ *Punto Final* N° 35, agosto de 1967.

burguesía se limitan a plantear reformas al régimen capitalista, en el terreno de la colaboración de clases; engañan a los trabajadores con una danza electoral permanente, olvidando la acción directa y la tradición revolucionaria del proletariado chileno”.

Un razonamiento parecido, con evidentes resonancias de la entonces ascendente teoría de la dependencia³⁸, se aplicaba a las fórmulas para combatir al imperialismo, que como se recordará constituía una de las bases sobre las cuales la izquierda gradualista sustentaba su tesis de las etapas: primero derrotar al enemigo fundamental (el imperialismo), con la ayuda de las capas medias y la burguesía nacional, y luego acometer la construcción socialista. Para la izquierda rupturista, en cambio, la dominación imperialista hacía impracticable cualquier tentativa de llegar pacíficamente al poder político, e ilusoria toda delegación de responsabilidades en alguna burguesía nacional o progresista. Decía al respecto el joven dirigente socialista Ricardo Núñez, en una entrevista publicada en *Punto Final*: “Solo un sólido frente de clase, sin compromiso con los sectores de la burguesía que han mantenido esta situación de subdesarrollo y de dependencia del imperialismo norteamericano en nuestro país, logrará abrir posibilidades ciertas a la insurgencia armada de las masas, que encabezarán los partidos de la clase obrera. Por esto cualquier intento de conciliación con las fuerzas defensoras del statu quo vigente e incapaces de desempeñar el rol que en otros continentes jugaron, no hace sino postergar a todos aquellos que ven en el socialismo la concreción de sus aspiraciones”³⁹.

Concordaba en esa apreciación el Tercer Congreso General del MIR, de diciembre de 1967, al señalar que la vía armada era consecuencia insoslayable de una dominación imperialista bajo cuya égida las clases dominantes nacionales solo cumplían un papel secundario: “Analizando las clases dominantes en Chile, hemos llegado a la conclusión de que no es puramente la burguesía chilena, engendrada y desarrollada por el imperialismo, la que domina en nuestro país. Evidentemente si la responsabilidad principal de gobierno, y la dominación principal la ejerce el imperialismo a través de un gobierno lacayo [como calificaba el MIR al de Eduardo Frei Montalva] y una burguesía títere, de todo esto se desprende, que para calificar exactamente el tipo de dominación que existe y para determinar correctamente quién lo ejerce, lo atribuiremos a lo que hemos denominado complejo social dominante”. Estando este “complejo social dominante” controlado en última instancia por el imperialismo, “cualquier proceso revolucionario, cualquier forma de amenaza al orden vigente engendra inmediatamente la contrarrevolución armada con presencia, desde ya (sic), del imperialismo”. En consecuencia, “el uso de la fuerza y la violencia revolucionaria no se plantea ya como ‘posibilidad’ sino como la ‘solución urgente de cada momento’. Es decir que no solo tomaremos el poder usando la violencia en contra de los enemigos nacionales, sino que también y desde los comienzos contra los enemigos extranjeros”⁴⁰.

³⁸ Ver al respecto la serie de artículos de Andrés Pascal Allende titulada “El MIR, 35 años”, publicada en *Punto Final* Nos. 477-482, agosto-octubre del 2000, especialmente el N° 477, de agosto del 2000.

³⁹ *Punto Final* N° 16, noviembre de 1966.

⁴⁰ “La estrategia insurreccional del MIR”, documento resumen de la “Tesis Político-Militar” aprobada en el Tercer Congreso General del MIR, diciembre de 1967; documento N° 039 del Centro de Estudios Miguel Enríquez.

La lucha armada surgía así, desde la óptica rupturista, como un componente insoslayable (e incluso conveniente, en tanto fogueaba los ánimos populares) de la revolución chilena. Esta opción, sin embargo, al menos en la perspectiva del MIR, que fue la agrupación que más elaboró políticamente la materialización de la vía armada, no debía confundirse con la opción “foquista” o guerrillera a la sazón en boga en Latinoamérica. Tampoco se la concebía como una reproducción de la insurrección generalizada que había dado origen a la Revolución Rusa de 1917, y que suponía un Estado burgués profundamente debilitado por una crisis endógena, y una organización y combatividad inmensas de las masas populares. Por sus características históricas y estructurales, Chile solo podía asumir el camino revolucionario por la vía de una “guerra prolongada e irregular”, donde el componente propiamente militar quedaría subordinado a la lucha política y social⁴¹. Esto explica que, más allá de denuncias nunca fundamentadas de diversos órganos de expresión derechista, el MIR nunca se abocara durante estos años a la formación de grupos guerrilleros propiamente tales. Su acción armada concreta se restringió a algunos asaltos a bancos y supermercados durante una breve etapa de clandestinidad entre mediados de 1969 y comienzos de 1970, la que fue posteriormente suspendida como un gesto de reconocimiento a la dinámica que fue cobrando la candidatura de Salvador Allende. Los Grupos Político-Militares (GPM) creados durante esa misma etapa tuvieron de militar poco más que el nombre, pues su quehacer se concentró en la penetración de diversos “frentes de masas”, sobre todo poblacional y campesino, y la ejecución de algunas “acciones directas” al estilo de las entonces emblemáticas ocupaciones de terrenos⁴².

En cuanto al otro gran exponente de la vía armada, el Partido Socialista, su accionar en ese plano se redujo a apoyar tangencialmente, a mediados de 1968, un conato de resistencia armada al desalojo de un predio agrícola en la Provincia de Aconcagua, ocupado a la sazón por unos campesinos en huelga que fueron rápidamente reprimidos por la fuerza policial. El gobierno de la época denunció el hecho como parte de un “plan subversivo nacional”, lo que dio lugar a todo tipo de especulaciones sobre la incubación de grupos guerrilleros con respaldo foráneo (incluyendo, supuestamente, al régimen dictatorial argentino entonces en el poder...). Considerando que el armamento incautado a los ocupantes del fundo no pasaba de bombas molotov y algunas armas de caza, la dimensión del “foco guerrillero” no parece haber sido

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Este período de la historia del MIR ha sido tratado por Carlos Sandoval en sus dos libros: *El MIR, una historia*, Santiago, Sociedad Editorial Trabajadores, 1990; y *Movimiento de Izquierda Revolucionaria 1970-1973*, Concepción, Escaparaté, 2004; Pedro Naranjo, en su estudio preliminar al libro ya citado *Miguel Enríquez y el proyecto revolucionario en Chile*; Luis Vitale, *Contribución a la Historia del MIR*, Santiago, Ed. Instituto de Investigaciones de Movimientos Sociales “Pedro Vuskovic”, 1999; y Francisco García Naranjo, *Historias derrotadas. Opción y obstinación de la guerrilla chilena. 1965-1988*, Hidalgo: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 1997. Hay un excelente resumen sobre la etapa fundacional del MIR y su bibliografía en la tesis inédita de D.E.A. de Eugenia Palieraki, titulada “Le Mouvement de la Gauche Révolutionnaire au Chili (1965-1973). Réflexions sur la culture politique chilienne dans l'ère des utopies révolutionnaires latino-américaines”, Universidad París I Panthéon-La Sorbonne, 2002.

muy sustantiva. Un redactor de *Punto Final*, a quien no podría suponerse renuente a destacar lo que podría haberse visto como el primer germen de la lucha armada en Chile, concluía: “Cualquier intento de convertir la experiencia del fundo San Miguel en una táctica de lucha generalizada para la izquierda revolucionaria, parece estar destinado al fracaso. Sin embargo, la actitud de franca rebeldía de los campesinos contra la injusticia de su situación, inyectó una corriente de acción que necesitaba la izquierda”⁴³. La corriente, sin embargo, no resultó contagiosa.

De esa forma, la estrategia de la vía armada quedó reducida durante aquellos años a poco más que un gran despliegue retórico, lo que no impidió que todavía en vísperas de la elección presidencial de 1970 el MIR siguiera insistiendo en su escepticismo respecto de la vía electoral: “Sostenemos que las elecciones no son un camino para la conquista del poder. Desconfiamos que por esa vía vayan a ser gobierno los obreros y campesinos, y se comience la construcción del socialismo. Estamos ciertos de que si ese difícil triunfo electoral se alcanza, las clases dominantes no vacilarán en dar un golpe militar. Sostenemos que las enseñanzas que las masas han obtenido de su experiencia en las pasadas campañas presidenciales no han sido las que arman y preparan para la conquista del poder”⁴⁴. Sin embargo, ante el hecho consumado del triunfo y ratificación del gobierno de la Unidad Popular, el MIR se vio en la necesidad de reconocer la legitimidad y el arraigo popular de la tan discutida propuesta⁴⁵.

A partir de ese momento, y sin renunciar explícitamente a la estrategia de la lucha armada, el accionar de ese partido se concentró en formas más “políticas” de confrontación (ocupaciones de terrenos y unidades productivas, fortalecimiento de sus frentes de masas, agitación y movilización callejera), todo dentro de un marco de respaldo crítico al gobierno de Allende. Las referencias directas a la necesidad de armar al pueblo y prepararlo para la guerra cedieron lugar a un discurso centrado en la “movilización de masas”, las que mediante una acción autónoma y permanente, pero en que no se aludía explícitamente al componente militar, podrían llegar a decidir la lucha de clases en su favor. En ese contexto, la crítica del MIR se concentró crecientemente en las vacilaciones del gobierno de la Unidad Popular en cuanto a respaldar y dinamizar este fenómeno, dada su supuesta preferencia por buscar acuerdos imposibles con la Democracia Cristiana mediante el efecto tranquilizador que produciría la desmovilización de las masas⁴⁶. Convencido de que una coyuntura “pre-revolucionaria” como la que a su juicio se vivía debía redundar en un recrudecimiento de la lucha de clases, el MIR no vacilaba en incluir a la Democracia Cristiana y los partidos de derecha (Partido Nacional, Democracia Radical, Patria y Libertad), así como a los gremios empresariales, en un solo gran bloque aglutinado en torno a la defensa del capitalismo y del derecho

⁴³ *Punto Final* N° 61, agosto de 1968.

⁴⁴ “El MIR y las elecciones presidenciales”, *Punto Final* N° 104, mayo de 1970.

⁴⁵ “El MIR y el resultado electoral”, documento público del Secretariado Nacional de ese partido publicado en *Punto Final* N° 115, octubre de 1970.

⁴⁶ Ver por ejemplo una entrevista a Miguel Enríquez publicada en *El Rebelde* del 2 de mayo de 1972 con el sugerente título de “Hay que resolver el problema del poder”.

de propiedad, lo que convertía en suicida cualquier intento de frenar el ímpetu revolucionario de las masas. El paro patronal de octubre de 1972, que pareció confirmar ese diagnóstico, consolidó dicha visión estratégica, y a la vez redobló los esfuerzos del MIR por constituir un “polo revolucionario” en compañía del Partido Socialista, la Izquierda Cristiana y el MAPU-Garretón. Aun entonces, sin embargo, la lucha siguió planteándose más en términos de seguir acumulando fuerza social por medio de la acción directa no militar (ocupación permanente de espacios territoriales y unidades productivas), y a la vez ganarse el apoyo de la tropa y suboficialidad de las fuerzas armadas existentes. Ocurría así un desplazamiento no menor en la localización del brazo armado de la revolución⁴⁷. Llegado el 11 de septiembre de 1973, los partidarios de la línea rupturista habían logrado acumular una sustantiva base de apoyo social, pero no habían conformado un ejército del pueblo capaz de enfrentar al ejército profesional⁴⁸. La vía armada, en suma, nunca abandonó el campo de la proyecciones futuras.

Un segundo eje polémico entre gradualistas y rupturistas, por cierto bastante menos historizado que el anterior, tuvo que ver con el marco geográfico en el que debía desenvolverse la revolución. Para los segundos, la discusión no merecía dudas: considerando el peso que ejercía en la situación política la presencia del poderío imperialista, la lucha solo podía darse a escala continental, y su triunfo pasaba por un estallido generalizado a toda América Latina. El precedente cubano, reiteradamente recordado y ensalzado por esta corriente, tenía en este sentido un efecto claramente inspirador. Decía al respecto el Congreso Constituyente del MIR: “Las masas cubanas insurrectas, con su Gobierno revolucionario al frente, con sus Milicias obreras y populares y su Ejército Rebelde, demostraron que la defensa del derecho a la autodeterminación y de la independencia nacional, así como la conquista de los derechos democráticos de los trabajadores y de su exigencia de organizar la vida social y económica de Cuba, forman parte de un PROCESO ÚNICO, GLOBAL E ININTERRUMPIDO (sic), de carácter revolucionario, que culmina con la transformación socialista del país”⁴⁹. Coincidió en ello la revista *Punto Final* al conmemorar el décimo aniversario de dicha Revolución: “El estímulo del ejemplo cubano, y la clarificación que al calor de su presencia se ha producido, constituyen un aliciente del que hasta hace diez años, cuando campeaban teorías reformistas, se carecía en el continente”⁵⁰. Sin embargo, el endurecimiento de la política

⁴⁷ Así lo planteó Miguel Enríquez en su famoso discurso del Teatro Caupolicán el 14 de junio de 1973, reproducido en Pedro Naranjo y otros, op. cit.

⁴⁸ Así lo hace notar con mucha nitidez Tomás Moulián, al señalar que ni siquiera después de iniciada la ofensiva golpista el MIR centró su análisis en la correlación militar de fuerzas. “En vez de eso”, señala, “centraron el problema en el desarrollo de un poder militar de masas, el cual –paradojalmente– nunca fue pensado bajo la forma de un ‘Ejército Popular’. Parecían concebir la defensa del gobierno sobre la base de fuerzas propias, emanadas de la organización y concientización de las masas”, *Democracia y socialismo en Chile*, op. cit., pp. 58-59.

⁴⁹ *El Rebelde* (Primera Época), N° 32, septiembre de 1965.

⁵⁰ *Punto Final* N° 72, enero de 1969.

hemisférica de los Estados Unidos tras la Crisis de los Misiles y la fracasada intentona contrarrevolucionaria en Playa Girón, formalizada en la denominada “Doctrina Johnson”, hacía muy difícil que esta experiencia de construcción socialista pudiera repetirse en la misma forma. Así lo reconocía el Tercer Congreso General del MIR al señalar que “la realidad de América Latina en estos últimos años, asimismo como la experiencia mundial de este período caracterizada principalmente por la guerra en Vietnam [otro referente emblemático de la izquierda rupturista], plantea a las clases revolucionarias de nuestro país un nuevo enemigo (que no es tan nuevo), una nueva máquina militar que aplastar, un nuevo ejército represivo que destruir: el yanqui”.

Así entonces, retomando una tesis internacionalista que se entroncaba con el marxismo más clásico, la izquierda que se autodenominaba “revolucionaria” asumió las banderas continentalistas que encontraron su máxima expresión en la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), cuya primera conferencia se inauguró en La Habana, el 28 de julio de 1967, precisamente bajo el lema “el deber de todo revolucionario es hacer la revolución”. Decía la convocatoria a este evento: “Se lucha hoy en muy diversas partes de ‘esta América nuestra’, y de esas luchas surgen experiencias que es necesario intercambiar. Es nuestro deber llevar adelante las resoluciones de la Conferencia Tricontinental, que proclamó el derecho de los pueblos de oponer la violencia revolucionaria a la violencia del imperialismo y la reacción. Es necesario unir, coordinar e impulsar la batalla de todos los pueblos explotados de América Latina”⁵¹. Esta sensibilidad también se expresó en un interés permanente por los movimientos guerrilleros que a la sazón se desarrollaban a lo largo y ancho de América Latina, y a los que la izquierda rupturista constantemente apelaba como objeto de emulación. “La solidaridad con los guerrilleros de América Latina”, proclamaba en un momento el columnista de *Punto Final* Jaime Faivovich, “es un deber del movimiento popular. Pero tiene que traducirse en algo mucho más concreto que el simple respaldo moral o verbal. Solo así será un aporte real a la lucha antimperialista y tendrá alguna repercusión en nuestro país”⁵². “Era difícil”, evocaba por su parte muchos años después Tomás Moulián, “en la atmósfera de esperanza que desataron Cuba y Vietnam, no dejarse arrastrar por la posibilidad revolucionaria, negarse a ver en las guerrillas venezolanas, guatemaltecas, peruanas o en la experiencia de Guevara en Bolivia, un camino posible”⁵³.

El ascenso de la Unidad Popular al gobierno, sin embargo, generó una situación tan obviamente inédita que la tesis latinoamericanista quedó severamente interrogada, al menos como guía para la praxis cotidiana. No se renunció, por cierto, al internacionalismo doctrinario, como lo demostró la reacción del MIR ante las vacilaciones que exhibió el gobierno de Allende al aterrizar en Chile un avión secuestrado por un grupo de revolucionarios argentinos escapados de la dictadura militar de Alejandro Agustín Lanusse. “Con el surgimiento y desarrollo

⁵¹ Reproducida textualmente en *Punto Final* N° 24, marzo de 1967.

⁵² *Punto Final* N° 30, junio de 1967.

⁵³ Moulián, Tomás. *Conversación interrumpida con Allende*, op. cit., p. 43.

del imperialismo”, editorializaba en esa ocasión *El Rebelde*, “la lucha de clases asumió un carácter cada vez más internacional. El internacionalismo proletario es por esto un componente imprescindible del programa revolucionario, de la estrategia revolucionaria, para la conquista y la consolidación del poder. El internacionalismo proletario es la herramienta concreta que los pueblos tienen para apoyarse los unos a los otros en su lucha común contra el poderío militar, político y económico del imperialismo”⁵⁴.

En términos prácticos, sin embargo, las complejidades de la política interna ensimismaron a la izquierda rupturista en la decodificación y proyección de la coyuntura inmediata, de cuyo desenlace dependía el futuro concreto, no solo retórico, de la revolución chilena. Este desplazamiento analítico se tradujo incluso en un relevamiento de la autonomía de la derecha y la burguesía nacional, la que de haber sido catalogada como mero furgón de cola del imperialismo, pasó a convertirse en un adversario peligroso y astuto por sus propios méritos, capaz de combinar creativamente medidas aparentemente conciliatorias (generalmente por cuenta de la DC), con el ataque implacable y frontal orientado al derrocamiento del gobierno popular. Incluso los frentes de masas, espacio destacado y predilecto del “polo revolucionario”, comenzaron a ser disputados por una derecha que, precisamente en virtud de esa estrategia de movilización callejera, pasó rápidamente a ser tildada de “fascista”⁵⁵. Sin nunca desconocer el impacto que seguía teniendo el accionar imperialista, recordado vívidamente en incidentes como los intentos desestabilizadores de la transnacional telefónica ITT o el embargo internacional provocado por las expropiadas compañías cupríferas estadounidenses, el transcurso de los mil días de la Unidad Popular forzó a la izquierda rupturista a centrar cada vez más su atención en el ámbito local. Posiblemente muy a su pesar, las “particularidades” de la situación chilena la forzaron a relegar a un segundo plano su perspectiva internacionalista y continental.

Ese era, en cambio, el énfasis que desde un comienzo había caracterizado a la vertiente que promovía la revolución “gradual”. No se trata, por cierto, de que estos sectores hayan repudiado doctrinaria o incluso prácticamente el internacionalismo proletario. Interpelada por el Partido Socialista en virtud de lo que éste percibía como una cierta tibieza en su apoyo a la revolución latinoamericana, la Comisión Política del Partido Comunista respondía con vehemencia que “el XIII Congreso Nacional de nuestro Partido fue categórico en afirmar que la tarea suprema de los revolucionarios, la tarea de las tareas, es la derrota de los planes agresivos del imperialismo y la solidaridad consiguiente de los pueblos de América Latina, en primer lugar con la gloriosa Revolución Cubana”⁵⁶. Pero lo cierto era que la tesis de la revolución

⁵⁴ *El Rebelde*, 22 de agosto de 1972. La fuga de los prisioneros políticos de la cárcel militar de Rawson está detallada y vívidamente tratada en el primer tomo de la trilogía de Martín Caparrós y Eduardo Anguita *La Voluntad*, tres volúmenes, Buenos Aires, Grupo Editorial Norma, 1998, donde se hace expresa referencia a las dificultades que su venida a Chile suscitó a un gobierno allendista a la sazón empeñado en demostrar su apego a la legalidad y en facilitar un diálogo con la Democracia Cristiana.

⁵⁵ Numerosas referencias explícitas al respecto en las ediciones de 1972 y 1973 de la prensa de la izquierda rupturista, como *El Rebelde* y *Punto Final*.

⁵⁶ *El Siglo*, 10 de julio de 1966.

socialista por la vía no armada o electoral se cimentaba fuertemente en una lectura de la situación nacional que hacía más hincapié en sus particularidades que en los elementos compartidos a nivel continental. Era, en su opinión, la historia específica de Chile en el siglo XX la que había demostrado la plasticidad de las instituciones existentes frente a la penetración de ideas progresistas y revolucionarias, así como la posibilidad objetiva de concertar alianzas con sectores que no pertenecían directamente a las filas populares. Era ella también la que corroboraba la capacidad de las clases trabajadoras nacionales de conquistar posiciones y obtener mayores espacios de poder sin ir necesariamente a una acción guerrillera o una guerra civil, de dudoso arraigo psicológico e incierto desenlace militar. Por lo demás, era la propia teoría marxista, argumentaban los dirigentes del PC, la que enfatizaba la necesidad de adecuar la política revolucionaria a las condiciones concretas de cada país, pues “la revolución sigue cursos diferentes y se abre paso en cada latitud con las más diversas formas de lucha”⁵⁷. En el caso concreto de América Latina, decían, “tenemos también muy distintos niveles de desarrollo económicos, políticos y sociales”. Lo que llevaba al Secretario General de la colectividad, Luis Corvalán, a concluir que “esto determina el carácter de las revoluciones del continente, la diversidad de las formas y la diferencia de tiempo en la liberación de los pueblos latinoamericanos”⁵⁸.

Para la crítica rupturista, esta sobrevaloración de las especificidades nacionales no era sino un pretexto para evadir las enseñanzas que, según su criterio, el ejemplo cubano y la reacción estadounidense hacían “inesquivables”. “Chile”, editorializaba la revista *Punto Final* en octubre de 1968, “no es una excepción”. Y elaboraba: “la burguesía de este país no entregará el poder impresionada por desplantes oratorios en el Parlamento, ni por la exigencia de masas inermes. Sus aparatos represivos se perfeccionan y equipan con vistas a enfrentar cualquier disputa por el poder”. Por otra parte, “las reiteradas notificaciones de Estados Unidos, en el sentido de que no permitirá ningún régimen que desafíe sus normas, han sido dictadas para América Latina en su conjunto, incluido Chile”. En consecuencia, “el espejismo de una democracia burguesa, que ha logrado engañar inclusive a fuerzas nacidas para destruirla, es quizás el obstáculo mayor al libre desarrollo de la corriente revolucionaria en nuestro país... Los que hablan vagamente de una revolución sin atreverse a decir, y con ello a preparar al pueblo, que será inevitablemente violenta, están mintiendo descaradamente”⁵⁹. Era por lo tanto una falacia plantear, como lo hacía la corriente que se autodenominaba “realista”, que “Chile como país excepcional, tenía que contar con una estrategia y una táctica propia”⁶⁰. Ni las “leyes objetivas” de la lucha de clases, ni la mundialización de ella en la era del imperialismo permitían hacerse ilusiones sobre una presunta excepcionalidad chilena, tesis que por lo demás era más esperable de los sectores dominantes del

⁵⁷ *El Siglo*, 18 de abril de 1966.

⁵⁸ Citado en Hernán Venegas, op. cit., p. 57.

⁵⁹ *Punto Final* N° 65, octubre de 1968.

⁶⁰ *Punto Final* N° 45, enero de 1968.

país, quienes ya desde el siglo XIX venían proclamando nuestras profundas diferencias con el resto de Latinoamérica, que de los partidarios de la revolución.⁶¹

Pero contra todos estos pronósticos, el triunfo electoral de septiembre de 1970, y sobre todo la toma de posesión del gobierno de la Unidad Popular en noviembre de ese mismo año, pareció darles la razón a los “excepcionalistas”. Con mayor desplante aun que los teóricos del Partido Comunista, Salvador Allende y sus asesores más inmediatos se atrevieron a partir de ese momento a hablar abiertamente de una “vía chilena” al socialismo, una manera alternativa de concebir tanto el acceso de las fuerzas revolucionarias al poder como el carácter de la sociedad que se iba a desarrollar. Al “no existir experiencias anteriores que podamos usar como modelo”, señalaba a este respecto Allende en su primer mensaje presidencial ante el Congreso, “tenemos que desarrollar la teoría y la práctica de nuevas formas de organización social, política y económica”⁶². De hecho, los tres años que alcanzó a gobernar el conglomerado allendista pueden caracterizarse como una desesperada lucha por demostrar la justeza de esta pretensión de originalidad histórica, acorralado a uno y otro lado por la hostilidad derechista y la incredulidad de los sectores más rupturistas, incluso de aquellos que formaban parte de la Unidad Popular. Para estos últimos, la derrota de 1973 vino a corroborar que la “vía chilena” no era más que una expectativa ilusoria, condenada desde siempre al fracaso. Para los partidarios de dicha “vía”, en cambio, fue la intransigencia rupturista la que socavó desde adentro las condiciones y equilibrios que ella requería para prosperar. Quienquiera que haya tenido la razón, lo cierto es que a partir del 11 de septiembre de 1973 Chile claramente dejó de ser una excepción: como gran parte de las sociedades latinoamericanas que se enfrentaron por aquellos años a la perspectiva de hacer la revolución, su sino fue terminar bajo la tutela represiva de una dictadura militar. La democracia colapsó junto con el socialismo, y quedamos más lejos que nunca de ser los “ingleses (ni qué decir los cubanos) de Sudamérica”.

Los desacuerdos entre gradualistas y rupturistas encontraron un tercer ámbito de expresión en la localización del principal eje conductor de los cambios revolucionarios. La estrategia “institucionalista” de los primeros depositaba un fuerte énfasis en la penetración del aparato estatal, tal cual éste existía en Chile, para hacer de él un instrumento de transformación económica y social. Alejándose de aquella ortodoxia leninista para la cual el Estado burgués, en tanto creatura de la clase explotadora, debe ser inevitablemente

⁶¹ Sobre el mito de la excepcionalidad chilena, ver Alfredo Jocelyn-Holt, “¿Un proyecto nacional exitoso? La supuesta excepcionalidad chilena”, ponencia presentada en el seminario internacional “La construcción de las identidades nacionales en el mundo hispánico. Ideas, lenguajes políticos e imaginarios culturales”, Valencia, marzo del 2003. También la tesis inédita de Licenciatura en Historia de Edward Blumenthal, “El mito de la excepcionalidad chilena: un proyecto de construcción identitaria”, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2004.

⁶² Citado en Luis Corvalán M., *Del anticapitalismo al neoliberalismo en Chile*, op. cit., p.159.

destruido para poder dar paso a un gobierno genuinamente popular, el Partido Comunista y quienes compartían su diagnóstico lo visualizaban, en la práctica, más bien como un espacio a disputar. El arraigo en Chile de las instituciones democráticas, argumentaban, otorgaba al Estado la suficiente flexibilidad como para poder plantearse la ocupación de algunas de sus ramas en beneficio de los trabajadores, desplazando de ellas pacíficamente a sus enemigos de clase. Una vez atrincherados allí, y aprovechando que el Estado chileno, como consecuencia del modelo de desarrollo que se venía implementando desde los años treinta, había adquirido fuertes cuotas de ingerencia en los sectores productivos y en las redes de interacción social, parecía factible articular una intervención más enérgica en la organización básica de la sociedad.

Tal como se expresó en el programa de la Unidad Popular, esta estrategia aspiraba a emplear el aparato estatal, o al menos los segmentos bajo control izquierdista, para iniciar o profundizar cambios estructurales tales como la reforma agraria, la nacionalización de las riquezas naturales y la estatización del crédito y las grandes empresas que monopolizaban la riqueza nacional, apuntando así a un reacomodo sustantivo del poder económico y social. Con las clases propietarias debilitadas en su base material, y con un gobierno socialista controlando los sectores estratégicos de la economía, el gradualismo confiaba en disponer de los elementos necesarios para mejorar radicalmente el nivel de vida de las grandes mayorías desposeídas, cultivando así la fuerza electoral que paulatinamente le permitiría ir ganando los componentes estatales que aún no estaban bajo su control (especialmente el Poder Legislativo), y de esa forma acometer etapas “superiores” en la construcción del socialismo.

En esta visión más bien “estatista” de la revolución ciertamente no estaba ausente la participación de lo que por aquel entonces se denominaban las “masas” (hoy en día se hablaría tal vez de la “sociedad civil”), en cuyo interés debían inspirarse todos los cambios y medidas impulsadas desde los centros de decisión gubernamental. El Partido Comunista, por ejemplo, proclamaba como el factor fundamental de su línea política “la acción de las masas, teniendo como centro y motor a la clase obrera”. Solo con ella, aseguraba, podían alcanzarse los objetivos planteados en su programa, objetivos que por lo demás “constituyen un anhelo sentido por la inmensa mayoría de nuestro pueblo. La necesidad de cambios se ha hecho carne en las masas, lo que se refleja en el creciente desarrollo de las luchas de los diversos sectores de la población. Hay cambios que ya están totalmente maduros y cuya realización es imposible detener”⁶³. Avalaba estas declaraciones una antigua y sistemática labor en la base social, especialmente en sindicatos, círculos juveniles y zonas de fuerte concentración popular, lo que a su vez daba cuenta del indiscutible arrastre que esta colectividad había ganado a través de los años en el mundo trabajador. Lejos estaba el Partido Comunista chileno de ser un ente meramente superestructural, obsesionado solo con las alturas del Estado. En su concepción estratégica, sin embargo, era desde éstas que se pondría en marcha el

⁶³ *El Siglo*, 16 de abril de 1966.

proceso revolucionario, ocupando “las masas” un papel más bien de apoyo político y legitimación social.

Para la izquierda rupturista, en cambio, el Estado burgués jamás podría ser empleado en beneficio de una revolución popular. Órgano intrínsecamente defensor de los intereses de las clases explotadoras, ese Estado estaba diseñado para mantener a los explotados eternamente en dicha condición, por las buenas en caso de ser posible, por las malas en caso de necesidad. No podía entonces traicionar su propia naturaleza para ponerse al servicio del enemigo de clase. Aparentemente desmentido por el triunfo electoral de Salvador Allende, el diagnóstico fue ratificado en función de que solo la división de la burguesía entre dos candidaturas distintas había hecho posible tan inesperado desenlace, y que aun así lo “conquistado” era solo un fragmento del poder estatal, básicamente su rama ejecutiva. “Que la Unidad Popular asuma el gobierno”, decía una declaración del MIR apenas ocurridas las elecciones, “no significa que inmediatamente se produzca la conquista del poder por los trabajadores o el socialismo en Chile. Se ha obtenido una mayoría electoral de izquierda, que expresa la aspiración de las mayorías de ser gobierno. Se lucha para que la izquierda sea gobierno, o sea que los cargos públicos de Presidente, Ministros, etc., sean ocupados por la izquierda, pero hasta aquí desde el aparato represor del Estado capitalista hasta la explotación y la miseria en los campos y ciudades de Chile, permanecen intactos. La meta es la conquista del poder por los trabajadores, la que solo existe cuando las empresas extranjeras y los bancos son de todo el pueblo en los hechos, cuando las fábricas, las minas y los fundos son en realidad de los obreros y campesinos”⁶⁴.

Corriendo los meses del gobierno popular, y sin desconocer las ventajas tácticas que el control del Poder Ejecutivo brindaba a sus aspiraciones, la izquierda rupturista agudizó su crítica hacia quienes seguían confiando en la posibilidad de instrumentalizar al Estado burgués para fines revolucionarios: “Mientras que la burguesía se ha embarcado en una ofensiva sediciosa para recuperar la fracción de poder perdido, en sectores del gobierno y de la Unidad Popular han primado tendencias que con ceguera e infantilismo han escogido el camino de llevar a cabo reformas y medidas populares a través de canales burocráticos y administrativos, no comprendiendo que solo el apoyo en la movilización y participación activa de las masas es lo que permite ganar fuerzas a un gobierno revolucionario”. “Estos sectores”, acusaba el rupturismo, “han enmarcado su hacer político en un cuidadoso respeto de la legalidad burguesa, lo cual no solo limita gravemente las posibilidades de llevar a cabo las reformas programadas, sino que además fortalece y legitima las instituciones de poder de la burguesía. Estos sectores además de no golpear ofensivamente el aparato estatal de la burguesía, han desperdiciado los recursos que ofrece el control del gobierno para hacer una agitación y propaganda que prepare a las clases trabajadoras para la conquista del poder:

⁶⁴ “El MIR y el triunfo de Salvador Allende”, Declaración Pública, septiembre de 1970; documento N° 045 del CEME.

por el contrario, su actitud defensiva más bien ha contribuido a crear el mito y la confusión de que las masas trabajadoras están hoy en el poder, cuando en realidad el poder sigue en manos de la burguesía”⁶⁵.

Para proceder a una verdadera conquista del poder, sostenía esta línea de argumentación, debía desplazarse el eje de la acción política desde los órganos de la institucionalidad burguesa hacia las masas mismas, ancladas en sus frentes naturales de trabajo y habitación (fábricas, minas, fundos, poblaciones): “La defensa de los trabajadores no puede situarse principalmente en el aparato institucional (legalidad, parlamento, gobierno), sino en las masas movilizadas directamente por sus intereses y por el socialismo”⁶⁶. Capitalizando para tal efecto una cierta tradición de movilizaciones de base que venía desplegándose desde fines de los años cincuenta, la izquierda rupturista, incluida la que militaba en partidos que integraban la Unidad Popular, canalizó prioritariamente su accionar hacia la base social, procurando hacer de ella el principal factor de impulso y conducción de la lucha revolucionaria. Frente a una revolución gradualista digitada fundamentalmente “desde arriba”, propósito a su entender irremediamente destinado al fracaso, la fórmula favorecida por este sector fue la revolución “desde abajo”, alimentada y dirigida personalmente por los trabajadores⁶⁷. Nació así el concepto de “poder popular”, que de acuerdo a una editorial del órgano oficial del MIR podía resumirse así: “reemplazar el actual Estado burgués por un auténtico Estado obrero y campesino, en el cual, a través de la elección de representantes responsables ante las bases y revocables por ellas, se ejerza LA DEMOCRACIA DIRECTA DE MASAS (sic). Agrupados en las fábricas, en los fundos, en las poblaciones, los trabajadores serán la base real del poder y sabrán ejercerlo contra quienes los explotan y les mienten”⁶⁸.

El poder popular, entonces, fue la consigna en torno a la cual la izquierda rupturista, eventualmente aglutinada en torno al llamado “polo revolucionario”, concentró sus energías durante el último año y medio de la Unidad Popular⁶⁹. Partiendo de la premisa de que entre el aparato de Estado y el movimiento de masas existía una contradicción insoluble (“es el

⁶⁵ *El Rebelde* (Tercera Época), N° 9, diciembre de 1971.

⁶⁶ *El Rebelde*, 14 de marzo de 1972.

⁶⁷ Un excelente estudio historiográfico articulado en torno a este contraste entre revolución “desde arriba” y “desde abajo”, centrado en la experiencia de los trabajadores de la empresa textil Yarur, una de las primeras en ser ocupadas directamente por sus trabajadores para su traspaso al área social, es el de Peter Winn, *Tejedores de la Revolución*, Santiago, LOM, 2004.

⁶⁸ *El Rebelde*, 19 de enero de 1972.

⁶⁹ Hay un muy buen análisis del “poder popular” en su versión mirista en la tesis inédita de licenciatura de Sebastián Leiva y Fahra Neghme, “La política del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) durante la Unidad Popular y su influencia sobre los obreros y pobladores de Santiago”, Universidad de Santiago de Chile, 2000; ver también Hugo Cancino, *La problemática del poder popular en el proceso de la vía chilena al socialismo, 1970-1973*, Copenhague, Aarhus University Press, 1988; Miguel Silva, *Los cordones industriales y el socialismo desde abajo*, Santiago, s/e, 1999; y Franck Gaudichaud, *Poder popular y cordones industriales. Testimonios sobre el poder popular urbano, 1970-1973*, Santiago, LOM/DIBAM, 2004. También el artículo de este último autor en este libro.

conjunto del aparato del Estado como estructura, como función social, como función política, el que tiene una contradicción básica con el movimiento de masas⁷⁰), los promotores de esta corriente comenzaron a agitar desde mediados de 1972 la necesidad de crear órganos de coordinación popular que conformaran, al final del camino, un poder alternativo al que en la práctica mantenía el Estado y la institucionalidad dominante, favorecida por las vacilaciones del gobierno de Allende. Esta línea, ya contenida en el insistente llamado del MIR a conformar “Consejos Comunales de Trabajadores”, y potenciada en la Asamblea Popular de Concepción de julio de 1972, a la que asistieron todos los partidos de la izquierda regional con la excepción del Partido Comunista, alcanzó su máxima expresión a partir del paro patronal de octubre de ese mismo año, con la masificación de los cordones industriales, bajo conducción mayoritaria del Partido Socialista, y de los comandos comunales, favorecidos preferencialmente por el MIR. El “Pliego del Pueblo” levantado por esta colectividad con motivo del mencionado paro proclamó “el derecho irrenunciable a luchar por construir un nuevo poder que surja y se perfeccione desde abajo, desde las entrañas mismas de las masas, que sea expresión directa de las necesidades y anhelos de la mayoría de la población, que ponga en marcha una legalidad y una democracia de nuevo tipo, revolucionaria y popular; un nuevo poder que por su fuerza imponga a cada paso las condiciones al enemigo; un nuevo poder para decidir, mandar, hacer y disponer lo que las masas crean conveniente a sus intereses; un nuevo poder para hacer la revolución, que no es otra cosa que las masas en el poder”⁷¹. En plena tarea de fortalecer el poder popular, que a su juicio constituía la única y mejor defensa del proceso revolucionario chileno, la izquierda rupturista recibió el golpe militar de 1973. Llegado el momento de la verdad, sin embargo, ni los aislados focos de resistencia surgidos en algunos barrios populares y cordones industriales⁷², símbolo postremo de la revolución desde abajo, ni el combate librado por Salvador Allende en La Moneda, símbolo máximo del poder estatal, fueron capaces de conjurar la derrota.

3. Réquiem para una revolución

Los tres años de gobierno de la Unidad Popular fueron, pues, lo más cerca que la sociedad chilena estuvo de vivir una revolución. La determinación implacable con que sus enemigos la combatieron, destruyendo hasta los últimos vestigios de su obra, así lo comprueba. Igualmente lo demuestra la convergencia en torno a ella de gradualistas y rupturistas, que pese a todas sus diferencias encontraron en ella la posibilidad de llevar sus anhelos, incubados

⁷⁰ Entrevista a Miguel Enríquez en *Chile Hoy*, N° 11, agosto de 1972.

⁷¹ Documento N° 072 de la colección recopilada por el Centro de Estudios Miguel Enríquez.

⁷² Ver al respecto, y a modo de ejemplo específico, Mario Garcés y Sebastián Leiva, *El golpe en La Legua*, Santiago, LOM, 2005.

durante años y décadas de luchas, a la realidad. Pero ella fue también la arena en la cual estallaron todas las contradicciones y “ejes polémicos” que este artículo ha tratado de resumir. Ninguna de las dos vertientes revolucionarias logró, a la postre, confirmar plenamente sus postulados ni atraer a sus filas a un sector claramente mayoritario del mundo izquierdista o popular. Y la derrota, en cuya génesis incidió no poco esta misma dinámica de desunión, las golpeó a ambas por igual, con efectos igualmente devastadores.

A partir de septiembre de 1973, la revolución imaginada por la izquierda chilena se replegó hacia un horizonte cada vez más lejano, cada vez menos imaginable. En su lugar, y casi como una ironía cruel, quienes comenzaron a hablar de revolución, y, según algunos, incluso a hacerla, fueron los contrarrevolucionarios de ayer. No parece casual que la publicación con que inició su carrera política el principal símbolo de la derecha de fin de siglo, Joaquín Lavín, se titulara precisamente *La revolución silenciosa*, en referencia a la obra de refundación capitalista llevada a cabo bajo el alero de la dictadura de Pinochet. No era ésa por cierto la revolución con la que habían soñado los revolucionarios chilenos de antes de 1973, y en cuyo nombre enfrentaron, después de esa fecha, la tortura, el exilio y la muerte. En lo que sí tuvieron razón, a juzgar por tan doloroso testimonio, fue en el poder de esa utopía para sacar a relucir lo más sublime, y por contraste lo más abyecto, de la contradictoria condición humana.

This page intentionally left blank

LA VÍA CHILENA AL SOCIALISMO: ITINERARIO DE LA CRISIS DE LOS DISCURSOS ESTRATÉGICOS DE LA UNIDAD POPULAR

Tomás Moulián
Rector Universidad ARCIS

1. LAS COMPLEJAS RELACIONES ENTRE PRÁCTICA Y TEORÍA

1.1 *El “deber ser” del proceso y su apariencia*

Usando los esquemas de clasificación en uso la Unidad Popular no podía ser considerada una revolución socialista en estricto sentido, sino un camino de transición hacia ella. La razón era que se desarrollaba desde el Estado, buscando acumular fuerzas en su interior, y no era precedida por la destrucción del Estado burgués, la condición en la que Marx insiste desde el análisis de la experiencia fracasada de la Comuna de París. A partir de esa reflexión histórica marxiana, Lenin elabora lo que se puede denominar la teoría bolchevique de la revolución. Sus componentes diferenciadores son la preexistencia del dispositivo de saber (teoría que hace del proletariado el sujeto histórico, definición de la conciencia de clase, teoría de la revolución) cuyo depositario es el partido de vanguardia, y la antelación de la destrucción del Estado burgués. En sentido estricto la Unidad Popular buscaba realizar transformaciones profundas en la esfera de la producción, modificando la propiedad, “sin tomar el poder”, sin una revolución política, negando pero también superando en la práctica a la teoría bolchevique. La superaba porque no se limitaba a políticas redistributivas sino avanzaba más allá. Era entonces una pre-revolución.

Pero la mayoría de los sujetos sociales (partidos, organizaciones, comités, personalidades o ciudadanos) vivieron la experiencia de la Unidad Popular como si fuera una revolución socialista que, aunque se ejecutaba desde dentro del Estado o desde arriba, iba a tener en la lucha política todos los efectos polarizadores de una revolución socialista a secas. Desde un lado y también del otro se sintieron (de manera constante o momentánea) formando parte de una lucha entre enemigos cuya meta era la aniquilación, aunque el escenario y el paisaje social fuese muy diferente al de una insurrección, de una guerrilla o de una guerra popular, e incluso el liberalismo político otorgado por los gobernantes a sus contrarios alcanzara niveles muy altos.

La Unidad Popular no pretendía ser una revolución directamente socialista sino más bien buscaba realizar transformaciones sin tomar el poder total, pero teniendo como perspectiva el

avance hacia el socialismo a través de la acumulación de fuerzas en el Estado⁷³. Pero desde sus comienzos se enfrenta, en ocasiones de un modo planificado o en otras como efecto de incidentes de la lucha política, a la propiedad burguesa monopólica, a la propiedad burguesa en general (apropiaciones de empresas pequeñas y medianas por actos ajenos a la planeación política central o a la decisión de orgánicas partidarias de la coalición), y también a la propiedad agraria. Aunque no se estuviera realizando el socialismo sino solo preparando sus condiciones y no hubiese aplicación de violencia, el proceso tenía los efectos subjetivos de una revolución, puesto que modificaba de facto un punto central de todo estado de derecho: el estatuto de la propiedad⁷⁴.

Esta colisión temprana con lo medular del capitalismo que es el dispositivo de la producción burguesa, cuya configuración normativa es el derecho de propiedad; esta disposición manifiesta, no solo prometida, de ir más allá de la práctica habitual de las izquierdas participativas, la cual era instalarse en la zona de la distribución, marca a la Unidad Popular, le pone el sello, la de ser una experiencia de tránsito que se embarca en enormes transformaciones económico-sociales que le imponen el *pathos* de una revolución socialista, pese a las aclaraciones clasificatorias de los teóricos políticos⁷⁵. Se cumple el axioma borgiano *esse est percipi*⁷⁶.

La experiencia de la Unidad Popular fue vivida en el clima convulso que es propio de ese tipo de sucesos que son las revoluciones, porque fue en efecto un esfuerzo descomunal de realizar transformaciones sociales medulares, en el nivel de la producción burguesa y no solo de la distribución. La Unidad Popular no usa la violencia política ni busca destruir los aparatos armados y navega en los márgenes formales del Estado representativo liberal, cuyos límites usa con elasticidad pero no viola. Con esta utilización plástica del Estado para transformar el sistema productivo, las clases propietarias dejan de sentirse reconocidas en el Estado heterogéneo que habían ido creando en el marco de diferentes políticas de compromiso. Esta modalidad de transformación desde arriba, si bien no es planteada como directamente socialista, comienza una demolición de la forma burguesa de producción, aunque no exista previamente una “toma del poder”.

⁷³ Es interesante anotar que la Unidad Popular se adelanta a algunas tesis que están siendo formuladas en la actualidad. Por ejemplo John Halloway.

⁷⁴ Para el caso chileno este tema fue tratado por Juan Carlos Gómez, *La frontera de la democracia*, Lom, Santiago, 2004.

⁷⁵ He releído un artículo escrito por mí, en colaboración con Guillermo Wormald, donde intento esta clasificación limitada y “objetiva” de la Unidad Popular. “Algunos problemas teóricos de la transición al socialismo en Chile” en *Cuadernos de la realidad nacional*, N° 10, especial, diciembre 1971.

⁷⁶ Borges, Jorge Luis, en “Utopía de un hombre que está cansado”.

1.2 La discusión estratégica que no se hizo

La experiencia de la Unidad Popular debía ser pensada en su radical originalidad. Había que responder la pregunta ¿cómo es posible avanzar hacia el socialismo a través de reformas profundas y que ponen en jaque la producción capitalista, manteniéndose dentro del aparato de Estado preexistente y acumulando fuerzas dentro de él?

El proceso no era abordable en los términos de la premisa mayor del modelo bolchevique, la idea de antelación. Este tipo de análisis colocaba la destrucción del Estado burgués precedente como la condición necesaria del comienzo de la construcción socialista y como momento de comienzo de las grandes transformaciones del capitalismo. El supuesto de la lógica de la antelación es que el estado precedente ha sido conducido por la lucha de masas a una crisis tal que es blanco de los revolucionarios, los cuales proceden a destruirlo y se colocan en condición de realizar las transformaciones del edificio capitalista, demoliendo juntos su Estado político y su estado de derecho.

En Chile se trabajaba en el interior del aparato estatal previamente existente, buscando acumular fuerzas y se realizaban transformaciones que si bien, dejaban pendiente el problema del poder en el Estado, apuntaban al corazón del sistema burgués de producción, por la intervención de las empresas monopólicas o ligadas al gran capital, pero sobre todo por el efecto de la nacionalización de la banca.

Uno de los numerosos problemas de fondo que enfrentó la Unidad Popular era el silencio y la imprevisión de la teoría marxista en uso respecto de una trayectoria de este tipo. Ese proceso específico no estaba pensado ni resuelto en los manuales que describían los modelos de transición. Metafóricamente puede decirse que la Unidad Popular fue un equivalente al vendaval oriental que cayó sobre Rusia y que Gramsci elogia, o también que fue “una revolución en la revolución”. En realidad lo fue, pero no podía tener su Debray porque éste fue el glosador de una experiencia ya existente y cerrada desde el punto de vista de la toma del poder, mientras que el proceso chileno estaba ocurriendo sin llegar a fin y al ocurrir iba rehaciendo o deconstruyendo, como es lógico, los mapas que pretendían ayudar a dirigirlo.

No existía entonces un paradigma o un modelo que especificara lo que había que realizar, los pasos a seguir, como era el caso del modelo bolchevique con sus categorías y supuestos, aplicados –respetando las diferencias específicas– en la mayor parte de las revoluciones triunfantes. Apenas existían algunos instrumentos y mapas cognitivos, que durante un tiempo permitieron una navegación eficaz, sorteando arrecifes. Pero, al final del proceso, cuando se desarrolla la gran discusión estratégica, esos puros mapas eran insuficientes. Y llegaron a ser insuficientes porque (como veremos) no se realizó la gran discusión teórica que un proceso como la Unidad Popular necesitaba. Un análisis donde la forma (la vía) no fuera separada del fondo (el tipo de socialismo a construir).

Por lo tanto el proceso careció de un esfuerzo teórico que arreglara cuentas con el dualismo reforma-revolución. Pues la posibilidad de la Unidad Popular era ser una revolución reformista, que nucleara a la gran mayoría en torno a una manera nueva de concebir el tránsito al socialismo y una forma original de especificar el contenido de las tareas socialistas, definidas de manera distinta que en el modelo bolchevique. Para esta concepción el socialismo era dictadura del proletariado, mientras que para la Unidad Popular el socialismo debió ser una democracia más real y profunda que la existente en los sistemas representativos liberales.

La falta de una discusión estratégica en los comienzos del proceso, cuando ella pudo ser fecunda para corregir rumbos y poner la proa hacia la construcción de la gran alianza que necesitaba la revolución reformista, se hace notar al final. Cuando estalla la discusión estratégica entre los partidos la crisis estaba avanzada y el enfrentamiento solo sirvió para profundizar la división de la Unidad Popular.

1.3 Pendiendo de un hilo

En el Chile de la Unidad Popular el Estado no se estaba cayendo a pedazos como en Rusia en 1917. No había perdido su gobernabilidad, más bien había resuelto dentro de sus reglas el problema de la elección de Allende, ni aparecía en peligro inminente su sobrevivencia como aparato de sometimiento y coerción. Pese a las creencias en contrario, derivadas de un marxismo mecanicista, el triunfo de Allende no proviene de una necesidad (ineluctable) impuesta por las estructuras sino de un acontecimiento de la lucha política, regida por la contingencia. El Estado chileno padecía sin duda alguna formas de desajuste, porque de otro modo no se hubiese dejado vulnerar por una fuerza que obstaculiza hasta el extremo su papel de articular dominio político y dominio económico. Ese jaque a la capacidad de articulación fue posible por las reformas políticas de la década del 60, cuando se plasma un tramado de compromisos que favorecen la competencia equitativa de la izquierda por el poder. Pero esa izquierda no llega al gobierno por una lógica dialéctica de necesidad histórica, sino por una estrategia errónea en el juego de fuerzas de la política. Tampoco llega “ilegalmente” por la vía de un asalto sin cálculo, como en la Comuna. Llega bajo legalidad, por una suma de decisiones que sus enemigos pudieron evitar, de manera tal que el arribo no fue la resultante, como se decía, de una crisis insoluble del desarrollo capitalista (que hacía indispensable una “superación”), sino de un acontecimiento político preñado de significados.

Por supuesto la situación era reveladora de las insuficiencias de las fuerzas de contención de la izquierda, por lo tanto de los desajustes de las relaciones de clases en el Estado. La Unidad Popular, haciendo uso del poder obtenido (gobierno y parte del parlamento) busca aprovechar la situación para otorgarle al Estado un papel en el sostenimiento en equilibrio precario de esta articulación de nuevo tipo. Ella consistía en la existencia de un gobierno que buscaba transformar desde dentro el capitalismo en socialismo. El papel que termina

asignándole la Unidad Popular a ese Estado es el de garante, con sus aparatos (judicial, coercitivo, de defensa nacional), del nuevo estado de derecho en surgimiento. En éste no desaparecía la propiedad privada de los medios de producción, pero sí era limitada y subordinada, y sobre todo era negada su necesidad privilegiada, pues el dinamismo provenía del sector de propiedad social.

Es justamente en este punto crucial donde se pone en evidencia el extravío de la razón. La falta de una teorización se manifiesta, por ejemplo, en el hecho de que la Unidad Popular le otorga la primacía en la conformación del papel articulador de la totalidad que corresponde al Estado, al Estado entendido como aparato, en vez de al Estado entendido como relación de clases. Allí se puede observar con plena fuerza que a los políticos intelectuales que debían asumir la conducción de esa compleja transición les fallan los instrumentos analíticos, que los mapas cognitivos han dejado de aportar las señales útiles. Porque para una práctica política tan sobredeterminada, con márgenes de operación reducidos y peligros múltiples, la articulación de la totalidad no podía pensarse a través de la ilusión en el Estado-aparato sino, debía afrontarse de la manera más difícil, en la conformación de las redes capaces de construir las relaciones de clases que hicieran de sostén de la experiencia, lo que significaba movilizar una mayoría social. Cuando se desplaza toda la esperanza hacia el constitucionalismo de las Fuerzas Armadas, hacia la formación del bloque democrático militar, se revela de un modo dramático la falta de alternativas, porque ha tenido lugar un fracaso en la construcción del tramado de clases que podía sostener una empresa de la magnitud de la emprendida. Creer que el Estado-aparato, bajo la forma de constitucionalismo militar, podía sustituir la producción de la necesaria mayoría de masas, revela un desplazamiento del análisis de fuerzas hacia el terreno de la ilusión.

La fijación de la mirada en los militares ocurre con énfasis desde la crisis de octubre en adelante (1972), pero éstos habían creado confianza desde el principio respecto de su papel crucial para la seguridad constitucional, en la medida que fueron sus investigaciones las que resolvieron el asesinato del General Schneider (1970). Esa ilusión del pacto cívico militar es expresión del fracaso para afrontar el problema de las relaciones de clases en el Estado, considerado como sitio central de logro de esa seguridad, en cuanto seguridad de masas y no burocrático-legal. Pero esa resolución requería, por acción de las propias reglas y de la dinámica del camino emprendido, conseguir una ampliación de la influencia en el pueblo, o en su defecto la búsqueda de alianzas con otros sectores con arraigo popular y también en los grupos medios, bajo la fórmula de un bloque por los cambios.

El fracaso de esas opciones tiene como resultado que, en especial desde octubre de 1972, la Unidad Popular penda del delgado hilo del constitucionalismo militar.

¿Por qué se despilfarra la capacidad, en todo caso problemática, de resolver a favor el problema de la correlación de fuerzas, de manejar las relaciones de clase de una manera que fuera acorde con la magnitud del proceso de transformación emprendido?

Una afirmación central de este artículo es que la radical originalidad de la experiencia chilena impedía tener una teoría preconcebida, pues la situación chilena divergía de todas las otras, incluso de aquellas que podían tener alguna semejanza como el caso de Checoslovaquia. Pero no tener una teoría no significaba no hacer el esfuerzo de teorizar. En el análisis de algunas decisiones cruciales se observa que no se buscaron políticas que fueran coincidentes con las exigencias fundamentales derivadas de la trayectoria elegida, la cual siempre dependió de la capacidad de conseguir una mayoría social y estatal.

Las contradicciones y problemas prácticos sin resolver, entre ellos el estrechamiento del campo de alianzas en el Estado arriba, y la dificultad de poder afrontarlas en la base, donde tomaban aun más virulencia por los conflictos cara a cara entre los partidarios de la Unidad popular y los militantes demócrata cristianos, llevan a los partidos a guarecerse en sus premisas previas y abandonar la reflexión de la práctica diaria con sus acuciantes desafíos para volver al terreno aparentemente seguro, el de las oposiciones que separaban a la izquierda chilena desde fines de la década del cincuenta del siglo veinte.

Otra de las particularidades de la experiencia de la Unidad Popular es que el proceso tiene lugar pese a que las concepciones previas de las fuerzas políticas más significativas respecto del carácter de la revolución eran divergentes y en varios puntos opuestas.

2. LA GENELOGÍA DE UNA RUPTURA

La gran huelga de comerciantes, camioneros y sectores de profesionales ocurrida en octubre de 1972, que se prolongó casi por un mes, fue solucionada con un gran cambio político, la constitución de un gabinete cívico-militar. Esa decisión presidencial intensificó un debate que había estado latente o que había tenido algunas apariciones momentáneas. Entender el tono, la intensidad y la problemática de las agobiantes discusiones que se desarrollaron y profundizaron la división de la Unidad Popular, requiere comprender el universo ideológico y las concepciones estratégicas de la izquierda que llega al gobierno en 1970.

Los años de la década del 50 del siglo XX son decisivos en la estructuración por parte de la izquierda marxista chilena de los esquemas interpretativos de la realidad nacional o de la definición del carácter de la revolución que continuaron vigentes hasta 1973. En 1953, o sea en pleno período de funcionamiento de la legislación anticomunista, usada también para controlar al movimiento sindical, se organiza la Central Única de Trabajadores. En 1956 se funda el Frente de Acción Popular, coalición electoral de larga duración entre el Partido Comunista, el Partido Socialista de Chile y el Partido Socialista Popular, luego que este último partido realizó su fallida incursión en el nacional populismo, apoyando a Ibáñez en la elección de 1952 y participando de sus gabinetes. En 1957 se produce la unificación de las dos fracciones socialistas. En 1958 se deroga la legislación anticomunista (llamada Ley de

Defensa de la Democracia) y se modifica la legislación electoral, garantizando comicios sin cohecho ni movilización patronal en las zonas rurales. También en 1958 se produce la elección presidencial en la cual Allende casi obtiene un sorpresivo triunfo, compitiendo en un campo de cinco candidatos.

2.1 Las modificaciones de las tesis estratégicas de los socialistas

El Partido Socialista que surge de la unificación de 1957 es distinto del existente hasta entonces. Se trata de una organización marcada por la participación en las coaliciones de centro-izquierda entre 1938-1946, y por el apoyo a la experiencia nacional populista de Ibáñez, ambas evaluadas como fracasos por sus ideólogos más influyentes. Esa evaluación negativa de ambas experiencias generó dos efectos en el terreno ideológico. El primero es que se produce una mayor vertebración de las opciones estratégicas del partido, antes medio difusas e implícitas, en especial el tópico de la definición del carácter de la revolución. El segundo es la acentuación del carácter crítico hacia las posiciones del Partido Comunista, realizada desde un lugar más a la izquierda, lo que significa el desarrollo por parte de los socialistas de una fórmula estratégica distinta (el Frente de Trabajadores).

Tempranamente, en el XV Congreso General Ordinario de octubre de 1953 del Partido Socialista Popular, en el cual se realiza un análisis del fracasado intento de sumarse al movimiento nacionalista encarnado por Carlos Ibáñez para darle conducción popular, se acuña el término de la “República Democrática de Trabajadores”. En el voto político aprobado en ese Congreso se habla de una pronta construcción de ese tipo de república, la cual servirá para sentar las bases “de un sistema socialista en el cual encuentren satisfacción las más puras aspiraciones de los obreros, campesinos, empleados y sectores modestos de la población”⁷⁷.

El desarrollo de esa tesis se encuentra formulado *in extenso* en el libro de Óscar Waiss, *Nacionalismo y socialismo en América Latina*, publicado en 1954 y reeditado, con modificaciones, en 1961⁷⁸. En ese texto Waiss plantea la “República Democrática de Trabajadores” en el marco de una justificación de la vinculación del Partido Socialista Popular con el ibañismo y de una crítica de la campaña presidencial de 1958.

Waiss valoriza la incursión populista, pese a su corta duración. Dice “El Partido Socialista Popular le ha señalado a los partidos revolucionarios del continente que se puede marchar junto a las fuerzas heterogéneas del nacionalismo informe sin confundirse con ellas”. Agrega que es un “camino más fecundo y promisor que la pedante repetición de principios fríos”. Respecto de la campaña presidencial en la cual Allende estuvo a punto de ganar, Waiss critica el “lastre de los lugares comunes desacreditados”, que impidieron llegar a la meta⁷⁹.

⁷⁷ Jobet, Julio César. *Historia del Partido Socialista de Chile*, Santiago, Ediciones Documentas, 1987, p. 210.

⁷⁸ Santiago, Editorial Prensa Latinoamericana, 1954. Existe una segunda edición modificada, Buenos Aires, Editorial Iguazu, 1961.

⁷⁹ Ibid, pp. 144-146.

Para el autor la consigna de la “República Democrática de Trabajadores” representa la superación de esos discursos fríos y estereotipados y un indicio de que se ha comprendido que el marxismo es la filosofía de la acción. Es la práctica y la experimentación, dice Waiss, lo que le permitirá a la “clase social progresiva” adquirir la capacidad de ganarse “la confianza del resto del pueblo y asumir el poder para realizar sus propios fines justicieros”.

Para Waiss la consigna de la “República Democrática de Trabajadores” representa lo novedoso frente a las repeticiones y a la fijación obsesiva en la estrategia errónea de los “frentes populares”. Esa línea habría perdido vigencia porque continúa creyendo que la burguesía tiene un papel en la realización de las revoluciones democrático-burguesas. El autor plantea que no es posible saltarse la etapa democrático-burguesa, pero ella debe comprenderse como una etapa de la revolución socialista⁸⁰.

La noción de la “República Democrática de Trabajadores” es el antecedente inmediato de la línea del “frente de trabajadores” o del “frente revolucionario de clase”, pues ella requiere “la necesaria independencia del proletariado” frente a las otras capas oprimidas⁸¹.

El análisis de Waiss sobre el papel de los partidos comunistas que aparece en el texto de 1954 y que se repite en la segunda edición de 1961, cuando ya el FRAP estaba constituido, es sumamente crítica y descalificatoria. Lo describe como un “elemento extraño” que se dedica a introducir de contrabando temas ajenos a la realidad latinoamericana y que tienen relación con los intereses soviéticos⁸². Además sugiere constantemente que los comunistas son alentados y usados por el imperialismo o los partidos en el poder y que son incapaces de fundirse con los problemas del pueblo⁸³.

La actitud de Waiss frente a los comunistas latinoamericanos y chilenos podría ser calificada como simplemente curiosa o bizarra, si no fuera porque es una de las resultantes del cisma ocurrido en el interior del movimiento comunista internacional en los años treinta del siglo XX, uno de cuyos episodios decisivos fue la expulsión de Trotsky y su posterior asesinato. Este acontecimiento favorece el desarrollo de interpretaciones marxistas opuestas sobre la construcción histórica del socialismo. Aunque Waiss recurre solo muy ocasionalmente a las citas trotskistas, y no define el carácter de la revolución con sus categorías, su toma de posición a favor de Yugoslavia demuestra claramente su crítica a Stalin y su desconfianza de la Unión Soviética.

La diferencia de posiciones frente a la URSS va a ser uno de los temas constantes que dividen a los comunistas y socialistas chilenos. El rechazo de estos últimos a considerar a la URSS como el modelo de socialismo, su adhesión a Yugoslavia cuando ésta se enfrenta a Stalin, luego su no alineación en la lucha chino-soviética y su clara preferencia por el sistema cubano

⁸⁰ Ibid, p. 179.

⁸¹ Ibid, p. 172.

⁸² Ibid, p. 164-165.

⁸³ Ibid, p.54, 65, 111.

en la fase de mayor independencia de la URSS, sus persistentes críticas al burocratismo de los socialismos reales y su toma de posición contra las intervenciones soviéticas en Hungría y más tarde Checoslovaquia, constituyen un importante y recurrente factor de diferenciación entre socialistas y comunistas chilenos.

Julio César Jobet, uno de los historiadores del Partido Socialista chileno, afirma que es a partir del XVI Congreso, realizado a fines de octubre de 1955, cuando se perfila con más claridad la tesis del Frente de Trabajadores, la cual es la respuesta de los socialistas a la tesis del Frente de Liberación Nacional defendida por los comunistas⁸⁴. Según el autor, estos últimos propiciaban frentes amplios con partidos y organizaciones “burguesas”. El objetivo de no aislar a la clase obrera los conduce a “pasar por encima de las fronteras de clase”. Para Jobet la consecuencia electoral de esta tesis debía ser el apoyo a un candidato de las agrupaciones burguesas (radical o demócrata cristiano), cuestión que como sabemos no se produjo⁸⁵.

En los primeros meses de 1956, con ocasión de la negociaciones para la formación del FRAP, se enfrentaron las estrategias del Frente de Trabajadores y del Frente de Liberación Nacional. En efecto los comunistas eran partidarios de ampliar la alianza hacia los radicales o hacia los falangistas, mientras los socialistas populares plantearon la tesis de una alianza de los partidos obreros, la cual se impuso. Sin embargo el FRAP no planteó un programa anticapitalista sino solo “antiimperialista, antioligárquico y antifeudal”⁸⁶. Pese a que los socialistas populares opinaban que la tarea no era la realización de una “revolución democrática burguesa” con participación de la burguesía o sus representantes políticos, tampoco presentaron un programa socialista. La diferencia entre socialistas populares y comunistas no giraba entonces alrededor del carácter de la revolución, sino se refería a la composición de la alianza. La posición de los socialistas populares puede ser formulada como lo hacía Waiss en la edición de 1954 de *Nacionalismo y socialismo en América Latina*, repitiendo una clásica definición de Lenin. La revolución democrático-burguesa se debe hacer, porque la sociedad chilena es semifeudal y semicolonial, pero sin la participación de la burguesía, en este caso de sus representantes políticos.

En los primeros días de julio de 1957 se produjo la unidad de las dos fracciones socialistas (socialistas populares y socialistas de Chile). En el voto político aprobado se afirma la vigencia de la tesis del Frente de Trabajadores, la cual será la posición oficial del partido unificado. Esa línea excluye la posibilidad de alianzas con los partidos intermedios como el radical y el falangista.

⁸⁴ Jobet, Julio César. Op. cit., pp. 214-226.

⁸⁵ Ibid., p. 217. En realidad el apoyo comunista a los candidatos burgueses solo se hizo efectiva cuando propusieron la candidatura de Guillermo del Pedregal como pre-candidato en las conversaciones previas a la nominación de Salvador Allende en 1958.

⁸⁶ Ibid, p. 218-219.

2.2 Los comunistas, la tesis del Frente de Liberación Nacional y de la transición pacífica

En 1933 los comunistas chilenos se separan de la línea del “frente de clases”, que había propiciado la Tercera Internacional bajo la premisa de un posible derrumbe del capitalismo y de la necesidad de aislar a los partidos obreros reformistas. A partir de ese momento los comunistas chilenos aplicaron la línea de los frentes amplios. Esa estrategia les dio acceso a oportunidades de poder, tanto parlamentarias como gubernamentales. Participaron apoyando las coaliciones de centro-izquierda pero sin funciones ministeriales hasta 1946. En las elecciones presidenciales de ese año pactaron con los radicales, mientras los socialistas llevaban un candidato propio. Se trató de una victoria a lo Pirro, pues las condiciones externas que habían permitido las coaliciones de centro-izquierda se encontraban profundamente cambiadas. Después de los bombardeos atómicos de Estados Unidos contra Japón, los cuales buscaban también crear un efecto demostración dirigido a los soviéticos, había comenzado la “Guerra Fría”. En 1947 los comunistas fueron separados del gobierno y en 1948 se aprobó la paradójicamente llamada “Ley de Defensa de la Democracia”.

Sin embargo esta ilegalización no significó que los comunistas cambiaran su política. Más aun, surgió en el interior del partido una tendencia que postulaba la necesidad del boicot a las elecciones parlamentarias de 1949 y preconizaba la acción directa. Esta tendencia, dirigida por el Secretario de Organización, fue calificada de fracción trotskista y expulsada del partido.

Mientras los socialistas radicalizaban su estrategia, los comunistas ratificaban su tesis de los “frentes de liberación nacional”. Para ellos había que agrupar en esas alianzas “desde la clase obrera a los capitalistas que no ejercen monopolio ni tienen intereses entrelazados con los imperialistas norteamericanos”⁸⁷. Incluso proponían buscar la organización de los “industriales, profesionales, comerciantes y agricultores ricos” en una agrupación independiente de los monopolistas⁸⁸. Tras estas tesis hay una definición de la sociedad chilena como semifeudal y semicolonial y una caracterización de la etapa de la revolución como democrático-burguesa. La diferencia central con los socialistas no radica en estas últimas especificaciones, pues ellos las comparten; radica en el papel asignado por los comunistas a la participación de la burguesía nacional. Para los socialistas ese papel está agotado y una demostración de esta circunstancia eran los resultados de los “frentes populares” y los efectos de la colaboración con Ibáñez.

Conviene indicar que esta estrategia de los “frentes de liberación nacional” no fue la consecuencia del proceso de crítica a Stalin puesto en movimiento por el XX Congreso del PCUS en 1956. Existía una solución de continuidad entre la línea adoptada por el partido chileno en 1933 y la línea de los “frentes de liberación nacional” y también con la línea del PCUS. En efecto, ese partido, convertido en la vanguardia de un campo socialista en crecimiento, afrontó la Guerra Fría ratificando la política de frentes amplios que había sido acordada en 1935 por la III Internacional.

⁸⁷ “Algunas cuestiones sobre la organización del Movimiento Democrático de Liberación Nacional” en *Principios*, N° 33 enero-febrero 1956.

⁸⁸ *Ibid.*

El XX Congreso de 1956, en el cual además de una demoledora crítica a Stalin se define la política de la coexistencia pacífica, tiene una gran importancia. En esa ocasión se plantea la posibilidad de un paso del capitalismo al socialismo por la vía pacífica⁸⁹. Esa definición del XX Congreso va a ser asumida y desarrollada por el partido chileno. En el X Congreso que tuvo lugar en julio de 1956, poco después del XX Congreso del PCUS, una de las novedades resaltadas de la línea política fue la posibilidad de la vía pacífica, calificada como una cuestión que el partido no había tenido suficientemente clara⁹⁰.

Esta tesis va a ser colocada, junto con la unidad socialista-comunista, en el centro de la política del partido⁹¹, desplazando en importancia a la tesis sobre el papel de la burguesía nacional. Para los comunistas uno de los resultados de la evolución política de la década del cincuenta del siglo XX es que se hace visible la urgencia de la unidad de los partidos populares, la cual se va a conseguir con la formación del FRAP en 1956, realizada aun antes que la unificación de los dos partidos socialistas en 1957. Galo González, secretario general del PC, incluye el tema de la unidad como uno de los grandes aportes del X Congreso. Pero justamente el problema de la vía pacífica va a generar importantes polémicas entre las dos fuerzas principales del FRAP durante toda la década de 1960.

Aunque el tema de la vía pacífica fue planteado en el X Congreso de abril de 1956, es en la década del sesenta que se convierte en característica central de la política comunista, desatando polémicas con los socialistas y más tarde con el MIR y la revista *Punto Final*.

En 1961 Luis Corvalán escribe el primero de sus textos sobre el tema denominado “Acerca de la vía pacífica”⁹². En ese texto, recogido en 1971 en *Camino de victoria*, se realizan algunas distinciones aclaratorias para luego centrarse en el tratamiento del tema en la literatura marxista. Corvalán traza el linaje marxista del concepto. Recuerda que el propio Marx, en un mitin celebrado en Amsterdam en 1872, reconoció la diversidad de medios para realizar las transformaciones sociales y además señaló que en algunos países avanzados “los obreros pueden lograr sus fines por medios pacíficos”⁹³. A su vez Lenin, en sus análisis de las cambiantes correlaciones de fuerza en la Revolución Rusa, vislumbra un camino no insurreccional o pacífico para esa revolución, el cual pasaría por otorgarle “todo el poder a los soviets”. Esa posibilidad no le parece imposible en la situación de poder existente antes de la contrarrevolución montada por Kornilov.

Sin embargo, después de la muerte de Lenin, la posibilidad fue desestimada incluso como un evento excepcional⁹⁴. Recuerda que uno de los aportes más importantes del XX

⁸⁹ Ibid.

⁹⁰ Monte, José. “El X Congreso Nacional del Partido Comunista de Chile” en *Principios*, N° 35, julio-agosto de 1956. En ese mismo Congreso el partido propone un “parlamentarismo de nuevo tipo” en vez del sistema presidencial.

⁹¹ González, Galo. “La unidad socialista comunista” en *Principios*, N° 36, septiembre 1956.

⁹² “Acerca de la vía pacífica” en *Principios*, enero 1961.

⁹³ Ibid, p. 23.

⁹⁴ Ibid, p. 24.

Congreso del PCUS es que vuelve a plantear la posibilidad del tránsito pacífico. Además el hecho de que en las elecciones presidenciales de 1958 Allende estuviera muy cerca del triunfo le otorga verosimilitud política a esa teoría, neutralizando las resistencias que la estrategia despertaba entre los socialistas.

Pero antes, en un momento de plena ilegalidad del Partido Comunista chileno, Galo González afirma que es factible el tránsito pacífico. Así, en el X Congreso del Partido, realizado en abril de 1956 al calor de las revelaciones del XX Congreso del PCUS, sostiene que es posible realizar la revolución por medios pacíficos siempre que la clase obrera logre reunir en torno suyo a la mayoría nacional y consiga “por medio del sufragio u otra vía similar, el poder para el pueblo”⁹⁵.

Esa tesis va a estar colocada al centro de la política comunista durante toda la década de 1960, una época marcada por el signo contrario, la posibilidad y, para algunos, la necesidad de la vía armada, considerada como la única revolucionaria.

2.3 Las principales discusiones entre socialistas y comunistas en la década del sesenta

Entre 1960 y 1964, una de las principales confrontaciones ideológicas políticas fue un intercambio de cartas entre los dos partidos, la cual tuvo lugar en marzo de 1962. El secretario general del Partido Socialista, Raúl Ampuero, formuló algunas declaraciones, las cuales fueron respondidas por el dirigente comunista Orlando Millas. Estos incidentes dieron lugar a una carta firmada por el secretario general del Partido Comunista. Los dos temas principales de la carta son el carácter de vanguardia de la URSS y del PCUS, y el problema de la vía pacífica.

Ampuero había puesto en duda en sus declaraciones el papel de vanguardia de la URSS, al tratar de forma equivalente a los dos bloques y al cuestionar el “mando ideológico y político” ejercido por el PCUS. Los comunistas defienden el papel de vanguardia de la URSS y la idea de un centro. Según dice Corvalán en su misiva, ese centro se encuentra en la URSS “hace ya tiempo”, y agrega que el PCUS “siempre ha desempeñado su papel de vanguardia con solicitud y fraternidad y sin entrometerse en los asuntos que son de la soberanía de cada cual”⁹⁶.

En la carta respuesta de los socialistas, Ampuero hace una crítica a fondo de la idea del centro único y de la capacidad de dirección del PCUS de la totalidad del movimiento comunista. Señala dos peligros. Uno sería la subordinación a los intereses del campo socialista y del país guía de la dinámica revolucionaria en los países no socialistas. El otro peligro es que las formas concretas de construir el socialismo se conviertan en un modelo a seguir o en una copia, con lo cual se perderían las especificidades de cada proceso histórico de construcción socialista.

⁹⁵ Citado en Ibid, p. 29.

⁹⁶ “Las tesis socialista y comunista se enfrentan en un trascendental debate” en *Arauco*, N° 26. Ver “Carta comunista”.

En esta disputa había, en efecto, una cuestión de fondo. Un asunto era el “seguidismo” comunista respecto de las posiciones del Estado socialista central, por ejemplo frente a Yugoslavia, o frente a la invasión a Hungría, o frente a las escaramuzas del conflicto con China. Otro era la pretensión de los soviéticos de que su modelo de socialismo, que en la posguerra se había expandido a Europa, fuese el único válido. Para los socialistas esto significaba subvalorar el aporte de Yugoslavia, que ellos siempre apoyaron, por creer que allí había una forma de realización descentralizada de la “democracia de trabajadores”, distinta del modo centralizado de los soviéticos⁹⁷.

El otro gran tema de este intercambio fue el de la coherencia con el pensamiento marxista y el de la factibilidad de la vía pacífica. Corvalán señala que no se conoce ningún planteamiento oficial de los socialistas ni a favor ni en contra, por lo tanto hay que suponer que “desean, igual que nosotros, comunistas, que el FRAP llegue al poder a través del movimiento de masas, sin guerra civil, sin necesidad de violencia armada, más concretamente utilizando para tal fin la coyuntura de las próximas elecciones presidenciales”⁹⁸.

La respuesta del Partido Socialista es rotunda, pues califica de confuso el uso del término. Señala Raúl Ampuero que cuando los comunistas empezaron a usar el concepto éste aparecía como una defensa del evolucionismo, una posición claramente reformista. Esa confusión ha sido esclarecida al señalarse que la vía pacífica es una vía revolucionaria. Sin embargo, Ampuero dice que hay elementos en el discurso de los comunistas que permiten suponer que la vía pacífica tiene un carácter estratégico y no solo táctico. Esto significa que ellos postulan que se podría llegar al socialismo sin el uso de la violencia en ningún momento, cuestión que el Partido Socialista considera imposible. La vía pacífica sería válida solo como una etapa de la construcción del socialismo y en ningún caso como una fórmula para el desenlace.

Ese intercambio de cartas centra y descentra el debate al mismo tiempo. Permite establecer con claridad la posición de los dos partidos frente al problema de las formas de lucha. Pero deja de lado un tema que los socialistas habían planteado y que también plantean en esta carta, pero de forma desviada. Ese tema es el de las características del socialismo que se quiere construir. El estancamiento de esa discusión, resultado quizás de la desviación del interés hacia la Revolución Cubana, tendrá consecuencias funestas. El Partido Socialista a partir de 1964 pone menos énfasis en la crítica al modelo socialista, tal como éste era practicado en la URSS y los países del Este, para centrarse en el cuestionamiento de las posibilidades electorales y de la vía pacífica. La primera crítica era muy fecunda, puesto que el talón de Aquiles de la posición comunista consistía en formular una vía pacífica para llegar a una meta que era impensable sin la violencia, porque representaba una repetición de los “socialismos reales”.

⁹⁷ Ibid. Ver Carta socialista.

⁹⁸ Ibid. Carta comunista, p. 12.

El resultado electoral de 1964 constituye un acontecimiento central. La derrota experimentada por Allende, en un momento en que las condiciones estructurales aparecían favorables por el fracaso del experimento liberal de Alessandri, produjo un cuestionamiento de las posibilidades de llegar al poder mediante procedimientos electorales. El Partido Socialista se convierte en paladín de esa crítica dentro del FRAP. Desde más a la izquierda ella es formulada por el MIR.

Sin embargo, la transformación del Partido Socialista en un partido leninista de izquierda, muy influido por el desarrollo de la Revolución Cubana, lo hace monotemático, se centra de preferencia en la crítica al pacifismo dejando de lado, por ejemplo, la valoración de Yugoslavia.

La revista *Punto Final* se transforma en la gran divulgadora de los esfuerzos de lucha armada que se despliegan en el continente, y también es el lugar donde son entrevistados o escriben los dirigentes socialistas que ponen en duda la posibilidad de un tránsito pacífico en Chile. En el archivo de esta literatura crítica de las posiciones oficiales sobre la transición y el papel del gobierno popular descuelga una entrevista de Clodomiro Almeyda, otorgada con anterioridad al Congreso de fines de 1967.

En ella Almeyda señala que la Revolución Cubana ha abierto una serie de interrogantes en relación a los caminos tradicionales. Afirma que en el propio Chile han quedado caducas las formas orgánicas de los partidos tradicionales de izquierda, y también caducos sus dirigentes, los cuales, según Almeyda, han sufrido el impacto de concepciones economicistas y tecnocratas.

El fenómeno principal, plantea Almeyda, es que después del ejemplo de la Revolución Cubana, América Latina se está planteando la necesidad de abordar la lucha revolucionaria a nivel continental. Pese a la derrota del Che Guevara en Bolivia, la fase superior de la lucha revolucionaria es la lucha armada, aunque ella no tome necesariamente la forma de la guerrilla y menos aun de esa “guerrilla abstracta” de la que habla Debray. Para Almeyda Chile es un país donde “existe un proceso político vigente”, es decir existen luchas populares que han tomado una cierta forma o camino. Por ello “la violencia expresará la forma más avanzada de un proceso preexistente y no la primera etapa de un proceso político vigente”⁹⁹.

Almeyda planteaba también la necesidad de la destrucción del centro político para que la lucha adquiriera la forma de una polarización. Así se evitaba la tentación de conciliaciones y pactos con un partido intermedio que se presenta como reformista, aunque sea simplemente un partido modernizador del capitalismo existente¹⁰⁰.

El Congreso de fines de noviembre de 1967, realizado en Chillán, fue determinante en el giro a la izquierda del Partido Socialista. Este proceso había comenzado con la elaboración de la política del Frente de Trabajadores y más tarde con la valorización de la Revolución Cubana. A ésta se le confiere la cualidad de haber mostrado que la forma normal de la

⁹⁹ Almeyda, Clodomiro. “Dejar a un lado el ilusionismo militar” en *Punto Final*, N° 42, noviembre 1967.

¹⁰⁰ *Ibid.*, p. 36.

revolución, aquella que hace uso de la violencia, también es posible en América Latina. Esa posición de los socialistas, inscrita en un giro global hacia la izquierda, genera múltiples controversias con el Partido Comunista, el cual se aferra a la idea de obtener el poder por la vía electoral y por intentar un tránsito institucional¹⁰¹.

El voto político del XXII Congreso de 1967 del Partido Socialista afirma cuatro cuestiones esenciales: 1) que el Partido es una organización marxista leninista, 2) que se plantea la toma del poder como objetivo estratégico, 3) que para ello es fundamental la violencia revolucionaria, pues se debe destruir el aparato represivo y militar del Estado burgués y 4) que para el Partido Socialista las elecciones son formas limitadas de acción, que deben estar “incorporadas al proceso político que nos lleva a la lucha armada”¹⁰².

En junio de 1969 se realizó un Pleno del Comité Central del Partido Socialista. Allí se planteó la urgencia de sustituir el sistema capitalista por un poder popular revolucionario que comenzara la construcción del socialismo, puesto que el sistema existente era incapaz de resolver la “crisis actual”. Los socialistas advierten contra la estrategia de la “vía pacífica”, a la cual califican de reformista, puesto que confía demasiado en las elecciones y en la acción en el Parlamento¹⁰³.

Todas estas profundizaciones de la línea política del Partido Socialista lo colocan cada vez más lejos del Partido Comunista. Éste también profundiza su línea política pero en la dirección tradicional, para insistir en la necesidad y en la posibilidad del “frente de liberación” y de la “vía pacífica”. En una carta respuesta de Luis Corvalán a una misiva del Partido Socialista, los comunistas realizan un análisis muy matizado de la Democracia Cristiana. Indican que existe dentro de ese partido una corriente que “se pronuncia contra el capitalismo y que plantea la sustitución de la propiedad privada por la llamada comunitaria”¹⁰⁴. Esa categorización muestra que los comunistas seguían planteando el Frente de Liberación Nacional y seguían creyendo que había en la Democracia Cristiana sectores rescatables para ese tipo de política.

Pero a su vez Corvalán pone en evidencia un malentendido de los socialistas. Respecto a la concepción de la revolución democrática burguesa, los socialistas parecen atribuirles la defensa de una dirección burguesa de la revolución, cuestión que los comunistas rechazan. Ellos señalan que desde el X Congreso, para el partido ha sido clara la necesidad de una conducción por la clase obrera de las tareas democráticas.

Sin embargo, en el punto que Corvalán pone más énfasis es en aquella parte de la carta de los socialistas que pone en duda la unidad, ya que cada partido tiene métodos diferentes para luchar por el objetivo histórico común. Con un tono desolado Corvalán señala que no comprende cómo los socialistas pueden afirmar “que nuestros caminos son divergentes”¹⁰⁵.

¹⁰¹ Corvalán, Luis, op. cit.

¹⁰² Jobet, Julio César, op. cit., p. 130.

¹⁰³ Ibid, pp. 150-151.

¹⁰⁴ Corvalán, Luis, op. cit., p. 152.

¹⁰⁵ Op. cit., pp. 158-159.

Su afirmación central es que, pese a las divergencias unos y otros deben permanecer unidos, mientras “estemos convencidos que nuestros caminos conducen a la meta socialista”.

Pese a los malos augurios de la carta enviada por los socialistas, el FRAP sigue enfrentando unido las elecciones, entre ellas las parlamentarias de 1969. En esos comicios el Partido Comunista ratificó su carácter de primera fuerza de la izquierda con 15,9% de la votación, seguido por el Partido Socialista con 12,3%¹⁰⁶.

La ubicación del Partido Socialista en un leninismo de izquierda provoca un efecto ya señalado, pero sobre el cual es importante insistir. Ese efecto es la desviación de la crítica. Ella se concentra en el problema de la violencia revolucionaria y debilita la puesta en cuestión de las características de la construcción socialista. Ése había sido el valor de la adhesión de los socialistas a la autogestión yugoslava, que representaba la búsqueda de un socialismo participativo. Por desgracia la discusión esencial se perdió, arrastrada por el efecto envolvente que produce la polémica sobre la violencia revolucionaria. Se dejó de lado el tema central. Este no era la búsqueda de la vía sino la decisión por el tipo de sociedad socialista que se quería proponer y por la que se estaba dispuesto a luchar.

2.4 La crisis estratégica de la Unidad Popular

Como se ha mostrado, las diferencias respecto a los caminos de la revolución se agravaron por la disputa sobre las lecciones de la Revolución Cubana y por los efectos de la derrota electoral de 1964. Pese a ello la Unidad Popular fue capaz de ganar las elecciones, de manejar con habilidad táctica la decisiva coyuntura de la ratificación por el Congreso Pleno del triunfo de Allende, y de gobernar hasta fines de 1971 gozando de la bonanza económica generada por la política de activación mediante redistribución de ingresos. Durante todos esos momentos se mantuvo una tolerable unidad de acción y no se hicieron presentes diferencias estratégicas insuperables.

Sin embargo, el proceso político de la Unidad Popular había entrado en una dinámica de difícil control desde el momento mismo en que la política de los “resquicios legales” se impuso como opción. El uso de esa táctica le permitía al gobierno prescindir de la indispensable tarea de construir una mayoría social y también una mayoría estatal. Esto último era una condición necesaria para el tipo de transición en curso, la cual implicaba la realización de transformaciones sociales que condujeran al socialismo desde el interior del Estado político y de derecho existente.

El clima eufórico de ese año de fiesta que fue 1971 permitió ocultar por un tiempo los indicios de lo que se fraguaba, el aislamiento catastrófico de la Unidad Popular. La lava que se estaba formando y que iba a explotar en el segundo semestre de 1972 estaba oculta por las gruesas paredes del volcán. La Unidad Popular no diseñó una estrategia que privilegiara la

¹⁰⁶ Cruz Coke, Ricardo, op. cit.

formación de mayorías sólidas en las masas y operativas en el Estado. Aunque los resultados electorales de abril de 1971 fueron apabullantes para la oposición y muy positivos para la Unidad Popular, tuvieron un efecto paradójico. Le hicieron creer a la Unidad Popular que ese triunfo le bastaba. En efecto ese resultado fue legitimante pero no suficiente. En parte porque revelaba una situación de cuasi empate, y además porque esa mayoría social podía perderse si no se lograba una mayoría estatal que despejara las incertidumbres y los peligros de gobernar en el límite del estado de derecho.

La Unidad Popular, sintiéndose legitimada por las condiciones políticas favorables generadas por el triunfo en las elecciones municipales, continúa adelante en la política de nacionalizaciones, vía compra de acciones bancarias o intervenciones de empresas, descuidando las reformas políticas. Una victoria a lo Pirro. Sin mirada de futuro, descuida lo que era lo más importante, la construcción de un “bloque por los cambios”, una alianza que atrajera hacia las posiciones de los partidos populares a una parte importante del centro reformista. Esto debió ser hecho en los momentos en que la correlación de fuerzas era más favorable, justamente después de abril de 1971, cuando el gobierno estaba a la ofensiva. Cuando se intentó, en junio de 1972, ya habían aparecido síntomas de desgobierno, que se manifestaron en la escasez de ciertos productos básicos; ya había ocurrido el asesinato de Pérez Zujovic, que modificó el clima de las relaciones con la Democracia Cristiana; ya se había salido el sector izquierdista del Partido Demócrata Cristiano.

Hacer política en situaciones de extrema polarización, como era la que existía en el año 1972 y hasta septiembre de 1973, requiere un cuidadoso manejo del tiempo político. Lo que no se hizo en el momento adecuado es probable que perdiera condiciones de posibilidad o que no pudiera intentarse de nuevo. En el caso de la Unidad Popular el paso del tiempo iba aumentando las restricciones, puesto que la crisis seguía agudizándose.

El requisito básico en el que se funda el diseño estratégico de la Unidad Popular era la conquista de una mayoría social que se transformara en mayoría en el Estado. Como sabemos, y lo probó la propia experiencia, no siempre una mayoría social, en este caso electoral, se transforma en acumulación de fuerzas en el Estado. Por ello que lo lógico en abril de 1971 era plantear una reforma del Estado con disolución del Congreso, que facilitara las condiciones de acción de quien ganara las nuevas elecciones. Esta opción apenas se intentó, y lo que se hizo tomó un camino equivocado¹⁰⁷. Por tanto la Unidad Popular tenía una sola carta en sus manos: buscar una unidad positiva con una parte de la Democracia Cristiana, planteando para atraerla un programa que incorporara los temas comunitaristas y que insistiera en el carácter democrático y pluralista del proyecto. Como eso no se hace y se intenta una tardía negociación con la totalidad del partido intermedio, sometido a un acelerado proceso de derechización, la situación se siguió deteriorando.

¹⁰⁷ El Partido Comunista no supo reponer en esa ocasión su tesis del X Congreso, donde plantea un parlamentarismo de nuevo tipo.

En el contexto de ese proceso polarizado y con una coalición gobernante que había perdido posibilidades de acción, se desencadenó la discusión estratégica, la cual asumió a menudo una forma de guerrilla interna, que dividió a la Unidad Popular desde el segundo semestre de 1972 hasta el fin, el 11 de septiembre de 1973.

En realidad esa discusión, que toma un giro paroxístico y autodestructivo desde la formación del gabinete cívico-militar en noviembre de 1972, tiene su prolegómeno en las disputas sobre la Asamblea del Pueblo realizada en Concepción en mayo de 1972.

A propósito de una marcha realizada en Concepción por todos los partidos de la Unidad Popular, con exclusión de los comunistas y junto con el MIR, se produjo una discusión pública entre las direcciones de estas fuerzas. El debate se focaliza al inicio sobre el tema coyuntural de una marcha de la izquierda realizada para impedir el copamiento de la calle por los demócrata cristianos, que tenían programada una manifestación. Ella fue reprimida por Carabineros y cobró la vida de un estudiante. Pero el tema estratégico implicado era de fondo. Tenía que ver con la caracterización de la Democracia Cristiana por parte del MIR. Para éste se trataba de un partido burgués, que formaba un bloque indisoluble con el Partido Nacional. Esa afirmación convierte cualquier intento de acercamiento a ese partido en una confirmación de las tendencias conciliadoras y reformistas de la Unidad Popular, cuya paternidad el MIR atribuye al Partido Comunista, tildado como el “estratega de la derrota”.

Más tarde los partidos regionales, con la excepción de los comunistas y los radicales, sacaron una declaración pública, producto de una reunión conjunta que toma el nombre de Asamblea de Concepción. En ella todos los grupos coinciden en la necesidad de evitar cualquier conciliación y en las críticas al reformismo de la Unidad Popular. Este acontecimiento despierta la reacción airada del Partido Comunista y una rectificación de la dirección central del Partido Socialista, en la cual se ratifica la validez del programa de la Unidad Popular y el apoyo sin reticencias al gobierno de Allende.

Esta es una de las primeras escaramuzas importantes. En ella se anuncia el tema central de una disputa que avanzará *in crescendo* hasta fracturar totalmente la unidad de acción de la alianza, contribuyendo a la parálisis en la toma de decisiones. Esta situación marca los últimos días de la Unidad Popular, desde el “tancazo” de junio del 73, y en especial desde la renuncia del General Prats hasta el sangriento final.

Para el MIR, y también para la dirección del Partido Socialista, la acumulación de fuerzas requería forzar la marcha, mientras que para los comunistas y una parte del MAPU, aquella que había perdido el Congreso de diciembre de 1972, la acumulación de fuerzas pasaba por la negociación con la Democracia Cristiana, esfuerzo estratégico destinado a constituir una mayoría estatal nueva, con un programa consensuado.

Desde la formación del gabinete cívico-militar en adelante los debates se acentúan y las discrepancias alteran la estabilidad de cualquier estrategia. El campo de la batalla discursiva está organizado en torno a dos bloques principales, el llamado polo revolucionario y los

partidarios de una política negociadora. El primero de los contrincantes pone seriamente en duda que la “vía chilena” tenga alguna posibilidad. Incluso uno de los componentes del segundo bloque, el MAPU, dice con meridiana claridad a través de uno de sus dirigentes que el uso de esa terminología introduce confusión. Además declara “...a nadie, que sepamos, se le ha ocurrido pensar que con esta legalidad, es decir con este Estado, vayamos a construir en Chile el socialismo”¹⁰⁸.

La puntualización citada arriba pone en evidencia el problema de fondo. Este consiste en que ni siquiera todos los grupos políticos que planteaban una política de amplitud en las alianzas pensaban la “vía chilena” como una forma de tránsito al socialismo y no una fase de la lucha por el socialismo, la cual finalizaba con la toma violenta del poder y con la destrucción del Estado previamente existente.

Las elecciones de marzo de 1973 muestran que la Unidad Popular pierde fuerza electoral, aunque no de una manera dramática. El ritmo de descenso fue mucho menor que el que tuvo la Democracia Cristiana, la cual alcanzó el 42,3% en 1965 para caer en 1969 al 29,8%. La Unidad Popular alcanza en 1973 el 42,8%, la cual es una cifra más alta que la obtenida por Allende y solo un 6% más baja que la conseguida en las elecciones municipales de abril de 1971¹⁰⁹. Sin embargo, esa capacidad de movilización electoral no era suficiente para legitimar la continuación de la política de nacionalizaciones ni para poder reproducir en otra elección el poder gubernamental.

El ataque frontal al gabinete cívico-militar, o al proyecto de constitución ilegal del Área de Propiedad Social, por parte de los sectores del “polo revolucionario”, representaba un intento de imaginar otra alternativa. Esa política de resistencia a las soluciones gubernamentales se producía con un momento de gran participación en la base a través de los comandos comunales, de los comités de fábrica o de otras formas de organización popular.

En ese marco el nuevo proyecto de estructuración de la economía que el gobierno se proponía enviar al parlamento apareció coartando esas posibilidades de participación “de la clase”, en la medida que proponía la posibilidad de formas de co-administración de las empresas por parte de los trabajadores, el Estado y los antiguos propietarios. Esa fórmula aparece en un momento en el cual ciertos sectores del pueblo están entusiasmados con la posibilidad, y en algunas partes con la experiencia, de una gestión obrera.

La ruptura discursiva es total. Cada bando recurre en esas circunstancias a formas de enunciación simplificadas o tradicionales. En especial los discursos del “polo revolucionario” vuelven a plantear la fórmula bolchevique de la antelación. Para ellos lo que habría que hacer es utilizar los restos de poder existente para un ataque frontal que permitiera atrapar

¹⁰⁸ MAPU, “Análisis de la situación política del momento” en Víctor Farías, *La izquierda chilena (1969-1973)*, Santiago, Centro de Estudios Públicos, 2000, tomo 5, pp. 3234-3238.

¹⁰⁹ Cruz Coke, Ricardo. *Historia electoral de Chile. 1925-1973*, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1984.

el poder total. Daban por perdida la posibilidad de acumulación desde el gobierno y entonces se imaginan que era posible hacer un pase mágico.

Los comunistas, el sector más consecuente y perseverante de la política de amplitud, intenta por todos lados, pero ya no puede obtener ninguna posibilidad negociadora seria. En esa situación de máxima tensión se hizo transparente la fragilidad de todos los proyectos y surgió con fuerza la pregunta sobre la imposibilidad de la empresa.

Internándose en ese territorio trágico, pues la experiencia terminó cobrando demasiadas vidas, se ve que la política de la amplitud tenía un límite. Ese punto de bloqueo era la concepción del socialismo que tenía el Partido Comunista y los otros partidos que lo acompañaban, con excepción del Partido Radical, una fuerza en declinación y muy minoritaria. Esa concepción era heredada de la tradición leninista, la cual define el socialismo por la expropiación de los medios de producción de manos de la burguesía y por la dictadura del proletariado. Esa evidencia permite comprender por qué la política de la amplitud no pudo tener éxito. Le faltó a la estrategia de los comunistas y a sus aliados aquello que Allende (y con él Joan Garcés) sí comprendió.

Para ellos la “vía chilena” se definía tanto por la forma como por el contenido. Una afortunada fórmula de Luis Corvalán mostraba claramente las limitaciones de un modelo ortodoxo que es llevado hasta sus extremos de amplitud. Él acuñó la metáfora del tren para definir a la coalición amplia. Esta era una alianza donde los participantes podían ir descendiendo del tren en diferentes estaciones. Pero este hábil alarde retórico clausuraba el paso a una estrategia equitativa de alianzas, porque establecía sujetos de diferentes jerarquías, quienes al descender del convoy se iban convirtiendo en enemigos de la revolución. Cuando se sigue concibiendo el socialismo para Chile como una réplica de los socialismos reales, como una repetición cuya peculiaridad no era la meta, sino la forma de llegar, esto es por etapas y ahorrando al máximo la posibilidad de la violencia política, se hacía imposible construir un bloque con partidos que tenían otra concepción del futuro, aunque ella fuera también “alternativista”, como lo era la de parte de la Democracia Cristiana de entonces.

Y esa otra concepción del futuro no era posible para los comunistas pese a su amplitud táctica, producto de su realismo. No estaban en condiciones de propiciar una idea distinta del socialismo como meta. Es en ese aspecto particular que el pertenecer al movimiento comunista internacional, a cuya vanguardia estaba el PCUS, constituía un *handicap*.

Quien sí estaba en condiciones de pensar más allá era Allende, teorizado por Joan Garcés. Pero, para que lo que éstos propiciaban (un socialismo con pluralismo político, una estructura compleja de la propiedad de los medios de producción y una sociedad con libertad cultural) hubiese tenido condiciones de posibilidad, se hubiera necesitado un giro temprano. El momento para virar era en abril de 1971, en el momento mismo del triunfo en las elecciones municipales. En ese momento se debió proponer un programa de reformismo revolucionario, que decantara a los sectores derechistas del Partido Demócrata Cristiano

pero atrajera a los otros y que dejara de lado la fórmula autoritaria de los “resquicios legales”. Esta fórmula era eficaz y expedita para requisar empresas, pero al ser dudosa su legalidad afectaba la legitimidad de la Unidad Popular.

Para que el diseño de Allende y Garcés fuera posible era necesaria una gran alianza estratégica que reordenara el cuadro político. Ello implicaba obligar al partido intermedio a enfrentar sus contradicciones y exigirle a la izquierda proponer como modelo de sociedad algo distinto que la repetición del socialismo burocrático.

Algo que le faltó a la poderosa intuición de Allende y Garcés fue impulsar desde el principio la gestión de las empresas intervenidas por sus trabajadores (obreros, empleados y técnicos), lo cual hubiese permitido ir desde ya experimentando, teniendo la experiencia subjetiva de un socialismo nuevo.

Los estrategias del “polo revolucionario” captaron la importancia de la democracia en la empresa. Aunque equivocados en la orientación general que esperaba todo de un “poder popular” desarmado, se dieron cuenta de un punto importante: del valor que tenía para los trabajadores vivir una experiencia de dirección de aquello que sentían suyo. Esos últimos meses en que funcionaron los comités de fábrica, los cordones industriales, los comandos comunales, se vivió la gran fiesta democrática.

Desde otro punto de vista, el éxito que tuvo esta experiencia de democracia de los trabajadores en su conjunto, la cual remite al socialismo de los consejos, revela que era necesario ofrecer la esperanza de una sociedad en que la dictadura del proletariado no fuera a sustituir al socialismo democrático. Sin crear esa certeza no era posible generar la amplitud necesaria para imponerse contra el gran capital monopólico o bancario que era necesario nacionalizar. La experiencia post-octubre ofreció a muchos trabajadores la posibilidad de esa experiencia. Ella pudo haber reordenado el cuadro político si, antes que la crisis fascizara a las masas de la oposición, se hubiera podido convocar a esa experiencia a los militantes y a los trabajadores demócrata cristianos que todavía creían en el comunitarismo.

Actuando de ese modo quizás hubiera sido posible mostrar que el socialismo que se quería era la profundización de la democracia. Quizás eso hubiera evitado que al final el “polo revolucionario” creyera que la política consistía en “abarcar”, en hacer crecer las empresas expropiadas o en poner en duda el carácter revolucionario del gobierno porque este realizaba alguna concesión. Quizás eso hubiera atraído al bloque por los cambios a los sectores anticapitalistas de la Democracia Cristiana. Por último, haber practicado desde el principio esa política, quizás hubiese flexibilizado el economicismo tecnocrático de muchas posturas comunistas que ponían la eficiencia por encima de la participación.

En este análisis de las divergencias estratégicas algo se percibe con claridad. Todos los partidos o bloques de la izquierda cometieron errores en sus análisis tácticos o estratégicos. Hay que tomar en consideración que las posibilidades de juego eran muy restringidas, puesto que: a) la lógica misma de la acumulación de fuerzas para encaminarse desde el Estado

existente hacia el socialismo requería conseguir tanto una mayoría social como una estatal; b) ello exigía, en las condiciones de correlación de fuerzas existentes, una política de alianzas; c) para que esa amplitud fuese posible era necesario definir la sociedad socialista por construir de un modo diferente a la de los socialismos reales.

En síntesis, el problema de la vía pacífica versus la vía violenta era un problema importante. Pero oscureció otro más importante aun: el tipo de sociedad socialista que se deseaba construir, el cual debía ser un socialismo democrático y participativo.

Pero esto es escribir la historia de lo que pudo ser, la historia contrafactual. Por ahora no estamos en eso.

CONSTRUYENDO “LAS POBLACIONES”: EL MOVIMIENTO DE POBLADORES DURANTE LA UNIDAD POPULAR

Mario Garcés D.
ECO, Educación y Comunicaciones
Escuela de Historia y Ciencias Sociales, Universidad ARCIS

El movimiento de pobladores, si se le observa en perspectiva, se nos revela como uno de los principales actores sociales urbanos de la segunda mitad del siglo XX. En cierta manera, se trata del movimiento social popular que tomó la posta del histórico movimiento obrero chileno. Esta afirmación es por cierto discutible, en el sentido de que se trata de movimientos de naturaleza diferente, ya que mientras el movimiento obrero emerge en el campo de la producción y la fábrica, el de los pobladores se ha constituido en el territorio, en el acto de “tomar sitio” en la ciudad. Sin embargo, ambos movimientos tienen en común su base popular y ambos también dan cuenta de las dificultades de las mayorías populares para asegurar su sobrevivencia social en medio de condiciones histórica y reiteradamente adversas. En un caso, como producto de la “explotación”; en el otro, como producto de la pobreza y de la precariedad de los derechos que la sociedad chilena pocas veces ha garantizado a las mayorías de pueblo.

1. La habitación popular

Como me propuse demostrar hace algún tiempo en un largo estudio sobre los pobladores, fue justamente en la etapa anterior a 1970, cuando la cuestión de la “habitación popular” se volvió completamente crítica¹¹⁰. El Primer Censo Nacional de la Vivienda en Chile, de 1952, demostró que el déficit de viviendas alcanzaba al 30% de los chilenos. En Santiago, que concentraba la mayor cantidad de población, llegaba al 36%, entre otras razones, como producto de la migración campo ciudad, que creció sostenidamente entre 1930 y 1970. Este déficit significaba que, en términos absolutos, medio millón de santiaguinos vivían en departamentos o piezas en mal estado, en conventillos o en poblaciones callampas. A nivel nacional significaba que de los casi seis millones de chilenos de esa época, aproximadamente unos dos millones no habitaban en condiciones mínimas de confort ni en la ciudad ni en el campo.

¹¹⁰ Garcés, Mario. *Tomando su sitio. El movimiento de pobladores de Santiago, 1957-1970*. LOM Ediciones, Santiago, 2002.

La verdad es que Santiago, desde la segunda mitad del siglo XIX, había mostrado un crecimiento sostenido más vinculado a los pobres que a la expansión de los sectores medios o de la vieja elite criolla, que ocupó originalmente el centro de la ciudad para emigrar luego hacia “el barrio alto” a mediados del siglo XX. Benjamín Vicuña Mackenna fue, tal vez, quien vio más agudamente el problema de la habitación popular en 1872, cuando desde la Intendencia de Santiago se propuso la primera reforma urbana en gran escala de la capital. Con realismo –clasista, diríamos hoy– la autoridad política reconoció la convivencia de dos ciudades –la “ciudad bárbara”, como llamó a la de los pobres, y la “ciudad propia, opulenta y cristiana”, como llamó a la de elite– e inició el primer inventario de los problemas urbanos asociados a los pobres: insuficiencia de servicios básicos de agua, luz, alcantarillado, recolección de basuras, así como también otros problemas, vinculados por cierto con los anteriores, relativos a la seguridad de la propiedad –es decir, el robo y la delincuencia– y a la salud pública, que se manifestaba en epidemias recurrentes, difíciles de controlar en condiciones urbanas manifiestamente precarias para gran parte de los santiaguinos.

Todos estos problemas urbanos y sociales, más allá de las iniciativas del activo Intendente de Santiago, siguieron su curso todavía por varias décadas, con altos y bajos y sin que se estructuraran soluciones de fondo. Así, por ejemplo, cuando se celebraba el centenario de la república, se calculaba que la cuarta parte de la población de Santiago vivía en 25 mil piezas de conventillos, cuartos redondos y ranchos, y cuando se instaló el gobierno del Frente Popular, con el doctor Salvador Allende en el Ministerio de Salud, no solo una mayoría de hombres y mujeres de pueblo seguía viviendo en malas condiciones urbanas, sino que como estableció el ministro Allende, la mayoría de la población sufría “de hambre fisiológica” (cerca del 50% de la población no alcanzaba a cubrir una ración alimentaria básica)¹¹¹, amén de altas tasas de mortalidad –sobre todo infantil– y del hacinamiento creciente de los conventillos (a nivel nacional, el promedio era de 3 personas por pieza, mientras que en Santiago subía a 5 personas por cuarto)¹¹². Este estudio además ya mostraba, adelantándose al Censo de 1952, que la “tercera parte” de los chilenos habitaba en “viviendas malsanas” y que un millón y medio de compatriotas carecía de habitación adecuada, todo lo cual hacía urgente –a fines de los años treinta– la necesidad de construir 300 mil “viviendas higiénicas”¹¹³.

¹¹¹ Allende, Salvador. “La realidad médico social chilena”. Ministerio de Salubridad, Previsión y Asistencia Social, Santiago, 1939, p. 38.

¹¹² Ibid., p. 58.

¹¹³ Ibid., p. 57.

2. La organización poblacional

Así como la “organización obrera” y el movimiento obrero fueron anteriores a la legislación social (las primeras leyes laborales se promulgaron en 1924 y la primera “huelga general” en Chile se verificó en 1890), con los pobladores ocurrió algo semejante: primero fue la organización y luego la acción del Estado, bajo presión popular. En efecto, las primeras manifestaciones de los trabajadores y pobres de la ciudad se produjeron en los años veinte, a través de las Ligas de Arrendatarios, y mucho antes que se promulgara la Ley de Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias –recién en 1968– existía una larga y rica tradición organizativa en diversos tipos de comités de vecinos o pobladores, y hacia los años sesenta, especialmente de “Comités de Sin Casa”. Desde estos últimos, en 1947 se produjo una de las primeras “tomas de sitios” que dio origen a la población La Legua Nueva, y si bien esta “toma” quedó aislada como producto de la represión que impuso la Ley de Defensa de la Democracia, diez años más tarde, en 1957, el movimiento se había recuperado y se produjo la toma de La Victoria, que dio origen a la población del mismo nombre. Esta toma fue más amplia y de mayor impacto en la sociedad, cuando unas mil familias, según un informe oficial, pusieron en tensión al mundo político y obligaron al Estado, en 1959, a iniciar el primer Plan de Viviendas. En cierto modo, los pobladores, después de la hazaña de La Victoria, ganaron en confianza y en claridad estratégica: si el Estado no construía, al menos tomarían sitios y construirían por sus propios medios como lo hicieron en La Victoria, que pronto superaría los 18 mil habitantes. Y así fue y así continuó siendo en los años siguientes: en 1961, diversos comités de distintos lugares de Santiago tomaron la Chacra de Santa Adriana; en 1967, una nueva toma en Barrancas dio origen a Herminda de la Victoria; y, a partir de 1969 un verdadero ciclo de tomas copó los últimos años del gobierno de Eduardo Frei Montalva. Un estudio realizado durante la Unidad Popular mostró que entre 1969 y 1971 se pudieron contabilizar 312 tomas¹¹⁴, de diversa magnitud, que dieron origen –junto a los planes de vivienda estatales, pero bajo presión popular– a la mayor parte de las poblaciones del Santiago del último tercio del siglo XX. Solo por indicar algunas de estas tomas, entre las más conocidas, se pueden indicar: Violeta Parra (febrero de 1969); Guanaco, posterior “Pablo Neruda”, El Bosque, Patria Nueva, Última Hora y gran parte de Huechuraba (octubre de 1969-agosto de 1970); El Cortijo (agosto de 1970); 26 de Enero en La Bandera (enero de 1970); Nueva Habana (noviembre de 1970) que agrupó a varias tomas realizadas durante 1970¹¹⁵. Muchas de estas “tomas” se asociaron o superpusieron a programas de “operación sitio” de gran envergadura, como la que dio origen a la Villa Francia y Robert Kennedy por el

¹¹⁴ Duque, Joaquín y Pastrana, Ernesto. “La movilización reivindicativa urbana de los sectores populares de Chile: 1964 – 1972”. En: *Revista de Ciencias Sociales* N° 4, diciembre de 1972, FLACSO, Santiago, pp. 259-294.

¹¹⁵ Garcés, Mario. “Las tomas en la formación de Santiago”. En: *El mundo de las poblaciones, Nosotros los chilenos* N° 5, LOM Ediciones, Santiago, 2005, pp. 4-31.

poniente (1968- 1969); La Pincoya por el norte (1969); La Bandera por el sur (1970); y La Faena y Lo Hermida por el oriente (1969-1970)¹¹⁶.

La “toma” fue, sin lugar a dudas, una experiencia altamente simbólica y relevante desde un punto de vista pedagógico y político. Por una parte, era la realización de un sueño y muchos pobladores así lo revelan en sus testimonios: “En ese tiempo, nosotros no teníamos nada –nos confiesa Pedro Plaza, de la Población El Cortijo–. Estábamos casados, vivíamos arrendando por ahí. Entonces, nos dieron (la comisión de dirigentes de la toma) cinco días para llegar. Yo por un lado me conseguí 1.000 pesos. Mi señora se consiguió por ahí 500 pesos. Con esos 1.500 pesos hicimos dos piezas de madera tinglada (...) No había quedado muy buena, pero por lo menos estaba paradita y vivíamos contentos. Después nos faltaba el techo (...) Fui donde un amigo que era constructor y me dio un vale para Sodimac (...) Entonces, puchas, yo quedé feliz. Como yo trabajaba en la Municipalidad de Santiago, pesqué el camión de la basura y me traje el pizarreño para mi casa. Completamos la casucha y nos vinimos para acá a esta población. Desperté en la mañana contento, gritaba, porque ¡teníamos algo propio! Cuando uno arrienda, a uno lo empujan (...) Yo tenía cinco hijos y no me los dejaban jugar tranquilos (...) Con todo lo que pagué, no he pagado ni una de las felicidades que he tenido en el barrio...”¹¹⁷

Por otra parte, significaba dar una serie de pasos adelante, atreverse, confiar en los vecinos y en la organización popular. La señora Florcita Carrasco, que participó en la toma de Guanaco, en Conchalí, así relata su experiencia: “Yo no llegué el primer día. El 26 de octubre, yo llegué el 27 de octubre, el lunes por la mañana. Yo llegué de Valdivieso, tenía unos vecinos y en la noche venía del centro, de mi trabajo, porque yo trabajaba en el centro, venía del centro y me encuentro con mis vecinos y vienen y me dicen que había una toma de terrenos, y a mí hablar de toma de terrenos, yo había escuchado por ejemplo de Violeta Parra y como que tenía miedo también, y ellos me dicen, no, vamos, me dicen, vamos, *fíjese que ya se usa la toma de terrenos* (...) Llegamos adentro y hay unas señoras que eran vecinas, allá me dicen, sí vengan compañeras, pase aquí, ándese aquí, en filita se iban armando las carpas y nosotros llegamos y nos pusimos ahí. Enseguida pusimos el cubrecama con los palitos que llevamos y la bandera, y nos instalamos. Y ahí, yo ya después perdí el miedo porque no pasaba nada, toda la gente andaba ahí conversando, mirando, viendo lo que estaban haciendo ¡y me quedé puh!”¹¹⁸

Realizar una toma implicaba una serie de pasos y aprendizajes, tanto sociales como políticos. Había que partir por organizar comités de sin casa y articularlos barrial o comunalmente; inscribirse en los programas de habitación popular (normalmente depositar un mínimo de 20 cuotas CORVI) y demandar al Ministerio de la Vivienda para ser incorporados a los

¹¹⁶ Garcés, *Tomando su sitio*, op. cit. cap. 5, *passim*.

¹¹⁷ Grupo Cultural Alfalfal y Mario Garcés (coordinador), “El Cortijo en la memoria”. Documento de trabajo, Conchalí, abril de 1995, pp. 18 y 19.

¹¹⁸ Garcés, Mario. *Historia de la comuna de Huechuraba*. Ediciones ECO, Santiago, 1997, pp. 63 y 64. La cursiva es nuestra.

programas en desarrollo, en especial, a fines de los sesenta, al programa de “operaciones sitios”¹¹⁹. Si el Ministerio no respondía en un plazo razonable, el próximo paso sería concertarse para una “toma”. Llegados a este punto, la acción seguía un curso más operativo (o conspirativo) que implicaba elegir un sitio a invadir –tarea que normalmente cumplían los dirigentes–; fijar un día y una hora, que normalmente se avisaba con algunas horas de anticipación a los involucrados para contar con el factor sorpresa frente a la policía. La consigna más frecuente era venir a la hora indicada, habitualmente durante la noche, con “tres palos y una bandera” (los palos o maderos para armar una pequeña carpa, la bandera para afirmar un principio simbólico de soberanía territorial). Una vez materializada la “toma de sitios” llamar a diputados o autoridades políticas locales de la izquierda, muchas veces previamente convenidas, para evitar la represión; y lo más importante, resistir el mayor número de horas posibles hasta reanudar las negociaciones con el Ministerio de la Vivienda, el que podía garantizar la permanencia en los sitios tomados o la promesa de ser trasladados, en poco tiempo, a sitios definitivos.

Consolidada la toma, adquiría el nombre de “campamento”, lo que indicaba el carácter transitorio de la ocupación en cuanto a la vivienda, ya que avanzadas las negociaciones podían iniciarse las tareas mínimas de urbanización y más tarde, la construcción de la casa definitiva y la población propiamente tal. La fase de “campamento”, como veremos más adelante, solía ser la más rica desde el punto de vista político y organizativo, ya que la mayor parte de las veces ésta se constituía como una experiencia de democracia directa. El Comité de Sin Casa, ya de manera previa o inmediatamente materializada la toma, se tendía a organizar en “comisiones” o “frentes” de salud, cultura, construcción, vigilancia, etc. Dependiendo de los grados previos de organización, y también de las orientaciones políticas predominantes, estas comisiones o frentes podían alcanzar importantes grados de desarrollo, hasta germinales formas de autogobierno local.

3. El Estado bajo presión: los planes de vivienda

Así como los pobladores tomaron la iniciativa, a partir de 1957 el Estado debió ajustar sus planes y destinar mayores recursos para la vivienda popular. En 1953 se había fundado la CORVI y si bien representó un avance en cuanto a políticas de vivienda, los planes de Ibáñez estuvieron por debajo de todas las expectativas, especialmente de los pobladores del

¹¹⁹ Las “operaciones sitios” fueron una iniciativa creada en 1965 por el gobierno de Frei para enfrentar los efectos del terremoto de ese año y daños provocados por los temporales de invierno. Consistió en la asignación de sitios urbanizados, una instalación sanitaria mínima y mediaguas u otro tipo de vivienda económica para familias de escasos recursos y en extrema necesidad de habitación. Más detalles en Garcés, *Tomando su sitio*, op. cit., p. 301 y ss.

Zanjón de la Aguada, que organizados en Comités de Sin Casa, fueron los principales protagonistas de la toma de La Victoria, en octubre de 1957. El nuevo gobierno, el de Jorge Alessandri (1958-1964), puso en marcha, ahora sí, un plan mucho más amplio y ambicioso: se construiría más en número que en calidad, lo que con el tiempo recibiría el eufemístico nombre de “soluciones habitacionales”. Es decir, a veces vivienda, otras un sitio urbanizado y la casa debería esperar. Este fue parcialmente el caso de la población José María Caro, en la que se subdividieron 6 mil sitios en siete sectores (desde el Sector A hasta el Sector G) para albergar a unas sesenta mil personas (ya en 1965, sin embargo, la Población J. M. Caro superaba los 80 mil habitantes). Pero, además, en este plan se contemplaron también las erradicaciones de poblaciones callampas, y así entre mayo y septiembre de 1959 miles de familias fueron trasladadas –con lo que tuvieran y en una operación a cargo del Ejército– hasta el fundo San Gregorio, dando origen a la población del mismo nombre, que pronto cobijaría a unos 20 mil habitantes. Con todo, cuando el dinamismo del Estado bajó el ritmo y aumentaron las listas de espera en la CORVI –como efectos de la burocracia o la escasez de recursos– el movimiento se encargó de hacerlo notar. En este contexto, se produjo la toma de Santa Adriana, en el invierno de 1961.

Con Eduardo Frei Montalva (1964-1970), el Estado quiso ir más lejos: se creó finalmente el Ministerio de la Vivienda en 1965 y se anunció la construcción de 360 mil viviendas en los seis años de gobierno, de las cuales dos tercios serían para los sectores más necesitados. Pero no solo eso, los pobladores serían apoyados por el Estado y estimulados a organizarse a través de un organismo especial: la Promoción Popular. En ambos campos se hicieron avances significativos, pero insuficientes: la meta y la capacidad de construir viviendas definitivas a través de licitaciones que beneficiaban a las empresas de la construcción –y de paso, a la Cámara Chilena de la Construcción– mostraron pronto sus límites, y lo que fue una política de emergencia, la denominada “Operación Sitio” (propuesta luego del terremoto de marzo de 1965) terminó transformándose en una política permanente y, en cierto sentido, dominante y amplificada hacia fines de ese gobierno. Por otra parte, los apoyos de la Promoción Popular, si bien fueron discutidos muchas veces por la Izquierda, fueron derivando en una potenciación del movimiento poblacional, que más que hacerse dependiente del Estado, ganó en autonomía e incrementó la presión sobre el Ministerio de la Vivienda, también hacia fines del gobierno de Frei.

En realidad, la coyuntura más activa del movimiento poblacional se verificó en medio de la campaña presidencial de 1970. Parafraseando a sociólogos actuales, se puede sostener que si por una parte el movimiento había ampliado sus redes de base y símbolos culturales, validado sus formas de lucha –la demanda, la toma y la negociación–, la coyuntura electoral les abrió un “campo de oportunidades políticas” sin precedentes: después de la represión a la toma de Pampa Irigoín en Puerto Montt, en que perdieron la vida diez pobladores, y el rechazo nacional que provocó esta acción del Ministerio del Interior, que dirigía Edmundo Pérez Zujovic, y en medio de la campaña en que se jugaba la continuidad de la DC en el

gobierno, la política del Ejecutivo no podía sino ser la de una mayor interlocución con las organizaciones de los pobladores. Estos últimos, por su parte, habían aprendido los mecanismos de la negociación con el Ministerio de la Vivienda, ampliado y fortalecido sus alianzas con los partidos políticos, en especial con la Izquierda, y sabían también que si el Estado no se movilizaba, ellos sí podían hacerlo mediante nuevas “tomas de sitio”.

El triunfo de Salvador Allende y la Unidad Popular se produjo entonces con un movimiento de pobladores en alza, vigoroso y multifacético, que hacía los más diversos aprendizajes sociales y políticos en el territorio, en el acto de poblar, de construir y refundar la ciudad de Santiago, dejando atrás el pasado de “allegados” o de los conventillos y las “poblaciones callampas”. Fueron entonces miles los que realizaban un sueño –difícil de hacer realidad para las generaciones pasadas– el de alcanzar un sitio y la casa propia.

4. Los pobladores y el gobierno de la Unidad Popular

Las relaciones entre la izquierda y los pobladores tenían, a la altura de los setenta, por cierto, algo de historia, tensiones, apoyos recíprocos, lecturas políticas no siempre muy elaboradas. Por ejemplo, el Partido Comunista fue siempre un aliado de las movilizaciones de los pobladores (prácticamente estuvo presente en la mayoría de las tomas más emblemáticas entre 1946 y 1970). Sin embargo, para el PC el sujeto de la revolución era la clase obrera, y en consecuencia le tomó tiempo elaborar una visión política específica acerca del papel del movimiento poblacional. En el intertanto, al PC le salió gente al camino, la Democracia Cristiana que capitalizó el apoyo poblacional en la elección de Frei en 1964. Pero la DC no entraba sola en escena, sino que con el apoyo manifiesto a ratos, velado otras, de una institución que por cierto tenía larga tradición en medio del pueblo, la Iglesia Católica, y más ampliamente el “mundo cristiano” que vivía sus propias transformaciones en los agitados años sesenta¹²⁰. Por otra parte, hacia fines del gobierno de Frei, los pobladores habían entrado en relación con otros dos grupos políticos nuevos: el MAPU, que había surgido de los sectores *rebeldes* de la DC a fines de los sesenta, y el MIR, que había surgido de la propia izquierda tradicional para expresar los propósitos más radicales de transformación social de la *nueva izquierda latinoamericana*. Este grupo alcanzó un rápido desarrollo entre los pobladores, animando movilizaciones y tomas de sitios que dieron vida a una de las poblaciones más emblemáticas de los tiempos de la Unidad Popular, la Población Nueva Habana. Es

¹²⁰

La convivencia de comunistas y cristianos se puede reconocer en la historia de diversas poblaciones. Así lo pudimos ver en un proyecto de historia oral en la Población La Legua. Ver en: Red de Organizaciones Sociales de La Legua y ECO, Educación y Comunicaciones. *Lo que se teje en La Legua*. Ediciones ECO, Santiago, 1999. Sobre los cambios en la Iglesia en los sesenta y durante la UP, en este mismo libro, ver los trabajos de Amorós e Illanes.

decir, al momento de conquistar el gobierno, la UP se encontraría con un movimiento no solo vigoroso y en alza, como hemos dicho anteriormente, sino que políticamente diverso. Pero, además, y este asunto sí sería una prioridad y organizaría en gran medida la política de Estado de la UP, había “tomas” por todas partes –el pueblo las llamó “campamentos”– que debían transformarse en poblaciones definitivas; o sea, había que construir casas por miles, pero también obras básicas de infraestructura y de servicios comunitarios, tanto en los campamentos como en las múltiples “operaciones sitios” que la DC debió realizar bajo presión popular. La toma o campamento era todo un logro –se había conquistado el sitio– pero allí todo era provisorio y estaba casi todo por hacer para transformarlo en villa o población en forma. Ese era, ni más ni menos, uno de los mayores desafíos de la UP en el gobierno: construir poblaciones, garantizando de este modo el derecho social a la vivienda.

El equipo técnico de la UP que se instaló en el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, era plenamente consciente de todos estos desafíos. Así lo recapituló una publicación oficial en 1972, que indicaba que el problema habitacional se caracterizaba por: “a) Las condiciones subhumanas de habitabilidad en que se encuentran grandes sectores de la población; b) Desmedido crecimiento de los principales centros poblados, y c) Áreas céntricas, de alto valor urbano en condiciones de deterioro, las que se observan en la mayoría de las ciudades del país”. Las manifestaciones concretas, a juicio del Ministerio, del problema urbano “se muestran en la existencia de poblaciones callampas, conventillos, poblaciones de operación sitio, campamentos, falta de obras de urbanización (agua potable, alcantarillado, pavimentación), falta de equipamiento social (locales comerciales, escuelas, locales de reunión, etc.), problemas de hacinamiento, entre otras manifestaciones”¹²¹. El déficit estimado por el Ministerio a 1970 era de 593.000 viviendas, el de equipamiento social era difícil aún de calcular, y el de infraestructura se estimaba del siguiente modo: agua potable, 4.175.800 metros lineales de redes; alcantarillado, 6.390.200 metros lineales de colectores; y, de pavimentación, 43.314.300 metros cuadrados de calzadas; 14.341.100 metros cuadrados de aceras; y 8.790.700 metros lineales de soleras¹²².

5. Construir más viviendas

En este contexto, de un activo movimiento de pobladores y de necesidades por doquier, el gobierno de la UP se propuso realizar la mayor hazaña en la historia de la vivienda popular: iniciar la construcción en 1971 de 79.250 viviendas y completar o dar término a la urbanización de 120.505 sitios. Nunca en la historia precedente se había tomado una

¹²¹ Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. *Política habitacional del Gobierno Popular*. Departamento de Publicaciones del MINVU, Santiago, 1972, p. 11.

¹²² Ibidem.

iniciativa de esta envergadura. De este ambicioso plan, las diversas corporaciones que conformaban el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (CORVI, CORMU, CORHABIT), contrataron efectivamente el inicio de 73.009 viviendas, es decir solo 6.241 menos de las programadas, mientras que la CORVI cumplió con 28 mil urbanizaciones de sitios y CORHABIT con otros 5.462, amén de que para atender a las familias afectadas por el sismo de julio de 1971 se produjeron 48.117 mediaguas. Por su parte, con relación a las tareas de urbanización, la Corporación de Obras Urbanas (COU) puso en marcha un Plan de Emergencia para 1971, que alcanzó a 172.390 metros lineales de redes de agua potable; 623.501 de alcantarillado; 1.428.920 metros cuadrados de calzadas; 209.317 de aceras y 162.790 de soleras¹²³.

El primer escollo, sin embargo, con que se encontró el gobierno de la UP a fines de 1970, fue que “las tomas” continuaron. Algunas de ellas, muy legítimamente, daban continuidad con la estrategia exitosa del movimiento de pobladores en el último año del gobierno anterior, y otras eran estimuladas u organizadas por funcionarios o dirigentes de la DC que veían perder su arraigo entre los pobladores junto a los magros resultados en la elección de 1970. El gobierno, el PC y el propio Allende buscaron entonces controlar el movimiento, so pena de ver entorpecidos todos su planes de construcción de viviendas. Y si bien hubo discursos que apelaron a no realizar tomas indiscriminadas, y el anuncio de un proyecto de ley para sancionar a quienes realizaran tomas injustificadamente, la tendencia que predominó fue el diálogo y no la represión. Así se pronunció el Ministerio de la Vivienda en una declaración pública, respondiendo además a una declaración previa de la Cámara Chilena de la Construcción que también manifestaba su preocupación por tomas de poblaciones terminadas o en proceso de construcción. El Ministerio indicó: “1° Que el gobierno está plenamente consciente de la gravedad que reviste este problema y de la urgente necesidad de afrontarlo y resolverlo, dentro del menor tiempo posible; 2° Que sin perjuicio de las normas especiales que se están aplicando, con el objeto de superar la situación producida, el Gobierno garantizará mediante el estricto cumplimiento del Plan de Ahorro Popular, los derechos de los postulantes (...); 3° Que con el objeto de impedir la repetición de ocupaciones ilegales, el Gobierno está procurando la aprobación legislativa de un proyecto de ley, mediante el cual se sanciona con penas de presidio a las personas que participen en la ejecución de tales actos, ya sea como instigadores, colaboradores u ocupantes; 4° Que sin perjuicio de su política de absoluta persuasión, que persigue el objeto de lograr, por la vía de la comprensión y el diálogo, la colaboración de los pobladores a los planes habitacionales del gobierno, la autoridad encargada del mantenimiento del orden público y del resguardo de los derechos ciudadanos no trepidará en hacer uso de todos los medios que la ley le franquea para impedir, que por la vía de la fuerza, se conculquen los derechos de los modestos pobladores que están procurando reglamentariamente la solución de su problema habitacional; y 5° Que las más altas

¹²³ El conjunto de las obras realizadas durante 1971 se pueden ver en MINVU, *Política habitacional*, op. cit., cap. 2, *passim*.

autoridades del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y de las instituciones que de él dependen (...) han estado y seguirán estando en permanente contacto con los pobladores, ya sea a través de sus continuas visitas a los campamentos y poblaciones en que habitan o mediante la Oficina Relacionadora y Coordinadora de Vivienda que, con esta misma fecha, se ha inaugurado en la sede de la delegación de Santiago de la Corporación de Servicios Habitacionales ubicada en la calle Moneda N° 723, primer piso, de esta ciudad. Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, Santiago 2 de diciembre de 1970”¹²⁴.

El Presidente Allende y su ministro de la Vivienda Carlos Cortés, recorrieron entonces poblaciones y campamentos, buscando establecer una relación directa con los pobladores y la Oficina Relacionadora, encargada de atender las demandas de los Comités de Sin Casa entró muy pronto en funciones, de tal modo que la prensa el día 6 de diciembre informaba que solo en dos días de trabajo se había atendido 250 casos de diversos comités. Juan Araya, histórico dirigente de los pobladores, vinculado al Partido Comunista y que había participado en varias tomas de Barrancas, declaró entonces, con optimismo: “En esta Oficina no hay nada imposible, ya que tanto los funcionarios como los dirigentes poblacionales que están a su cargo, comprenden perfectamente la importancia de su funcionamiento, que incide directamente en los planes habitacionales del Gobierno Popular, por lo tanto ningún problema debe ser difícil para nosotros, todos deben tener solución”. Y agregó además, “los problemas más graves que hemos tenido que tratar en esos dos días están relacionados con las condiciones sanitarias de los diversos campamentos de Santiago que agrupan en total a 35 mil familias”¹²⁵.

Sin embargo, todavía en enero de 1971, el Ministerio seguía buscando formas de encontrar solución a la inercia de las tomas, descartando la represión y apelando al diálogo con las propias organizaciones populares. En una declaración pública del 22 de enero de 1971 aclaraba: “Se ha podido establecer que algunos de los casos de ocupación ilegal corresponden a situaciones dramáticas de familias que fueron tramitadas por muchos años en su afán de conseguir una vivienda para su grupo familiar, en muchos casos numeroso. Pero también es cierto, según se ha comprobado, que algunas ocupaciones ilegales se han producido alentadas por politiqueros desplazados con el único afán de crearle problemas al Gobierno de la Unidad Popular. Está comprobada, y la opinión pública la conoce, la participación en estas tomas de connotados políticos reaccionarios que nunca antes se habían distinguido por su preocupación en las inquietudes de las familias sin casa”. La declaración terminaba haciendo un llamado a las Juntas de Vecinos, Centros de Madres y organizaciones de pobladores y sindicatos a que hicieran llegar sus denuncias de “ocupantes de viviendas que tienen más de un bien raíz o que con datos falsos estén tratando de obtener un beneficio que no les corresponde y que reclaman miles de familias que teniendo sus cuotas y cargas necesarias no pueden obtener una vivienda por causa de estas ocupaciones ilegales”¹²⁶.

¹²⁴ “Ocupación ilegal de Viviendas”. *Las Noticias de la Última Hora*, 4 de diciembre de 1970, p. 5.

¹²⁵ “Oficina Nacional de Pobladores atendió 250 casos en dos días”. *Las Noticias de la Última Hora*, 6 de diciembre de 1970, p. 5.

¹²⁶ “Corhabit solicita colaboración de pobladores”. *Las Noticias de la Última Hora*, 22 de enero de 1971, p. 5.

Superadas parcialmente las tensiones iniciales con las tomas y con un Ministerio abierto al diálogo, junto a la construcción de viviendas y obras de infraestructura, la UP se propuso asimismo realizar diversos cambios en la política global del MINVU. Entre las más novedosas se pueden reconocer: la edificación en altura para sectores populares, destinada a maximizar recursos y aminorar los efectos del crecimiento extensivo de las principales ciudades del país, en especial de Santiago; la “Operación Invierno”, que buscaría morigerar los efectos del clima, las tradicionales lluvias e inundaciones, sobre todo en los campamentos y los barrios más pobres de las ciudades chilenas; el desarrollo de “balnearios populares” que hiciera posible vacaciones de verdad para quienes pocas veces podían salir de la ciudad en la etapa estival; y, finalmente, no menos importante, la conformación de un Departamento, dependiente del MINVU, de “Ejecución Directa” de obras urbanas. Esta última medida significaba que el Estado podía, y de hecho así ocurrió, comenzar a construir sin depender completamente de las empresas constructoras y de la Cámara Chilena de la Construcción.

Cada una de estas innovaciones tuvo un desarrollo importante los primeros dos años de gobierno. Así por ejemplo, la edificación en altura fue anunciada por Miguel Lawner, director de CORMU, en el verano de 1971, como una manera de reorganizar el crecimiento urbano. Por cierto había que convencer a los futuros usuarios, que en términos generales aspiraban al sitio y la casa, de la necesidad de modificar sus expectativas. Por ello el director de CORMU indicó a la prensa que: “De no hacerlo así, y continuar con la política de casa de un piso, los problemas que se originarían en las ciudades serían gravísimos y sin solución”. La CORMU contempló para 1971 la construcción de 5.000 departamentos en Santiago y 1.600 en el resto del país, de 50 a 60 metros cuadrados como promedio y equipamientos de guarderías infantiles, escuelas y policlínicas, locales comerciales, restaurantes, lavanderías y sedes sociales. Las obras contempladas para que fueran iniciadas en mayo de 1971 eran las siguientes: Mapocho-Bulnes, 420 viviendas; Polígono Recoleta-El Salto, 200 unidades; Plaza Chacabuco, 220 viviendas; Parque Intercomunal Barrancas, 1.100 departamentos; 4 Alamos de Maipú, 720; Parque Carmelitas, también en Maipú, 320, más otros 320 en la Comuna de Renca¹²⁷. La oposición a la UP, por su parte, en un clima crecientemente ideologizado, manifestó su temor de que la construcción de bloques de departamentos, con este tipo de servicios, representaran los primeros pasos de la temida “estatización”¹²⁸.

¹²⁷ “Edificación en altura es la solución para los 80 mil pobladores sin casa”, *Las Noticias de Última Hora*, 21 de febrero de 1971. p. 5

¹²⁸ *Ibidem*.

6. Operación invierno y balnearios populares para el verano

La “Operación Invierno” se puso en marcha por primera vez a fines de marzo de 1971 y se repetiría al año siguiente. Coordinada desde el Ministerio Secretaría General de Gobierno buscaba prevenir las inundaciones habituales en los inviernos y atender las necesidades más urgentes a las poblaciones, especialmente a los “campamentos” resultados de tomas u operaciones sitio. La Oficina Relacionadora del MINVU, calculaba, a principios de ese año, que se debía atender 140 campamentos, que padecían de necesidades “de mediaguas, letrinas, agua, luz, ripiado de calles, escuelas, policlínicas e inundaciones”¹²⁹. A fines de abril, el plan de la Operación Invierno estaba relativamente articulado, y el 17 de mayo, que se instauró como “Día Nacional del Trabajo Voluntario”, las poblaciones de Santiago y provincias recibieron los primeros apoyos y a los más diversos visitantes:

“Mientras el Presidente Allende trabajaba en el Campamento Che Guevara junto al propio padre del Che, sus ministros se distribuían en poblaciones, campamentos y fábricas. Allende tomó un martillo y clavos; Pascual Barraza manejó una motoniveladora; Jaime Suárez, pala en mano en Yarur; Zorrilla en el Campamento Lenin, mientras a su lado, estudiantes universitarios y obreros entrecruzaban sus manos y unían esfuerzos haciendo equipo de trabajo con el Presidente y sus ministros.

Se levantaron miles de mediaguas, se emparejaron calles, se pintaron escuelas, iglesias, centros de madres, locales vecinales y se levantaron jardines infantiles a lo largo y ancho del país. (...)

Los periodistas de izquierda junto a los trabajadores de los medios de comunicación social, se dirigieron a la Población Nueva Habana, donde durante todo el día, levantaron mediaguas, limpiaron y pintaron mientras locutores, camarógrafos de cine y TV, controles y actores dejaban sus labores habituales para sumarse a los trabajos voluntarios”¹³⁰.

Así como habría operación invierno, también se puso en marcha un programa de “Balnearios Populares”, en el verano de 1971. Se trató de una acción combinada de la que participaron diversos organismos públicos y organizaciones sociales populares. El Ministerio de la Vivienda inició ese año la construcción de 17 balnearios populares, 14 de los cuales se terminaron de construir ese mismo año¹³¹. El 9 de enero se anunció la inauguración de una amplia piscina en el Cerro San Cristóbal, construida por la Corporación de Mejoramiento Urbano, con capacidad para recibir a unas mil personas. Allende fue invitado a la inauguración mientras que la CUT anunciaba que se habilitarían balnearios en Tongoy, Los Vilos, Papudo, Duahado, Rocas de Santo Domingo, Rapel y otros. En la iniciativa se hallaban

¹²⁹ “¡Va firme la Operación Invierno!”, *Las Noticias de Última Hora*, 31 de marzo de 1971, p. 7.

¹³⁰ “Chile entero trabajó voluntariamente”, *Las Noticias de Última Hora*, 17 de mayo de 1971. p. 2.

¹³¹ MINVU, Política habitacional, op. cit., p. 74.

comprometidos el MINVU, Desarrollo Social, el Ministerio de Tierras y Colonización y la Central Única de Trabajadores¹³².

El 2 de febrero de 1971, el diario *El Siglo* informaba de la inauguración de dos balnearios en la provincia de Colchagua, en Tinguiririca y Puente Negro. En el primer caso, asistieron a su apertura unas cinco mil personas, de diversas organizaciones sociales populares, también el Intendente, el diputado de la zona y representantes de otros organismos públicos. El balneario se hizo aprovechando el curso natural del río del mismo nombre, construyéndose “una represa de gran extensión, cuyas aguas se renuevan de forma natural. Al costado se dejó espacio suficiente para los lugares de camping, con ramada y hornillas para el público. La entrada es gratis. Una concesión para expendio de bebidas y artículos alimenticios que se entregó al Instituto Chileno Cubano, contribuirá al financiamiento y mantención de este lugar”¹³³. Paralelamente, en Santiago se ponía en marcha otra iniciativa de naturaleza semejante: el Tren de Turismo Popular. A través de esta acción se buscaba permitir el veraneo “de familias santiaguinas pertenecientes a Centros de Madres, Juntas de Vecinos, Clubes Deportivos y demás organizaciones comunitarias”. Se involucraron en la iniciativa el Ministerio de Educación, que facilitaba los lugares de estadía en Valparaíso y Viña del Mar; Ferrocarriles del Estado facilitaba los pasajes; y la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, a cargo de la colación diaria para los invitados¹³⁴.

7. Que el Estado construya: la “ejecución directa”

La creación de un Departamento de “Ejecución Directa” representaba una modificación muy importante en la política del Ministerio de la Vivienda, ya que inevitablemente enfrentaría al gobierno de la Unidad Popular con las empresas asociadas en la Cámara Chilena de la Construcción. El discurso de la izquierda, desde fines de los años cincuenta, había insistido en que la vivienda no era “una mercancía” sino un derecho social, aludiendo tanto a los costos inalcanzables de una vivienda para el pueblo como a los beneficios que obtenían las empresas de la construcción a través de los subsidios y las licitaciones estatales. La crítica a la Cámara Chilena de la Construcción fue además radicalizada por el MIR, que vio en esta asociación y en la actividad de la construcción una clara vía de acumulación capitalista y de enriquecimiento de un activo sector de la burguesía chilena¹³⁵.

Por su parte, desde el punto de vista del gobierno, no solo existía preocupación por las recurrentes negociaciones con las empresas de la construcción a efectos de fijar costos de

¹³² “Pobladores contarán desde mañana con Balneario Popular”. *El Siglo*, 9 de enero de 1971, p. 12.

¹³³ “Balneario al estilo Unidad Popular”. *El Siglo*, 2 de febrero de 1971, p. 5.

¹³⁴ “Tren de Turismo Popular parte hoy a Valparaíso”. *El Siglo*, 2 de febrero de 1971, p. 3.

¹³⁵ Más antecedentes del discurso mirista, ver en, Garcés, *Tomando su sitio*, op. cit., p. 415.

construcción, sino que inquietaban también las altas tasas de ganancia de las empresas, la tendencia de éstas a la concentración de la actividad¹³⁶, y la importancia estratégica del ramo con relación al empleo¹³⁷. En consecuencia, avanzar en la “ejecución directa” del Estado en el campo de la construcción resolvía varios problemas desde un punto de vista socialista. En este contexto, en junio de 1971, el ministro de la Vivienda procedió a inaugurar las obras en altura de la Población Jaime Eyzaguirre, ubicada en el sector oriente de la capital, y en este caso la CORVI construiría directamente, y con nuevos equipos mecánicos, lo que, según indicó el ministro, acortaría los plazos de construcción. El vicepresidente de la CORVI, Hiram Quiroga, por su parte, agregó en este acto inaugural que “la participación directa del Estado en la construcción de viviendas obedecía al propósito de evitar la especulación y acelerar la reducción del déficit habitacional que afecta al país”. Indicó asimismo que “en muchas oportunidades las empresas constructoras particulares habían subido hasta cuatro veces en un año los precios, sobrepasando el alza del costo de la vida, lo que constituía un lucro desmedido”. Destacó finalmente, la participación de los obreros en los programas habitacionales del Gobierno y que éste no estaba preguntando al pueblo “cuánto podía pagar, sino que había resuelto entregarles viviendas definitivas y sitios urbanizados”. Aliro Contreras, presidente del Comité de Obras, comprometió el esfuerzo y la colaboración de los trabajadores con los planes del gobierno, destacando que se trataba de un hecho histórico la constitución de una empresa estatal de construcciones¹³⁸.

Paralelamente a las obras de la población Jaime Eyzaguirre, se inició también la construcción en altura en las poblaciones La Bandera y Lo Hermida y de acuerdo con información proporcionada a la prensa por el dirigente Aliro Gutiérrez, los planes de ejecución directa se pondrían en marcha también en la Población Nueva Habana, Unidad Popular y La Pincoya. Para este dirigente, los trabajadores tenían responsabilidad y capacidad “para producir más rápido y más barato que la empresa privada” y así lo estaban demostrando las obras de Jaime Eyzaguirre, en que laboraban más de 700 trabajadores. En la obra se proporcionaban “zapatos, cascos de seguridad y ropa adecuada (...) Además se cuenta con una policlínica de primeros auxilios, que funciona en la misma faena, para atender rápidamente cualquier accidente que se produzca en el trabajo. También se tiene duchas de agua caliente y fría para el aseo de los obreros, después de la jornada, un buen casino para el almuerzo y la colación del día”¹³⁹.

¹³⁶ MINVU, *Política habitacional*, op. cit., pp. 29 y ss.

¹³⁷ De acuerdo con los estudios del MINVU, desde 1966, “el sector de la construcción ha dispuesto alrededor de un 7% de la fuerza de trabajo total (la cifra fluctúa entre 6,8% y 7,3%) y ha generado algo más del 6% de la ocupación total. Sin embargo, en desocupación, las cifras sectoriales crecen notablemente. Más de un quinto de las personas desocupadas se ubican en el sector de la construcción, presentándose aquí la más alta tasa de desocupación sectorial de la economía, la cual triplica el promedio nacional”. MINVU, *Política habitacional*, op. cit., p.37.

¹³⁸ “CORVI comienza a construir con equipos mecánicos”. *Las Noticias de Última Hora*, jueves 17 de junio de 1971, p. 7.

¹³⁹ “Obreros de la construcción organizados a la ofensiva”, *Las Noticias de Última Hora*, 9 de noviembre de 1971, p. 9.

8. La autonomía del movimiento de pobladores

Evidentemente el triunfo de Salvador Allende en 1970 y la izquierda en el gobierno representó un cambio fundamental en las relaciones entre el pueblo y el Estado, entre los movimientos sociales populares y el gobierno. Chile se abrió a un experimento inédito, un bloque de partidos de tradición marxista, es decir anticapitalista y de base popular efectiva –esta no era otra experiencia populista más de la América Latina– había conquistado el gobierno y comenzaba a poner en práctica reformas estructurales –no todas las que probablemente una revolución habría prescrito– pero reformas sustantivas al fin (reforma agraria, nacionalización del cobre y la constitución de un área de propiedad social), amén de nuevas políticas sociales dirigidas especialmente a atender viejas e históricas demandas de justicia social de las mayorías populares.

En este experimento social y político inédito había por cierto un camino previo recorrido que puede remontarse al siglo XIX –desde la Sociedad de la Igualdad– pero que sobre todo había marcado el desarrollo social y político del siglo XX, desde las hazañas obreras y populares de principios de siglo que encontraron en Recabarren a uno de los líderes más lúcidos. Uno de los rasgos más importantes de la “construcción política” de principios de siglo fue el desarrollo del movimiento a partir de la propia organización popular, abierta, democrática, de asamblea, con sesgos que combinaban orientaciones anarquistas, socialistas y demócratas. En este contexto, primero fue la organización social y el partido fue un momento segundo¹⁴⁰. Surgió, en cierto modo, como una necesidad del movimiento, y hasta los años veinte al menos, se soñó con la posibilidad de un solo y gran partido obrero y popular. El movimiento popular todavía hasta la emblemática “Asamblea Constituyente de Obreros e Intelectuales” de 1925 reconoció un papel relevante a la organización social, de modo semejante al de los partidos¹⁴¹. Después, en los años 30 el panorama se modificó: los partidos populares comenzaron a jugar roles cada vez más activos y dirigentes en las luchas populares, subordinando en algunos sentidos el papel de las organizaciones o estableciendo una suerte de “división del trabajo”: los sindicatos en la lucha económica, los partidos en la lucha política, y las elecciones como momento de sumar fuerzas en pos de la unidad. En los años sesenta, este rasgo en cierto sentido se acentuó aunque contradictoriamente, por ejemplo partidos políticos nuevos como el MAPU o el MIR, si bien estimularon el protagonismo de las organizaciones y criticaron a la izquierda tradicional (PC-PS) por sus formas de relación burocrática o autoritaria con las bases, recrearon la noción de “partido de vanguardia”,

¹⁴⁰ Garcés, Mario. *Crisis Social y motines populares en el 1900*. Ediciones Documentas, Santiago, 1991 (Segunda edición, LOM, Santiago, 2003), *passim*.

¹⁴¹ Garcés, Mario y Milos, Pedro. *FOCH, CTCH y CUT. Las centrales unitarias en la historia del sindicalismo chileno*. Ediciones ECO, Santiago, 1988. Ver en especial a propósito de estos debates, el capítulo I, relativo a la FOCH.

sin el cual la revolución no sería posible. En suma, el partido político de izquierda en los años sesenta se presentaba como un actor fundamental en la lucha por el cambio social y la revolución, valorando discursivamente el papel de “la clase obrera” y el pueblo, pero con zonas grises en el campo de las prácticas concretas de dirección, toma de decisiones, etc.

En el caso de los pobladores, la historia de estas relaciones con los partidos políticos, determinadas instituciones –la Iglesia Católica en particular– y el Estado es compleja, y en consecuencia, la cuestión de la autonomía del movimiento hay que verla en diversos momentos y coyunturas como una *autonomía relativa*, dependiendo del grado de desarrollo, protagonismo y politización de las propias organizaciones de base. La relación con los partidos políticos tuvo desarrollos disímiles durante la Unidad Popular, pero de modo general se puede afirmar que éstos jugaron roles dirigentes y muchos de los líderes poblacionales, junto con ser reconocidos y valorados dirigentes de su población fueron al mismo tiempo militantes de algún partido de izquierda, y más de una vez vivieron crisis de lealtades entre el partido y su organización. Con relación al Estado, la situación también tuvo desarrollos particulares. Por ejemplo, durante el gobierno de Frei muchas organizaciones mantuvieron una relación cercana, sino dependiente del gobierno, pero cuando el movimiento se fortaleció a fines de los sesenta, estas mismas organizaciones tomaron distancia del gobierno. Con el gobierno de Allende y la Unidad Popular, la autonomía del movimiento fue más de una vez interrogada; sin embargo, alcanzó sus propios desarrollos. Dos experiencias diversas, elegidas arbitrariamente por cierto, que comentamos brevemente a continuación, dan una idea de estos desarrollos.

9. Congreso de pobladores de San Miguel

Los días 15, 16 y 17 de octubre de 1971, con la participación de un centenar de delegados, se realizó un congreso de pobladores de San Miguel Oriente, que tomó importantes resoluciones en los más diversos temas que configuraban una verdadera “política urbana” propuesta por los propios pobladores. Participaron, según nos informa el diario *El Siglo*, 15 unidades comunales, 80 Centros de Madres, 8 agrupaciones femeninas, una Asociación Deportiva (con 18 clubes), 4 escuelas básicas y la Comunidad Cristiana de San Lucas. Para Enrique Astudillo, secretario general del evento, lo más importante era “la posibilidad de obtener una comisión coordinadora de las 15 unidades vecinales –junto con la colaboración evidente de todos los otros organismos– y resolver una plataforma que resuma las inquietudes y problemas que tiene el sector”¹⁴².

El congreso se organizó en comisiones de trabajo, que luego informaron al plenario, el cual resolvió en torno a problemas de remodelación y urbanismo, salud, movilización, educación, vigilancia policial, deporte, recreación y cultura. Se decidió apoyar al gobierno en su

¹⁴² “Exitoso Congreso Poblacional de San Miguel Poniente”. *El Siglo*, 18 de octubre de 1971, p. 6.

política de ampliar las plazas del Cuerpo de Carabineros, y respaldar la construcción en altura, así como no permitir la instalación de nuevos negocios de expendio de bebidas alcohólicas¹⁴³. Entre las resoluciones más específicas del Congreso destacan la necesidad de realizar encuestas en cada unidad poblacional para conocer la exacta dimensión de los problemas que afectaban a los pobladores; solicitar recursos al MINVU para la construcción de la “casa del poblador” como sede social; constituir de inmediato Juntas de Abastecimiento y Precios (JAP) para enfrentar los problemas de abastecimiento; eliminación de pozos areneros y botaderos ilegales de basura; declarar como sector residencial la zona ocupada por las unidades vecinales participantes del Congreso; ampliar el número de regidores para mejorar la representación en el municipio; solicitar la instalación de oficinas de correos, teléfonos, retenes, semáforos y desafectación de todos los terrenos en situación irregular; construcción de nuevas policlínicas, formación de líderes de salud y cursos no solo de aspectos esenciales de salud, sino un programa de Salud Mental para enfrentar problemas de alcoholismo, prostitución y drogas. En fin, una serie de medidas relativas al transporte público en el sector y a la ampliación de los servicios educacionales, desde jardines infantiles hasta la creación de sedes universitarias¹⁴⁴.

10. La población Nueva Habana

Así como los pobladores de San Miguel se reunían para fijar prioridades y demandas en el desarrollo de la ciudad, poniendo énfasis en diversas tareas sociales, los pobladores de Nueva Habana expandían al máximo sus capacidades organizativas para dar lugar a una población nueva, con claras orientaciones socialistas. El Campamento Nueva Habana surgió de un acuerdo entre dirigentes de cuatro tomas realizadas durante 1970 en distintos lugares de Santiago, y el MINVU para ser trasladados al ex fundo Los Castaños de La Florida, al oriente de la Rotonda Quilín. Los dirigentes de estas tomas –Ranquil, Elmo Catalán, Magaly Honorato y 26 de Julio– se habían agrupado en la Jefatura Provincial Revolucionaria (JPR), cuyo principal dirigente, Víctor Toro, era un destacado y reconocido líder de la Población “26 de Enero”¹⁴⁵ y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. El traslado se produjo a partir del 1 de noviembre de 1970, fecha que hasta hoy celebran como aniversario de su fundación los habitantes de la Población Nuevo Amanecer, que fue el nombre que los militares asignaron a la población luego del golpe de Estado de 1973.

¹⁴³ “Pobladores se organizan para solucionar problemas”. *Las Noticias de Última Hora*, 9 de noviembre de 1971, p. 20.

¹⁴⁴ Ibidem.

¹⁴⁵ La Población 26 de Enero surgió de una toma en el sector de La Bandera, el 26 de enero de 1970 y alcanzó gran notoriedad durante ese año por las movilizaciones promovidas por sus dirigentes (por ej., la toma de las Torres de San Borja, en agosto de 1970), y porque a partir de allí se estructuró la primera articulación de pobladores vinculados al MIR. Más detalles en Garcés, *Tomando sitio*, op. cit., p. 410 y ss.

Los dirigentes del MIR y de los campamentos llegaron el primer fin de semana de octubre y tomaron los primeros acuerdos: debían trasladarse en breve plazo, en no más de un mes organizar la población y en tres meses proceder a una elección democrática, por sufragio universal, de una jefatura de Campamento. En esos días, como reconocía un dirigente, la población aún no tenía nombre, era “el campamento del MIR”¹⁴⁶. De todos modos, las primeras decisiones y acciones se relacionaban con el traslado, el trazado de calles, el abastecimiento de agua y luz eléctrica, la instalación de letrinas, etc. Pero tal vez una de las decisiones políticas más importantes fue la de no ocupar los mismos terrenos en que se construirían las casas definitivas. Así lo explica Mario, del Comité de Construcción: “Nosotros analizamos los problemas que significa en muchas poblaciones construir en terrenos ya ocupados. Eso encarece notablemente la construcción, es por eso que nosotros tomamos la determinación de ocupar solamente una parte de los terrenos. Pero, también y fundamentalmente, fue una medida política: consideramos que era necesario continuar en el proceso de concientización –aún cuando no en las mismas condiciones, tan estrechas, de cuando estábamos en los antiguos campamentos- y al mismo tiempo de mantener cohesionados a todos los compañeros pobladores”. Alejandro Villalobos (“El Mickey”), que a la postre sería elegido Jefe del Campamento, agrega: “los mismos pobladores levantaron sus casas; cada poblador levantaba su casa. Se organizaron milicias para ayudarles a las compañeras o compañeros que no tenían cómo levantarlas. Se organizaron milicias especiales de trabajo, es así entonces como nace el Campamento Nueva Habana”¹⁴⁷.

El Campamento acogió a 1.500 familias que sumaban unas 9 mil personas, las que se distribuyeron en 64 manzanas. Manuel Paiva llegó a principios de diciembre y le fue asignado un sitio en la Manzana D. Recuerda que eran 24 manzanas y en cada una de ellas, uno de los sitios era reservado para sede social y los 63 restantes para las familias. “Semanalmente se hacía una reunión, que era la oficial, la reunión de la manzana. Ahí se entregaba toda la información que provenía del Directorio. El Directorio era como una especie de instancia legislativa al interior del Campamento. Estaba compuesto por los 24 jefes de manzana, más la Jefatura integrada por siete miembros. Entonces, estos siete miembros eran elegidos democráticamente tras una elección donde participaba todo el Campamento. De este Directorio surgían los ‘Frentes de Trabajo’, que se llamaban. Entonces los delegados de manzana pasaban a ser también jefes de Frentes, en algunos casos como el Frente de Vigilancia, el Frente de Salud, el Frente de Cultura, etc.”¹⁴⁸.

Semanalmente, cada grupo por manzana planificaba el trabajo, que por lo general, indica Manuel, era la entrega de una canasta familiar, los turnos de aseo de las letrinas, que

¹⁴⁶ Departamento de Estudios y Planificación Urbano Regional (DEPUR). Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile. “Organización y lucha poblacional en el proceso de cambios. La experiencia del Campamento Nueva Habana”. Mimeo, Santiago, agosto de 1972.

¹⁴⁷ Ibidem.

¹⁴⁸ Entrevista a Manuel Paiva, realizada por Mario Garcés, Santiago, 4 de octubre de 1998.

había que desinfectar y que “debían lucir impecables”, así como el aseo de las viviendas. Esta última medida era más resistida por algunos vecinos, pero se practicaba. La verdad es que, de acuerdo con el testimonio de Manuel, se puede reconocer más de un campo complejo, máxime cuando se buscaba modificar hábitos críticos entre los propios pobladores. Por ejemplo, los temas relativos a la violencia o el alcoholismo, respecto de los cuales el Directorio era el que tomaba decisiones: “En el Directorio. Ahí es donde se hacía la legislación, se estudiaba la higiene del campamento, las conductas de las personas... Porque esto es tanto en la higiene como en el comportamiento de las familias; en el asunto de la violencia intrafamiliar también, que al principio era complicado porque llegaban los maridos curados en la noche, entonces llegaban golpeando. Entonces hubo que ser drásticos al respecto, o sea, no permitir bebidas alcohólicas ni al interior ni alrededor del campamento. Eso significaba que los boliches que había alrededor fueron eliminados por la organización del campamento. Y la eliminación era así: ir, entrar al lugar donde estaba el boliche, sacar todo lo que había, todas las garrafas de vino y quebrarlas en la calle; así de violento era para crear normas”¹⁴⁹.

El Campamento Nueva Habana se hizo conocido de muchas maneras, porque los propios pobladores exigieron la construcción por Ejecución Directa, debatieron con la CORVI los tipos de viviendas de acuerdo al número de integrantes de cada familia, hubo ensayos de “justicia popular”¹⁵⁰, y en una ocasión en que el Municipio no generaba servicios para la recolección de la basura, decidieron trasladar en camiones, carretones y carretillas de mano, toda la basura hasta las puertas del Municipio. Como aun así el problema no se solucionaba, el paso siguiente fue trasladar toda la basura hasta el frontis de la casa del alcalde, una mañana mientras la autoridad asistía a la misa dominical. Con posterioridad a estas iniciativas se normalizó el servicio de recolección de basuras, dos veces por semana.

La organización de “milicias” fue otra de las iniciativas que adquirieron algún desarrollo en el Campamento Nueva Habana, y que producía polémicas en la izquierda y el rechazo de la derecha. El discurso del MIR había establecido relaciones entre las luchas populares y el “inevitable enfrentamiento armado” en el camino que llevaría a la conquista del poder y el socialismo¹⁵¹, razón por la cual el pueblo debía hacer un aprendizaje de tipo militar. Sin embargo, la tendencia en la organización de milicias tuvo más desarrollo en el enfrentamiento de

¹⁴⁹ Ibidem.

¹⁵⁰ Decimos “ensayos”, en el sentido que en los campamentos dirigidos por el MIR las “milicias populares”, de acuerdo con las normas de disciplina fijadas por las directivas de cada campamento, buscaron ejercer algunas sanciones, especialmente en el caso de pequeños actos de delincuencia al interior de los campamentos. Todas estas iniciativas, sin embargo se vieron confrontadas en el caso de Nueva Habana, con el rechazo a la idea de justicia como represión, lo que llevó a sucesivos cambios y debates en las organizaciones encargadas de la disciplina. Un interesante artículo a este respecto es el de Jorge Fiori, “Campamento Nueva La Habana: Estudio de una experiencia de autoadministración de justicia”. En: *Revista Latinoamericana de Estudios Urbanos Regionales, EURE*, N° 7. abril de 1973, CIDU, Universidad Católica de Chile, pp. 83-101.

¹⁵¹ Ver en este mismo libro, el artículo de Julio Pinto.

los problemas sociales de los campamentos en que alcanzó protagonismo el MIR, que en lo estrictamente militar. Víctor Toro, en un discurso pronunciado en un Congreso de Pobladores, en julio de 1970, había señalado: “Los pobladores conocen perfectamente la existencia de muchos problemas dentro de los campamentos y poblaciones. El alcoholismo, causante de crímenes de todo tipo, los juegos de azar con sus vicios, en algunos casos la prostitución, etc., constituyen una constante amenaza para la clase obrera. En los grupos humanos marginados de la educación y la cultura, explotados por los capitalistas, sumidos en la miseria y la desesperación del hambre, es fácil entender la existencia de estos problemas. Sin embargo, no por ello podemos justificarlos y permanecer pasivos a ellos. Estamos luchando por formar una sociedad socialista para hombres también socialistas, es decir para hombres nuevos en el sentido total de la palabra (...) Dentro de los campamentos y poblaciones, las asambleas generales de pobladores deberán aprobar códigos de justicia, fijando normas con sus correspondientes sanciones, que las milicias populares se encargarán de hacer cumplir fielmente”¹⁵².

En Nueva Habana, según recuerda Manuel, la tendencia fue más o menos ésta. El Frente de Vigilancia operaba como una policía local, “pasó a crear sus normas, esto significó empadronar todas las familias con sus respectivos miembros y además, el historial de cada una de las familias integrantes. Y, en eso algunos integrantes no eran muy limpios, así que esos que tenían sus ‘yayitas’ había un control más riguroso... que eran los que hacían pequeños actos delictuales al interior del Campamento. Entonces, era como una policía especializada (...) si se robaban un par de pantalones, cuando estaban por ahí colgados en el patio, se buscaba dentro del empadronamiento, cuáles eran los sospechosos, y si se encontraban ahí, se le traía al tipo, se le tenía una noche detenido y se le entregaban algunas tareas, o sea, buscando la reeducación del individuo. Se le daban tareas como leer el *Manifiesto Comunista* o el *Qué hacer*, textos de ese tipo y se le daban por ejemplo, unos quince días para leerlos y diariamente tenía que ir a dar exámenes sobre la lectura. En algunos casos, tenía que hacer también trabajos para la comunidad”¹⁵³.

Cada “Frente” fue adquiriendo entonces su propio desarrollo. El de salud se vio beneficiado por el regalo de una ambulancia que les hizo la embajada cubana en Santiago y “las milicianas de salud” buscaron asegurar la atención con médicos voluntarios al tiempo que establecían convenios con el Hospital Sótero del Río. El “Frente del Trabajo” incorporó a varias decenas de cesantes a las obras de construcción de las casas que se hicieron bajo la forma de “ejecución directa” por parte de la CORVI. El “Frente Cultural” aseguraba actividades de teatro y danza y la presencia de artistas que visitaban la población. Finalmente, se inició, afirma Manuel, la construcción de un casino y una lavandería popular porque “se suponía que estábamos creando una sociedad distinta y en esta sociedad distinta las dueñas de casa tenían que integrarse al proceso de producción y por lo tanto tenían que dejar el

¹⁵² Citado en: Garcés, *Tomando su sitio*, op. cit., p. 414.

¹⁵³ Entrevista ya citada.

hogar (...) Tenían que tener un lugar donde un par de veces a la semana llevaran su ropa para lavar, y al mismo tiempo, retiraran, una vez al día, el almuerzo para el día siguiente”¹⁵⁴.

11. La crisis del abastecimiento y las JAP

Tanto los pobladores como el gobierno se vieron implicados, durante la Unidad Popular, en la gesta, la hazaña de construir “poblaciones”, los nuevos barrios del pueblo chileno, especialmente de Santiago, para que las familias populares dejaran atrás el pasado de poblamiento precario. Si éste ya era un desafío de gran envergadura, que la UP se echó sobre sus hombros, a poco andar, durante el segundo semestre de 1971, las organizaciones de pobladores y el gobierno debieron enfrentar otro gran desafío, el de la distribución de alimentos, y más concretamente el desabastecimiento que comenzaba a hacerse sentir en la sociedad chilena. La situación de “crisis social” creada por el desabastecimiento, que se agudizó hacia fines del gobierno de Allende, ha sido tal vez la que contribuyó hasta hoy a crear la imagen más negativa de la Unidad Popular. La escasez y las “colas” configuran –tanto como las expropiaciones– algo así como la mirada de sentido común negativa de la Unidad Popular. En el discurso de los voceros de la dictadura militar, reiterado una y otra vez en 17 años, el desabastecimiento era la expresión misma del caos y del desgobierno.

Con los años, dos miradas han ido decantando. Una de ellas admite errores en la política económica del gobierno, en el sentido de una inadecuación en las políticas de corto plazo –el estímulo a la demanda y la apuesta por ocupar la capacidad ociosa instalada en la economía– y las políticas de largo plazo –que suponían reinversión de las empresas y aumento de la producción por parte del nuevo sector estatal de la economía, tanto agrario como industrial–. Evidentemente, esa secuencia no se dio, por más que el gobierno pusiera en primer lugar la “batalla de la producción”, ya que por una parte, el aumento de la demanda satisfacía viejas aspiraciones de consumo básico de los sectores populares –en la memoria popular se recuerda a la UP como un tiempo de dinero abundante– y por otra, no solo “la burguesía no monopólica” no invirtió, sino que grandes, medianos y pequeños empresarios se sumaron para hacer del desabastecimiento un negocio especulativo y una forma de lucha política en contra del gobierno de la Unidad Popular. De ese modo, la segunda mirada sobre el desabastecimiento se relaciona justamente con la estrategia de boicot que impulsó la oposición a la Unidad Popular y que la llevó a jugar un doble papel: por una parte, la derecha a través del acaparamiento y el boicot a la producción generaba el desabastecimiento, y por otra, en términos políticos culpaba al gobierno sobre los efectos de la escasez para la mayoría de la población. Negocio redondo, que rinde frutos hasta hoy, como parte de la demonización de la Unidad Popular.

154

Ibidem.

El gobierno de la UP, y en particular el ministro de Economía Pedro Vuskovic debieron enfrentar aceleradamente y con mucha energía los problemas de desabastecimiento, luego que ya en diciembre de 1971 la derecha organizó la famosa “marcha de las cacerolas vacías”, con mujeres del barrio alto de Santiago y grupos de choque del movimiento Patria y Libertad. La estrategia de Vuskovic fue entonces reforzar, en alianza con los grupos organizados de base, los mecanismos de control del Estado, tanto en lo relativo a los precios como a la distribución. Para ello existían las disposiciones legales de la Dirección de Industria y Comercio (DIRINCO), que contaba con inspectores autorizados para establecer los controles. Sin embargo, la tarea los superaba, razón por la cual se promovieron y crearon las Juntas de Abastecimiento y de Precios (JAP).

El domingo 5 de marzo de 1972, en el Teatro Municipal de Santiago, se inauguró la Primera Asamblea Provincial de las JAP, con la participación de unas 300 organizaciones comunitarias de la capital¹⁵⁵. Dos meses más tarde el Ministerio de Economía informaba de 500 organizaciones de este tipo en la capital, incluyendo las asociaciones comunales¹⁵⁶. Las JAP, por cierto, provocaron el rechazo de la oposición, razón por la cual el gobierno les dio forma legal a través de la Resolución N° 112 de la DIRINCO, publicada en el *Diario Oficial*, el 4 de abril de 1972. Las JAP fueron entonces definidas como “aquella agrupación de trabajadores que lucha por mejorar las condiciones de vida del pueblo dentro de cada unidad vecinal, de preferencia esforzándose por lograr un adecuado abastecimiento, velando por un eficaz control de precios, luchando contra la especulación y los monopolios, promoviendo el mejor aprovechamiento de los medios de subsistencia del pueblo y cooperando en general con todas las funciones de la Dirección de Industria y Comercio”¹⁵⁷.

En realidad, las JAP se multiplicaron a lo largo y ancho del país, buscaron establecer relaciones, no siempre fáciles con los comerciantes de los barrios; alcanzaron un importante desarrollo en poblaciones y en asociaciones comunales y provinciales; hicieron una significativa contribución para conjurar el “paro de octubre” de 1972; se especializaron en la distribución, asociados con organismos estatales como DINAC; y, en muchos lugares, lograron controlar el reparto de una “canasta básica” que aseguraba un mínimo de subsistencias para las poblaciones. Más todavía, durante el “paro de octubre” sirvieron de puente entre el mundo de la producción y la fábrica y el mundo de los barrios, haciéndose parte de las emergentes dinámicas de “poder popular”. Cuando se observa a la distancia, se hace muy visible que el desarrollo de las JAP constituyó una experiencia inédita para el movimiento de pobladores, que les permitió a muchos dirigentes de base realizar importantes aprendizajes en el campo del control de precios y la circulación de los productos de primera necesidad,

¹⁵⁵ “Primera Asamblea Provincial de la JAP se inauguró hoy”, *Las Noticias de Última Hora*, 5 de marzo de 1972, p. 5; “Las JAP se ponen pantalón largo: El pueblo participa”, *Las Noticias de Última Hora*, 6 de marzo de 1972, p. 15.

¹⁵⁶ “Pobladores y comerciantes unidos en torno a las JAP”, *Las Noticias de Última Hora*, 3 de mayo de 1972, p. 8.

¹⁵⁷ “Las JAP: Absolutamente legales”, *Las Noticias de Última Hora*, 5 de mayo de 1972, p. 7.

y resistir desde estos campos las políticas de desestabilización económica y social que impulsaba la oposición. Sin embargo, hay que admitir también que no podían estas nuevas organizaciones de base enfrentar con éxito los problemas mayores de la producción y la distribución, que prepararon la caída de la Unidad Popular.

Los años de la Unidad Popular constituyen en la historia social y política de Chile, sin lugar a dudas, los más críticos desde el punto de vista del conflicto social, pero al mismo tiempo los más activos, creativos y democráticos desde el punto de vista de la experiencia y el protagonismo histórico alcanzado por los sectores populares, tanto de la ciudad como del campo. En este contexto, los pobladores fueron un actor social de primera línea al lado del gobierno de Allende –y con grados también de autonomía– para enfrentar un desafío histórico: la *construcción de las poblaciones* y el nuevo desarrollo que alcanzaba la vida comunitaria de los barrios. Se trataba, por cierto de una tarea titánica, que se preparó con las “tomas” y la presión al gobierno de la “revolución en libertad” y que la Unidad Popular tuvo que tomar en la fase de “construir”, multiplicando los recursos para consagrar un “derecho social” que era al mismo tiempo una vieja aspiración del pueblo: vivir en un lugar que se pudiera llamar “casa”.

Los pobladores se sumaron, por cierto, a todas esas grandes movilizaciones que inundaron las calles de las principales ciudades chilenas durante la Unidad Popular y fueron un actor también relevante cuando la oposición promovió el desabastecimiento y desencadenó el “paro insurreccional de octubre”, haciéndose cargo ahora de la distribución de los alimentos en los barrios. El golpe los sorprendió, en muchos casos, con sus poblaciones a medio construir, y sin las orientaciones ni los recursos para defender al gobierno y hacer frente a la represión que pronto se cernió sobre las poblaciones, a través de “allanamientos masivos” con tratos crueles y humillantes así como la detención, tortura, muerte o desaparición de muchos de sus más emblemáticos dirigentes.

Sin embargo, a pesar de la represión, fue en las poblaciones, bajo el alero de la Iglesia y en medio de animadas comunidades cristianas de base, que se comenzó a elaborar el dolor, los miedos y la impotencia para fortalecer la solidaridad hasta hacer surgir, a fines de los setenta, cientos de nuevas organizaciones de base –grupos culturales, comités de derechos humanos, bolsas de cesantes, talleres de mujeres, grupos juveniles– que junto a los militantes de la izquierda que sobrevivieron en la clandestinidad y los trabajadores sociales y educadores populares, prepararon y dieron vida a las “protestas nacionales” que en la coyuntura 1983-1986 prepararon el fin de la dictadura.

This page intentionally left blank

CONSTRUYENDO “PODER POPULAR”: EL MOVIMIENTO SINDICAL, LA CUT Y LAS LUCHAS OBRERAS EN EL PERIODO DE LA UNIDAD POPULAR¹⁵⁸

Por Franck Gaudichaud¹⁵⁹

“Será necesario interrogar a los hombres que, compartiendo muchas de nuestras inquietudes actuales, nos precedieron. A esos viejos y anónimos dirigentes obreros. A esas organizaciones que echaron las bases y luego dieron fuerza y consistencia al movimiento sindical. A esas acciones que, desde el pueblo, fueron cambiando el rumbo de la historia. A esas ideas que efectivamente fueron unificando y dándole presencia ideológica al movimiento. Será necesario también interrogar las derrotas, los momentos de división y desarticulación, los estilos burocráticos, la utilización electoral y todas aquellas limitaciones que el movimiento popular ha mostrado”.

MILOS, P. y GARCÉS, M. (Taller de Nueva Historia), *Cuadernos de historia popular: serie Historia del movimiento obrero*, N° 1, CETRAL/CEAL, Santiago, 1983.

Desde la creación de las mancomunales y de las sociedades de resistencia al final de siglo XIX hasta el surgimiento de la Central Única de Trabajadores (CUT), en febrero de 1953, el movimiento obrero se constituyó en un protagonista central del desarrollo histórico chileno, especialmente a través del poderoso movimiento sindical que le permitió reforzar su unidad de clase¹⁶⁰. La historia del movimiento obrero chileno y, en particular la de las luchas sindicales, está también marcada de modo permanente por una oscilación entre períodos de autonomía, de independencia y de subordinación respecto a las instituciones del Estado, partidos políticos que participan en ellas, así como por diversos momentos de alianzas o de oposición parciales con fracciones de las clases dominantes¹⁶¹. Los dos grandes

¹⁵⁸ Este análisis se basa en un primer estudio: F. Gaudichaud, “La Centrale unique des travailleurs, le mouvement ouvrier et les cordons industriels durant l’Unité Populaire (1970-1973)”, *Dissidences (Blern)*, Nancy, N°14-15, janvier 2004, pp. 57-74. Las primeras conclusiones de esta investigación fueron presentadas en español en el seminario internacional “A treinta años de la Unidad Popular. Balance de un proceso”, organizado por la Universidad Diego Portales del 1 al 3 de septiembre 2003 en Santiago y también fue publicado por la revista electrónica www.rebelion.org.

¹⁵⁹ Doctorante en Ciencias Políticas de la Universidad París VIII – Autor de un libro de testimonios sobre el poder popular urbano (F. Gaudichaud, *Poder Popular y Cordones Industriales. Testimonios sobre el poder popular urbano – 1970-1973*, LOM/DIBAM, Santiago, 2004) – Coordinador de la sección Chile de la revista electrónica *Rebelión.org*.
¹⁶⁰ J. Barria, *Trayectoria y estructura del movimiento sindical chileno*, INSORA, Santiago, 1963 y P. Frías F., *Construcción del sindicalismo chileno como actor nacional*, Santiago, CUT-PET, Vol. I, 1993.

¹⁶¹ Pedro Milos y Mario Garcés en sus cuadernos de historia popular utilizan como criterio de periodización las relaciones entre el movimiento obrero y el Estado chileno. Desde este planteamiento, distinguen
(continúa en pág. siguiente)

partidos “obreros” han sido históricamente el Partido Comunista (PC) y el Partido Socialista (PS). Estos han intentado siempre canalizar y dirigir la fuerza de transformación social que representa para ellos el proletariado (sobre todo la clase obrera minera y de la gran industria), tratando de orientar el movimiento obrero en función de sus objetivos y luchas políticas¹⁶². Como consecuencia de esto, el movimiento obrero chileno ha atravesado diversas etapas de desarrollo en el curso de las cuales conquistó y perdió su independencia de clase, permitió la democratización parcial de las instituciones y sufrió su abolición, dirigió las luchas sociales a favor de la redistribución de la riqueza y padeció de lleno la derrota política de los proyectos de transformación en los que participó. La comprensión de esta relación dialéctica entre el movimiento obrero, el Estado chileno y los partidos políticos, así como las consecuencias de esta articulación en términos de alianzas sociales y contradicciones de clases, es esencial para analizar las acciones colectivas que se desarrollaron en el período de la Unidad Popular, y para esbozar una comprensión serena del movimiento obrero chileno.

A partir de 1953, año de la creación de la Central Única de Trabajadores, el sindicalismo y el movimiento obrero se encuentran en una postura de oposición y de independencia relativa en un contexto nacional de aumento de los conflictos sociales, de inflación económica y de fuertes oposiciones ideológicas, con la Guerra Fría y la lucha internacional contra el comunismo como telón de fondo. El nacimiento de la CUT aglutina diversas tendencias. Por un lado, la unidad sindical recuperada bajo la dirección de Clotario Blest, cristiano revolucionario sin filiación política directa, que conduce la CUT a posiciones radicales (particularmente a través del uso intensivo del arma de la huelga general)¹⁶³. La fundación de la CUT es precisamente el resultado de la estrategia unitaria de Blest (que se inició en el seno de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF) y de una postura de clase combativa. Blest, yendo claramente a contracorriente de las prácticas políticas de diversos partidos con influencia en el movimiento obrero, no duda en desarrollar la CUT, a pesar de que ésta sigue siendo ilegal en el marco de una legislación que es extremadamente conservadora (lo que durante el período no parece preocupar mucho a la izquierda). No es casual que esta nueva unidad sea precisamente el resultado del descalabro de los partidos obreros tradicionales frente al populismo de Ibáñez y a su desorientación política: a finales de los cincuenta, los partidos de izquierda como la Democracia Cristiana (DC)¹⁶⁴

varios periodos históricos fundamentales: periodo de formación (1820 – 1880), periodo de exclusión (1880 – 1920), periodo de integración (1920 – 1970), periodo de participación (1970 – 1973) y, finalmente, periodo de nueva exclusión que corresponde a la dictadura del general Pinochet (1973 – 1990). Véase: P. Milos y M. Garcés, *Cuadernos de historia popular: serie Historia del movimiento obrero*, Santiago, CETRAL/CEAL, N° 1, 1983.

¹⁶² Angell, A. *Politics and the Chilean labor movement*, Oxford, Oxford University Press, 1972. En este artículo utilizamos la versión española.

¹⁶³ Silva, M. *Los partidos, los sindicatos y Clotario Blest*, Santiago, Ed. Mosquito, 2000.

¹⁶⁴ A finales de los años cincuenta, los demócrata-cristianos representan la principal oposición a los comunistas en el movimiento sindical, sustituyendo en este sentido a los sindicatos anarco-sindicalistas los
(continúa en pág. siguiente)

se muestran temporalmente incapaces de retomar la dirección del movimiento sindical, como lo hicieron con la central anterior (CTCH).

Esta nueva dirección que la CUT ofrece al movimiento obrero le permite desempeñar un papel de catalizador sociopolítico, de agitación obrera al margen de los canales de regulación del Estado y con criterios anticapitalistas. La declaración de principios de la CUT expone al respecto: “*Que el régimen capitalista actual, instaurado sobre la propiedad privada de la tierra, los instrumentos y los medios de producción así como la explotación del hombre por el hombre, que divide la sociedad en clases antagonistas: explotados y explotadores, debe ser sustituido por un régimen económico-social que liquide la propiedad privada hasta el advenimiento de una sociedad sin clases*”. Añade que su método de lucha es el “*de la lucha de clases y la independencia frente al gobierno y al sectarismo de partidos*”¹⁶⁵. De hecho desde los primeros meses de su existencia, la CUT debe reafirmar sus deseos de autonomía ante el nombramiento de uno de sus dirigentes como ministro del trabajo del gobierno del ex dictador Carlos Ibáñez (1952-58). De conformidad con los estatutos, se requiere al dirigente sindical para que renuncie a su puesto en la dirección del movimiento sindical¹⁶⁶.

A principios de los años sesenta, el movimiento obrero chileno se encuentra, a pesar de todo, en una correlación de fuerzas bastante más desfavorable que la que había conocido en los últimos quince años¹⁶⁷. En este contexto, el período de independencia “excepcional” de la CUT llega a su fin. En 1961, el PC retoma el control de la central para dirigirla, con los socialistas y la DC, hasta el golpe de estado de 1973. La Central se convierte de nuevo en la correa de transmisión de los partidos y pierde de este modo una parte de su autonomía¹⁶⁸. El fracaso en las presidenciales de 1964 del candidato de la izquierda (Salvador Allende), al que apoyaba la CUT, y la elección de Eduardo Frei (demócrata-cristiano), acentúa sin embargo el carácter de oposición entre el movimiento sindical y el gobierno¹⁶⁹. Desde 1966, se asiste a una reestructuración del movimiento social, que afecta particularmente al proletariado urbano industrial y a los sectores obreros de la minería, los asalariados de la función pública (educación) y los empleados de la banca, el movimiento estudiantil, el movimiento

cuales se retiraron en 1957 (Véase A. Angell, “Los demócrata-cristianos y el reto al marxismo”, op. cit., pp. 177 a 214).

¹⁶⁵ Véase en particular J. Barria, *Historia de la CUT*, Santiago, Ed. Pla, 1971 y la tesis doctoral de Augusto Samaniego Mesias, *Les stratégies syndicales de la “Central Unique des travailleurs” et l’action socio-politique des salariés (1953-1973)*, París, Universidad París VIII, Tesis doctoral en historia, 1998 (especialmente las páginas 118 a 141).

¹⁶⁶ Se trata del sindicalista Leandro Moreno (J. Barria, *Historia de la CUT*, op. cit., p. 62).

¹⁶⁷ Barrera, M. “Perspectiva histórica de la huelga obrera en Chile”, *CEREN*, Santiago, N° 9, Septiembre 1971 y C. Pizarro, *La huelga en Chile. 1890-1970*, Santiago, Ed. SUR, Col. Estudios Históricos, 1986.

¹⁶⁸ Respecto a esta recuperación del control y la evicción de Clotario Blest, el relato de Humberto Valenzuela (dirigente trotskista de la CUT) es especialmente interesante: *Historia del Movimiento obrero chileno*, Santiago, POR, 1972.

¹⁶⁹ Según la cronología de Alberto Cuevas, se trata de un período “de oposición” de la CUT (“La experiencia de la CUT (1953-1973): una visión crítica”, *Chile-América*, Bruselas, N° 84-85, enero-marzo 1983, pp. 27 -34).

de pobladores y un movimiento de trabajadores agrícolas en “expansión”. Se puede hablar de una ruptura en las formas que adquiere la lucha de clases a partir de 1964. Esta discontinuidad abre un periodo pujante hasta la caída de Salvador Allende en 1973¹⁷⁰.

En efecto, durante el gobierno de Frei Montalva se registra un aumento de aproximadamente un 125% en el número de afiliados en los diferentes sindicatos. En esta coyuntura se acelera la descomposición del proyecto desarrollista-populista demócrata-cristiano¹⁷¹. Ya en esta época, aparece la progresiva ruptura entre la dirección del movimiento obrero y la práctica de las movilizaciones colectivas en la base. Para abordar este fenómeno durante el gobierno de la Unidad Popular (1970-73), es necesario detenerse un momento en la organización, la estructura y la representatividad del movimiento sindical chileno.

1. Fuerza y límites de la estructuración sindical chilena

Por lo general, el sindicalismo chileno se estructura desde los años treinta en un gran número de pequeños sindicatos, que por lo tanto tienen pocos medios de presión en el marco estrictamente legal. Según las cifras disponibles del año 1968, el tamaño medio de los sindicatos es de 155 miembros, mientras que la gran mayoría de ellos (63%) posee menos de 100 afiliados. En los años siguientes, esta tendencia a la atomización se acentúa con el aumento de la sindicalización en las empresas medianas del sector urbano¹⁷². La mayoría de las normas que regulan las relaciones industriales, al llegar Allende al gobierno, proceden del código laboral de 1931. Esta legislación establece una arquitectura formal que intenta controlar de manera autoritaria el sindicalismo, atomizarlo e impedir la radicalización política¹⁷³. En 1970 existen tres tipos de sindicatos: sindicatos obreros (*sindicato industrial*), sindicatos de empleados (*sindicato profesional*) y sindicatos agrícolas. En cuanto a la formación de sindicatos en la función pública, se supone que está prohibida pero en la práctica éstos han sido reconocidos progresivamente por los distintos gobiernos. Para formar un sindicato, los obreros deben trabajar en una empresa con más de 25 personas, de ahí la exclusión legal del movimiento sindical de la mayoría de los asalariados.

Las diferentes encuestas realizadas en los años sesenta-setenta, demuestran que los dirigentes de los sindicatos industriales consideran su organización ante todo como un

¹⁷⁰ Mac-Clure, O. “La acción reivindicativa sindical en Chile”, *Proposiciones*, Santiago, N° 17, 1989, pp. 110-123. C. Pizarro, *La huelga en Chile. 1890-1970*, op. cit. Y para una visión sintética: J. Magasich, “Les mouvements sociaux au Chili: 1967-1973”, *Chili, un pays laboratoire*, Coloquio organizado en Bruselas, Maison de l’Amérique Latine, 1998, pp. 37-46.

¹⁷¹ Wallon, A. “Perspectives actuelles de mouvement ouvrier au Chili”, *Les Temps Modernes*, París, junio 73, pp. 1977-2005.

¹⁷² Angell, A. op. cit., p. 65 y Barrera, M. *La participación social y los sindicatos industriales en Chile*, Ginebra, International Institute For Labour Studies, Documento de trabajo interno, 1970.

¹⁷³ Angell, A. “El sistema de relaciones industriales”, op. cit., pp. 67-91 y J. Barriá, *Las relaciones colectivas de trabajo en Chile*, INSORA, Santiago, 1967. Sobre la legislación en vigor entre 1970 y 1973, véase la síntesis realizada por la Organización Internacional del Trabajo en OIT, *La situación sindical en Chile: Informe de la Comisión de Investigación y de Conciliación en Materia de Libertad Sindical*, Ginebra, 1975.

instrumento de lucha económica (aumento de salario, indemnización) y no de movilización política¹⁷⁴. Sin embargo, esto no debe llevar a la conclusión de que la apatía caracteriza a la clase obrera chilena, la que, por el contrario, por sus orientaciones políticas e históricas, sus prácticas electorales y formas de lucha, privilegia el radicalismo político y el sindicalismo “clasista” o incluso las actitudes antipatronales¹⁷⁵.

En total, el índice de afiliación del sector privado se sitúa en el 19% que, si se suman los asalariados públicos, alcanza el 25% de la fuerza de trabajo nacional¹⁷⁶. En 1970, la CUT reúne oficialmente a algo más de 700.000 trabajadores. Entre éstos, el 47% pertenece a la clase obrera minera e industrial, el 40% son empleados y el 23% campesinos. La gran diferencia entre el sector privado (2.566.000 asalariados a principios de 1972) y el sector público (294.976 asalariados en la misma fecha) se mantiene durante todo este período. Sin embargo, la dinámica sociopolítica puesta en marcha por la Unidad Popular provoca una fuerte aceleración de la afiliación en el sector privado¹⁷⁷. El sector de los obreros industriales sigue siendo el más organizado desde el punto de vista sindical, tanto en relación a los empleados como a los obreros agrícolas, que no obtuvieron el derecho a organizarse hasta 1967¹⁷⁸.

El movimiento sindical chileno deja en cambio de lado, debido en gran parte a la legislación y a la estructuración de la economía chilena, a un amplio sector de obreros de la pequeña y mediana empresa pero también de la industria textil, de la construcción y de la alimentación: es decir, más del 50% del proletariado industrial, la mayoría del cual trabaja en establecimientos con menos de diez obreros¹⁷⁹. Por lo general, se puede concluir, como lo hace Alan Angell, que una de las características más notables del panorama sindical en Chile no es tanto su falta de sindicalización sino más bien las serias limitaciones que le han sido impuestas¹⁸⁰. Así el movimiento sindical y la CUT poseen un importante déficit de representatividad

¹⁷⁴ Barrera, M.; Landsberger, H. y Toro, A. *El pensamiento del dirigente sindical chileno: un informe preliminar*, Santiago, INSORA, U. de Chile, 1963.

¹⁷⁵ Esta actitud “clasista” ha quedado claramente demostrada en J. Petras, M. Zeitlin, *El radicalismo de la clase trabajadora chilena*, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1969. La investigación de Barrera, Landsberger y Toro muestra por su parte que los sindicatos dan prioridad al pliego de peticiones y a la huelga (30%) frente a la cooperación con el empresario (7%) con la finalidad de alcanzar sus objetivos (op. cit., p. 57).
¹⁷⁶ C. Blest, “Organización de la clase trabajadora”, *Punto Final*, Santiago, 22 de abril de 1969, pp. 22-25.

¹⁷⁷ Con un aumento del 6% en abril de 1972 respecto al año anterior, según la oficina estadística del Ministerio del Trabajo (citada por A. Wallon, “Perspectives actuelles du mouvement ouvrier”, op. cit., p. 1990). Ver C. Blest, “La clase trabajadora organizada en Chile”, *Punto Final*, Santiago, N° 165, 29 de agosto de 1972, pp. 22-24.

¹⁷⁸ En su conjunto, el sector secundario de la economía reagrupa al 53% de los sindicatos y el 63% de los afiliados (cifras basadas en el año 1968). Y todo ello con una tasa de sindicalización superior en los sectores industriales económicamente concentrados. Ver F. Zapata, *Estructura y representatividad del sindicalismo en Chile*, ILPES, Santiago, 1968 y también M. Barrera, *La participación social y los sindicatos industriales en Chile*, op. cit., p. 19.

¹⁷⁹ G. Smirnow, *Le développement de la lutte pour le pouvoir pendant l'Unité Populaire*, París, Universidad de París VIII, Tesis de doctorado, 1977, p. 32.

¹⁸⁰ A. Angell, op. cit., p.66.

en sectores enteros de la clase obrera, y especialmente dentro de la clase obrera manufacturera¹⁸¹. Por lo demás, se estima que a finales de 1970, la CUT solo reagrupa a algo más de la mitad de los sindicatos en el ámbito nacional (aunque es cierto que no se la reconoce legalmente hasta el año siguiente)¹⁸².

Esta importante debilidad objetiva se combina con el carácter “supraestructural” de la CUT. Es decir, las decisiones se toman esencialmente en el nivel superior, mientras que los organismos de los niveles locales están a menudo despojados de poder, incluso de vida real. De hecho, se trata más bien de una autoridad moral que ejerce, por su prestigio, una gran presión sobre los sindicatos de base, a los que no controla directamente. A pesar de que representa la unidad de los trabajadores organizados y de que es un elemento de cohesión de la clase obrera, la Central posee indiscutiblemente una organización profundamente vertical. Esto supone en particular una ausencia de capacidad para organizar de manera territorial y transversal a los trabajadores. Esta incapacidad es esencial para comprender la posición de la Central respecto a los Cordones Industriales que surgen durante el gobierno de Allende¹⁸³. A estos factores hay que añadir la posición histórica subalterna de la CUT frente a los partidos políticos ya mencionada.

El período de la Unidad Popular es así un momento de acentuada “subordinación” de la CUT a los proyectos gubernamentales de la izquierda¹⁸⁴. Sin embargo, hay que recordar que el proceso de Unidad Popular corresponde también al período histórico de mayor participación social y política de la población chilena, y de mayores conquistas sociales para la clase obrera. Durante estos mil días, el movimiento obrero alcanza niveles de movilización, organización e intervención políticas, hasta entonces desconocidos. La elección de Salvador Allende, primer representante de la Unidad Popular, corresponde a lo que se ha denominado a veces la “vía chilena al socialismo”. Esta táctica, con frecuencia considerada como una originalidad del proceso chileno, está muy influida por la teoría de la vía pacífica y de la revolución por etapas, difundida en este entonces por el Partido Comunista de la Unión Soviética¹⁸⁵. Reafirma la importancia del respeto a las instituciones vigentes, a la Constitución y la posibilidad de un principio de transición al socialismo sin destrucción del estado burgués, ni enfrentamiento con las fuerzas armadas¹⁸⁶. En términos de pactos sociales, el programa

¹⁸¹ Wallon, A. “Perspectives actuelles du mouvement ouvrier”, op. cit., pp. 1989-90.

¹⁸² Castillo, F.; Echeverría, E.; y Echeverría, R.; “Las masas, el Estado y el problema del poder en Chile”, *Cuadernos de la Realidad Nacional*, Santiago, N° 16, abril de 1973, p. 7.

¹⁸³ Silva, A. y Santa Lucía, P. “Les Cordons industriels: une expression de pouvoir populaire au Chili”, *Les Temps Modernes*, París, enero 75, p. 710. Como señala Ernest Mandel, es esta ausencia de estructuras sindicales interprofesionales en la base que facilitaron la creación de los Cordones Industriales como órganos potenciales de doble poder (“Classes sociales et crise politique en Amérique Latine”, *Critique de l'économie politique*, N° 16-17, pp. 6-41, París, abril - septiembre 1974).

¹⁸⁴ Utilizamos de nuevo la cronología de Alberto Cuevas (op. cit., p. 32).

¹⁸⁵ Daire, Alonso “La política del Partido Comunista desde la post-guerra a la Unidad-Popular” en A. Varas (comp.), *El Partido comunista de Chile: estudio multidisciplinario*, Santiago, CESOC-FLACSO, 1988, pp. 141-239.

¹⁸⁶ Garcés, Mario. “Vía insurreccional y vía política: dos tácticas”, *Revista de la Universidad Técnica del Estado*, N° 13/14, Santiago, marzo-junio 1973, pp. 7-39 y S. Allende, *Nuestro Camino al Socialismo. La Vía Chilena*, Buenos Aires, Editorial Papiro, Argentina, 1974.

económico define la necesaria alianza con la “burguesía nacional progresista” y las capas medias, en el seno de un gobierno popular. Sin entrar en el debate teórico sobre la viabilidad de esta línea táctica, hay que destacar que este planteamiento tiene consecuencias directas sobre las relaciones entre el movimiento obrero y el gobierno: la gran mayoría de la clase obrera que trabajaba en las 35.000 pequeñas y medianas empresas del país debía someterse a esta alianza de clases y así, teóricamente, no cuestionar la propiedad privada de los medios de producción de una parte importante del sector privado de la economía. En caso contrario, el proyecto de la UP se vería comprometido. En efecto, este sector denominado de la “*economía burguesa no monopolista*” constituía, según la mayoría de la izquierda chilena, un aliado en la lucha contra el imperialismo y los grandes monopolios¹⁸⁷.

2. Participación, estrategia sindical y división política del movimiento obrero

El vertiginoso ascenso de las luchas obreras no podía menos que hacer temblar a la Central sindical. La época de la UP es, sin lugar a dudas, la de la aparición de una nueva coyuntura que ejerce presión sobre el aparato de la CUT y sus dirigentes. De este modo, en el movimiento sindical se entrecruzan tendencias políticas contradictorias que chocan entre sí de forma violenta, y una lucha de aparatos que destruye definitivamente la orientación unitaria, que basándose en la independencia de clase, la CUT había podido establecer de manera transitoria. Frente a este hecho, en 1970, Clotario Blest afirmaba: “*Los dirigentes sindicales se han transformado en simples instrumentos o ejecutores de las órdenes que emanan de los conciliábulos políticos*”¹⁸⁸. El análisis de los documentos elaborados por la CUT muestra claramente que esta constatación es un rasgo esencial del movimiento sindical de esta época.

La novena conferencia nacional de la CUT (febrero 1971) es sobre todo la ocasión para reiterar el apoyo de la CUT a la política de nacionalización de los recursos más importantes del país llevada a cabo por la UP, y el llamamiento a la movilización de la clase obrera en torno a la “batalla de la producción”, que es en ese momento la consigna lanzada principalmente por el PC y Allende¹⁸⁹. Asimismo se discute ampliamente la cuestión de la participación de los trabajadores en la dirección de las empresas del Área de Propiedad Social (APS-que representa a las empresas nacionalizadas). Las conclusiones de esta conferencia dan pie a la redacción de las “normas básicas de participación”¹⁹⁰, redactadas conjuntamente por la CUT y el gobierno. De esta manera, la CUT inicia un proceso de integración orgánica en el aparato del

¹⁸⁷ A este respecto, el siguiente artículo del economista comunista José Cademartori es bastante explícito: “Perspectivas y tareas revolucionarias en el frente económico”, *Revista de Universidad Técnica de Estado*, Santiago, Número especial, Febrero de 1973.

¹⁸⁸ Blest, C. “Limitaciones de los sindicatos chilenos”, *Punto Final*, Santiago, N° 100, 17 de marzo de 1970, p. 22.

¹⁸⁹ CUT, “la clase trabajadora y la lucha por los cambios: balance y perspectivas”, *Resoluciones de la novena conferencia nacional*, Santiago, CUT ed., Documento de estudio y trabajo para las organizaciones sindicales y sus dirigentes del país, junio de 1971.

¹⁹⁰ CUT, *Normas básicas de participación de los trabajadores en la dirección de las empresas de las áreas social y mixta*, Santiago, Publicación del departamento de trabajadores de Chile, noviembre 1971.

Estado, principalmente en el ámbito de las instituciones de planificación nacional, tales como la CORFO, y se constituye ante todo como uno de los agentes promotores del sistema de participación de los trabajadores, tal y como lo concibe la UP, alejándose así de su papel tradicional de reivindicación económica y salarial¹⁹¹. No se trata aquí de extenderse sobre el sistema de participación implantado por el gobierno, que supone una especie de cogestión Estado-asalariados¹⁹².

Sin embargo, es necesario señalar que aunque esta participación abarca a solo una reducida minoría de asalariados, sin duda proporcionó elementos de movilización obrera y transformación social. Los testimonios permiten acercarse a la *geografía social* de cada empresa y entender el paisaje concreto de esta dinámica social. Permite también confirmar la efectividad de la participación de los trabajadores en varias fábricas, a pesar de las debilidades del proyecto inicial. Así, Juan Alarcón, obrero y sindicalista comunista de la industria textil SUMAR-Algodón, donde el sindicato obrero agrupa más de 1500 socios, subraya los logros de esta época: “Creamos un Comité de Administración de la empresa, integrado por trabajadores, por técnicos y profesionales, que permitía recoger todo lo que podía ayudar para el mejor funcionamiento de la empresa. Los trabajadores que participaban allí se elegían porque conocían el sistema de producción, conocían también los vacíos que había en la producción... o sea era una gran responsabilidad que nosotros siempre tratamos que se diera al máximo. Se formaron también los Comités de Vigilancia para cuidar la empresa; Comité de Producción; Delegados de secciones...”¹⁹³. En estos relatos, se descubre una verdadera epopeya obrera, una batalla participativa para tomar en sus manos el control de la producción. Estamos aquí también en el corazón de una verdadera “fiesta popular”, la de militantes obreros que ponen en práctica sus sueños de revolución social. Como lo escribe el sociólogo Tomás Moulian, “La fiesta es una de las dimensiones inherentes a los procesos revolucionarios, por cuanto en ellos se produce una subversión de los órdenes y jerarquías de poder y por lo tanto se rompen tabúes simbólicos, diferenciaciones sociales establecidas y cristalizadas: cambia el tono y las modalidades del trato de obreros a gerentes, de criadas a señoras, de campesinos a patrones o administradores. [...] Pero además de esa transgresión microsocial existía la otra, las ocupaciones de fábricas, fundos, sitios, que el gobierno aceptaba y legitimaba, incluso legalizaba. Eso representaba pasar el límite, amenazar el fundamento mismo del orden, porque constituía la burla al principio sacrosanto de la propiedad burguesa”¹⁹⁴. Pues estas luchas cotidianas son, a la vez, producto y consecuencia –a un nivel local– del enfrentamiento de clase global. También ahí las relaciones de fuerzas políticas dentro de la empresa o el grado de

¹⁹¹ Comité ejecutivo CUT-Gobierno de participación, *La participación de los trabajadores*, Santiago, Quimantú, 1971.

¹⁹² Raptis, M. *Quel socialisme au Chili ? Etatisme ou autogestion. Dossier de la participation des travailleurs au processus révolutionnaire du pays*, París, Ed. Anthropos, 1973 y J. G. Espinoza, A. S. Zimbalist, *Economic Democracy: workers' participation in Chilean industry 1970-1973*, London, Studies in social discontinuity, Academic press inc., 1978.

¹⁹³ Entrevista con Juan Alarcón en F. Gaudichaud, op. cit., pp. 89-112.

¹⁹⁴ Moulian, Tomás. *Conversación interrumpida con Allende*, Santiago, ARCIS-LOM, Col. Sin Norte, 1999, p. 86.

radicalización obrera llevan a que en varios sectores se produzca un choque real entre dirigentes tradicionales y la voluntad de las bases de ir más lejos en el proceso de democratización económica y política¹⁹⁵. Según los investigadores Juan Espinoza y Andrew Zimbalist, el grado más fuerte de participación estaría impulsado por los militantes más “radicales”, los del llamado “polo rupturista”, es decir la izquierda del PS, el MAPU, la Izquierda Cristiana y los militantes del MIR¹⁹⁶. Son estos mismos militantes quienes después defienden la creación de los Cordones Industriales y la idea del “poder popular”.

Durante el Sexto Congreso Nacional de la CUT, cuyo lema era “*Los trabajadores construyen el nuevo Chile*”, Luis Figueroa (dirigente del PC y de la Central) reafirma que la responsabilidad que incumbe a los trabajadores es defender el “*gobierno popular*”¹⁹⁷. Con estas afirmaciones, el líder comunista intenta reafirmar la hegemonía absoluta de las organizaciones políticas vinculadas a la UP sobre el movimiento obrero. Ante este apoyo a la UP, podemos preguntarnos qué lugar se le deja a uno de los elementos esenciales del movimiento sindical, la Democracia Cristiana. Este hecho, además, es denunciado con vehemencia por los militantes demócrata-cristianos que terminan por retirarse, de forma estrepitosa, del congreso.

Indudablemente, para aplicar su programa, la Unidad Popular necesita el apoyo de la clase obrera organizada, con la que se ha comprometido a reconocer sus reivindicaciones históricas, en particular en términos de poder adquisitivo y de participación en el control de la economía. Este reconocimiento pasa por una política de redistribución de la riqueza, sin precedentes en la historia chilena¹⁹⁸, que supuso, por parte del gobierno, una tentativa permanente de control y canalización de las movilizaciones obreras en la línea de la “vía institucional” al socialismo defendida por la UP. Así cualquier acción obrera que el gobierno consideraba fuera del programa de la UP (como, por ejemplo, las ocupaciones de fábricas) y que corría el riesgo de debilitar la alianza de clases con la burguesía media se denuncian como “irresponsables”.

Los militantes del Frente de Trabajadores Revolucionarios (FTR - nueva tendencia sindical bajo influencia esencialmente del MIR¹⁹⁹), por su parte, critican con fuerza este “control burocrático” de la UP sobre el movimiento obrero²⁰⁰. En su declaración de principios, el FTR

¹⁹⁵ Castillo, F. y Larraín, J. “Poder obrero-campesino y transición al socialismo en Chile”, *Cuadernos de la Realidad Nacional*, N° 10, Santiago, diciembre de 1971, pp. 161-198.

¹⁹⁶ Espinoza, J. G. y Zimbalist, A. S. *Economic Democracy: workers' participation in Chilean industry 1970-1973*, London, Studies in social discontinuity, Academic Press Inc., 1978.

¹⁹⁷ CUT (Luis Figueroa), “Los trabajadores construyen el Chile nuevo”: *Memoria del consejo directivo al 6° congreso nacional de la CUT*, 8-12 de diciembre de 1971, Santiago.

¹⁹⁸ Oficina de informaciones y radiodifusión de la Presidencia de la República, *El pensamiento económico del gobierno de Allende*, Santiago, 1971. Sin embargo, este aumento del poder adquisitivo es rápidamente cuestionado debido a una fuerte inflación que obliga al gobierno a un constante reajuste de los salarios, fuente de conflictos con los trabajadores y de un elevado déficit público.

¹⁹⁹ *Movimiento de Izquierda Revolucionaria*, dirigido durante el periodo de la UP por Miguel Enríquez.

²⁰⁰ Los comienzos del trabajo sindical del MIR se sitúan en Santiago, esencialmente en pequeñas y medianas empresas del Cordón Industrial de Macul y Santa Rosa. De forma paralela, esta organización alcanza
(continúa en pág. siguiente)

reafirma el papel dirigente de la clase obrera y la necesidad de las luchas reivindicativas de los trabajadores que deben pasar por la CUT, pero precisa que ésta deberá liberarse del reformismo dominante en el seno de la UP²⁰¹. Plantea también la posibilidad de la lucha armada con fines revolucionarios. En este sentido, el FTR reitera los análisis del MIR sobre la necesidad de sustituir el Estado burgués y su oposición a la revolución por etapas. Se sabe que a medida que se desarrolla la lucha de clases, esta posición encuentra numerosas afinidades con el ala izquierda de la UP (izquierda del PS, MAPU, IC²⁰²). La fracción hegemónica de la CUT, y en particular el PC, no toleraba tales excesos a su izquierda, y la dirección de este partido calificó en varias ocasiones la acción del MIR como de “provocaciones contrarrevolucionarias”²⁰³.

Las elecciones generales para la dirección de la CUT, terminan de demostrar que la unidad de la CUT ya solo es una fachada. Estas tienen lugar en mayo de 1972 con un sistema de representación proporcional en donde los militantes de base pueden votar. El propio sistema electoral refleja fielmente el deseo de los militantes de democratizar la Central. Si se analiza con cierta perspectiva estos resultados se pueden deducir algunas grandes líneas maestras²⁰⁴. En primer lugar, muchos afiliados no se sienten investidos del “deber” de ir a votar, lo que demuestra que la CUT no representa para ellos un compromiso de lucha esencial en este contexto²⁰⁵. Después están los resultados por tendencias políticas²⁰⁶: la UP mantiene una mayoría absoluta con más del 57% de los votos. La DC es claramente la tercera fuerza política en el seno de la CUT (obteniendo el cargo de primer vicepresidente). Es más, la DC gana incluso las elecciones en Santiago, en donde logra el cargo de secretario general provincial. Esto significa que la equiparación hecha por Luis Figueroa entre “trabajadores” y apoyo incondicional a la UP no se evidencia en absoluto. En cuanto al PS, confirma su implantación en los sectores obreros y, si se le añaden los votos a favor del MAPU, se puede

cierto nivel de penetración en la zona carbonífera de la provincia de Concepción, a pesar de la fuerte presencia comunista. Hacia mediados del año 1971, el MIR funda el Frente de Trabajadores Revolucionarios (FTR) que se plantea como un punto de convergencia de los obreros más radicales dentro del movimiento sindical. Véase: FTR/MIR, *Concepción, organización, funcionamiento y desarrollo orgánico del Frente*, junio de 1972 (en V. Farias (comp.), *La izquierda chilena (1969-1973): documentos para el estudio de su línea estratégica*, Berlín, CEP, 6 tomos, 2000-2001, pp. 2611-2621).

²⁰¹ FTR, *Declaración de principios*, Santiago, diciembre 1971 (Archivos BDIC - Paris - F delta 652).

²⁰² El MAPU y la *Izquierda Cristiana* son dos movimientos nacidos en parte de la DC.

²⁰³ Como recuerda Hugo Cancino, los actos de violencia en las manifestaciones por parte de militantes comunistas contra los militantes “de extrema izquierda”, especialmente trotskistas, maoístas y anarquistas, forman parte de la tradición histórica de la CUT (H. Cancino, op. cit., nota 22, p. 237).

²⁰⁴ Consúltese: Anka, “La CUT: primeras conclusiones”, *Chile Hoy*, Santiago, N° 1, 22 de junio de 1972 y F. Zapata, “Las relaciones entre el movimiento obrero y el gobierno de S. Allende”, *Cuadernos del Centro de Estudios Sociológicos*, México, CES, N° 4, 1974.

²⁰⁵ El potencial de electores era aproximadamente de un millón de votantes y votaron realmente algo más de 560.000 trabajadores.

²⁰⁶ Según las cifras (controvertidas) proporcionadas por el acta de escrutinio de la CUT: *Resultados oficiales sobre la elección de la CUT*, julio de 1972 (en V. Farias (comp.), *La Izquierda chilena*, op. cit., pp. 2862-2868).

señalar que las tendencias a la izquierda de la UP se encuentran en fase de ascenso entre la opinión de los trabajadores organizados. Sin embargo, lo que puede ser interpretado como un descenso de la influencia de la línea moderada de la UP en el seno de la Central, no se traduce en un voto significativo a favor de posiciones más “radicales” de llamamiento al control obrero. El FTR, que obtiene un solo representante, no alcanza el 2%, manteniéndose así como una fuerza muy minoritaria. En otros términos, a pesar de una cierta implantación local y de la importancia de su polémica imagen en el ámbito nacional, el FTR no consigue desplazar la influencia de los grandes partidos sobre la clase obrera²⁰⁷. En este sentido, es exagerado hablar de una escalada de la implantación obrera del MIR²⁰⁸, aunque no hay que olvidar que la CUT no representa a muchas pequeñas empresas en donde el MIR tiene un eco relativamente más elevado. Finalmente, el intento de organizar un frente sindical verticalmente sometido a la dirección del MIR encuentra aquí sus limitaciones. Esta táctica, auto-criticada en documentos internos del MIR²⁰⁹, impide a estos sectores extraparlamentarios acceder a la dirección de una institución tan importante como la CUT. Esto no impide de ningún modo que se exprese de manera creciente una fuerte agitación en la base y que la CUT y los partidos obreros tengan muchas dificultades para encauzar en el estrecho marco legalista del programa de la UP.

3. *Conquistas sociales, institucionalización sindical y desbordamiento en la base*

La progresiva integración del aparato sindical en el gobierno de la UP encontró su punto álgido con la entrada de dos de sus principales dirigentes en el seno del gabinete cívico-militar en enero de 1973: Luis Figueroa (PC) y Rolando Calderón (PS) se sitúan así al lado de los representantes de las Fuerzas Armadas en un gobierno que debe desempeñar un papel de árbitro y de moderador de la lucha de clases, y más aun tras la gran explosión social que constituyó la huelga patronal de octubre de 1972. Al asumir sus responsabilidades gubernamentales, los dos dirigentes sindicales conservan también su cargo en la CUT. Después asumen cargos parlamentarios como consecuencia de las elecciones de marzo de 1973. Esta posición tiende a suprimir todo grado de autonomía y de autodeterminación de los asalariados y, por otro lado, a acentuar las divisiones políticas dentro de la clase obrera. Finalmente, esto tiene como resultado un mayor alejamiento de la CUT de las luchas sociales de base: “*Es evidente que el movimiento sindical adquiere en este período más poder institucional, pero su poder social se debilita profundamente*”²¹⁰.

Sin duda, esta subordinación es comprensible si se tiene en cuenta que la mayoría de la clase obrera organizada estaba a favor de los cambios impulsados por la Unidad Popular. Sin

²⁰⁷ Es menos todavía, el caso de las tendencias maoístas o anarquistas que cosechan respectivamente 3.330 y 673 votos.

²⁰⁸ Wallon, Alain. describe, por ejemplo, un crecimiento obrero “*vertiginoso*” del MIR, (en “*Perspectives actuelles du mouvement ouvrier*”, op. cit., p. 1991).

²⁰⁹ Consultar MIR, *Documentos Internos 1972* – Archivos CEDETIM – Paris.

²¹⁰ Cuevas, A. “La experiencia de la CUT (1953-1973): una visión crítica”, op. cit., p. 33.

embargo, el análisis de las cifras de los conflictos laborales y de las huelgas que se desarrollan desde finales de los años 60 hasta 1972, demuestran claramente que los trabajadores se sirven de las nuevas condiciones socio-políticas y de la llegada del gobierno de Allende para acentuar su movilización y sus reivindicaciones²¹¹. En primer lugar, la escalada en el número de huelgas, que pasan de 977 en 1969 a 3.526 en 1972. El hecho de que se produjera un aumento del 48% entre 1970 y 1971, y del 30% en los años siguientes, prueba que la presencia en el gobierno de la UP no fue considerada por los asalariados como una incitación a la moderación reivindicativa sino que, por el contrario, radicalizan sus posiciones. Este aumento se debió esencialmente a la aparición en la lucha de fracciones obreras pertenecientes a los sectores menos desarrollados, tanto desde el punto de vista económico como en términos de organización política: en ese momento de agitación social, la pequeña y mediana empresa, tradicionalmente sometida al patronazgo más conservador y con poca influencia política, se lanza a la movilización y a la huelga²¹². Otro hecho esencial es que durante los primeros años de la UP se recurre con mayor frecuencia a la huelga ilegal, lo que muestra el completo desfase de la legislación laboral vigente, pero también que el proyecto de respeto a las instituciones previsto por el gobierno entra, desde el principio, en conflicto con la actividad real del movimiento social: las huelgas reconocidas como legales representan solo el 3,4% del total durante el primer semestre de 1972.

Asimismo, en los tres sectores claves de la economía (minería, industria, construcción), se produce un aumento del número total de huelgas, así como de la proporción de huelgas ilegales²¹³. En el caso de la minería, es sabido que tras las nacionalizaciones, primero se frenaron las reivindicaciones para después, frente al deterioro de los salarios a causa de la inflación, inclinarse por una clara oposición a la UP, dejando un terreno ideal para la penetración de la Democracia Cristiana. El punto álgido de esta utilización de las reivindicaciones salariales contra el gobierno de Allende es la huelga de mineros en El Teniente, que se inicia en abril de 1973 y se prolonga hasta junio de ese mismo año. Este conflicto se produce por motivos aparentes de reajustes salariales en el contexto de la campaña parlamentaria que finaliza en marzo de 1973²¹⁴. Esta huelga, manipulada por los partidos de derecha, ilustra la fuerte división política del movimiento sindical y la crisis estructural que atraviesa en ese momento la CUT. Hay que añadir que estos hechos se enmarcan en una fase de aumento general de la tasa de

²¹¹ Véase R. Mauro Marini, "Antecedentes para el estudio del movimiento de masas en el periodo", *El reformismo y la contrarrevolución. Estudios sobre Chile*, México, ERA, 1976, pp. 152-185.

²¹² Esta situación es manifiesta si se tiene en cuenta el incremento del número de huelgas en comparación con el descenso de la cantidad de trabajadores implicados en cada huelga, que pasan de 355 a 108 como media. Según R. Mauro Marini, el número de huelgas pasa de 1.819 en 1970 a 2.709 en 1971 (o sea, + 48, 9%) mientras que paralelamente el número de asalariados en huelga pasa de 647 000 a 292 398 (o sea, - 54,3%) (op. cit., p. 166).

²¹³ Para el análisis que a continuación se presenta, véanse las observaciones de A. Wallon, "Perspectives actuelles du mouvement ouvrier", op. cit., pp. 1997-1998.

²¹⁴ Bitar, S. y Pizarro, C. *La caída de Allende y la huelga de El Teniente*, Santiago, Ed. del Ornitorrinco, 1986.

sindicalización, favorecida por la política legislativa de la UP: el incremento de la tasa de sindicalización, que es solo del 3,4% en 1971 pasa al 18,8% durante el primer semestre de 1972²¹⁵.

Esta crisis social es también palpable en la oleada de ocupaciones de fábricas que se multiplican como respuesta a las prácticas de *lock out* y sabotaje de la producción organizadas por la burguesía industrial. Estas *tomas* se manifiestan por la presión de los asalariados para entrar en el Área de Propiedad Social, hasta tal punto que las ocupaciones de fábricas llevan a que en diciembre de 1972 el sector industrial nacionalizado incluyera 202 empresas, es decir muchas más que las 91 previstas por el proyecto gubernamental de diciembre de 1971 (de las que solamente 74 debían pertenecer a la industria). De hecho, en esta época, la mayoría de las industrias (152 sobre 202) que forman parte de la APS han sido integradas gracias a la movilización de los asalariados y a su propia actividad²¹⁶.

Hoy, Mireya Baltra, Ministra del Trabajo de la Unidad Popular (comunista), reconoce que el gobierno se encontró con un movimiento reivindicativo fuerte que no pudo controlar, y que en su calidad de ministra se enfrentó en varias ocasiones a trabajadores con una actitud de franca hostilidad ante los llamamientos a la moderación del PC y de Allende²¹⁷. Sin embargo como señalaba el sociólogo Manuel Castells: *“Está claro que la contención voluntaria de la presión reivindicativa solo puede venir de una conciencia política, de un apoyo activo de las masas a una estrategia general. [...] La conciencia se genera en torno a una práctica, a tareas políticas concretas que unen los intereses inmediatos, cotidianos, de los trabajadores, a una línea política general. Semejante unión no se crea solo a través de medidas de redistribución: esto sería una nueva forma de populismo”*²¹⁸. De hecho, en el sector privado, esta unión entre los intereses de clase, la práctica cotidiana y una línea política general, que constituiría la defensa del gobierno en la “batalla de la producción”, se caracteriza por una fragilidad aún mayor que en la APS. En efecto, para esta fracción mayoritaria del proletariado, la tarea fundamental era producir más, con la esperanza, muchas veces frustrada, de ganar más, pero sin casi ninguna posibilidad de control recíproco sobre la marcha de la empresa²¹⁹.

Frente a la rápida y violenta ofensiva de las clases dominantes, y las crecientes dificultades del gobierno de Allende (fuertemente atacado desde dentro y desde fuera del país), la base social del movimiento obrero busca nuevas formas de movilización colectiva: “el octubre rojo chileno” es en este sentido una verdadera prueba de fuego.

²¹⁵ Castells, M. *La lucha de clases en Chile*, Buenos Aires, Siglo 21 Editores, 1974, p. 215.

²¹⁶ Sader, E. “Chili: la transition manquée”, *Critique de l'économie politique*, París, N° 16-17, abril-sept. 1974, p. 253.

²¹⁷ Testimonio de M. Baltra en F. Gaudichaud, *Poder Popular y Cordones Industriales*, op. cit., pp. 403-410.

²¹⁸ Castells, M. op. cit., p. 216.

²¹⁹ En efecto, los “Comités de Vigilancia” propuestos por la CUT para el sector privado no fueron apoyados con convicción por la UP, porque se arriesgaban a acentuar la inclinación de los sectores patronales intermedios hacia la alta burguesía y a perturbar los repetidos intentos de alianza con la Democracia Cristiana en el parlamento. Véase: A. Gariano, C. Hurtado, J. Reutter, “Los Comités de Vigilancia y el Área Privada”, *Chile Hoy*, Santiago, N° 16, 5 de octubre de 1972.

4. El Octubre chileno, la CUT y los Cordones Industriales

La gran huelga patronal de octubre de 1972 es un momento clave en la historia de los mil días de la Unidad Popular. Durante el primer período del nuevo gobierno, las clases dominantes intentaron utilizar las fisuras del programa económico a corto plazo de la UP, para sacar partido en términos financieros y políticos (mercado negro, especulación, sabotaje, aumento de los precios de producción). Después de poner en práctica esta política, la ofensiva contra la UP pasa a un nivel superior: la del enfrentamiento social y del boicot económico generalizados. Este movimiento de oposición de octubre, resultado de un conflicto corporativista con los propietarios de camiones, aglutina poco a poco a los gremios patronales (SOFOFA, Confederación de la Producción y del Comercio), de profesiones independientes (abogados, médicos, ingenieros, arquitectos) y de partidos políticos de derecha, unidos todos bajo la bandera de la “Confederación Democrática”, CODE²²⁰. Esta demostración de fuerza a escala nacional, que cuenta con el apoyo del imperialismo estadounidense²²¹, se desarrolla en un contexto de multiplicación de acciones terroristas por parte de grupos de extrema derecha (como *Patria y Libertad*) y de presión, en el ámbito parlamentario, de la oposición para destituir ministros e intendentes²²².

Con el fin de permanecer dentro de la legalidad y en consonancia con la teoría de la constitucionalidad de las fuerzas armadas, el gobierno hace un llamamiento a los militares para controlar la situación y decreta el estado de emergencia. La CUT llama igualmente a los trabajadores a la vigilancia y a participar en los trabajos voluntarios de abastecimiento, puestos en marcha en colaboración con los camioneros no huelguistas (organizados en el MOPARE). Sin embargo, la respuesta a la patronal surge principalmente desde la base. Carmen Silva, en ese entonces militante socialista, recuerda con emoción la fuerza de la auto-organización popular en los cordones industriales de Santiago: “*Fue una cosa maravillosa ¡casi todas las fábricas de Santiago funcionando sin patrones! Los obreros poniendo a andar las cosas más sofisticadas, diseñando zapatos, en fin... y vendíamos las cosas en la feria. A mí me tocó organizar la movilización, hacer una lista de los camiones por industria para llevar los productos, ver cuántos obreros habían en las fábricas e ir a buscarlos y dejarlos, íbamos con los basureros a buscar gas a Maipú y los llevábamos a todo Santiago, los estudiantes iban a la estación a buscar verduras y las distribuían en las poblaciones... en las poblaciones había de todo. Y todo eso duró más de un mes...*”²²³.

²²⁰ El 19 y 20 de octubre, *El Mercurio* publica la lista de organizaciones corporativas que se declaran a favor de la huelga.

²²¹ Senado de los Estados Unidos (Informe Church), *Acción encubierta en Chile 1963-1973: Informe de la comisión designada para estudiar las operaciones gubernamentales concernientes a actividades de inteligencia*, Washington, 18 de diciembre de 1975 en <http://www.derechos.org/nizkor/chile/doc/encubierta.html>.

²²² Para una cronología detallada de la huelga de Octubre, véase: A. Samaniego, “Octubre 1972: triunfo y derrota de la unidad de los trabajadores”, Investigación DICYT-USACH, mimeo, 1996.

²²³ Testimonio de C. Silva en F. Gaudichaud, *Poder Popular y Cordones Industriales*, op. cit., pp. 341-350.

Así, uno de los hechos más originales de esta respuesta de la clase obrera es la creación, en las principales zonas industriales del país, de organizaciones unitarias y transversales que funcionan sobre una base territorial y permiten la unión entre los diferentes sindicatos de un sector industrial preciso. Dependiendo del tamaño de las fracciones sociales que consiguen reunir, de su grado de poder real y de la orientación que les den los militantes presentes, estas organizaciones adoptarán el nombre de “Cordones Industriales”, “Comandos Comunales” o “Comités Coordinadores”. Estas agrupaciones de carácter horizontal, en el sector industrial, responderán de forma masiva contra el boicot patronal mediante una serie de ocupaciones de fábricas, acorde con la movilización obrera en las principales empresas del Área de Propiedad Social. Los trabajadores de este sector logran así mantener parcialmente la producción haciendo funcionar las fábricas sin su propietario, la mayor parte del tiempo con la ayuda de pocos técnicos y sobre bases completamente nuevas (cuestionamiento de la división del trabajo, de la jerarquía de la fábrica, de la legitimidad para dirigir de la patronal). Organizan también formas paralelas de abastecimiento, especialmente con la ayuda de las Juntas de Aprovisionamiento y Control de Precios (JAP), multiplican las brigadas de vigilancia y defensa de fábricas... “*Sa-líamos a expropiar los ómnibus con armas de mano, con pistolas*”, recuerda Mario Olivares, militante obrero del MIR, “*y los llevábamos adentro de las fábricas en manos de los trabajadores. Así, garantizábamos que la producción no se detuviera. También íbamos a buscar a los trabajadores y los transportábamos. [...] Empezábamos a hablar de un poder real de los trabajadores [...]. ¡Tal vez no tuvimos toda la claridad desde un punto de vista ideológico, pero exigíamos una mayor participación en todas las áreas, no solo en la producción!*”²²⁴.

Este momento crucial de la UP demuestra ante todo la capacidad de movilización popular, la profunda descentralización de la actividad política y replantea abiertamente la cuestión de las relaciones de producción. Existe por lo tanto una clara tendencia a la ruptura con los esquemas tradicionales de “hacer política”: el término “poder popular”, reivindicado por una parte de la izquierda chilena, se convierte así en una realidad transitoria. Se puede hablar del nacimiento de un poder participativo surgido desde la base o más bien de un principio de “dualización” del poder, entre un aparato estatal que parece paralizado y una fracción de los asalariados organizados que toma en sus manos parte de la gestión de la sociedad²²⁵. Este fenómeno de poder dual no es exclusivamente específico de la experiencia chilena sino, por el contrario, constituye una de las características universales de toda experiencia de control obrero, larvado o extendido²²⁶. No obstante, la especificidad de Chile es

²²⁴ Testimonio de Mario Olivares en F. Gaudichaud, *Poder Popular y Cordones Industriales*, op. cit., pp. 161-188.

²²⁵ F. Gaudichaud, “Contrôle ouvrier et dualisation du pouvoir: le cas du Chili de l'Unité Populaire” en *Dissidences – Bulletin d'études des mouvements révolutionnaires*, Nancy, N° 7, diciembre 2000, pp. 3 a 8. Sobre el concepto de doble poder y sus diversas acepciones teóricas (marxistas) y prácticas (especialmente en Bolivia y en Chile), véase: R. Zavaleta Mercado, *El poder dual en América Latina*, México, Siglo 21 Editores, col. Mínima, 1974.

²²⁶ Véase el análisis general en E. Mandel, *Control obrero, consejos obreros y autogestión*, Ed. C. Mariátegui, Santiago, 1972.

que esta experiencia, no prevista por los partidos políticos, no se lleva a cabo contra el gobierno sino para defenderlo: a pesar de sus debilidades, el ejecutivo encabezado por Salvador Allende todavía representa para la mayoría de la clase obrera, a nivel subjetivo e ideológico, la encarnación de “su” gobierno y de un posible proyecto de transformación social.

Estas formas de solidaridad obrera ya existían antes del mes de octubre. Pero a partir de esta fecha, se puede decir que de Cordones Industriales *en sí*, existiendo como una realidad objetiva en el paisaje urbano de las grandes ciudades chilenas, aparecen Cordones Industriales *para sí*, es decir como organización de clase. El precedente más importante es la creación del Cordón Cerrillos Maipú en junio de 1972, en uno de los sectores más industrializados de Santiago²²⁷. A raíz del “Octubre chileno” proliferan los Comités Coordinadores, Cordones Industriales y Comandos Comunales en todo el país (probablemente un poco más de cincuenta)²²⁸. Primero en Santiago (por ejemplo con el Cordón Vicuña Mackenna, O’Higgins o también los Comandos Comunales Estación Central y Renca), pero también en la región de Concepción, en el puerto de Valparaíso, en la industria electrónica de Arica, o en el extremo Sur, en la ciudad de Punta Arenas²²⁹. Como lo testifica un activista socialista de Santiago, el papel de los militantes exteriores a la clase obrera es aquí importante: “Yo pienso que lo más importante que nosotros impulsamos a través del Cordón Vicuña Mackenna, fue llevar la solidaridad de pared a pared, de fábrica a fábrica. Eso era una cosa que, si bien es cierto está innata en los sectores obreros, nosotros contribuimos a que esa solidaridad se manifestara en términos concretos: una fábrica solidarizaba con las luchas de otra fábrica vecina, no como anteriormente en que habían casos en que una industria estaba con problemas y las industrias que quedaban alrededor no tenían a veces ni siquiera idea. Nosotros contribuimos a materializar esa solidaridad de obrero a obrero. Y, como estos cordones llegaron a tener una expresión popular bastante amplia, posteriormente se fue tomando también como referente entre los pobladores de los sectores, de tal manera que cuando había una empresa en conflicto también recibía la solidaridad de organizaciones poblacionales de los alrededores”²³⁰.

El objeto de este artículo no es volver sobre los detalles de la rica historia del “poder popular” chileno, sino intentar encararlo en sus relaciones con la Central Única de Trabajadores

²²⁷ Cordero, C.; Sader, E. y Threlfall, M. *Consejo comunal de trabajadores y Cordón Cerrillos-Maipú: 1972. Balance y perspectivas de un embrión de poder popular*, Santiago, CIDU-U. Católica de Chile, Documento de Trabajo N° 67, agosto 1973.

²²⁸ La Revista *Chile Hoy* sitúa en un centenar los Comités Coordinadores que se crean durante el mes de octubre de 1972 en todo el país (N° 26, Santiago, 8 de diciembre de 1972). Pero, documentos internos del MIR –más confiables– hablan de 52 coordinaciones de este tipo en todo el país (MIR, *Informe de la comisión política al Comité Central restringido sobre la crisis de Octubre y nuestra política electoral*, Santiago, 3 de noviembre de 1972 in *Documentos Internos 1972* - Archivos CEDETIM - París).

²²⁹ Para una historia de los Cordones Industriales y del poder popular véase: H. Cancino, *La problemática del poder popular en el proceso de la vía chilena al socialismo 1970-73*, op. cit., y M. Silva, *Los Cordones Industriales y el socialismo desde abajo*, Santiago, sin editor, 1999 y F. Gaudichaud, *Poder Popular y Cordones Industriales*, op. cit. Para un estudio pionero del poder popular a través de la historia del monopolio textil Yarur: P. Winn, *Weavers of revolution, the Yarur workers and Chile's road to socialism*, New York, Oxford University Press, 1986.

²³⁰ Testimonio de Luis Ahumada en F. Gaudichaud, *Poder Popular y Cordones Industriales*, op. cit., pp. 305-324.

y la dirección política de la izquierda. La movilización social de octubre reveló la debilidad de la UP frente a tales desafíos por parte de las clases dominantes, pero también la fragilidad de acción de organizaciones tan importantes como la CUT en esta coyuntura. La Central reacciona oficialmente tarde, votando en particular una resolución que llama a reforzar la unidad y a la creación de Comités Coordinadores²³¹. Este llamamiento se emite el 21 de octubre, es decir, cuando de hecho en la base ya existe esta unidad y estos comités. Aunque es innegable que la iniciativa de los Cordones no fue “espontánea” sino más bien el fruto de una acumulación de experiencias de lucha y de un arduo trabajo militante, sí que representa fundamentalmente la crisis de los organismos históricos de mediación y de dirección del movimiento obrero. A raíz de esto, el movimiento obrero recupera una autonomía de clase que había perdido parcialmente y, sobre todo, excede ampliamente las voluntades políticas de los partidos: los llamamientos productivistas del gobierno en el marco de la “batalla de la producción” se traducen en la multiplicación de las ocupaciones de fábricas y su funcionamiento bajo control obrero. Así, José Moya, obrero de la empresa IRT y militante MIR, se acuerda: “*Fue un período muy rico, en que mucha gente que simpatizaba con la UP se rebeló contra ella y se incorporó a la organización de los cordones. La organización de los cordones no era muy bien vista por la UP, yo recuerdo haber estado en asambleas donde venía gente de la CUT a discutir con los cordones y tenía que irse al final con la cola entre las piernas...*”²³².

En otros términos, si este movimiento se moviliza siempre en nombre de la defensa del gobierno, lo hace sobre bases propias: unificación de los trabajadores más allá de sus diferentes ramas productivas, unificación de sectores de la CUT con aquellos de la pequeña industria que no están afiliados, unificación de las reivindicaciones económicas en el seno de un proyecto político más radical que el defendido por el gobierno. La presentación en octubre de un documento de reivindicaciones del pueblo (*Pliego del Pueblo*), elaborado por Comandos Comunales y Cordones Industriales de Santiago, así lo confirma. Este documento reagrupa múltiples reivindicaciones (educación, salud, abastecimiento, producción) y manifiesta la influencia ideológica directa de los militantes del MIR. En particular pide que “*todas las industrias produzcan para el pueblo y bajo el control del pueblo*”, el establecimiento de un control obrero en las industrias del sector privado y el traslado al Área Social de aquellas que han sido ocupadas durante la huelga. El *Pliego del Pueblo* llamaba, en conclusión, a la construcción del poder popular y de una asamblea del pueblo²³³.

²³¹ Revista *Chile Hoy*, Santiago, 27 de octubre de 1972.

²³² Testimonio de José Moya en F. Gaudichaud, *Poder Popular y Cordones Industriales*, op. cit., pp. 121-136.

²³³ *Comandos Comunales y Cordones Industriales de Santiago*, Santiago, octubre de 1972 (citada en V. Farías, op. cit., Tomo 5, pp. 3272-3288). La referencia a la Asamblea del pueblo recuerda a la Asamblea celebrada por una parte de la izquierda en Concepción en julio de 1972 y que fue condenada por Allende por “irresponsable”. (M. Harnecker, “La asamblea popular de Concepción”, *Chile Hoy*, Santiago, N° 12, 1 de septiembre de 1972).

Esta dinámica de desbordamiento desde las bases es lo que autores como Peter Winn o Miguel Silva llaman “*la Revolución desde abajo*”²³⁴. Tal dinámica es una de las principales características de todo período prerrevolucionario. En este sentido las reflexiones de Antonio Gramsci sobre los consejos obreros italianos de los años veinte y la superación de las limitaciones del movimiento sindical por el control obrero siguen siendo una herramienta que explicita el proceso chileno²³⁵. Esta orientación potencial de los Cordones Industriales muestra claramente que planteaban toda una serie de problemas cruciales sobre el proceso de transición al socialismo, que ya estaban siendo debatidos por la izquierda y, especialmente, la cuestión del “poder popular” y del papel del Estado durante un proceso revolucionario²³⁶. Si seguimos los escritos de Gramsci, la problemática central para los partidos de izquierda en tal coyuntura es saber hasta qué punto son “*agentes conscientes*” –y no un “*tutor*” desde arriba– de la creación de estos nuevos organismos de poder popular, o más también si proponen al movimiento popular “*organizar las condiciones externas generales (políticas) en las cuales el proceso de revolución tendrá su mas grande celeridad*”²³⁷. Así el tema de las relaciones entre la CUT, el gobierno y los Cordones Industriales es objeto de una larga polémica entre diferentes tendencias políticas. Antes de todo, hay que anotar que existen muchos vínculos orgánicos entre las dos organizaciones, ya que la mayoría de los sindicatos que participan en las reuniones de los Cordones, estaban también afiliados a la CUT²³⁸.

El Partido Comunista vio inicialmente a los Cordones Industriales y los nuevos organismos de poder popular con una franca hostilidad. Varias declaraciones de Luis Corvalán, secretario general de esta organización, condenan en duros términos a los Cordones Industriales, que tendrían la pretensión de ser independientes del gobierno de Allende. Estos son presentados como organismos que existen solamente en la “*mente acalorada*” de los dirigentes del MIR²³⁹. El PC persistió hasta el golpe de Estado en su tradicional actitud de desconfianza hacia movimientos populares de base que sobrepasaban su control directo y trató de manera permanente integrar estas nuevas expresiones de poder popular obrero

²³⁴ Ver la nota 81 a este propósito.

²³⁵ Éste señala que el sindicato “*no organiza a los obreros como productores sino como asalariados, es decir como criaturas de un régimen capitalista de la propiedad privada, como vendedores de la mercancía-trabajo*” (“Sindicalismo y Consejos”, *Ordine Nuovo*, 8 de noviembre de 1919 en E. Mandel, *Control obrero, consejos obreros y autogestión*, Ed. C. Mariategui, Santiago, 1972). Ver también A. Gramsci, *Antología*, México, Siglo XXI, 1970.

²³⁶ Véase a este respecto el Foro organizado por la revista *Chile Hoy*: “Foro sobre el poder popular”, *Chile Hoy*, Santiago, N° 60, 9 de agosto de 1973 y M. Harnecker, “Los cordones industriales y la CUT”, Santiago, N° 59, 2 de agosto de 1973.

²³⁷ A. Gramsci, “El movimiento turinés de los consejos de fábrica”, *Consejos obreros y democracia socialista*, Córdoba, Cuadernos de Pasado y Presente, N° 33, 1972, pp. 211-220.

²³⁸ Del mismo modo, varios Cordones de provincia nacen de la propia iniciativa de dirigentes provinciales de la CUT, a menudo militantes de la izquierda del PS (véanse, por ejemplo, los intentos de crear un Cordón Industrial en Talca: “¡Los trabajadores de Talca! ¡A la pelea!”, *Tarea Urgente*, N° 10, Santiago, 27 de julio de 1973).

²³⁹ Corvalán, Luis. “Carta a Carlos Altamirano, Secretario general del Partido Socialista”, Santiago, 6 de febrero de 1973 (in L. Corvalán, *Chile: 1970-1973*, Sofía, Sofía Press, 1978, pp. 160-168).

bajo el mando de la CUT (donde el PC era la primera fuerza política)²⁴⁰. En definitiva, para el PC el peligro de los Cordones sería llevar al movimiento sindical a la formación de organismos paralelos que debilitaban a la CUT²⁴¹. Tras esta argumentación, se encuentra el rechazo de los comunistas a cualquier movimiento que pudiese poner en peligro el papel canalizador del gobierno sobre el movimiento social. Esta posición fue apoyada varias veces públicamente por Salvador Allende²⁴². El PC intentó incluso organizar Cordones paralelos directamente vinculados a la CUT, apoyándose en la fábrica Textil Progreso del Cordón Vicuña Mackenna. Esta iniciativa fue ampliamente denunciada por la dirección del Cordón como “maniobra divisionista”²⁴³. Según Guillermo Rodríguez, militante MIR en el seno del Cordón Cerrillos: “Cabe destacar que durante las últimas semanas previas al golpe se comienzan a ver posiciones más radicalizadas en el PC, particularmente entre las JJCC y el Regional Santiago Centro y la gente que editaba Puro Chile, periódico que comienza a plantear el problema del Poder Popular desde otra óptica. Este proceso no alcanza a madurar y por ende no tuvo mayor significación. Literalmente el PC quedó al margen del desarrollo del Cordón Cerrillos, incapaz, como era su política nacional, de integrar la dinámica de poder alternativo que se estaba tejiendo”²⁴⁴. Pero, al contrario, Neftalí Zúñiga, obrero, dirigente sindicalista PC e interventor de la gran empresa Textil Pollak, subraya la irresponsabilidad de muchos dirigentes de los Cordones y el “vicio del ausentismo” que favorecían con sus repetidas movilizaciones callejeras. Según él, “si hubiesen sido más visionarios los dirigentes de esos Cordones Industriales, tenían que tomar con tal seriedad su papel de llegar a exigir a las empresas del Área Social su hoja de producción” y añade “¿Qué hacían los Cordones? Iban a la fábrica a decir: “¡Compañeros tenemos que hacer una marcha, para presionar, porque queremos combatir! [...]. ¡Pero defender las empresas no era sacar la gente a la calle a desfilar, porque parábamos las máquinas!”²⁴⁵. Esta opinión la compartían también parte de los militantes socialistas y del MAPU, opuestos al grito de “Crear, crear, poder popular” lanzado en las calles del país, consigna que consideraban como una “consigna vacía” y engañosa²⁴⁶.

De manera evidente, el surgimiento de los Cordones, sus llamados a las tomas de fábricas o a construir barricadas para imponer la extensión del sector nacionalizado se oponían

²⁴⁰ Cancino, H. Op. cit., p. 380.

²⁴¹ Véanse las declaraciones de G. Escorza, militante del PC y dirigente sindical de Textil Progreso, que se había negado a participar en el foro sobre el “poder popular” y que fue interrogado aparte: F. Zeran, “Los comunistas y los Cordones”, *Chile Hoy*, Santiago, N° 61, 16 de agosto de 1973.

²⁴² Ver por ejemplo sus declaraciones en el pleno de las federaciones de la CUT (Discurso citado en “Allende reitero llamado al dialogo democrático...”, *Clarín*, Santiago, 26 de julio de 1973).

²⁴³ Cordón Vicuña Mackenna, “Alerta trabajadores: a parar las maniobras divisionistas”, *El Cordonazo*, N° 3, Santiago, 12 de julio de 1973.

²⁴⁴ Testimonio de Guillermo Rodríguez en F. Gaudichaud, *Poder Popular y Cordones Industriales*, op. cit., pp. 363-385.

²⁴⁵ Testimonio de Neftalí Zúñiga en F. Gaudichaud, *Poder Popular y Cordones Industriales*, op. cit., pp. 287-300.

²⁴⁶ Ver por ejemplo el testimonio de Fernando Quiroga, secretario seccional del PS en la zona donde nace el Cordón Cerrillos y muy crítico sobre el actuar de los Cordones Industriales (en F. Gaudichaud, *Poder Popular y Cordones Industriales*, op. cit., pp. 351-362).

abiertamente a la táctica conciliadora y moderada del Partido Comunista. En efecto, a raíz de los acuerdos adoptados por la UP en las reuniones de Lo Curro y Arrayán, Allende y el PC intentan, a cualquier precio, defender la tesis según la cual la única vía posible era hacer una pausa en el proceso de reformas e implantar una especie de “NEP chilena”. Sin la mayoría en el parlamento, esta estrategia suponía el mantenimiento de conversaciones con la DC, a pesar de la actitud hostil de ésta, pero sobre todo otorgar garantías de respeto de la propiedad de los medios de producción en el sector privado. Orlando Millas, dirigente del PC, es el encargado de esta misión en colaboración con los militares que integran desde entonces el gobierno: el plan Prats-Millas prevé así la restitución de 123 empresas ocupadas o requisadas en octubre y la reducción a 49 de las integradas en el Área de Propiedad Social. Este proyecto acelera las tensiones entre el gobierno y los Cordones, que manifiestan con una gran movilización su desacuerdo. Según estos últimos, el PC y los “sectores reformistas” de la UP actuaban contra el proceso revolucionario²⁴⁷.

Reaparece aquí la oposición entre los famosos dos polos de la izquierda chilena (“rupturistas” versus “gradualistas”) que se plasma en torno a dos consignas reduccionistas: “consolidar para avanzar” contra “avanzar sin transar”²⁴⁸. En efecto, los militantes que tenían más influencia en el seno de los Cordones eran ante todo de la izquierda del PS, del MAPU y del MIR. Pero, paradójicamente, en este debate, el MIR (aunque clasificado por los historiadores como “rupturista”) compartió varios puntos comunes con los comunistas: el PC y el MIR son ambos opositores a la coordinación y centralización de los Cordones Industriales y ambos llaman a la integración de los Cordones en la CUT. Para Miguel Enríquez, secretario general del MIR, sería una forma eficiente para democratizar la Central, transformando los Cordones Industriales en órganos territoriales de base²⁴⁹. Es esta misma argumentación la que durante un foro sobre el poder popular, el MIR y el PC defienden contra la posición de los socialistas²⁵⁰. El MIR justificaba esta posición pues los Cordones Industriales no respondían a su reivindicación central, la del Comando Comunal, que teóricamente reagrupaba a un sector social más amplio que la sola clase obrera. Como lo declaró Nelson Gutiérrez, entre otros, en la idea del MIR el Comando Comunal debía ser el organismo de poder dual que podría unificar los pobres del campo y de la ciudad con el proletariado en su lucha por la conquista del poder²⁵¹. Desde este análisis, el MIR negaba a los Cordones

²⁴⁷ Véase por ejemplo la declaración del Cordón Vicuña Mackenna en *Tarea Urgente*, Santiago, N° 1, 16 de febrero de 1973.

²⁴⁸ Desde una perspectiva histórica, se aprecia de forma clara que estos famosos “dos polos”, que muchos autores han intentado presentar como dos alternativas esencialmente diferentes, tenían finalmente varios puntos en común, especialmente un cierto “atentísimo” frente a las iniciativas del gobierno. Este acercamiento permitiría esencialmente comprender las razones por las que nunca existió, dentro de la izquierda, una alternativa coherente y racional a la “vía chilena”, propuesta por S. Allende. El propio MIR buscó siempre hacer presión sobre la UP y eligió aliarse con su ala izquierda durante las elecciones de marzo de 1973 en vez de proponer al movimiento social una lista y un programa alternativos.

²⁴⁹ Enríquez, M. “Un diálogo que desarma”, *Chile Hoy*, Santiago, N° 59, 2 de agosto de 1973.

²⁵⁰ “Los Cordones industriales y la CUT”, *Chile Hoy*, Santiago, N° 61, 10 de agosto de 1973.

²⁵¹ Ver la entrevista realizada a este dirigente del MIR en *Chile Hoy* (“Opina N. Gutiérrez”, Santiago, N° 26, 14 de diciembre de 1972).

el papel de embrión de dualización de poder (pues dejaban de lado otras capas populares), para verlo más como una simple coordinación sindical clasista. Al parecer esto nace de una posición confusa de esta organización acerca del movimiento obrero, producto en parte de su débil inserción en el seno de la clase obrera industrial. De tal manera que el MIR, que fue un activo organizador del poder popular y de los Cordones Industriales, que llamaba a la creación de un “*poder alternativo al Estado burgués*” (pero no al gobierno), basado en Comandos Comunales de Trabajadores, al mismo tiempo frenó la centralización de las fracciones más politizadas de la clase obrera en torno a los Cordones Industriales.

Sin embargo, la coordinadora provincial de los Cordones Industriales siempre rechazó el paralelismo sindical, reconociendo a la CUT como “*la máxima organización de los trabajadores al nivel nacional*”, pero al mismo tiempo reclamaba la “*autonomía necesaria para cumplir el papel de conductor de los diferentes sectores sociales aliados del proletariado en la lucha por el socialismo*”²⁵². En esta declaración, encontramos resumida la postura de los socialistas o más exactamente de los militantes del ala izquierda de este partido (como la de una parte de los cristianos de izquierda). Son ellos quienes conservaron la mayor influencia en la dirección de los Cordones: en 1973, todos los presidentes de los Cordones de Santiago eran socialistas²⁵³. La fuerte flexibilidad de este partido, y el hecho que sea el partido que conoce la mayor progresión política dentro de la clase obrera durante la UP, explica su receptividad a la presión de sus bases obreras más radicales²⁵⁴. Varios sindicalistas socialistas defendían la tesis de la autonomía de clase de los Cordones respecto a la CUT y al gobierno. También estas fracciones criticaban, como el MIR, la participación creciente de los militares en el gobierno o los llamados a devolver las fábricas ocupadas. Unas semanas antes del golpe de Estado, Armando Cruces, presidente del Cordón Vicuña Mackenna, declaraba: “*El compañero Allende, presidente de la República, reformista, militante de mi partido, transa con el enemigo a todo momento. Hay numerosas vacilaciones. Además el PC ha demostrado que estaba entero para la ‘paz social’ en Chile, y eso arrastró al mismo Presidente de la República*”²⁵⁵. Encontramos este tipo de críticas en declaraciones de varios otros sindicalistas socialistas como Hernán Ortega, último presidente del Cordón Cerrillos y presidente de la Coordinadora que nace en 1973, o Manuel Dinamarca, secretario general socialista de la CUT en 1973²⁵⁶. En la misma

²⁵² Declaración de la “Coordinadora provincial de Cordones de Santiago” en *Tarea Urgente*, Santiago, N° 10, 27 de julio de 1973.

²⁵³ Esta influencia es clara si se tiene en cuenta que los presidentes de los Cordones que firman la declaración de la “Coordinadora provincial de Cordones de Santiago” son todos militantes del PS (*Tarea Urgente*, Santiago, N° 10, 27 de julio de 1973).

²⁵⁴ Sarget, M.N. *Système politique et Parti socialiste au Chili: un essai d'analyse systémique*, París, L'Harmattan, 1994.

²⁵⁵ A. Cruces, Presidente del Cordón Vicuña Mackenna, “Habla la revolución chilena: ¡en Chile no debe quedar ningún explotador!”, *Avanzada Socialista*, op. cit.

²⁵⁶ Ver por ejemplo “Habla Hernán Ortega”, *Chile Hoy*, Santiago, N° 59, 27 de julio de 1973 o Entrevista a Manuel Dinamarca, Secretario General de la CUT (por J. Silva Luvecce), “Los trabajadores no estamos amarrados a la legalidad burguesa”, *Chile Hoy*, Santiago, N° 52, 14 de julio de 1973.

línea, revistas como *La Aurora de Chile* o *Tarea Urgente* (editadas por secciones regionales del PS) recordaban que “los Cordones no están incorporados a la legalidad burguesa”²⁵⁷. No obstante, la dirección del PS de los Cordones adoptó una posición muchas veces ambigua respecto a la CUT y al gobierno, posición asumida por su secretario general Carlos Altamirano. Así, en varios casos son los mismos sindicalistas socialistas de la CUT quienes llamaron en provincia (en Valparaíso por ejemplo) a la formación de Cordones Industriales y apenas un mes antes del golpe de Estado, Hernán Ortega reiteraba su propuesta de integrar la CUT a la dirección de los Cordones, reconociendo que “en la medida que la CUT se dé una nueva estructura y se proponga nuevas tareas, nuestra coordinación no tendrá más razón de existir”²⁵⁸.

Indudablemente, esta controversia dentro de la izquierda sobre el papel de la CUT y de los Cordones muestra la dificultad para encontrar un espacio a las formas de autoorganización y de poder popular dentro del proyecto de “transición institucional” propuesta por la Unidad Popular. De hecho, el problema central que plantea el surgimiento de los Cordones y de diversos Comités Coordinadores es, fundamentalmente, el de la utilización del Estado chileno, la postura de las Fuerzas Armadas y la cuestión del “poder popular” como fuerza alternativa posible de la revolución chilena. Los mismos sectores de izquierda de la UP, especialmente el PS, el MAPU y la IC, participantes activos con el MIR de los Cordones Industriales, se negaban a que estos últimos se transformaran en órganos de “poder dual” que pudiesen desestabilizar el gobierno y su voluntad de negociación, a nivel de parlamento, con la DC y ciertas fracciones de las clases dominantes. Esta voluntad explica también la integración creciente de la CUT, al mismo tiempo que el papel de árbitro del conflicto de clase que adquiere el gobierno con la incorporación de los militares al ejecutivo en los momentos más conflictivos. En febrero de 1973, Clotario Blest seguía advirtiendo de los múltiples peligros de esta táctica, criticando un movimiento sindical cada vez más dependiente de las directivas gubernamentales y de las cumbres partidarias²⁵⁹.

Como consecuencia de los hechos de octubre de 1972, el gobierno logra retomar el control de la situación por medio de la creación de un gabinete cívico-militar. A pesar de las protestas de los Cordones, la dirección de éstos quedó en manos de militantes de la UP que se conforman con emitir dudas sobre el rumbo tomado por el gobierno, aunque sin llamar a la ruptura con éste. El 29 de junio de 1973, tiene lugar el *Tancazo*, levantamiento militar dirigido por el coronel Souper que es de alguna manera un ensayo de golpe de Estado abortado. En esta ocasión, la resistencia de los Cordones Industriales es, como en octubre, fundamental en la contraofensiva. Ese día, la CUT hace un llamamiento a los Cordones

²⁵⁷ “A propósito de los Cordones y la CUT”, *La Aurora de Chile*, Santiago, N° 33, 26 de julio de 1973.

²⁵⁸ “Habla Hernán Ortega: no hay paralelismo con la CUT” (entrevista de M. Harnecker), *Chile Hoy*, Santiago, N° 59, 2 de agosto de 1973 y “A propósito de los Cordones y la CUT”, *La Aurora de Chile*, Santiago, N° 33, 26 de julio de 1973.

²⁵⁹ “Entrevista a C. Blest”, *El Pueblo*, Santiago, N° 28, febrero 1973.

Industriales e incluso envía delegados a cada uno de ellos²⁶⁰. Es también en junio de 1973, cuando el PC reconoce oficialmente a los Cordones y llama a sus militantes a integrarse en ellos. La propuesta de los comunistas sigue siendo que los Cordones formen parte de la CUT y sean orientados por ésta, reconociéndoles el derecho a conservar su propia estructura²⁶¹. Esa voluntad de canalizar los Cordones y el poder popular se había reflejado ya en octubre, cuando el PS y el PC invitan a los Comandos Comunales a situarse bajo la autoridad de los Intendentes o gobernadores de provincia²⁶².

Finalmente, a pesar de los múltiples logros en términos participativos, en términos de control de la producción, de autogestión del abastecimiento y de la defensa de las fábricas, el poder popular y sobre todo los Cordones Industriales se quedaron a un nivel embrionario. La fuerte y a menudo contradictoria relación entre el gobierno de Allende y las fracciones más organizadas del movimiento obrero permitieron que el proceso avanzara, que el Área Social prevista para solamente 91 empresas abarcase más de 200, pero también el peso del legalismo de una mayoría de la izquierda explica que los militantes de la UP buscaran mantener el “poder popular” bajo la protección y el control de la administración estatal. Este control “desde arriba”, llamado por Peter Winn como “revolución por arriba” y por Miguel Silva como “reformas desde arriba”, explica también que los Cordones no fueran grandes asambleas permanentes de delegados de empresas, elegidos directamente por el conjunto de los trabajadores y revocables en todo momento²⁶³. Al fin y al cabo, significaron sobre todo una coordinadora de dirigentes sindicales revolucionarios, que consiguen movilizar una parte de los asalariados de su zona, en coyunturas de crisis y de forma temporal. Tampoco, en estas condiciones, los Cordones Industriales tenían la capacidad político-militar para resistir a un golpe de Estado y unir su resistencia a los soldados favorables al proceso. Con la ley de control de armas votada por el parlamento, los militares habían, ya a principios de 1973, iniciado la represión en los Cordones: la multiplicación de los allanamientos había permitido evaluar las fuerzas en presencia. El 11 de septiembre fueron solamente unos pocos grupos de militantes preparados los que pudieron enfrentar el Golpe, cuando la mayoría de la clase obrera se encontraba desprovista de armas y sin preparación. “*Los obreros me reclamaban armas*”, recuerda la ex-ministra del trabajo comunista Mireya Baltra, que el día del golpe de Estado se dirigió al cordón Vicuña Mackenna. Haciéndose eco, José Moya cuenta cómo esperaba él, en su fábrica: “*Habíamos pasado toda la noche del 11 de septiembre de 1973 esperando*

²⁶⁰ Entrevista a H. Ortega en *Chile Hoy*, Santiago, N° 59, 27 de julio de 1973.

²⁶¹ “Cordones Industriales: la participación del Partido Comunista”, *La Aurora de Chile*, Santiago, N° 20, 26 de abril de 1973.

²⁶² Partido Socialista y Partido Comunista, “Propósitos de ofensiva política”, Santiago, octubre de 1972 (en Farías, V. op. cit., tomo 5, pp. 3.306-3.312).

²⁶³ Solo una fracción de militantes obreros de izquierda participan en estas asambleas, a menudo nombrados por su propio partido y el poder de convocatoria de un Cordón como el de Cerrillos no sobrepasa los 5.000 asalariados cuando se supone que coordina a más de 30 empresas y decenas de miles de trabajadores...

armas que nunca llegaron. Oíamos disparos del lado del cordón San Joaquín; allá tenían armas –al menos los de la empresa textil Sumar. Nuestro sueño era que en cualquier momento podían llegar armas y que íbamos a hacer lo mismo que ellos. Pero no pasó nada”²⁶⁴. Contrariamente a la propaganda del general Augusto Pinochet, nunca existió ningún ejército de los “cordones de la muerte”. De hecho, dejando a un lado algunos actos de resistencia aislados (en el Cordón Cerrillos por ejemplo), el “poder popular” se sometió rápidamente bajo las implacables botas de la represión. “*El día del golpe de Estado había muertos en la calle, los traían incluso de otros sitios y los tiraban aquí*”, cuenta Carlos Mujica, obrero MAPU de la planta metalúrgica Alusa. *¡Y no podíamos hacer nada! Creo que lo más duro fue el período 1973-1974. Después, en 1975, los servicios secretos vinieron a buscarme a Alusa. Me detuvieron y me llevaron a la famosa Villa Grimaldi: ahí, pasaban a la gente por la parrilla, es decir, sobre una cama de hierro donde aplicaban corriente eléctrica en las piernas... Sabían que yo era delegado del sector...*”²⁶⁵.

5. Ensayo de Balance general: “El pasado siempre es importante”

El rasgo principal de este período y su gran riqueza histórica es, en primer lugar, la desestructuración del conjunto de mecanismos de control social que existían hasta ese momento (incluidos los creados por los partidos obreros sobre los asalariados) y, a continuación, el agotamiento del llamado “Estado de compromiso”, continuidad del Estado oligárquico establecido desde los años veinte. La Unidad Popular es el tiempo de una crisis de hegemonía generalizada en donde cualquier consenso resulta caduco. Las clases y los actores sociales en lucha intentan proponer un proyecto alternativo global al conjunto de la sociedad. “*La tesis de la conciliación de clase*” (como la llamó el economista Héctor Vega), aunque apoyada por la UP y la CUT, parece estar en fase de agotamiento definitivo como proyecto sociopolítico de transformación social. El análisis de la debilidad estructural de la viabilidad política de la “tesis institucionalista” y etapista del proyecto político de transición al socialismo de Allende, permite comprender el hecho de que la UP y la CUT se vieran notablemente superadas por las luchas del movimiento obrero y popular²⁶⁶. La mayor parte del tiempo, el movimiento obrero y sindical permanece en una relación de dependencia respecto al Estado chileno y a las iniciativas gubernamentales. En un primer tiempo, el gobierno supo facilitar y dinamizar las movilizaciones colectivas de los asalariados. Pero, con el fin de canalizar las fuerzas del movimiento obrero en torno al proyecto de la Unidad Popular, los partidos de izquierda intentarán apoyarse en la CUT integrándola todavía más en el aparato del Estado. Esta integración aceleró también las deficiencias orgánicas de la Central y sus dificultades

²⁶⁴ Citado en F. Gaudichaud, “L’Unité populaire par ceux qui l’ont faite”, *Le Monde Diplomatique*, París, Septembre 2003.

²⁶⁵ Testimonio de C. Mujica en F. Gaudichaud, *Poder Popular y Cordones Industriales*, op. cit., pp. 137-160.

²⁶⁶ Véase: F. Rodríguez, “Antecedentes estructurales de la crisis política en Chile”, *Crítica de la Unidad Popular*, Barcelona, Ed. Fontamara, 1975, pp. 39-61 y H. Vega Tapia, *L’économie du populisme et le projet de passage au socialisme proposé par l’Unité Populaire*, U. Aix-Marseille II, Doctorado de Estado en economía, 1981.

para asumir un papel dirigente en la lucha de clases que se estaba desarrollando. Aquí de nuevo, encontramos la gran contradicción de la “vía chilena” propuesta por la UP: la de estar, como lo escribió el sociólogo boliviano René Zavaleta Mercado, al mismo tiempo reformando la sociedad desde el viejo Estado oligárquico (y cada vez más amarrado a sus exigencias), y militando en las bases, en esta “revolución desde abajo” en gestación, que desborda por completo la legalidad burguesa vigente²⁶⁷.

Por lo tanto, se podría plantear de forma más precisa que la UP fue un momento de combinación dialéctica de dos fenómenos contradictorios: por un lado, una integración-subordinación del movimiento obrero al Estado chileno y a los proyectos políticos de los partidos obreros tradicionales, y, por otro, una participación y creatividad popular sin precedentes que hizo que quedasen obsoletas todas las viejas formas de organización y dominación social. En el ámbito de los sectores obreros y en el movimiento sindical, estas formas alternativas de sociabilidad y control democrático de la economía, llamadas “poder popular”, se plasman esencialmente en la creación de los “Cordones Industriales”.

La historia del “poder popular” y de los Cordones Industriales necesita también salir de la mitología: no fueron ni “soviets a la chilena”, ni un peligroso ejército paralelo tal como intentó hacer creer la Dictadura. Lo que sí lograron, fue constituirse en gérmenes de una sociedad futura, en plena construcción, que no logró desarrollarse en el contexto del Chile de principios de los setenta. Esta experiencia necesita también salir del olvido o del reduccionismo histórico. Estos relatos de una época marcada por la esperanza de un mundo mejor forman parte de la “batalla de la memoria” que tiene lugar actualmente en Chile²⁶⁸. Producto de la violenta amnesia a la que el pueblo fue sometido por la Junta Militar (1973-1990), esta historia se mantiene en gran medida ignorada y la memoria colectiva destrozada. Además, ésta no pudo recomponerse bajo una “*mal-transición*” democrática que legitimó a nivel económico e institucional muchos aspectos del régimen del general Pinochet. Pero los recuerdos y los corazones siguen rojos para los que sobrevivieron. Y esta memoria de lucha, de conquistas sociales, de participación y autoorganización puede transformarse en una gran lección de vida y de esperanza para los que la quieren escuchar. “*El pasado siempre es importante*”, concluye Luis Pelliza, obrero que continúa en actividad dentro del movimiento sindical, tras 17 años de dictadura y más de 20 años de neoliberalismo. “*Forma parte de una historia que vivimos. Conocer la experiencia de nuestra derrota es necesario para comprender cómo podremos afrontar el futuro*”²⁶⁹.

²⁶⁷ Zavaleta Mercado, R. *El poder dual en América Latina*, México, Siglo 21 Editores, col. Mínima, 1974.

²⁶⁸ Illanes, M. A. *La Batalla de la memoria*, Santiago, Planeta/Ariel, 2002.

²⁶⁹ Citado en F. Gaudichaud, “L’Unité populaire par ceux qui l’ont faite”, *Le Monde Diplomatique*, París, Septembre 2003.

This page intentionally left blank

LA IGLESIA QUE NACE DEL PUEBLO: RELEVANCIA HISTÓRICA DEL MOVIMIENTO CRISTIANOS POR EL SOCIALISMO

Mario Amorós*

Chile sufre dolores de parto. Si no nace una patria nueva, el pueblo no podrá ser feliz. Los cristianos tratamos de seguir los pasos del Señor Jesús. Él vivió y murió por la libertad del pueblo. Como sacerdotes, pastores, religiosos y laicos, creemos que Dios quiere la justicia y la igualdad. Nos llamamos "Cristianos por el Socialismo". Esto no es un partido político. Somos cristianos que tratamos de compartir el sufrimiento y la lucha de los pobres. Sabemos que el futuro de Chile está en manos de los trabajadores. Nuestra fe cristiana se fortalece en las luchas y esperanzas de la clase trabajadora²⁷⁰.

Una de las características más originales de la revolución chilena fue la participación activa de amplios sectores de sacerdotes, pastores, religiosos y laicos en la transformación socialista de la sociedad. La expresión más acabada de aquel compromiso fue la creación y desarrollo del movimiento Cristianos por el Socialismo, porque con su inserción en el mundo popular, con su testimonio de vida y de lucha, sus militantes derrumbaron los dogmas que históricamente habían enfrentado a marxistas y cristianos. Si la nacionalización del cobre devolvió a Chile su principal riqueza, si la reforma agraria erradicó el latifundio, si los trabajadores se organizaron para defender al Gobierno Popular, si todos los niños recibieron medio litro de leche diario, si Quimantú permitió que millones de personas accedieran a la cultura, la participación de los cristianos en la construcción del socialismo enriqueció aquel singular proceso revolucionario y contribuyó a hacerlo inolvidable.

1. Del anatema al diálogo

Aunque desde mucho antes algunos cristianos se habían comprometido con la transformación socialista de la sociedad chilena y qué mejor ejemplo que Clotario Blest, ex seminarista

* Mario Amorós (Alicante, 1973) es egresado de Historia por la Universidad de Barcelona y Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Prepara en la primera su tesis doctoral sobre el sacerdote Antonio Llidó, dirigente del MIR y de Cristianos por el Socialismo desaparecido en 1974 a manos de la DINA.

²⁷⁰ Declaración del secretario nacional de Cristianos por el Socialismo. 20 de octubre de 1972. *Pastoral Popular*, n° 132. Noviembre-diciembre de 1972, p. 60.

y primer presidente de la Central Única de Trabajadores, el “diálogo” entre marxistas y cristianos en Chile tuvo como año decisivo 1965. Si en septiembre de 1964 los creyentes votaron en masa por Eduardo Frei para impedir la victoria de Allende bajo la presión de una feroz campaña del terror contra el “comunismo ateo”, en abril y mayo del año siguiente marxistas y cristianos se manifestaron por primera vez de manera unitaria para condenar la invasión norteamericana de la República Dominicana, que derrocó al presidente constitucional Juan Bosch e implantó el régimen represivo de Joaquín Balaguer.

También en 1965 dos destacados militantes demócratacristianos, Jacques Chonchol y Julio Silva Solar, publicaron un importante ensayo donde perfilaron los fundamentos de la llamada “vía no capitalista de desarrollo”²⁷¹, que contribuyó a forjar un polo crítico al interior del Partido Demócrata Cristiano y constituyó un primer intento teórico de conciliar cristianismo y marxismo.

Además, aquel año concluyó el trascendental Concilio Vaticano II, que impulsó un *aggiornamento* de la Iglesia que Fernández Fernández explica en estos términos: “Diálogo con el mundo, con la cultura; faz humanista y evangélica frente al legalismo; justicia social; papel del laico, que empieza a ser considerado como adulto; Iglesia como pueblo de Dios en la historia; ecumenismo; renovación litúrgica...”. El Concilio presentó a la Iglesia como la “Iglesia de los pobres”, tal y como lo expresó Juan XXIII el 11 de septiembre de 1962²⁷².

De acuerdo con los planteamientos conciliares, durante la segunda mitad de aquella década en Chile muchos sacerdotes y religiosas se marcharon a vivir a las poblaciones y se insertaron a través del trabajo en el mundo obrero, con el anhelo de distanciarse primero y romper después con la sociedad burguesa a la que sentían que la jerarquía estaba estrechamente vinculada. El conocimiento de la dura existencia de las clases populares y su participación en las organizaciones sociales aceleraron un proceso que asumió su primera expresión pública, con un gran impacto nacional, el domingo 11 de agosto de 1968.

Aquella madrugada un grupo de doscientos laicos, siete sacerdotes y tres religiosas que trabajaban en las poblaciones de Santiago y se denominaron movimiento Iglesia Joven ocuparon la catedral y colocaron en su frontis una pancarta que rezaba: “Por una Iglesia junto al pueblo y su lucha”. En su manifiesto expresaron que deseaban volver a ser una Iglesia del pueblo, “como en el Evangelio”, viviendo y compartiendo no solo su pobreza, sino también sus luchas; por tanto, rechazaban el tradicional vínculo eclesial con la burguesía e incluso la conciliación social.

Más aún, se atrevieron a denunciar la “violencia” que provocaban “los ricos y los poderosos”, la explotación e incluso “el engaño de una falsa democracia manejada por unos pocos”,

²⁷¹ Silva Solar, Julio y Chonchol, Jacques: *El desarrollo de la nueva sociedad en América Latina*. Universitaria. Santiago de Chile, 1965. En los años anteriores el dirigente comunista Orlando Millas publicó varios artículos e incluso un libro (*Los comunistas, los católicos y la libertad*) donde defendía la confluencia entre marxistas y cristianos.

²⁷² Fernández Fernández, David: *Historia oral de la Iglesia Católica en Santiago de Chile desde el Concilio Vaticano II hasta el golpe militar de 1973*. Universidad de Cádiz. Cádiz, 1996, p. 170.

“la sumisión de las conciencias a través de los monopolios, propietarios de los medios de información”, “la segregación racial, cultural y económica”, “la instrumentalización de la educación en favor de las clases dirigentes”, “la división del pueblo para consagrar su dominación”. En definitiva, la Iglesia Joven quería trabajar “por una nueva Sociedad que dignifique a la persona humana y donde sea posible el amor”²⁷³. Aunque no empleaba las categorías de análisis marxistas, ni planteaba el socialismo como meta, este movimiento impulsó el debate sobre una profunda renovación de la Iglesia y planteó una crítica virulenta de la sociedad capitalista²⁷⁴.

La toma de la catedral finalizó a las seis de la tarde, hora límite que Frei concedió antes de ordenar su desalojo violento, y a partir de entonces la derecha y sus medios de comunicación ya no cesaron de denunciar la “infiltración comunista” en la Iglesia. Por otra parte, la reacción del cardenal Raúl Silva Henríquez, quien suspendió *a divinis* a los siete sacerdotes que participaron en tal acción, aunque después revocó la sanción, anticipó la querella que entre 1971 y 1973 enfrentó a Cristianos por el Socialismo y el episcopado²⁷⁵.

Solo trece días después de la toma de la catedral de Santiago, empezó en Medellín la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, cuyo objetivo era la adaptación de los acuerdos conciliares a la realidad de la iglesia continental y que contó con la presencia por primera vez en suelo americano del obispo de Roma, el papa Pablo VI²⁷⁶. El 6 de septiembre de 1968, en su “Mensaje Final a los pueblos de América Latina”, los prelados trazaron un crudo diagnóstico: “América Latina parece vivir bajo el signo trágico del subdesarrollo, que no solo aparta a nuestros hermanos del goce de los bienes materiales, sino de su misma realización humana. Se conjugan el hambre y la miseria, las enfermedades de tipo masivo y la mortalidad infantil, el analfabetismo y la marginalidad, las profundas desigualdades en los ingresos y las tensiones entre las clases sociales, los brotes de violencia y la escasa participación del pueblo en la gestión por el bien común”²⁷⁷.

Aunque condenó el “capitalismo liberal” y el “sistema marxista”, Medellín fortaleció la opción prioritaria por los pobres que alumbró la Teología de la Liberación y fue una referencia cotidiana para los cristianos que anhelaban transformar la Iglesia y el mundo. Las conclusiones de aquel cónclave también proclamaron que las comunidades cristianas de base eran “el primero y fundamental núcleo eclesial”. Estas comunidades fueron impulsadas en Santiago de Chile desde comienzos de los años 60 por la jerarquía ante la escasez endémica de sacerdotes

²⁷³ Pujadas, Ignasi-Agermanament: *Joan Alsina. Chile en el corazón*. Sígueme. Salamanca, 1978. Apéndice 4. pp. 424-425.

²⁷⁴ *Los cristianos y la revolución. Un debate abierto en América Latina*. Quimantú. Santiago de Chile, 1972. p. 117.

²⁷⁵ Desde los meses finales de 1968 el movimiento Iglesia Joven celebró distintos encuentros y emitió diversas declaraciones públicas y en marzo de 1969 se dotó de una mínima estructura de funcionamiento. Sin embargo, la intensa campaña electoral de 1970 y la formación de Cristianos por el Socialismo en 1971 contribuyeron a que este movimiento languideciera, hasta que la mayor parte de sus miembros se integró a los distintos partidos de izquierda y se disolvió.

²⁷⁶ Véase: *Iglesia y liberación humana. Los documentos de Medellín*. Nova Terra. Barcelona, 1969.

²⁷⁷ *Los cristianos y la revolución...* p. 57.

y la necesidad de abarcar todo el territorio de una ciudad que crecía de manera acelerada, de ahí el papel que otorgó a los laicos como vínculos eclesiales con la comunidad.

Sin embargo, a partir de Medellín y al calor de la naciente Teología de la Liberación y el clima de efervescencia social y política, las comunidades cristianas de base asumieron una dinámica propia y construyeron una nueva forma de ser Iglesia. Con el protagonismo singular de los laicos y la relectura del Evangelio a la luz de la cruda realidad de los pobres, conocieron años de crecimiento y desarrollo y se constituyeron en el espacio natural de los sacerdotes y cristianos comprometidos con la transformación de la sociedad²⁷⁸.

Si la Iglesia Joven estuvo formada por sacerdotes, religiosos y laicos insertos en el medio popular y Medellín simbolizó la influencia de las posiciones liberadoras incluso entre los prelados, la primera expresión de cariz político de todo este proceso fue la fundación del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), propiciada por la crisis del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el fracaso de su proyecto reformista.

Tras su acusado descenso en las elecciones parlamentarias de marzo de 1969 y el asesinato de ocho pobladores en Pampa Irigoin (Puerto Montt) por el Grupo Móvil de Carabineros, las disputas ideológicas en el PDC se agudizaron hasta la ruptura en mayo, cuando la Junta Nacional rechazó la alianza con la izquierda (“el camino de la unidad popular” preconizado por un documento presentado por los diputados Julio Silva Solar y Alberto Jerez)²⁷⁹. Entonces, el senador Rafael Agustín Gumucio, uno de los fundadores de la Falange Nacional en 1937, y Silva Solar, Jerez, Jacques Chonchol y Vicente Sotta renunciaron a su militancia.

En la carta que estos cuatro últimos dirigieron a Jaime Castillo, presidente del partido, expresaron su desazón por el balance de los cinco años de gobierno, que habían consolidado el sistema capitalista en Chile, y le comunicaron que abandonaban el PDC para trabajar por la “unidad popular”, para “unirnos a la lucha del pueblo por la justicia, por la democracia, por la revolución, por la nueva sociedad comunitaria y socialista”²⁸⁰.

Un buen número de militantes y dirigentes, significativo en el caso de una JDC liderada por Rodrigo Ambrosio, intelectuales y profesores universitarios les acompañaron y días después en el teatro del sindicato de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado nació el MAPU, que eligió como secretario general a Jacques Chonchol y el 9 de octubre participó en

²⁷⁸ En su investigación de la Iglesia chilena a partir de fuentes orales, Fernández señala: “Las comunidades se van transformando así en una ‘instancia familiar’; la fe se encarna en una vivencia de la fraternidad que tiene sabores de té y pancito”. En ese proceso las clases populares reinterpretaron el Evangelio tal y como explica Francisca Morales, quien después fue miembro de Cristianos por el Socialismo: “La gente va teniendo acceso a una Palabra que tiene que ver con su vida directamente y que es novedosa porque va descubriendo toda esta preferencia de Dios por el pobre (...) y que los pobres tienen capacidad, fuerza histórica no solo para construir la Iglesia, sino también la sociedad”. Fernández, David: *La “Iglesia” que resistió a Pinochet*. Iepala. Madrid, 1996, pp. 52 y 69.

²⁷⁹ Quezada Lagos, Fernando: *La elección presidencial de 1970*. Santiago de Chile, 1985, p. 41.

²⁸⁰ Pujadas, apéndice 5, pp. 426-428.

la fundación de la Unidad Popular. El MAPU reforzó el pluralismo de la nueva coalición de la izquierda chilena puesto que, por primera vez, junto a marxistas, radicales, socialdemócratas e independientes, participaba una fuerza de matriz cristiana.

Por tanto, en las elecciones presidenciales de 1970 Salvador Allende obtuvo el apoyo (imprescindible, dada su apretada victoria) de numerosos sacerdotes, religiosos y laicos que en 1964 confiaron en la “Revolución en Libertad”. La vieja condena eclesial del marxismo se desmoronó en una parte de la base social para alumbrar un diálogo muy fértil. Algunos sacerdotes incluso participaron activamente en la campaña de la Unidad Popular con la intención de neutralizar la recurrente propaganda que, por ejemplo, suplicaba a la Virgen del Carmen que librara a Chile del “comunismo ateo”, encarnado por cuarta vez en la candidatura de un doctor marxista y masón.

Así, el sacerdote valenciano Antonio Llidó, destinado en Quillota, escribió con ironía a su familia el 17 de septiembre de 1970: “Andábamos convenciendo a las viejas beatas para que votaran por Allende, pues de lo contrario se iban a condenar sin remedio”²⁸¹.

Después de las elecciones presidenciales los sacerdotes que trabajaban en los sectores populares intensificaron sus encuentros para compartir experiencias con el objetivo de profundizar su compromiso social y discernir cómo apoyaban a un gobierno que se proponía impulsar profundas transformaciones estructurales para construir junto a las grandes mayorías un país más justo.

Muchos cristianos que habían respaldado al candidato demócratacristiano también decidieron apoyar a la Unidad Popular, como explicó el sacerdote jesuita José Aldunate: “Yo había votado por Tomic y el día que triunfó Allende fui a la Alameda y vi llegar grandes olas sucesivas de la gente más pobre de Santiago: venían contentos, bailando y cantando, porque por primera vez en su historia tenían un Presidente que iba a responder a sus anhelos y derechos. Ahí vi yo la esperanza de ese pueblo y tomé la resolución de trabajar para que no se viera frustrada”²⁸².

En cambio, la Conferencia Episcopal eludió reconocer la victoria de Allende hasta su ratificación por el Congreso Pleno y difundió una declaración el 24 de septiembre donde expresó su apoyo a los cambios que favorecieran a los más humildes, pero se hizo eco de la campaña del terror al exponer “el miedo a una dictadura, a un adoctrinamiento compulsivo, a perder el patrimonio espiritual de la patria”²⁸³.

El propio Aldunate menciona en sus memorias que en octubre de 1970, en un encuentro de más de doscientos religiosos, pesaba tanto la inquietud por la inminente llegada de la UP

²⁸¹ Antonio Llidó. *Epistolario de un compromiso*. Tàndem Edicions. Valencia, 1999, p. 90. Sobre la lucha de este sacerdote en Chile, véase nuestro trabajo: “Antonio Llidó, un sacerdote revolucionario”. En: García Jordán, Pilar: *Estrategias de poder en América Latina*. Universidad de Barcelona. Barcelona, 2000, pp. 297-311. Y también: Associació Cultural Antoni Llidó y Martí Ferrandiz, José J. (eds.): *Antoni Llidó Mengual. Unes mirades retrospectives*. Universidad de Valencia. Valencia, 2002.

²⁸² Apsi, 28 de diciembre de 1988, p. 11.

²⁸³ *Documentos del Episcopado. Chile, 1970-1973*. Mundo. Santiago de Chile, 1974, pp. 28-30.

al gobierno que el cardenal Raúl Silva les llamó a estar dispuestos incluso al martirio²⁸⁴. Ni siquiera el *Te Deum* ecuménico al que Salvador Allende asistió el mismo día de su investidura presidencial, el 3 de noviembre, conjuró aquellos temores de la jerarquía.

2. La opción por el socialismo

Después de la amplísima victoria de la Unidad Popular en las elecciones municipales, entre el 14 y el 16 de abril de 1971 ochenta sacerdotes se reunieron en una casa de la zona sur de Santiago para debatir sobre la participación de los cristianos en la construcción del socialismo²⁸⁵. El trabajo empezó con el análisis político sobre la evolución del movimiento obrero chileno y el programa de la UP, después debatieron sobre la participación de los cristianos en el proceso revolucionario y finalmente abordaron los problemas prácticos que ello originaba en su trabajo pastoral y la conveniencia de articular un grupo organizado²⁸⁶.

El comunicado final de aquellas jornadas difundido el 16 de abril, conocido como la Declaración de Los Ochenta, aseguró que el capitalismo era la causa esencial de la injusticia social que sufría el pueblo y destacó las esperanzas que el Gobierno presidido por Salvador Allende había despertado en las clases populares con su firme propósito de iniciar la construcción del socialismo. “Nos sentimos comprometidos con este proceso en marcha y queremos contribuir a su éxito. La razón profunda de este compromiso es nuestra fe en Jesucristo, que se ahonda, renueva y toma cuerpo según las circunstancias históricas. Ser cristiano es ser solidario. Ser solidario en este momento en Chile es participar en el proyecto histórico que su pueblo se ha trazado”²⁸⁷.

²⁸⁴ Aldunate Lyon, José: *Un peregrino cuenta su historia*. Ediciones Ignacianas. Santiago de Chile, s.f., p. 105.

²⁸⁵ Sergio Torres, uno de los sacerdotes que participaron en aquellas jornadas, recuerda: “Casi todos nos conocíamos de antes, compartíamos experiencias parecidas y pensábamos de modo similar. Chile es un país pequeño que no cuenta con demasiado clero, así que muchos de nosotros habíamos sido compañeros en el seminario. Otros nos conocíamos desde hacía años por haber coincidido en distintas reuniones y conferencias. También fueron muchos sacerdotes extranjeros que estaban interesados en el asunto. Casi todos nosotros habíamos apoyado a Frei en 1964, pero estábamos muy desilusionados con el resultado de su gestión. Todos creíamos que era necesaria una alternativa a la Democracia Cristiana, algo más radical. El marxismo resultaba muy atractivo”. Smith, Christian: *La teología de la liberación*. Paidós. Barcelona, 1994, p. 236.

²⁸⁶ Entre los ponentes de aquellas jornadas estuvieron Óscar Guillermo Garretón, subsecretario de Economía y dirigente del MAPU, Franz Hinkelammert, investigador del Centro de Estudios de la Realidad Nacional de la Pontificia Universidad Católica (el gran “feudo” académico del MAPU), o el teólogo peruano Gustavo Gutiérrez, autor en 1969 del importante libro *La Teología de la Liberación*, quien dictó la conferencia “Marxismo y cristianismo”, publicada en: *Cristianos latinoamericanos y socialismo*. CEDIAL. Bogotá, 1972, pp. 15-35. Curiosamente la mejor fuente para conocer quiénes participaron en aquellas jornadas es la diatriba escrita contra ellos por una periodista de *El Mercurio*: Donoso Loero, Teresa: *Historia de los Cristianos por el Socialismo en Chile*. Vaitea. Santiago de Chile, 1976, pp. 81-86.

²⁸⁷ *Cristianos por el Socialismo. ¿Consecuencia cristiana o alienación ideológica?* Editorial del Pacífico. Santiago de Chile, 1972, pp. 151-154.

Estos sacerdotes desmintieron la predicada incompatibilidad entre marxismo y cristianismo y se propusieron destruir los prejuicios que la sostenían. Consideraban necesaria la movilización popular para enfrentar los sacrificios que entrañaba la superación del subdesarrollo y la construcción del socialismo y para vencer las resistencias de aquellos sectores sociales que perderían sus privilegios. En consecuencia, apoyaban las medidas que socializaran los medios de producción, como la nacionalización de la gran minería, la estatización de los bancos y de las industrias monopólicas o la aceleración y profundización de la reforma agraria.

Tanto su comunicado final como su conferencia de prensa tuvieron un amplio eco en los medios de comunicación y la repercusión de sus pronunciamientos desencadenó una polémica con la jerarquía que en realidad no concluyó hasta el golpe de Estado²⁸⁸.

La reunión de Los Ochenta coincidió con la Asamblea Plenaria Anual de la Conferencia Episcopal y, en una apresurada respuesta, los obispos aseguraron que los sacerdotes podían tener una preferencia política, pero no adoptar públicamente posiciones partidistas²⁸⁹. “La opción política del sacerdote, si se presenta, como en este caso, a modo de lógica e ineludible consecuencia de su fe cristiana, condena implícitamente cualquier otra opción y atenta contra la libertad de los otros cristianos”, aseguraron los prelados²⁹⁰.

Pocos días después de la primera respuesta de los obispos a Los Ochenta, el cardenal Raúl Silva participó en la marcha del Primero de Mayo convocada por la CUT, caminó junto a la Juventud Obrera Católica en una de las columnas e incluso tomó asiento en la tribuna junto al Presidente Allende y el ministro del Interior, José Tohá²⁹¹.

²⁸⁸ *El Mercurio* publicó el comunicado en su edición del 17 de abril de 1971 y dos días después *El Siglo* le dedicó un elogioso comentario editorial: “El diálogo entre marxistas y cristianos está abierto. Y se trata de un intercambio fraternal de opiniones que da la posibilidad cierta de emprender, en conjunto, tareas que signifiquen acelerar el desarrollo económico del país, terminar con las fórmulas injustas de convivencia social, mejorar y enriquecer el acervo democrático de nuestro pueblo y consolidar nuestro sentido de la independencia nacional”. González Pino, Miguel y Fontaine Talavera, Arturo (eds.): *Los mil días de Allende*. Tomo 1. Centro de Estudios Públicos. Santiago de Chile, 1997, pp. 100-101. Por su parte, el 17 de abril en el diario demócratacristiano *La Prensa* Claudio Orrego descalificó el compromiso de los cristianos con la construcción del socialismo a partir del socorrido anatema del totalitarismo.

²⁸⁹ Al menos un obispo, Carlos González –titular de la diócesis de Talca–, aprobó públicamente aquella declaración. En una carta a sus feligreses con fecha de 21 de junio de 1971 expresó que era “legítimo para un cristiano apoyar la construcción del socialismo en Chile”. Pujades, Ignasi: *Vida, comiat i mort de Joan Alsina*. Proa. Barcelona, 2001, p. 41. Por cierto, en la reedición de su biografía del sacerdote catalán ejecutado en el Puente Bulnes el 19 de septiembre de 1973, Pujades, miembro de la dirección nacional de Cristianos por el Socialismo desde su fundación hasta su regreso a España en mayo de 1972, también evoca su evolución como joven sacerdote barcelonés llegado en 1963 a la diócesis de Valparaíso, donde destacó por sus reflexiones públicas sobre la urgente renovación de la Iglesia, lo que le costó continuas amonestaciones de su obispo, Emilio Tagle, quien en 1972 le suspendió de sus funciones en la parroquia de Forestal Alto (Viña del Mar).

²⁹⁰ *Mensaje Iberoamericano*, n° 68. Madrid, junio de 1971, p. 13.

²⁹¹ La fotografía del Cardenal junto a Allende en la tribuna ilustró la portada del voluminoso libro publicado por la organización integrista Fiducia para probar los supuestos vínculos entre la jerarquía católica y
(continúa en pág. siguiente)

El 27 de mayo el episcopado entregó su documento de trabajo “Evangelio, política y socialismo”, el más importante de los que aprobó durante aquellos mil días²⁹². Preocupados ante las resoluciones de Los Ochenta, los obispos elaboraron un denso texto con un marcado tono admonitorio sobre los riesgos de colaborar con las fuerzas socialistas, cuya afirmación esencial volvió a ser la imposibilidad para cualquier representante oficial de la Iglesia Católica de optar abiertamente por un partido o grupo político determinado²⁹³.

En julio el comité coordinador de Los Ochenta expuso sus reflexiones sobre el documento episcopal y, además de reafirmarse en su compromiso con la construcción del socialismo, aseguró que, al propugnar la humanización del sistema capitalista y condenar el marxismo, los obispos apostaban de manera implícita por una opción política concreta, la democracia cristiana, a pesar de su propia insistencia en el apartidismo²⁹⁴.

En aquel invierno de 1971 también se produjeron otros dos hechos relevantes. Por una parte, en julio 200 sacerdotes se reunieron en Santiago para debatir sobre su apoyo al proceso de transformación social y la necesidad de renovar las estructuras de la Iglesia, sin expresar un respaldo abierto al Gobierno ni asumir el marxismo como después lo hizo el movimiento Cristianos por el Socialismo²⁹⁵.

Por otra, la unidad del PDC volvió a desgarrarse tras su alianza con el Partido Nacional en las elecciones complementarias de Valparaíso, ya que, cuando a finales de julio su dirección rechazó la propuesta de Bosco Parra de prohibir cualquier pacto con la derecha, éste renunció a su militancia y a principios de agosto se consumó una nueva escisión, puesto que le acompañaron ocho diputados, algunos dirigentes y un sector de la JDC para formar la Izquierda Cristiana (IC).

Sus fundadores criticaron la contradicción entre el discurso progresista del PDC y su reciente alianza con la derecha. En su reunión del 3 de agosto decidieron participar en el proceso de construcción del socialismo y tres días después anunciaron su adhesión al programa de la Unidad Popular. A la IC llegaron también los tres parlamentarios del MAPU (Rafael

el Gobierno de Allende: *La Iglesia del silencio en Chile*. Sociedad Chilena de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad. Santiago de Chile, 1976.

²⁹² *Evangelio, justicia y socialismo*. Propaganda Popular Católica. Madrid, 1972, pp. 95-151.

²⁹³ Para una defensa de estas posiciones, véase: Pacheco Pastene, Luis: *El pensamiento sociopolítico de los obispos chilenos. 1962-1973*. Salesiana. Santiago de Chile, 1985, pp. 153-203. En todo caso, coincidimos con Roberto Celedón en que la posición oficial del episcopado se distanció del extremismo de la derecha y de los sectores integristas que, como hemos señalado, denunciaron la “infiltración marxista” en la Iglesia. Celedón, Roberto: “Los cristianos y el Gobierno Popular de Salvador Allende”. *Plural*, n° 2. Agosto-diciembre de 1983, pp. 33-52. Instituto para el Nuevo Chile de Rotterdam.

²⁹⁴ Documento íntegro consultado en el archivo de la Fundación CIDOB de Barcelona. Puede revisarse un extracto en: Richard, Pablo: *Cristianos por el socialismo. Historia y documentación*. Sígueme. Salamanca, 1976, pp. 221-231. Richard, uno de los teólogos de la liberación chilenos más importantes, fue miembro de la dirección nacional de este movimiento.

²⁹⁵ Véase: Bolton, Roberto: “Los 200”. En: *Crónicas de una Iglesia Liberadora*. LOM Ediciones. Santiago de Chile, 2000, pp. 101-106.

Agustín Gumucio, Alberto Jerez y Julio Silva Solar) y el ministro de Agricultura, Jacques Chonchol²⁹⁶, disconformes con la asunción por este partido de los postulados marxistas-leninistas y convencidos de la necesidad de ofrecer un cauce político propio a los sectores cristianos que apoyaban o podían apoyar al Gobierno²⁹⁷.

En sus jornadas de abril, con la intención de evitar el paralelismo político y eclesial, Los Ochenta rehusaron fundar un movimiento como los existentes en Argentina (Sacerdotes del Tercer Mundo) o Colombia (Golconda) y solo eligieron un comité coordinador compuesto por delegados de las diferentes zonas de Santiago y algunas provincias²⁹⁸.

Sin embargo, ante el peligro de ser un movimiento ambiguo, sin definiciones ni representantes, en su reunión del 1 de septiembre de 1971 el comité coordinador decidió crear un comité ejecutivo, la figura del secretario general (el elegido fue el jesuita Gonzalo Arroyo, profesor de la Universidad Católica) y un secretariado, financiado por los grupos de base y que contó con un secretario ejecutivo y una secretaria dedicados tiempo completo a este trabajo. En aquella reunión se dio al secretariado la denominación de Secretariado Sacerdotal de Cristianos por el Socialismo, aunque en la jornada nacional de diciembre suprimieron el adjetivo “sacerdotal” y más adelante hablaron tan solo de movimiento Cristianos por el Socialismo.

Aquel año se cerró con el histórico encuentro de casi un centenar de sacerdotes de Cristianos por el Socialismo con Fidel Castro el 29 de noviembre en los jardines de la Embajada de Cuba. Durante casi dos horas y en un clima de camaradería el comandante cubano expresó su sorpresa ante la fortaleza del apoyo cristiano al proceso revolucionario y aseguró que la alianza entre marxistas y cristianos era “estratégica” y no “táctica”²⁹⁹.

En el acto de despedida que le brindó el pueblo chileno en el Estadio Nacional el 2 de diciembre, Fidel Castro mencionó en su discurso la indignación que su entrevista con el cardenal Silva Henríquez y su encuentro con Cristianos por el Socialismo habían suscitado en la derecha. Respecto a su reunión con éstos, aseguró: “Teníamos muchas cosas que conversar con

²⁹⁶ Chonchol explicó así la decisión de abandonar el MAPU: “El proceso de construcción del socialismo en Chile obliga a la unidad del pueblo y políticamente a nosotros nos consta que, si bien los partidos marxistas son un sector muy determinante del pueblo y de la clase trabajadora, no son todo el pueblo y no son toda la clase trabajadora. Hay muchos sectores populares que no han ido y no van a ir a los partidos marxistas, por distintas razones, culturales, filosóficas e ideológicas, pero que son elementos fundamentales en la unidad del pueblo y en la construcción del socialismo. Y como el proceso del socialismo tienen que hacerlo los sectores marxistas, los sectores cristianos y otros sectores que no son ni marxistas ni cristianos, creíamos que era necesario en Chile –y cuando entramos al MAPU pensamos que ése era su destino– la construcción de un instrumento político capaz de atraer a los sectores populares de inspiración cristiana”. *Chile Hoy*, n° 13. 8 de septiembre de 1972, p. 32.

²⁹⁷ Corvalán Marquéz, Luis: *Los partidos políticos y el golpe del 11 de septiembre*. CESOC. Santiago de Chile, 2000, pp. 104-108.

²⁹⁸ Richard, pp. 54-55.

²⁹⁹ Véase la versión íntegra de la reunión de Fidel Castro con Cristianos por el Socialismo en: *Cuba-Chile. Encuentro simbólico entre dos procesos históricos*. Ediciones Políticas. Comisión de Orientación Revolucionaria del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. La Habana, 1972, pp. 412-429.

la izquierda cristiana y con los sacerdotes chilenos, amplias cosas, fundadas no en oportunismos sino en principios; (...) en la convicción de la conveniencia, de la posibilidad y de la necesidad de unir en el ámbito de esta comunidad latinoamericana a los revolucionarios marxistas y a los revolucionarios cristianos. (...) Porque muchos han querido tomar la religión para defender ¿qué? La explotación, la miseria, el privilegio. Para convertir la vida del pueblo en este mundo en un infierno, olvidándose de que el cristianismo fue la religión de los humildes”³⁰⁰.

Fidel Castro invitó a una delegación de Cristianos por el Socialismo a visitar Cuba, viaje que realizaron doce sacerdotes en marzo de 1972, entre ellos el catalán Ignasi Pujades, miembro de su secretariado³⁰¹. En su parroquia de Forestal Alto (Viña del Mar) Pujades impulsó en octubre de 1971 la creación de la Comunidad de Cristianos Revolucionarios “Néstor Paz”, en homenaje al guerrillero boliviano muerto un año antes, con el propósito de vivir la fe cristiana desde el seno de la revolución chilena.

Desde Barcelona, Pujades recuerda su participación en este movimiento: “Todos estos sacerdotes teníamos esta semilla dentro e hicimos primero un proceso personal, determinado por la experiencia vital, cotidiana, y descubrimos que los comunistas no se comían a los niños, sino que eran gente normal con una gran inquietud social y propuestas avanzadas. Después fuimos elaborando un cuerpo de pensamiento que se concretó en la creación de Cristianos por el Socialismo. Conseguimos que la Iglesia ya no estuviera encuadrada en la derecha y el PDC, organizamos un movimiento liberador y necesario”³⁰².

Por su parte, Francisca Morales, religiosa de la Congregación del Amor Misericordioso, considera que fue “un grupo muy importante que nos ayudó a muchos sacerdotes y religiosas a entender la fe con los ojos de los pobres, a vivir una inserción más lúcida en el mundo de los pobres”. Después de varios años de trabajo en una población santiaguina, sus planteamientos le proporcionaron respuestas para sus inquietudes y tomó conciencia de las profundas injusticias que padecían “los pobres”, consecuencia de la estructura de la sociedad capitalista que debían transformar³⁰³.

Algunos prelados simpatizaron con los planteamientos de este movimiento, pero prefirieron permanecer en su orilla. Helmut Frenz, obispo de la Iglesia Evangélica Luterana, incluso participó en dos de sus encuentros, sin embargo, señala, “no me atreví a hacer pública mi adscripción porque mi Iglesia era muy conservadora, incluso reaccionaria, y no quise abrir este frente político-ideológico dentro de la comunidad chileno-alemana”³⁰⁴. Y Carlos

³⁰⁰ *Cuba-Chile...* pp. 484-485.

³⁰¹ Después de su viaje, aquellos doce sacerdotes difundieron un “Mensaje a los cristianos de América Latina”, que abrió un nuevo frente en la polémica entre Cristianos por el Socialismo y el episcopado. Véase esta declaración en: Richard, pp. 242-244.

³⁰² Entrevista del autor a Ignasi Pujades.

³⁰³ Fernández, pp. 99-101.

³⁰⁴ Entrevista del autor a Helmut Frenz. Hoy quien presidiera el Comité de Cooperación para la Paz junto a monseñor Fernando Ariztía forma parte de Cristianos por el Socialismo en Alemania.

Camus, entonces obispo de Copiapó, resalta su amistad con muchos militantes de Cristianos por el Socialismo, “pero me parecía que era una opción política muy clara que no se correspondía con la condición de sacerdote”³⁰⁵.

3. De Medellín a Santiago

La polémica entre el episcopado y Cristianos por el Socialismo se agudizó durante los primeros meses de 1972 a raíz de la preparación de un encuentro latinoamericano de este movimiento en Santiago, discusión inaugurada el 12 de enero con una misiva de monseñor Carlos Oviedo a las conferencias episcopales de América Latina donde advertía que desaprobaban ese cónclave³⁰⁶. Algunas semanas después el Cardenal comunicó a Gonzalo Arroyo que rehusaba patrocinarlo porque, después de leer el documento de trabajo, consideraba que sería una reunión política con el objetivo de implicar a los cristianos y la Iglesia en la lucha por “la revolución marxista”³⁰⁷.

Arroyo le respondió con otra misiva donde aclaró que, si un amplio grupo de cristianos (católicos, protestantes, sacerdotes, religiosas y laicos) se reunía para reflexionar sobre la injusta situación de América Latina, la liberación de los oprimidos, el comportamiento de los creyentes en la lucha política y la incidencia de la fe en este proceso, tal encuentro tendría una inevitable repercusión política, como, por otra parte, la tuvo Medellín. También le explicó que el fin del Encuentro no era la propagación de la ideología marxista, ni reforzar a los partidos de esta tendencia, sino reflexionar acerca de la liberación del pueblo como una exigencia de la fe³⁰⁸.

De esta manera, entre el 23 y el 30 de abril de 1972, pocos días después de la celebración de la III Conferencia de la UNCTAD en el Edificio Gabriela Mistral (construido por los trabajadores chilenos en un tiempo récord), el sindicato obrero de la industria textil Hirmas acogió el Primer Encuentro Latinoamericano de Cristianos por el Socialismo, con la participación de 400 delegados de todos los países americanos e invitados europeos y bajo la presidencia del único obispo que asistió, Sergio Méndez Arceo, titular de la diócesis mexicana de Cuernavaca.

³⁰⁵ Entrevista del autor a Carlos Camus.

³⁰⁶ *Cristianos latinoamericanos y socialismo*, pp. 201-203.

³⁰⁷ *El Cardenal nos ha dicho. 1961-1982*. Salesiana. Santiago de Chile, 1982, pp. 142-148. Un año después, el arzobispo de Santiago dedicó un amplio espacio de un libro suyo a negar la compatibilidad entre la lucha de clases y el Evangelio: Silva Henríquez, Raúl: *La misión social del cristiano: conflicto de clases o solidaridad humana*. Ediciones Paulinas. Santiago de Chile, 1973, pp. 56-72.

³⁰⁸ Farias, Víctor (comp.): *La izquierda chilena (1969-1973). Documentos para el estudio de su línea estratégica*. Centro de Estudios Públicos. Santiago de Chile, 2000. Tomo 3, pp. 2.157-2.160.

En un momento en que la alianza del Partido Demócrata Cristiano y el Partido Nacional se había soldado con la acusación constitucional contra el ministro José Tohá, sus candidaturas conjuntas en dos elecciones parciales en Linares y Colchagua y O'Higgins, la aprobación del proyecto de reforma constitucional para la definición de las áreas de la economía patrocinado por los senadores Juan Hamilton y Renán Fuentealba y la "Marcha de la Democracia" del 12 de abril de 1972³⁰⁹, en su mensaje a los delegados de aquel Encuentro Latinoamericano el Presidente Salvador Allende afirmó: "La fuerza política que hoy gobierna Chile, y que tengo el honor de representar, es la culminación de una alianza permanente, férrea e inquebrantable entre cristianos y no cristianos, entre hombres de distinto signo ideológico, que han entendido con precisión que el verdadero conflicto de nuestro tiempo, y por tanto la gran línea divisoria, no se da en el plano religioso o en el de las ideas filosóficas, sino entre el imperialismo y los países dependientes y, en el interior de estos, entre la gran burguesía explotadora y la inmensa masa de los explotados"³¹⁰.

El documento final del Primer Encuentro Latinoamericano de Cristianos por el Socialismo proclamó que se identificaban como cristianos que pensaban su fe a la luz del proceso de liberación de los pueblos y de su compromiso con la construcción de una sociedad socialista, única forma de enfrentarse al imperialismo y romper la dependencia económica. Y constató que aumentaba la conciencia de la necesidad de una alianza estratégica de los cristianos revolucionarios con los marxistas, lo que significaba "caminar juntos en una acción política común hacia un proyecto histórico de liberación"³¹¹.

³⁰⁹ Durante el intenso debate parlamentario y comunicacional en torno al conflicto de la formación del área de propiedad social, el PDC defendió su propuesta de "socialismo comunitario", frente al "socialismo marxista" cuya estación de llegada inevitable a su juicio era un régimen de corte estalinista. En aquellas semanas *Punto Final* publicó una de sus fantásticas viñetas para criticar al PDC, donde aparecían cuatro rostros muy reflexivos que se hacían las "4 preguntas que inquietan a la Humanidad": "¿Qué somos?"; "¿De dónde venimos?"; "¿A dónde vamos?"; "¿Qué es el socialismo comunitario?". *Punto Final*, n° 154. 28 de marzo de 1972, p. 25.

³¹⁰ Farías, tomo 3, p. 2.222.

³¹¹ Girardi, Giulio: *Cristianos por el socialismo*. Laia. Barcelona, 1977, pp. 203-223. Véase también: *Los cristianos y el socialismo. Primer encuentro latinoamericano*. Siglo XXI. Buenos Aires, 1973. Respecto a los Cristianos por el Socialismo, véanse estos dos artículos publicados en aquellos meses. Por un lado, el editorial del número 209 de *Mensaje* (junio de 1972; pp. 301-308); por otro, el del dirigente comunista Miguel Castillo Didier publicado en el número 144 de *Principios* (revista teórica del Comité Central del Partido Comunista de Chile), en marzo-abril de 1972 (pp. 37-59). Desde el ángulo totalmente opuesto, véase la diatriba de Jaime Guzmán: "La Iglesia chilena y el debate político". En: *Visión crítica de Chile*. Portada. Santiago de Chile, 1972, pp. 295-329. Obviamente, Guzmán descalificó el "diálogo" entre marxistas y cristianos con los argumentos preconciliares manidos que describen al "comunismo ateo" como responsable de todos los males. También es interesante revisar otro trabajo de aquel momento del destacado teólogo brasileño Hugo Assmann: "El cristianismo, su plusvalía ideológica y el costo social de la revolución socialista". *Cuadernos de Estudio de la Realidad Nacional* n° 12. Abril de 1973, pp. 154-179. Desde las filas del PDC, con especial protagonismo de nuevo de Claudio Orrego, se publicaron varios artículos de análisis en *La Prensa y Política y Espíritu* para combatir ideológicamente las conclusiones del Encuentro. Véase una selección en: *Cristianos por el Socialismo. ¿Consecuencia cristiana o alienación ideológica?*

En su parte final, reprodujeron las conocidas palabras de Ernesto Che Guevara que anhelaban convertir en proféticas: “Cuando los cristianos se atrevan a dar un testimonio revolucionario integral, la revolución latinoamericana será invencible, ya que hasta ahora los cristianos han permitido que su doctrina sea instrumentalizada por los reaccionarios”.

Uno de los sacerdotes que participaron fue el holandés Francisco Weijmer, destinado en la parroquia de La Calera junto con dos compatriotas de su congregación del Sagrado Corazón de Jesús, Gilberto de Jong y Enrique Dielis. En esta ciudad obrera cuya vida giraba en torno a la fábrica de cemento El Melón (una de las primeras estatizadas por la UP) y donde el Partido Comunista tenía una influencia muy importante, Weijmer se comprometió junto con sus dos compañeros en el proceso revolucionario y participaron con entusiasmo en Cristianos por el Socialismo. “Para la mayoría de la gente en La Calera el Gobierno de Allende era un sueño hecho realidad”.

Sobre su experiencia en este movimiento, destaca que con su asistencia a las reuniones nacionales, en Santiago, y a las provinciales en Valparaíso aprendió a analizar la situación política del país y de su ciudad con otras claves, muy diferentes de la jerga eclesíastica. “Allí me despedí definitivamente del lenguaje cristiano. ‘Lucha de clases es lucha de clases y punto, nada de ‘pecado’ o algo por el estilo’, decían. Era otro lenguaje y, sobre todo, otra manera de ser y actuar. Después de cada reunión volví a La Calera con mucha motivación, ánimo y ganas de compartir lo que había aprendido”³¹².

Ante el impacto nacional e internacional de las conclusiones del Primer Encuentro Latinoamericano de Cristianos por el Socialismo y coordinados por el secretario privado del Cardenal³¹³, en mayo más de 600 sacerdotes chilenos suscribieron una declaración de rechazo, donde reafirmaron su comunión con los obispos y lamentaron “los intentos de politización del clero”³¹⁴.

³¹² Entrevista del autor a Francisco Weijmer.

³¹³ Una semana después, en un artículo en *Le Monde*, el teólogo italiano Giulio Girardi planteó que el Primer Encuentro Latinoamericano de Cristianos por el Socialismo de Santiago representaba a la comunidad cristiana de base de todo el continente y lo equiparó a la Conferencia de Medellín. Girardi señaló que, mientras en Medellín se habló de desigualdades entre los seres humanos, en Santiago se trató de la lucha de clases; mientras Medellín exigió reformas rápidas y valientes, Santiago se pronunció con decisión por la revolución socialista. “Santiago proclama que el amor cristiano solo se convertirá en una fuerza histórica cuando asuma la lucha de clases. En efecto, la libertad de los hombres y de los pueblos nunca será otorgada: las burguesías nacionales y el imperialismo norteamericano no dejarán el poder más que si les es arrebatado por las clases populares”. “Los cristianos y el socialismo: De Medellín a Santiago”. *Le Monde*, 7-8 de mayo de 1972. En: Girardi, pp. 225-228.

³¹⁴ Velásquez Almonacid, Marlén: *Episcopado chileno y Unidad Popular*. Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez. Santiago de Chile, 2003, pp. 112-113.

4. Derrota, condena episcopal y martirio

Las últimas jornadas anuales de Cristianos por el Socialismo, celebradas entre el 24 y el 26 de noviembre de 1972 en la comuna de Padre Hurtado, demostraron el vigor que en tan poco tiempo había logrado este movimiento y de nuevo alcanzaron resonancia nacional, en aquella ocasión por la ácida discusión entre la dirigente comunista Mireya Baltra y Miguel Enríquez en el foro político en el que además intervinieron Hernán del Canto (ministro secretario general de Gobierno y dirigente socialista), José Antonio Viera-Gallo (subsecretario de Justicia y dirigente del MAPU) y Bosco Parra (secretario general de la Izquierda Cristiana) y en el que Radomiro Tomic declinó participar³¹⁵.

Participaron 350 delegados de 18 provincias (140 sacerdotes, 20 pastores evangélicos, 60 religiosas y 130 laicos), así como siete observadores de Perú, Brasil, Venezuela, Suiza y Francia y, en calidad de invitados, tres obispos³¹⁶. Desde mayo todos los grupos de base habían preparado este encuentro nacional y en septiembre y octubre se celebraron jornadas regionales en varias provincias a partir de cuatro documentos para el debate: 1) Etapas y perspectivas de la lucha ideológica en Chile. 2) Lo “cristiano” en la encrucijada nacional. 3) Críticas del socialcristianismo a Cristianos por el Socialismo. 4) Los cristianos y los intereses históricos de la clase trabajadora.

En aquellas jornadas una de las comisiones de trabajo elaboró una definición de Cristianos por el Socialismo que nos parece muy plausible: “CPS es un lugar de encuentro de cristianos que militan o no en diferentes partidos de izquierda, pero que tienen el mismo compromiso con la clase trabajadora y su lucha por el socialismo. Asumen el análisis marxista y tienen como objetivo inmediato colaborar en la conquista del poder por parte de la clase trabajadora. CPS es una tribuna para denunciar el socialcristianismo y grupos que usan el cristianismo para oprimir al pueblo y CPS muestra en los hechos que no es incompatible ser cristiano y ser revolucionario. Además, CPS da un aporte a la unidad de los revolucionarios, sin caer en bendiciones de partidos y gobiernos. Por último, CPS reúne a los cristianos que quieren vivir su fe de manera revolucionaria”³¹⁷.

Mientras tanto, los grupos de base de este movimiento también hacían lo posible por concienciar a los creyentes de la realidad de Chile y los retos decisivos que el movimiento popular afrontaría el año siguiente. En Quillota, por ejemplo, a lo largo de 1972 se creó la Comunidad Quillotana de Cristianos por el Socialismo, liderada por Antonio Llidó, quien en mayo había sido suspendido de sus funciones sacerdotales por Emilio Tagle y quien en diciembre de aquel año asumió la jefatura política del Comité Local Interior del MIR en la provincia de Valparaíso.

³¹⁵ Véanse los documentos preparatorios de aquellas jornadas y el discurso de Gonzalo Arroyo en: Fierro, Alfredo y Mate, Reyes: *Cristianos por el Socialismo*. Verbo Divino. Estella, 1977, pp. 245-258 y 367-391.

³¹⁶ Richard, pp. 136-147.

³¹⁷ Richard, pp. 136-146.

Fue precisamente entonces cuando dicha Comunidad distribuyó una octavilla que decía: “El Nacimiento de Cristo ‘no’ fue una Feliz Navidad, fue el humilde nacimiento de un Dios hecho hombre que se entregó totalmente por la salvación de los pobres. ¿Será esta una ‘Feliz Navidad’ para los padres de tantos niños que mueren por desnutrición; para las familias de los 300.000 cesantes que hay en Chile; para las miles de niñas que se prostituyen en busca de sustento; para los 700.000 alcohólicos y sus familiares; para tanta gente sin techo, sin escuela, sin hospitales? ¿Será 1973 un próspero años para los chilenos, cuando los yanquis nos someten a un bloqueo cada vez más brutal y los poderosos de nuestro país se organizan para hundir todavía más a los oprimidos? La Navidad Cristiana es el llamado a continuar la misión que Cristo comenzó y que para nosotros se traduce en comprometerlos incondicionalmente en la lucha que sostienen los trabajadores por su liberación”³¹⁸.

Después del sorprendente 43,4% de los votos obtenidos por la Unidad Popular en las elecciones parlamentarias del 4 de marzo de 1973³¹⁹, que impidió la presentación de una acusación constitucional contra el Presidente Allende, la batalla política viró hacia el ámbito de la educación, rubro en el que el Gobierno podía presentar una eficaz gestión porque en apenas dos años y medio se habían duplicado los 60.000 niños matriculados en la enseñanza preescolar, 259.300 niños más asistían a la escuela primaria y los que iban a la secundaria habían pasado de 302.000 a 464.200. Los alumnos de la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado se habían duplicado, de 50.867 a 96.000, con un número considerable de trabajadores que cursaban estudios en esta última en virtud del convenio suscrito por su rector, Enrique Kirberg, con la CUT. Además, solo durante 1972 el Gobierno había repartido 4.205.000 libros de texto entre los escolares³²⁰.

A pesar de ello, cuando a mediados de marzo de 1973 el Gobierno presentó su proyecto de reforma educacional, la Escuela Nacional Unificada (ENU)³²¹, cuyos planteamientos centrales habían sido consensuados por todos los sectores representativos en el Primer Congreso Nacional de Educación celebrado en diciembre de 1971, se encontró por primera vez con la jerarquía católica alineada con el Partido Nacional y el PDC y, por si fuera poco, a comienzos

³¹⁸ Documento consultado en el archivo de la Asociación Cultural Antonio Llidó (Valencia, España).

³¹⁹ “El pueblo oprimido está mostrando más fuerza, conciencia y organización para conducir el destino de Chile. Los trabajadores llegarán a controlar el proceso de producción y distribución de los bienes del país. El poder auténtico que surge del pueblo hace temblar a los poderosos y vacilantes. El poder popular y los partidos proletarios son una esperanza para los pobres y un terremoto para el ‘orden’ burgués y el capitalismo. Como cristianos, reconocemos en la fuerza del pueblo la voz de Cristo”, declaró la dirección nacional de Cristianos por el Socialismo sobre el resultado de la batalla electoral de marzo de 1973. Richard, pp. 267-268.

³²⁰ Silva, Alberto: “Chile 1970-1973: La política educativa de la Unidad Popular (I)”. *Cuadernos de Pedagogía*, n° 4. Abril de 1975, pp. 19-23.

³²¹ Sobre la reforma educacional propuesta por el Gobierno de Allende, véase: Núñez Prieto, Iván: *La ENU entre dos siglos. Ensayo histórico sobre la Escuela Nacional Unificada*. LOM Ediciones y Centro de Investigaciones Diego Barros Arana. Santiago de Chile, 2003.

de abril, después de que el general Carlos Prats se retirara del Ejecutivo, desencadenó sonoras críticas de connotados oficiales de las Fuerzas Armadas.

Así, el 28 de marzo el Cardenal pidió al Presidente Allende una demora en su aplicación para dar tiempo al conjunto de la sociedad y en particular a la comunidad educativa a debatirla y mejorarla. Silva Henríquez destacó algunos aspectos positivos, como la universalización de la educación pública gratuita y la integración del estudio y el trabajo, pero criticó su inspiración socialista y no cristiana³²². Al día siguiente la dirección nacional de Cristianos por el Socialismo emitió una declaración pública en la que llamó a debatir sobre la educación que debían recibir sus hijos y abogaron “por una educación liberadora al servicio de las grandes mayorías de nuestro pueblo”³²³.

Durante semanas los militantes de este movimiento trabajaron para defender esta propuesta de reforma educacional, en particular aquellos que, como María Elena López (miembro de la Comunidad Quillotana de Cristianos por el Socialismo), eran maestros: “Hacíamos reuniones con profesores, estudiantes universitarios, alumnos y apoderados para dar a conocer la ENU, actividades que no fueron fáciles y nos causaron muchos problemas; éramos muy mal mirados y tildados de ‘comunistas’ ”³²⁴. Finalmente, en abril el Gobierno decidió aplazar la tramitación de la ENU.

El 11 de abril de 1973 la Asamblea Plenaria del episcopado, reunida en Punta de Tralca, remitió al sacerdote Raúl Hasbún, director del Canal 13 de Televisión, una carta de apoyo frente a las acusaciones de la Unidad Popular de estar involucrado en el asesinato de un obrero en Concepción³²⁵. Aquella misiva, que empezaba con un familiar “querido Raúl”, proseguía con estas palabras: “Te hemos manifestado ya nuestra adhesión ante los ataques de que has sido víctima en los últimos tiempos. Ha sido la expresión de nuestra amistad y aprecio a un sacerdote, que podrá ser vehemente, pero que ha sido siempre un servidor de la Iglesia, leal y dedicado, en quien tenemos plena confianza”.

Estas líneas de apoyo a un sacerdote que en sus comentarios diarios en la segunda televisión del país promovía una cruzada contra el marxismo desnudan, a nuestro juicio, la hipocresía del episcopado, empecinado en condenar la “opción política” de Cristianos por el Socialismo³²⁶.

³²² Mensaje, n° 209. Junio de 1972. En: *Chile visto por Mensaje. 1971-1981*. Aconcagua. Santiago de Chile, 1981, pp. 60-62.

³²³ Richard, pp. 269-271.

³²⁴ Entrevista del autor a María Elena López.

³²⁵ En marzo de 1973 varios miembros de Patria y Libertad, entre ellos Michael Townley, asesinaron a un obrero en Concepción durante una operación ordenada por Hasbún y Pablo Rodríguez, jefe de este grupúsculo fascista. El 20 de diciembre de 2004 Hasbún fue interrogado por el juez Alejandro Solís para esclarecer su relación con la DINA y sus visitas a Villa Grimaldi cuando este recinto era su mayor centro de detención, tortura y desaparición.

³²⁶ *Documentos del Episcopado...* pp. 158-159. Hasbún, que también tenía una extraordinaria audiencia en medios como *El Mercurio*, solía (y suele) pronunciar exabruptos como este del 1 de abril de 1973 en el Canal 13, en la que se adelantó varios meses al general Leigh: “Al marxismo le es consustancial la mentira, necesita como las moscas nutrirse de la mugre, de la basura... es como un cáncer que necesita de un organismo gangrenado”. *Chile, una esperanza aplastada*. Verbo Divino. Estella, 1975, p. 207.

En el invierno de 1973 los Cristianos por el Socialismo, como parte que eran del movimiento popular, se movilizaron en defensa del Gobierno contra la desestabilización política, económica y social promovida por la oposición. El 5 de julio su secretariado nacional elaboró un pequeño volante de dos páginas, “Amigo cristiano, ahora... ¿estás con el pueblo o contra el pueblo?”, que fue distribuido en poblaciones, fundos, fábricas y escuelas. En él, después de un somero análisis de la situación política tras el *tancao* del 29 de junio, enumeró una relación de instrucciones y tareas, como el trabajo en las organizaciones que resguardaban el abastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, el apoyo a las directrices que marcaran la CUT, los comandos comunales y las organizaciones de los pobladores, la atención a las radios de la izquierda y, además, el establecimiento de lazos fraternales “con nuestros hermanos de clase, los carabineros y soldados que viven en nuestras poblaciones”³²⁷.

El domingo 9 de septiembre de 1973 tuvo lugar la última acción pública de este movimiento, cuando su secretario general se dirigió a todo el país por Televisión Nacional para responder a Raúl Hasbún, quien desde su tribuna diaria en el Canal 13 había exigido la renuncia del Presidente Allende. Dos días después, el golpe militar aniquiló todas las creaciones de aquellos mil días de revolución, entre ellas Cristianos por el Socialismo.

La Conferencia Episcopal jamás condenó el derrocamiento del Gobierno constitucional del Presidente Salvador Allende y la destrucción de la democracia. El 13 de septiembre su comité permanente aprobó una declaración que expresó su inmenso dolor por “la sangre que ha enrojecido nuestras calles” y pidió “respeto por los caídos en la lucha” y “moderación frente a los vencidos, que se tenga en cuenta su sincero idealismo”, aunque también llamó a la ciudadanía a cooperar con la junta militar en “la tarea de restaurar el orden institucional y la vida económica del país”³²⁸. No obstante, hubo prelados como Emilio Tagle o Augusto Salinas que aplaudieron el golpe de Estado y el exterminio del movimiento popular³²⁹ e incluso monseñor Alfredo Cifuentes llegó a donar su anillo episcopal a la junta militar³³⁰.

³²⁷ Richard, pp. 187-189.

³²⁸ *Chile, una esperanza aplastada*, pp. 241-242. Véase también el primer *Te Deum* del Cardenal en presencia de la junta militar, que fue un acto ecuménico de “oración por la patria”: Cavallo, Ascanio: *Los Te Deum del Cardenal Silva Henríquez en el régimen militar*. Copygraph. Santiago de Chile, 1988, pp. 15-18. Para un análisis muy crítico de la posición de la jerarquía católica ante el golpe, véase: Hinkelammert, Franz J.: *La ideología de sometimiento. La Iglesia católica chilena frente al golpe: 1973-1974*. EDUCA. Costa Rica, 1977.

³²⁹ Lira, Elizabeth y Loveman, Brian: *Las ardientes cenizas del olvido. Vía chilena de reconciliación política (1932-1994)*. LOM Ediciones. Santiago de Chile, 2000, p. 425. Silva Solar, Julio: *Carta abierta a monseñor Medina*. Planeta. Santiago de Chile, 1999, p. 64. Tagle tuvo conocimiento directo de las violaciones a los derechos humanos que se produjeron en el territorio de su diócesis, ya que Francesc Puig, otro sacerdote barcelonés que formaba parte de Cristianos por el Socialismo y trabajaba en Quilpué desde 1963, estuvo detenido durante veinte días en varios recintos y en el buque *Lebu* y fue torturado. Cuando fue dejado en libertad por las Fuerzas Armadas para ser expulsado del país, el vicario Bosaña le llevó ante Tagle, quien al ver su cuerpo demacrado solo le puso una mano en la espalda y musitó: “Recuerdos a tu mamá”. Puig i Busquets, Francesc: *Què m'ha passat? En la fe, en la política, en l'amor*. Mediterrània. Barcelona, 2004, p. 244.

³³⁰ Cruz, María Angélica: *Iglesia, represión y memoria. El caso chileno*. Siglo XXI. Madrid, 2004, p. 6.

Aquel mismo 13 de septiembre de 1973 el comité permanente del episcopado también aprobó el documento “Fe cristiana y actuación política”, una condena inquisitorial en toda regla de Cristianos por el Socialismo: “Por lo tanto, y en vista de los antecedentes que hemos señalado, prohibimos a sacerdotes y religiosos (as) que formen parte de esa organización...”³³¹.

Sin embargo, Cristianos por el Socialismo decidió a lo largo de varias reuniones clandestinas celebradas después del golpe de Estado desaparecer como movimiento para facilitar la integración de sus miembros en las organizaciones eclesiales de base y desde allí denunciar la represión y realizar un trabajo solidario con los perseguidos, así como intentar avivar la esperanza y alentar la resistencia a la dictadura entre las clases populares³³².

Sus miembros corrieron la misma suerte que el resto de militantes del movimiento popular que sostuvo el Gobierno de Allende. Según Pablo Richard, al menos 120 sacerdotes católicos, 30 pastores protestantes, 35 religiosos y 200 laicos que pertenecían a Cristianos por el Socialismo fueron expulsados de Chile, buena parte de ellos después de ser detenidos y torturados, mientras que al menos 32 fueron asesinados, entre ellos Joan Alsina³³³, Miguel Woodward, Etienne Pesle, Gerardo Poblete, Omar Venturelli o Antonio Llidó, el único de ellos que forma parte de la relación de detenidos desaparecidos³³⁴.

Sin embargo, a pesar de los innumerables testimonios que recibieron sobre el genocidio desencadenado por la junta y de su compromiso con la ayuda a las víctimas de las violaciones

³³¹ Conferencia Episcopal de Chile: “Fe cristiana y actuación política”. *Contacto*, n° 1-2. México, enero-abril de 1975, pp. 14-39.

³³² En noviembre de 1973 se publicó en Chile de manera clandestina un escrito mimeografiado, el último documento de Cristianos por el Socialismo, titulado “El Reino de Dios sufre violencia, y en Chile...”, incluido en: *Chile, masacre de un pueblo. Cristianos frente a los hechos*. Resistencia y Solidaridad. Lima, 1974, pp. 66-97. Este texto fue publicado también en España: *Desde Chile*. Sígueme. Salamanca, 1974. Véanse también dos trabajos de Gonzalo Arroyo: “Nota sobre la Iglesia y los cristianos de izquierda a la hora del putsch en Chile”. *Latin American Perspectives*, n° 1. Primavera de 1975, pp. 89-99. *Golpe de estado en Chile*. Siglo XXI. Buenos Aires, 1974.

³³³ Sobre la vida de Joan Alsina en Chile y su martirio, véase nuestro trabajo sobre los cinco primeros años de la dictadura cívico-militar, con el testimonio inédito de su hermana María: *Después de la lluvia. Chile, la memoria herida*. Cuarto Propio. Santiago de Chile, 2004. pp. 89-101.

³³⁴ Pablo Richard denunció la represión ejercida por la jerarquía contra quienes dentro de la Iglesia optaron por la construcción del socialismo. “Cuando el poder militar desata el fanatismo ‘antimarxista’ y condena a muerte a los partidos populares en nombre de ‘Dios’ y la ‘Patria’, los obispos aprovechan el momento para condenar al movimiento Cristianos por el Socialismo, presentándolo como un movimiento político. Cuando los Cristianos por el Socialismo, por causa de la justicia y el evangelio, son perseguidos, calumniados, apresados, torturados y fusilados, los obispos chilenos declaran que es desleal y deshonesto que los Cristianos por el Socialismo se llamen cristianos o se consideren parte de la iglesia. Los obispos condenan públicamente al movimiento Cristianos por el Socialismo justo cuando éste está sufriendo, golpeado, humillado, disperso, clandestino, sin ninguna posibilidad de levantar una voz de legítima defensa”. Richard, p. 199. Sobre los sacerdotes asesinados por la dictadura, véanse: Jordá, Miguel: *Martirologio de la Iglesia chilena*. LOM Ediciones. Santiago de Chile, 1999. Crouzet, Edward: *Sangre sobre La Esmeralda*. Sacerdote Miguel Woodward, vida y martirio. CESOC. Santiago de Chile, 2001. Pla, Joaquim: *Joan Alsina. L'altra versió*. Claret. Barcelona, 1995.

a los derechos humanos y a sus familias a través del ecuménico Comité de Cooperación para la Paz, a finales de diciembre de 1973 los obispos remitieron a sus pares de todo el mundo un informe privado sobre “la situación en Chile” muy pocas veces citado³³⁵.

Este documento, menos diplomático que sus comedidas y ambiguas declaraciones públicas y que se asemeja a la conocida carta que Eduardo Frei envió el 8 de noviembre de 1973 a Mariano Rumor (presidente de la Unión Mundial de la Democracia Cristiana)³³⁶, prueba la auténtica posición de la jerarquía católica ante el golpe de Estado, hasta el punto de que llegó a legitimarlo, otorgó credibilidad al Plan Z y no dedicó ni una sola palabra a la represión: “El paso que [las Fuerzas Armadas] dieron el 11 de septiembre fue como la respuesta a un requerimiento nacional y (...) una consecuencia de su obligación de garantizar el orden en Chile (...) En el país hay un orden cívico que permite desarrollar todas las actividades ciudadanas en forma normal. Hay ciertamente más orden que en los períodos políticos anteriores, en que las huelgas, desfiles, luchas callejeras... convulsionaban las ciudades (...) Los tiempos son difíciles, particularmente por las secuelas económicas que quedaron del tiempo de la UP. Se quisiera que concluyera el estado de guerra interno, que la justicia militar diera paso a la justicia ordinaria, que el país volviera cuanto antes a una normalidad institucional. (...) Pero todas estas limitaciones y estas aspiraciones deben ser vistas en un marco comparativo a lo que sucedía en el país antes del 11 de septiembre de 1973”.

5. Conclusiones

Cristianos por el Socialismo fue una de las creaciones más genuinas del proceso revolucionario que vivió Chile entre 1970 y 1973. Aunque en aquellos años los sacerdotes obreros de Italia, Francia o España ya luchaban junto a los trabajadores en los sindicatos o incluso militaban en los partidos de clase, hasta entonces ninguna revolución socialista había contado con el apoyo decidido de amplios sectores cristianos. Este movimiento, que muy pronto se extendió con vigor a muchos países, demostró que marxistas y cristianos podían compartir trinchera en las luchas políticas y sociales, como lo ratificaron después la Revolución Sandinista o la guerrilla salvadoreña, y este punto ya no es objeto de debate hoy en Chile.

La fundación de Cristianos por el Socialismo en septiembre de 1971 significó la culminación de un proceso histórico cuyo inicio hemos situado en 1965, cuando la Iglesia empezó a abrirse al mundo y religiosos y laicos, alentados por el Concilio Vaticano II y después por la conferencia de Medellín y la naciente Teología de la Liberación, optaron por compartir la

³³⁵ Documento consultado en la Fundación CIDOB de Barcelona.

³³⁶ Pinochet de la Barra, Óscar (sel.): *Eduardo Frei M. Obras Escogidas*. Centro de Estudios Políticos Latinoamericanos Simón Bolívar. Santiago de Chile, 1993, pp. 500-519.

vida, las utopías y las luchas de las clases populares. La victoria de la Unidad Popular en las elecciones presidenciales otorgó un sentido concreto al compromiso de los cristianos con el cambio social y en las jornadas de abril de 1971 empezó a gestarse este movimiento, que atrajo a sacerdotes, religiosas, pastores protestantes, laicos y creyentes de todos los ámbitos sociales.

Su interés por la elaboración ideológica, plasmada en múltiples declaraciones públicas y documentos que durante años hemos revisado en copias mimeografiadas en el formidable archivo de la Fundación CIDOB de Barcelona³³⁷, y que recientemente hemos encontrado sistematizadas en el libro de Pablo Richard, demuestran la preocupación por encajar la participación de los creyentes en aquel singular proceso revolucionario, por evitar que, una vez más, la Iglesia asumiera un papel contrarrevolucionario, camuflado en el discurso de la cruzada, para proteger los grandes intereses de la burguesía. Los testimonios de militantes de Cristianos por el Socialismo que hemos recabado durante nuestros años de investigación sobre la lucha de Antonio Llidó en Chile, de los que citamos algunos en este trabajo, confirman esa voluntad sincera.

La derrota del 11 de septiembre de 1973, la persecución de sus militantes como parte que eran del movimiento popular, la condena inquisitorial del episcopado y su disolución no han podido borrar la huella de los Cristianos por el Socialismo de la historia de Chile. Su legado perdura en distintos movimientos de base que vuelven a caminar junto al pueblo en la reconstrucción de la esperanza.

Muchos de sus antiguos militantes coinciden con Antonio Sempere, un sacerdote valenciano destinado en 1967 a la diócesis de Copiapó, donde fue militante de la CUT, presidente del sindicato obrero de la fundición cuprífera de Paipote y fundador de Cristianos por el Socialismo: “Fue la época más hermosa de mi vida, teníamos la conciencia de que estábamos construyendo una nueva sociedad”³³⁸.

³³⁷ Esta Fundación es heredera de Agermanament (“Hermanamiento”), una asociación creada en el Arzobispado de Barcelona a finales de los años 60 para apoyar el trabajo de los sacerdotes que se marchaban a los países del sur, principalmente a Camerún y Chile. Desde el secretariado de Cristianos por el Socialismo en Chile les enviaron copia de toda la documentación que generaron, en particular la relacionada con el Primer Encuentro Latinoamericano de Cristianos por el Socialismo.

³³⁸ Entrevista del autor a Antonio Sempere. El golpe de Estado sorprendió a Sempere en Santiago, en la sede de la Empresa Nacional de Minería. Por casualidad presencié el bombardeo de La Moneda desde una cuadra y media de distancia. “Salía una humareda roja porque era de ladrillo, vimos cómo se quemaba la bandera chilena... Éramos tres o cuatro desconocidos y yo. Cuando acabó el bombardeo nos fuimos, nos escondimos en una puerta semiabierta porque los soldados regresaban”. Tres días después, cuando se levantó el toque de queda, volvió a Copiapó. En la fundición los militares habían preguntado ya por él y a finales de mes fue detenido en el obispado junto con un compañero y fueron encerrados en el regimiento. Lo expulsaron de Chile el 16 de octubre de 1973, horas antes de que la *caravana de la muerte* llegara al regimiento de Copiapó.

“EL CUERPO NUESTRO DE CADA DÍA”: EL PUEBLO COMO EXPERIENCIA EMANCIPATORIA EN TIEMPOS DE LA UNIDAD POPULAR

María Angélica Illanes O.
Universidad ARCIS

Durante el período de gobierno de la Unidad Popular, el *cuerpo del pueblo* se constituyó en una clave hegemónica y articuladora de sociedad. Los comprometidos con los principios de ética y justicia social, más allá de las militancias partidarias, se sintieron impelidos a vivir sus respectivos idearios en contacto con el pueblo físico, concreto, existencial e histórico. Por otra parte, la política social y económica tuvo como eje la lucha por la subsistencia básica del cuerpo del pueblo, subsistencia vista como uno de los puntales de la equidad y la justicia social y como el fundamento de la democratización social. Desde el ámbito social y cultural, así como desde la política económica y social civil y gubernamental, todo tiende a confluir y entretenerse con la existencia real del pueblo, con el “cuerpo del pueblo”, considerado como encarnación de la ética y de la práctica política, social, económica y cultural. A nuestro parecer, el *cuerpo del pueblo* se constituye en una unidad estructurante o en el signo de un texto que habla del sentido ético y práctico de este momento histórico determinado.

Cabe preguntarse por el significado que tiene la intención de encarnar o concretizar en el “cuerpo del pueblo” el proyecto ético político de una sociedad determinada. Al respecto pensamos que dicho fenómeno dice relación con un complejo proceso que entonces tiene lugar: a) por una parte, por el hecho de constituirse el pueblo, en el *sujeto*, en carne y hueso, de dicho proyecto, portador de los signos que otorgan el sentido y la propia comprensión del mismo; b) por otra parte, por el hecho de que el cuerpo del pueblo va a expresar o ser una manifestación de la realización *histórica* de la utopía emancipatoria; c) en tercer lugar, podemos identificar en el “cuerpo del pueblo” una categoría *materialista* aplicada al saber religioso y científico de la hora; d) en cuarto lugar, desde el pueblo encarnado surge una suerte de *ética antropocéntrica* otorgadora de sentido del quehacer social en su conjunto; e) por último, en la coyuntura de la Unidad Popular, el cuerpo del pueblo constituyó un imperativo gubernativo en términos políticos y prácticos, impregnándose de sentido y *moral colectiva*.

Con el objetivo de aproximarnos a esta múltiple significación del cuerpo en tiempos de la Unidad Popular, nuestra intención es ver la concreción histórica de lo corporal social en dos ámbitos específicos: a) en el terreno de la constitución de lo popular como un “espacio societal” por excelencia, un “espacio socio-corporal” que actúa como foco de atracción de miembros de la sociedad civil que se sienten comprometidos con su vida concreta y existencial, encontrando en esta vida del pueblo la clave y el nutriente histórico de su vocación ética y social profesional

(que tratamos a través de la teología de la liberación y la salud comunitaria) y b) en el terreno de la implementación de instancias para la organización de la subsistencia del pueblo a través de políticas de control popular y estatal del abastecimiento popular (que tratamos a través de tres programas alimenticios básicos: el Programa Nacional de Leche, el Estanco del Trigo y las Juntas de Abastecimiento y Precios). Se trata de territorios o dimensiones diferentes del cuerpo popular que, en el período histórico de la Unidad Popular se entrecruzan, impregnándose mutuamente de eticidad, materialidad y democracia.

En suma, interesa apreciar lo que podríamos llamar la “hegemonía del cuerpo popular” como una problemática dada en el doble ámbito de lo ético-cultural y de lo político-práctico, doble perspectiva que visualiza la dimensión corpórea de lo popular como un signo-texto que, al mismo tiempo que otorga sentido al mundo social de una época, se constituye en un campo de ejercicio para la transformación democratizadora de la sociedad. El tratamiento de la temática combinará la narración testimonial con el seguimiento documental.

1. La encarnación

Al iniciarse la década de 1970 circulábamos en torno a la *Parroquia Universitaria*. Allí nos reuníamos a hacer una relectura del Evangelio según los “signos de los tiempos”. ¿Cuáles eran algunas de las claves sónicas de dicho tiempo histórico teológico? Un hecho decisivo al respecto decía relación con la aproximación al conocimiento de lo que se denominó una “teología de la materia”, interesada en la construcción de una Iglesia preocupada de la “encarnación de la Palabra”, más que en la mantención de ciertos “valores eternos” abstractos e “inoperantes en la historia y en la vida de los hombres”. Jesús era “pan vivo bajado del cielo”, y el acto de beber de su sangre y comer su carne era acto de transmisión de vida; la materia, así era vivificada y penetrada por el espíritu. “Esa es la vocación de la materia”. Materia que se expresaba en la “comunión con los demás hombres que nace de la participación en un mismo Cuerpo, de la asunción de una misma tarea...”; “relación cristiana con Dios que se da a través de esa misma materia, de lo visible, de lo que nuestras manos pueden tocar, de lo que es nuestra vida de hombres que se expresa a través de nuestra participación en los fenómenos económicos, sociales, políticos y culturales”. Ya no era posible pensar en un cristianismo vivido como mera santidad interior. “Para nosotros, los cristianos, la materia tiene una importancia capital: ...ella vale en la medida en que está llamada a ser el lugar de encuentro del hombre con Dios, pues no hay otro modo de comunicación real para los hombres sino aquel que se produce a través de la materia, del cuerpo” ³³⁹.

³³⁹ Cowley V., ss.cc., Percival. “La vocación de la materia”. *Mensaje*, Vol. XX, N° 196, enero-febrero, 1971, pp. 13-15

En América latina, a partir de la *Conferencia de Medellín*, se había formulado la “Teología de la Liberación”, la que nos inspiraba como jóvenes cristianos. ¿Cuáles eran algunas de las bases teóricas de esta teología? Según los planteamientos del teólogo peruano Gustavo Gutiérrez, esta teología surgía de la necesidad de superar la dicotomía entre Iglesia y mundo, a través de la cual la Iglesia se colocaba como un orden aparte de salvación en el mundo, cumpliendo su misión de “ser el alma de la sociedad humana”; manteniéndose los planos diferenciados, la unidad solo estaba dada en el reino de Dios. Esto llevaba, asimismo, a romper el sacerdote su inserción en el mundo, identificándose su misión con la de la Iglesia: evangelizar lo temporal. Esta distinción fe-realidad terrestre, Iglesia-mundo, se habría convertido en una traba para la acción pastoral. Desde el seno del movimiento de laicos jóvenes habría estado la crisis: no podían separar la formación religiosa de la formación política. Y, al tomar posición en el plano temporal, la Iglesia, que postulaba una asepsia política en materia temporal, quedaba comprometida en un campo considerado ajeno a ella. La crisis se fue ahondando en la medida en que la Iglesia aparecía, sin embargo, históricamente comprometida con las clases dominantes: tal prescindencia temporal era en realidad un encubrimiento ideológico. “En resumen, las opciones políticas se radicalizan y los compromisos concretos que los cristianos van asumiendo ponen de manifiesto la insuficiencia del esquema teológico-pastoral de la distinción de planos”³⁴⁰.

Como respuesta a dicha crisis, “el mundo es reconocido paulatinamente como consistente en él mismo. Autónomo frente a la autoridad eclesial, autónomo frente a la misión de la Iglesia, el mundo se va afirmando en su secularidad”. La secularización, como emancipación del mundo frente a la tutela religiosa, aparece legitimado como fin en sí mismo: “de una visión cosmológica se pasa a una visión antropológica”. El hombre toma conciencia de ser un agente de la historia, responsable de su propio destino, lo cual supone una forma diferente de concebir su relación con Dios y la Iglesia. Si antes se veía al mundo a partir de la Iglesia, esta relación se invierte: se tiende a ver a Dios y a la Iglesia a partir del mundo y la historia. Sin embargo, en el seno de esta inversión se produce una profunda unión del orden natural y el orden sobrenatural. No hay dualismo al recuperarse “el punto de vista histórico y existencial”. “El punto de vista histórico nos permite salir de una estrecha óptica individual para ver que los hombres son llamados al encuentro con el Señor en tanto que constituyen una comunidad, un pueblo”. Esto plantea el imperativo de la salvación y la gracia en todos los hombres “sean o no conscientes de ello”; se trataría de una suerte de “cristiandad anónima”, en tanto que, adoptar el sentido histórico de la salvación supone que todo y todos han de ser salvados. Como consecuencia, “las fronteras entre vida de fe y tarea terrestre, Iglesia y mundo se hacen más fluidas” e incluso se plantea si son dos cosas realmente distintas: “la Iglesia no es un no-mundo” (Metz)³⁴¹.

³⁴⁰ Gutiérrez, Gustavo. “Iglesia y mundo: crisis de un sistema teológico”. *Mensaje*, Vol. XX, junio, 1971, N° 199, pp. 205-209.

³⁴¹ *Ibid*

A partir de la Teología de la Liberación se pretendía fundar una Iglesia local latinoamericana que “se siente responsable de una tarea apostólica envuelta en la historia y con expresiones históricas”. Abandonándose el derecho canónico como punto de referencia, se adopta “el punto de vista de ‘leer los signos de los tiempos’ latinoamericanos a partir de la realidad histórica y del mundo”. De esta manera, “la Iglesia toma conciencia que debe encontrar otras *formas de encarnarse en la realidad*”³⁴² latinoamericana... Esta nueva forma de ‘encarnación latinoamericana’ se traduce en una tendencia a desinstitucionalizar muchos aspectos de la Iglesia.” En general, la Iglesia se comprometía con los desafíos de los movimientos de liberación y con la causa de los pobres y los oprimidos y, en un enfrentamiento con los poderes tradicionales, entraba al terreno de una “teología política”. La desinstitucionalización hacía referencia a la necesidad de crear una comunidad cristiana “desde abajo” sobre la base de un laicado autónomo capaz de asumir responsabilidades en una pastoral comprometida y referida a lo histórico, pues era en “lo histórico” donde se hallaban los fundamentos del Evangelio³⁴³.

En Chile había llegado el tiempo de la Unidad Popular. La calle Villavicencio donde estaba la Parroquia Universitaria se veía concurrida de estudiantes que acudían a entender las exigencias de la hora. Los altares se vestían de coloridas alfombras de Temuco, las sillas eran de paja, se cantaba al son de la guitarra y se vestían ponchos. Las telas de la tierra habían desterrado los dorados del barroco.

Era un imperativo trabajar por la emancipación de los oprimidos; había llegado la hora histórica de su liberación y, con ello, de la construcción de una nueva sociedad basada en la justicia y el amor. Era el momento de cambiar las estructuras, en las que residía la injusticia y la opresión.

Los curas de la Parroquia Universitaria se sintieron impelidos a manifestarse públicamente ante los desafíos de la hora. En una suerte de “manifiesto”, quisieron leer el presente de Chile a la luz de su propia lectura del Evangelio. Declararon sentirse “entusiasmados” con la posibilidad de la construcción del socialismo en Chile, en razón de su “valor ético”. Esta valorización se planteaba en contraposición al capitalismo que había demostrado ser un sistema que se contraponía al ser humano, al instaurar la desigualdad y la ley del más fuerte. Frente a esto, el socialismo se fundaba en la igualdad de oportunidades, en la dignificación del trabajo, en la preocupación por los más postergados y en la valorización de la solidaridad por sobre el interés individual. El nuevo gobierno había desatado una gran esperanza de justicia en la satisfacción de las necesidades de la clase trabajadora, lo cual era un llamado a cada cristiano a participar “en esta lucha material”, lucha política relativa al cambio de estructuras que llamaba a la acción. “Hay quienes piensan que esta lucha es demasiado material, que los cristianos y los sacerdotes solo deberíamos hablar de cosas del “alma”. Pero nosotros hablamos de cosas que atañen al hombre entero. Y el hombre necesita comer y vestirse. ... no quisiéramos separar ambas cosas. A veces ponemos el acento en las necesidades básicas, y su carencia es irritante

³⁴² Énfasis del documento.

³⁴³ Galilea, Segundo. “Situación pastoral de América Latina”. *Mensaje*, Vol. XX, mayo, 1971, N° 168, pp. 170-172.

y apremiante. En suma, si nuestro país da una gran batalla contra la miseria, los cristianos que han de estar de lleno en ella, sentirán que lo que se logre es ya una primera realización del reino proclamado por Jesús. Dicho de otro modo, que hoy el Evangelio de Cristo pasa por (y se encarna en) el esfuerzo de muchos hombres por hacer justicia”³⁴⁴.

Declaran los curas de la parroquia Universitaria querer trabajar “hoy” en la construcción de un mundo para todos los hombres, un mundo fraternal que fuese un esbozo del futuro Reino de Cristo. “Y porque la renovación de todas las cosas no es solo ‘espiritual’, sino corporal y temporal; porque el amor fraterno exigido en el Evangelio ha de ser muy realista, se entiende que hayamos insistido en la preocupación por nuestros hermanos reales y concretos”. La Iglesia verdadera debía estar “arraigada en los pobres” y “desde allí” anunciar la salvación³⁴⁵.

Así, la utopía cristiana se comenzó a llamar también “socialismo”, mientras se imponía la impaciencia por tareas a cumplir. La sociedad o el afuera se transformaba en un imán; el recinto se hacía estrecho, las paredes se rompían con el eco de la llamada. Los domingos se acudió a los trabajos voluntarios: construcción de plazas en barrios de pobres en verano; en invierno se iba al rescate de los anegados por la lluvia, transitando los grandes lodazales.

La adopción del discurso del “cambio de las estructuras”, así como el análisis acerca del “lugar” donde residía la opresión, condujo a un fluido intercambio entre cristianismo y marxismo. El flujo de lenguaje entre uno y otro encontraba el camino de su traducción en el imperativo del compromiso con el pueblo desposeído que residía fuera de los templos religiosos y fuera de los recintos universitarios. Este “hallarse fuera” del pueblo exigía su búsqueda en el espacio propio donde estos cuerpos habitaban: las poblaciones. Allí se encontraban aquellos que otorgaban sentido a las palabras o más bien que le otorgaban “otro” sentido a las palabras: una dimensión histórica, encarnada. El pueblo era el “Cristo” del discurso, el pan de la mesa o la misa, era la sangre que corría por las venas de sus cuerpos.

En esta línea de compromiso, un grupo de “80 sacerdotes que convivimos con la clase trabajadora” se reunieron, en abril de 1971, en las jornadas que titularon “Participación de los cristianos en la construcción del socialismo en Chile”, cuyos ideólogos eran el sacerdote chileno miembro de la Parroquia Universitaria Pablo Fontaine y el teólogo peruano Gustavo Gutiérrez. Los sacerdotes reunidos sacaron una declaración pública donde analizaban el inicio del proceso chileno de construcción del socialismo desde la perspectiva del límite a la tolerancia histórica de las condiciones de opresión que vivía la clase trabajadora en el capitalismo. El socialismo abría una nueva esperanza, no solo de justicia económica, sino de nuevos valores que posibilitaban el surgimiento de una sociedad más solidaria, proceso con

³⁴⁴ *Mensaje*, Vol. XX, enero-febrero, 1971, N° 196, pp. 36-37, “El presente de Chile y el Evangelio”, documento firmado por los sacerdotes de la Parroquia Universitaria: Pablo Fontaine, Fernando Gatica, Humberto Guzmán, Cristián Johansson, Gonzalo Valdivieso, José Vial, Miguel Bourguignat, Ramón Herrera, fechado en Santiago, noviembre de 1970.

³⁴⁵ *Ibid*, pp. 38-41.

el cual se sentían comprometidos. “La razón profunda de este compromiso es nuestra fe en Jesucristo, que se ahonda, se renueva y toma cuerpo según las circunstancias históricas”³⁴⁶.

Los sacerdotes declaraban, asimismo, la necesidad de colaboración entre cristianos y marxistas, no existiendo incompatibilidad entre ellos; existían en el socialismo más valores evangélicos que en el capitalismo. “A los marxistas les decimos que la verdadera religión no es opio del pueblo. Por el contrario, es un estímulo liberador para la renovación constante del mundo. A los cristianos les recordamos que nuestro Dios se ha comprometido con la historia de los hombres y que en estos momentos amar al prójimo significa fundamentalmente luchar para que este mundo se asemeje lo más posible al mundo futuro que esperamos y que desde ya estamos construyendo”³⁴⁷.

La declaración anterior suscitó un fuerte debate público en el seno de la Iglesia, acusándose a dichos 80 sacerdotes de querer imponer su posición a los demás cristianos. A esto respondía el padre Arroyo que “nuestro compromiso surge más que todo de una exigencia impuesta por nuestra convivencia con la clase trabajadora”, aun a riesgo de crear desconcierto entre aquellos no desprendidos “de la imagen tradicional de una Iglesia más preocupada de las almas que de hombres de carne y hueso, insertos en una historia que tristemente ha sido explotación de unos por otros”. No faltaron las cartas de apoyo, como la de un grupo de profesores de la Universidad Católica, quienes puntualizaron que la “auténtica fe cristiana toma cuerpo en un compromiso con la historia” y, específicamente con el “hombre oprimido”. No era posible reducir la fe a una dimensión puramente “universal”, pues se hacía “ineficaz”. “La lucha de clases no es un concepto, es la más cruda realidad... Nosotros aceptamos la realidad para superarla con un amor que, transformado en fuerza política, libere a pobres y ricos y acelere el día cuando ya no se escuchará el grito angustiado de los que sufren”³⁴⁸.

Desde la Parroquia Universitaria se formó la “comunidad” que salió en busca del lugar donde se encontraba el “signo de los tiempos” y la encarnación histórica de Cristo: una casita de construcción liviana en la población San Gregorio, sector sur de la capital, entre Santa Rosa y Vicuña Mackenna. Allí se instaló a vivir la avanzada del grupo mientras otros acudían los fines de semana. Si en la universidad la militancia comenzó a ser en partidos de la izquierda, la militancia y el contacto social y cultural con la población se hacía a través de la parroquia, cuyo cura párroco era el mismo Pablo Fontaine. Doble militancia que no era sino la nueva articulación que se producía entre cristianismo y marxismo, espíritu y materia, religión e historia.

La casa comenzó a ser frecuentada por estudiantes y pobladores que compartían conjuntamente los temas y actividades de su vida común poblacional. Una vida cultural intensa,

³⁴⁶ *Mensaje*, Vol XX, mayo 1971., N°198, p. 176, “Comunicado a la prensa de los sacerdotes participantes en las jornadas ‘Participación de los cristianos en la construcción del Socialismo en Chile’”, fechado en abril de 1971. Firman el documento: Gonzalo Arroyo, Alfonso Baeza, Martín Gárate, Esteban Gumucio, Juan Martín, Santiago Thijssen, Sergio Torres, Ignacio Pujadas, Pierre Dubois.

³⁴⁷ *Ibid.*

³⁴⁸ *Mensaje*, *ibid.*, pp. 174-179, F.J.C., “Cristianos, sacerdotes y política”.

vinculada a las distintas actividades que se desarrollaban en la población, entre ellas el grupo de teatro que preparaba obras relacionadas con los problemas cotidianos de los pobladores, incentivando la toma de conciencia crítica y la inserción de los mismos en el proceso de cambios sociales y culturales que vivía el país.

2. La sanación

Carlos Cortés se reunía con el grupo Urraca y con “gente de la Teología de la Liberación” en la calle San Francisco donde cada lunes Clotario Blest daba clases de historia del movimiento obrero; desde aquí acudían a ayudar en las tomas de terreno en los años 70. Los de Urraca venían de la toma de La Victoria; eran estudiantes que adquirirían un compromiso social más profundo. Terminada la toma, deciden organizar los Traperos de Emaús en Chile, construyendo en el Zanjón de la Aguada el primer galpón de recolección de huesos y metal. A ellos los conoció Carlos en las tomas de terreno, cuando armaron la Corporación Urraca, que significa ‘pájaros que traen todo lo que sirve’, viviendo con ellos en La Legua, sin ser cristiano, en una casa comunitaria de los Traperos de Emaús, trabajando conjuntamente en la trapería. Todos tenían obligación de trabajar en actividades comunitarias.

Carlos sabía colocar inyecciones, por lo que trabajaba en la organización de brigadas sanitarias en los campamentos naciotes para el resguardo de la salud de la población, especialmente de los niños. Estas “brigadas sanitarias”, que estaban bajo la tutela de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile en cada uno de los campamentos, consistían en la formación de líderes en salud a partir de los mismos pobladores, a los que se preparaba en prevención en salud –manejo de basuras, agua, control de embarazadas, cuidado del niño sano, preparación de mamaderas, control de peso, etc.–, poniendo el acento en la organización interna que para este fin se diera el campamento. “Trabajábamos porque teníamos un proyecto político”. Dividían el campamento en cuatro sectores, a la cabeza de los cuales estaban los líderes en salud a los que se capacitaba, diez por sector. Esto se facilitaba porque en los campamentos había gente que trabajaba en el Servicio Nacional de Salud. Visitaban carpa por carpa, capacitando principalmente a las mujeres, no solo en cuanto al saber en torno a la prevención en salud, sino también respecto a los derechos a la salud. “Esto condujo a que, cuando trabajaba en el campamento Fidel Castro, nos tomáramos ‘en forma simbólica’ el Hospital Parroquial de San Bernardo, con lo cual conseguimos dos horas médicas diarias para el campamento”. Más tarde se organizó un consultorio en el mismo campamento que atendía a su población e irradiaba más allá en los alrededores del sector ³⁴⁹.

³⁴⁹ Testimonio de Carlos Cortés Massalin.

Frente a la población San Gregorio y bordeando el campamento El Manzano, se instaló a vivir un joven médico de la Parroquia Universitaria, su mujer y su hija. Jefe del consultorio de la comuna, el médico decidía, así, hacer manifiesto su compromiso con el cuerpo del pueblo; vivir una vida semejante a la suya, tomando un contacto más íntimo con su realidad. Fue, al mismo tiempo, el gran gestor de la democratización de la salud primaria del sector cuando llegó el momento de la organización, a nivel nacional, de las brigadas de salud y de los consejos locales de salud poblacional ³⁵⁰.

Todas estas iniciativas formaron parte de la avanzada de la democratización de la salud poblacional que se consolidaría con la Unidad Popular.

Democratización que tocaría las fibras más sensibles de la medicina joven y que daría paso a lo que se denominó como “medicina comunitaria”. Esta consistía, como veremos, en la participación solidaria de la comunidad en vista del ejercicio del derecho a la salud, construyéndose sobre la base de organizaciones intermedias entre los individuos y el Estado. Se trataba de organizaciones que ejercían acciones de salud preventivas y curativas a nivel local y territorial, donde se trababa contacto directo entre las personas, adquiriendo dichas acciones un hondo contenido humano y una vía para la creación de conciencia de los problemas de salud. Estas organizaciones disponían, al mismo tiempo, de poder de decisión y ejecución para participar activa, informada y responsablemente en la definición de los problemas de salud ³⁵¹.

Las primeras organizaciones populares democráticas que se dieron al iniciarse el gobierno de la Unidad Popular fueron los Consejos Comunitarios de Salud, formados por las autoridades políticas y de salud del área local y por representantes de organismos como Juntas de Vecinos, Centros de Madres, Clubes Deportivos, Centros de Padres y Apoderados, Comités de Salud de las Poblaciones, representantes de obreros y empleados y otros organismos locales. Este núcleo básico pasaba a ser el punto de partida de la participación social comunitaria en el campo del cuidado del cuerpo socialmente constituido ³⁵². La comunidad organizada se transformaba en un sujeto activo del proceso de cambio, superando su calidad de objeto pasivo receptor de beneficios.

Simultáneamente, el gobierno tenía como objetivo llevar la transformación democratizadora hasta el seno mismo de los aparatos institucionales, popularizándolos. En el campo de la salud esto se expresó en la democratización del Servicio Nacional de Salud (SNS) a través de la creación, en cada Área de Salud, de un Consejo Local de Área de Salud, de la creación, en cada establecimiento del SNS, de un Consejo Local de Salud y de la creación, en cada establecimiento de salud, de un Consejo Paritario. En cada uno de estos Consejos participa-

³⁵⁰ Nos referimos al Dr. Antonio Infante.

³⁵¹ Ugarte, José. “La participación comunitaria en salud”. *Cuadernos Médico-Sociales*, Vol. XI, Santiago de Chile, Septiembre, 1970, N°3, p. 31,

³⁵² *Ibid.*, p. 32.

ban tanto los directivos, profesionales y técnicos de los servicios de salud junto a los representantes de la comunidad organizada, sindicatos, organizaciones vecinales, educacionales, campesinas, etc., elegidos democráticamente en sus organizaciones correspondientes ³⁵³. El proceso de democratización estaba encaminado a romper las barreras funcionales institucionales y permitir la entrada a la toma de decisiones de todos los estamentos de la salud y de la comunidad organizada en vista de la solución, con base real, de los problemas derivados del cuidado de la salud del cuerpo social y popular.

Articulada con dichos organismos institucionales democráticos, la figura central que asumió la participación popular de base en el campo de la salud comunitaria poblacional fueron las Brigadas de Salud, las que alcanzaron un grado de institucionalización formal a través de la “Consejería Nacional de Desarrollo Social”, quien les entregó las bases orgánicas para su funcionamiento. Definidas como “organizaciones funcionales, democráticamente generadas a nivel de la comunidad”, tenían como misión incorporar a grupos de mujeres pobladoras como *Responsables de salud*, realizando una serie de prácticas y funciones comunitarias relacionadas con el cuidado del cuerpo a nivel local. Cincuenta *Responsables* formaban la Brigada, la que a su vez se subdividía en grupos según programas específicos de salud (saneamiento ambiental, infancia de alto riesgo, control de embarazadas y métodos anticonceptivos, lucha antialcohólica, prevención juvenil, etc); eran capacitadas por un equipo técnico profesional y estaban llamadas a cumplir un importante rol en el campo de la prevención, control y censo de salud en la comunidad.

Sobre la base de estas iniciativas social orgánicas fue cristalizando históricamente, como decíamos, el concepto de “Medicina Comunitaria”, definida como una “Medicina Integral, mediante la realización de las acciones preventivas y curativas en el medio ambiente con la participación activa de la comunidad organizada” ³⁵⁴. Alejada de las obras paliativas, la “medicina comunitaria” pretendía una participación auténtica de la comunidad que abriera la posibilidad de “formas superiores de sociedad”. Su labor debía ser, asimismo, educativa, promover la organización y la participación en las decisiones, estimulando nuevas actitudes con el fin de formar conciencias favorables “a etapas superiores de un desarrollo humano y solidario”. Estas formas de democratización irían creando “las células y tejidos de la sociedad futura”, los gérmenes del nacimiento de una sociedad vitalmente democrática. Pues “una renovación auténticamente socialista de la sociedad debe realizarse desde su interior, mediante la formación de un tejido celular, o sea, el desarrollo de comunidades de base, donde en lo social y lo económico el hombre da forma a la nueva existencia social a que dará paso la revolución. El desarrollo de esta sociedad nueva, entendida como comunidad de comunidades, donde exista la necesaria descentralización, será posible donde el Estado actúa como unificador, coordinador e impulsor de un pluralismo socialista, en que existe el trabajo en común

³⁵³ Ver al respecto, M. Angélica Illanes, *En el nombre del pueblo, del Estado y de la ciencia... Historia social de la salud pública. Chile, 1880-1973*, Colectivo Atención Primaria, Santiago, 1993, pp. 485-488.

³⁵⁴ Devoto, Enzo. “La medicina comunitaria y las vías de desarrollo socio-económico”. *Cuadernos Médico-Sociales*, Vol. XI, N°3, septiembre, 1970, p. 33.

y la plena autogestión y decisión colectiva de los intereses comunes en el seno de cada comunidad. (...) La Medicina Comunitaria contribuye a esta germinación y, por lo tanto, realiza su aporte a la construcción de la nueva sociedad...”³⁵⁵.

La Unidad Popular fue un tiempo de compromiso con los cuerpos físicos populares como utopía de una medicina puesta en contacto directo con el pueblo. Desde este contacto íntimo habría de surgir el nuevo médico, el médico del pueblo, que rechazaba servir los intereses de una medicina liberal alejada de la vida y necesidades más sentidas del mismo.

Así lo declaró un *Manifiesto* de un grupo de 173 estudiantes de medicina de la Universidad de Concepción, el 28 de junio de 1971. Estaban dispuestos a poner su conocimiento al servicio de la liberación del pueblo, formando, así, el “nuevo médico para la sociedad nueva”, con un sentido de “solidaridad de clase”. “Pensamos que el trabajador médico debe estar en contacto directo con el pueblo, vivir con el pueblo a quien tiene que servir. Solo así podrán entenderse las múltiples causas económico sociales que condicionan la mayoría de las enfermedades”. Este compromiso y solidaridad surgía de su “conocimiento acerca de la miseria, hambre y enfermedades” que sufren los desposeídos, del hecho de haber “palpado” la impotencia de la pobreza, de tener un “contacto diario” con el pueblo. Lucharían por la abolición de la medicina privada en tanto comercial, deshumanizante, corruptora del sentido ético que debía tener la profesión médica y basada en un sentido clasista de la salud. Ante todo lo cual, los estudiantes de medicina firmantes se comprometían a: 1) “no ejercer privadamente nuestra profesión, poniéndonos de por vida al servicio de las clases explotadas de nuestro pueblo”; 2) a “luchar junto con los trabajadores para instaurar en Chile un servicio único de salud con médicos con un claro sentido de servicio a las clases populares”; 3) “luchar por una adecuada formación integral y perfeccionamiento del trabajador médico”³⁵⁶.

El *Manifiesto* expuesto ponía, así, en el centro de la cuestión de la salud pública, la relación de ésta con las necesidades concretas del pueblo, con su realidad histórica de explotación y miseria, con su condición de clase trabajadora, respecto de la cual se asemejaba el médico, como trabajador, cuyo saber había de poner al servicio de la clase explotada.

El saber de la medicina debía estar ligado al de las *Ciencias Sociales*, las cuales debían entregar a aquella su orientación teórica, entendida como la comprensión de la sociedad conformada por individuos socialmente conformados por determinadas condiciones económicas sociales y políticas. La medicina debía comprender las características principales de las condiciones sociales en que vivía la población y la medida en que logran satisfacer sus necesidades; la medicina debía comprenderse a sí misma como el producto de una determinada estructura social la que, a través de su dinámica propia, iba generando ciertos problemas de salud³⁵⁷.

³⁵⁵ Devoto, Enzo, op. cit. *Cuadernos Médico-Sociales*, Vol. XI, Santiago, septiembre, 1970, N°3, p. 37.

³⁵⁶ *Mensaje*, Vol. XX, agosto, 1971, N° 201, pp. 363-364, “Estudiantes de medicina a la opinión pública”.

³⁵⁷ Gaete, Jorge y Tapia, Isabel. “Ciencias Sociales: una discusión acerca de su enfoque en Medicina”. *Cuadernos Médico-Sociales*, Vol. XI, N°2, Santiago de Chile, junio, 1970, pp. 32-33.

Hasta este momento, los problemas de salud se entendían desconectados de las condiciones económicas, sociales y políticas concretas. El área de salud aparecía como una esfera autónoma e independiente de tales condicionantes; por lo tanto, sus categorías de análisis adolecían de abstracción histórica. Por su parte, se prescindía de la ubicación de los miembros de las organizaciones médicas en la estructura de clases de la sociedad y de la influencia que tal posición tenía en los procesos que se generaban desde dichas organizaciones. Este enfoque, influencia de la escuela norteamericana, debía cambiar en esta hora de la historia que vivía el país y el mundo. Era necesario poner el acento en que “nuestros problemas de salud obedecen en gran medida a las condiciones de vida de la población”. La magnitud y gravedad de los problemas médicos en Chile decían relación con “nuestra específica estructura económica, social y política, resultante de la forma concreta y particular en que utilizan el poder aquellos que lo detentan”. Las variables “subdesarrollo” y “clase social” debían, así, constituirse en fundamentos de todo análisis de los condicionantes de salud. El acceso “diferencial” de los individuos a los bienes y servicios afectaba su cuerpo ³⁵⁸. Por otra parte, las políticas de salud debían dejar de definirse en forma independiente de la política social y económica, para definirse justamente según las prioridades dictadas por los estructurantes sociales y económicos de una nación, de modo tal que sea la misma sociedad la que vaya modelando la organización y el carácter que asuma la atención médica. “El nivel de salud es resultante del nivel de vida y éste del estado de Desarrollo (social y económico) de una sociedad”. La superación del subdesarrollo constituía, así, un objetivo básico al momento de aspirar a la mejoría del cuerpo social; no obstante, la promoción de la salud jugaba un rol fundamental en el sentido de favorecer el desarrollo humano de la sociedad. Medicina y Desarrollo se daban estrechamente la mano ³⁵⁹.

De esta manera, la medicina dejaría de ser una ciencia “pura”, para pasar a formar parte de una ciencia social inmersa en la problemática de la conformación de clases y de poder en la sociedad, abierta al cambio de las estructuras económicas, sociales y políticas que a su vez permitiesen ejercer una política médica ligada a dichos condicionantes estructurales y a su dinámica de cambio y democratización social.

En correspondencia con este fenómeno, las temáticas de salud se ligaron estrechamente a la problemática económica y específicamente a los problemas del “desarrollo”. El nivel de salud de la población quedaba condicionado a la capacidad productiva y de “desarrollo” de la nación, definido como “el proceso mediante el cual se transforma una economía cuyo ingreso por habitante tiene una tasa de crecimiento pequeño o negativo en una economía en la cual el ingreso por persona tiene una tasa de incremento autosostenido como una característica

³⁵⁸ Ibid., p. 34.

³⁵⁹ Devoto, Enzo. “La medicina comunitaria y las vías de desarrollo socio-económico”. *Cuadernos Médico-Sociales*, Vol. XI, Santiago, Septiembre, 1970, N°3, p. 34.

permanente a largo plazo”³⁶⁰. Estrechamente ligado el nivel de salud y el nivel de desarrollo, esta relación quedaba sujeta a distintas variables: la disminución de la producción y, por ende, la disponibilidad de alimentos; las deficientes condiciones sanitarias referentes al uso de agua, excretas y viviendas; el bajo ingreso familiar y la baja disponibilidad de alimentación, vestuario, vivienda; y el bajo nivel educativo y su efecto sobre la higiene del cuerpo. Todo lo cual describía el cuadro del subdesarrollo que, a su vez, se expresaba en el nivel de salud, debilitando la fuerza de trabajo como factor de producción, produciendo el círculo vicioso del subdesarrollo. Había que entrar a concebir como inseparables los programas de desarrollo social económico y de salud, en una perspectiva integral. La baja producción no podía separarse del problema de la desnutrición; el hambre (y no los hospitales y los medicamentos) era el principal problema de salud en las naciones subdesarrolladas, entre ellas Chile. Hambre, específicamente, de proteínas. “El hambre, tanto global como específica, expresada en las numerosas carencias, constituye el factor primordial de lenta integración económica de los pueblos y el freno más brutal del desarrollo, más que por las muertes prematuras que produce, por los desnutridos que sobreviven”³⁶¹.

Para afrontar el desafío de la desnutrición como uno de los principales problemas del desarrollo y de la salud, se debía ir a un plan nacional de alimentación que convocase a todos los sectores responsables de la ciudadanía, especialmente al gremio médico, “auscultador diario de los efectos de la miseria y el hambre”, el cual tenía la obligación y la autoridad necesaria para levantar su voz y actuar decidida y comprometidamente ³⁶².

En suma, el problema de la salud corporal se aborda, en tiempos de la Unidad Popular, estrechamente vinculado a la necesidad del cuerpo del pueblo, así como a la cercanía física con el mismo, desde la perspectiva de una amplia democratización social. El tema de la salud ha dejado de ser un tema autorreferido, para pasar a ser una problemática social concreta que exige del compromiso mancomunado de todos sus actores y del gobierno en vista de la construcción de una salud comunitaria para el desarrollo económico, social integral y participativo.

3. La alimentación: leche, pan y canasta popular

Durante el gobierno de la Unidad Popular, el derecho a la salud comenzaba por el derecho a la nutrición básica de todos los chilenos. Desde el fundamento de este principio corporal ético político, el gobierno elaboró una Política de Alimentación y Nutrición (PAN) que perseguía dos objetivos principales: a) asegurar el buen estado nutritivo de la población; objetivo

³⁶⁰ Videla, Iván. “Hambre, salud y desarrollo”. *Cuadernos Médico-Sociales*, Vol. XII, Santiago, septiembre, 1971, N°3, p. 6,

³⁶¹ Ibid., p. 13.

³⁶² Ibid., p. 15.

que tenía un alcance principalmente biológico y b) asegurar la satisfacción de las demandas de un abastecimiento alimentario que tendiera a mejorar cuantitativa y cualitativamente el nivel de vida; objetivo que revestía un carácter preferentemente social³⁶³.

El diagnóstico realizado a nivel ministerial acerca del estado nutricional de la población proletaria chilena, señalaba que el problema más importante en el desarrollo físico y psicomotor del niño lo constituía la “desnutrición calórico-proteica”, lo cual estaba relacionado con el bajo nivel de vida, el destete precoz, el bajo peso del niño proletario al nacer y una serie de otros factores socioeconómicos, entre los cuales destacaba el desempleo, la baja escolaridad de los padres, el hacinamiento, la deficiente urbanización, el alcoholismo, la paternidad irresponsable, el alto costo de los alimentos protectores y la limitación de los recursos médico-asistenciales.

La nutrición debía comenzar por asegurar a todos los niños de Chile y mujeres embarazadas el acceso a la leche, nutriente completo, imprescindible para lograr un desarrollo integral biológico y, por ende, de justicia e igualdad de oportunidades que comenzaba, desde el útero materno, por la salud del cuerpo. Se configuró, así, el Programa Nacional de Leche (PNL), como parte de la materialización del Programa de Gobierno, y cuyo propósito fundamental era “contribuir a promover el desarrollo normal en las primeras etapas de la vida del hombre, a prevenir la desnutrición infantil y materna y a elevar el nivel nutricional y de salud de la población”. Con el objeto de hacer efectivo este propósito, el gobierno y las autoridades de salud se pusieron a la cabeza de la formulación de su programa, involucrando a la comunidad a través de una participación activa en los distintos niveles de decisión.

El 4 de enero de 1971 se inició el *Programa Nacional de Leche* bajo la responsabilidad técnica y administrativa del Servicio Nacional de Salud, financiado por aporte fiscal y el 15% del fondo de asignaciones familiares del Servicio de Seguro Social. En 1971 se cubrió una población de 3.046.257 personas, distribuyéndose un total de 47.256.546 kilos de leche en polvo con 12% de materia grasa, lo que significó un cumplimiento de un 96,3% de lo programado para ese año. “Es oportuno señalar el incremento significativo del PNL a partir de 1971 en relación a la leche distribuida en años anteriores. Entre 1965 y 1970 el promedio de leche distribuida fue de 15.898 T.M. anuales. Al comparar este promedio con lo realizado en 1971 se constata un incremento de un 197%”³⁶⁴. El aporte de proteínas entregadas por el PNL en 1971 significó disminuir el déficit anual en un 77%³⁶⁵.

El Programa Nacional de Leche despertó gran interés de participación popular, lo que contribuyó al mejor cumplimiento del programa. Desde el primer momento participaron más de 15 instituciones en la distribución de leche del país; la participación de la comunidad en el

³⁶³ Solimano, Giorgio; Unda, Hugo y Alvarez, Alfonso. “Programa Nacional de Leche”. *Cuadernos Médico-Sociales*, Vol. XIII, Santiago, Diciembre, 1972, N° 4, pp. 10-11.

³⁶⁴ Ibid., p. 17.

³⁶⁵ Ibid., p. 15. El déficit anual de proteínas alcanzaba a 16.352 T.M., siendo el aporte del PNL de 1971 de 12.600 T.M.

PNL estuvo protagonizada por los Consejos Locales de Salud establecidos en el decreto 602 del 1° de septiembre de 1971 del Ministerio de Salud Pública y por los Consejos Paritarios, mientras una parte importante de esta participación estuvo constituida por la acción de los Líderes Responsables Voluntarios de Salud³⁶⁶. Por otra parte, en los veranos de 1971 y 1972, siete mil voluntarios de salud, capacitados en los consultorios del SNS., realizaron acciones educativas en poblaciones diagnosticando y previniendo las diarreas infantiles de verano y su relación con la manipulación de mamaderas y la nutrición. Como parte de sus “trabajos de verano”, estudiantes de enseñanza media y universitarios colaboraron en este mismo sentido con los consultorios del SNS en distintas regiones del país; durante el paro de octubre de 1972, estudiantes y organizaciones juveniles ayudaron en la movilización y el abastecimiento nacional de la leche; profesores de enseñanza básica organizaron la “Semana de la Leche” donde realizaron acciones educativas, cubriendo dos millones de escolares básicos; Centros de Madres y organizaciones vecinales rurales recibieron capacitación en función del empleo de la leche del PNL; en instituciones de empleados (SERMENA) y de Fuerzas Armadas se realizaron programas educativos en torno al aprovechamiento de la leche.

Como estudiantes de la Universidad Católica, recibimos capacitación en la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. Debíamos saber diagnosticar un estado de deshidratación aguda por diarrea y enseñar la preparación y manipulación de la leche en polvo a guaguas y niños pequeños. En la población, el calor abrasaba, atravesando tablas y fonolas. Las moscas pululaban por el ambiente. En cajones con chales, yacían guaguas con fiebre. Hundíamos nuestras manos en su cuerpo, observando su color amarillo violáceo; apretábamos su piel entre nuestros dedos y soltábamos, atendiendo la demora en su estiramiento; notábamos la deshidratación y enviábamos de urgencia al consultorio. Conversábamos entre los jergones de la miseria, sobre leche y mamaderas, sobre moscas y bichos, sobre agua hervida y servida, sobre desechos y derechos; en suma, sobre el gobierno del cuerpo en la pobreza y el albor de la nueva hora láctea.

La escasez de productos agropecuarios, resentida con el proceso de reforma agraria, se había traducido en que la importación total agropecuaria para 1972, tuviese un incremento de 288% respecto de 1970; de estas importaciones, las referidas al rubro alimentos y productos agropecuarios equivalía al 88,3% de las importaciones³⁶⁷. En estas circunstancias, el gobierno decide, en el verano de 1973, organizar el Estanco del Trigo, con el fin de asegurar el abastecimiento de este producto básico y evitar que la producción del área reformada se desviase al mercado negro. A través de esta intervención, el Gobierno se constituyó en una figura centralizadora en cuanto poder comprador agrícola.

³⁶⁶ Ibid., p. 15.

³⁶⁷ Huerta, M. Antonieta. *Otro agro para Chile. La historia de la reforma agraria en el proceso social y político*, CISEC; CESOC; Santiago, 1989, p. 366.

La campaña del Estanco del Trigo se revistió de un alto contenido ético en el sentido de una misión nacional a cumplir por parte del área reformada con respecto al resto de sus compatriotas del país. El Estado venía a constituirse en el mediador de esta misión, resguardando tanto a los campesinos su propio abastecimiento de semillas y productos, como al pueblo en general el abastecimiento de trigo y pan. “El Estanco del Trigo defiende el pan de Chile”; “Tu ‘trigo para el gasto’ está seguro, campesino. Al vender tus granos a la Empresa de Comercio Agrícola tienes el trigo necesario para el justo consumo de tu familia y garantizas el pan para todos los chilenos”, decían los carteles de propaganda del Estanco, mostrando la figura de un campesino entregando un pan a un niño de Chile³⁶⁸.

La campaña fue adquiriendo dinamismo y respuesta, sumándose los campesinos a las tareas de acopio y control de flujo y distribución del producto en carretera. Las páginas que siguen buscan mostrar algunos aspectos de esta campaña implementada en el verano de 1973. Lo haremos a través de las páginas del diario *El Siglo*, en cuanto órgano de uno de los partidos (el Partido Comunista) más cercanos a la política del gobierno y cuyas páginas siguen de cerca la batalla de la producción en el agro.

Desde el mes de febrero de 1973 el gobierno del Presidente Salvador Allende se propuso, como un objetivo central de su política económica de abastecimiento, a través del organismo Empresa de Comercio Agrícola (ECA), dependiente de la Dirección de Industria y Comercio (DIRINCO), la tarea de asegurar el abastecimiento de trigo, harina, pan y maíz en el país. Con este objetivo el Estado se instauró como el poder comprador por excelencia del trigo en verano y del maíz en otoño, estableciendo cuotas de producción y venta a lo largo de todo el sector reformado del país. Sus emisarios recorrieron zona por zona, de norte a sur, comprando trigo y asegurando su transporte a los centros de acopio, evitando, a través de estrictos controles –para lo cual se actuó junto a Carabineros– su desvío hacia el mercado negro. A fines de marzo de 1973 la Contraloría General de la República despachó el decreto del “Estanco del Trigo”³⁶⁹.

Todo esto formaba parte de la “batalla de la producción” agrícola que debía verificarse en todo el sector reformado del país, específicamente en las 142.000 há que le había correspondido sembrar en la cosecha de febrero de 1973³⁷⁰, para asegurar el abastecimiento de productos alimenticios básicos de la población. La batalla contemplaba tres programas: a) el *Programa de Producción* que fijaba las metas de acopio por área predial entre ECA (el poder comprador agrícola del Estado), los campesinos y personal en terreno; b) el *Programa de Comunicaciones*, que difundiría los precios y lugares de compra, comunicando las garantías que recibirían los productores vendiendo trigo y maíz a ECA (como una citróneta en parte de pago de su venta, por ejemplo); y c) un *Programa de Capacitación*, que tenía a su cargo la información y movilización campesina en apoyo de la campaña, mediante el

³⁶⁸ *El Siglo*, 10 de marzo, 1973, p. 12.

³⁶⁹ *El Siglo*, Santiago, 1° de marzo, 1973.

³⁷⁰ “Los campesinos y el estanco del trigo”, *El Siglo*, Santiago, 22 de febrero, 1973, p. 6.

control de la producción y su venta, movilizándolo paralelamente a los trabajadores y estudiantes al trabajo voluntario³⁷¹.

Como respuesta al Estanco del gobierno, a juicio de *El Siglo*, “miles de trabajadores, campesinos, obreros, molineros y panificadores están trabajando por el éxito del estanco del trigo a lo largo de todo el país. Están poniéndole el hombro en las áreas de acopiar y vigilar con el objeto de que Ud. tenga durante todo el año pan en su mesa y tampoco le falten los alimentos derivados del trigo y además los tenga a precios justos y no a precios estratosféricos como lo pensaba la mente inhumana de los especuladores”³⁷².

Se procedió a encuestar todas las siembras en colaboración con el campesinado, fijándose un precio de 434 escudos el quintal en potrero. Puesto en molinos o en bodegas el valor subía a 446 escudos el quintal (al requisarse se pagaba a 250 escudos el quintal). Para el transporte del trigo ECA extendería una guía de libre tránsito; el que no la portase, quedaba sujeto a requisición³⁷³.

A fines de febrero se había terminado la cosecha del norte, iniciándose “a todo vapor” las tareas de acopio. En las provincias de Coquimbo y Santiago la Empresa de Comercio Agrícola había adquirido el 50% de la meta. En Valparaíso y Aconcagua las tareas del acopio se aceleraban con éxito, debido al “apoyo permanente de las organizaciones campesinas de la zona. Las Federaciones Rapa Nui, Libertad y Progreso y Provincial de Asentamientos, entre otras, han hecho público su apoyo a la medida del Gobierno destinada a asegurar el abastecimiento normal de harina para el consumo de la población”. Cooperación que abarcaba también a medianos y pequeños productores, lo que había evitado las requisiciones del producto, mientras campesinos y carabineros vigilaban las rutas carreteras y caminos secundarios durante 24 horas. El período de recolección de cereal finalizó en febrero con cifras auspiciosas: 130.000 qq., superando la meta fijada para la zona que correspondía a 50.000 qq. en Valparaíso y 80.000 en Aconcagua³⁷⁴. Las cifras del último control de avance establecían que, en la Provincia de Valparaíso, “ECA había comprado a los campesinos la cantidad de 6.174 ton. de trigo, sobrepasando el 19% de la meta fijada por el Estanco, vale decir, 5.200 ton. En Aconcagua se habían recopilado 8.400 ton., superando en un 15% la meta de 7.000 ton”³⁷⁵. En Maule y Linares, zona que se habría visto afectada en su siembra por el paro de octubre, 12.000 campesinos agrupados en las Federaciones Campesina e Indígena Ranquil, Nuevo Horizonte y Unidos Venceremos de las Confederaciones Ranquil y Unidad Obrero Campesina, participaban activamente en las tareas del acopio, las que, en espera de nuevas cosechas, ya alcanzaban a 30 toneladas. En dichas provincias se habría procedido a requisar 7 toneladas que iban destinadas al mercado negro³⁷⁶. En Cautín, la cantidad comprada por

³⁷¹ *El Siglo*, Santiago, 26 de abril de 1973, p. 7.

³⁷² *El Siglo*, Santiago, 22 de febrero, 1973, p. 6.

³⁷³ “Campesinos superan metas trazadas por el estanco”, *El Siglo*, Santiago, 23 de febrero, 1973, p. 6.

³⁷⁴ “Valparaíso y Aconcagua superan metas del estanco”, *El Siglo*, 5 de marzo, 1973, p. 14.

³⁷⁵ “Campesinos de la tercera zona superan metas del estanco”, *El Siglo*, 9 de marzo, 1973, p. 3.

³⁷⁶ “En Linares y Maule están firmes con el estanco del trigo”, *Ibid*, p. 7.

ECA duplicaba las existencias del año anterior. En toda la provincia la cantidad adquirida alcanzaba los 23.000 quintales, contando con el respaldo en la zona de la “inmensa mayoría” del campesinado así como de las organizaciones campesinas ³⁷⁷. En Bío-Bío y Malleco, al mismo tiempo que se organizaba el abastecimiento rural, todo el aparato estatal y sindical agrícola de la zona se hallaba abocado al estanco del trigo, “medida impulsada con entusiasmo por los campesinos” ³⁷⁸; los controles de avance indicaban que allí ya habían pasado al Estanco el 55% y 35% respectivamente de la producción triguera. En la provincia de Osorno, habiéndose iniciado la cosecha días atrás, se había recaudado el 16 % ³⁷⁹. Mientras el acopio se llevaba a cabo, seguían recorriendo el territorio nacional, desde Coquimbo a Llanquihue, las dos comisiones dependientes del Comando Nacional del Estanco, detectando, en el terreno mismo, la marcha del programa de abastecimiento de trigo, destinado a asegurar la harina y el pan en la mesa diaria de los chilenos.

La reacción no se habría hecho esperar. En contra del Estanco habría alzado su voz la patronal Sociedad Nacional de Agricultura, llamando a los campesinos a no responder al Estanco. Habrían enviado sus agentes a recorrer cada predio del sector reformado ofreciendo precios altos por cada quintal de trigo, lo cual habría sido repudiado por los campesinos. Estos habría mostrado ser un modelo de comportamiento: se habrían organizado para vigilar sus siembras de posibles atentados, vendiendo posteriormente a los poderes compradores de ECA ³⁸⁰.

Uno de los problemas más sentidos durante el gobierno de Salvador Allende (1970-1973) fue el abastecimiento de productos básicos. El mercado negro imperaba, mientras escaseaban los productos de primera necesidad. Las colas de compra de mercaderías se transformaron en un paisaje de la vida cotidiana. Los opositores al gobierno hicieron del mercado negro y de esta situación de entrapamiento del abastecimiento, parte importante de su política de reacción. La campaña dirigida a las “amas de casa” que no encontraban en el comercio los artículos de consumo diario, constituyeron el blanco más fácil para la oposición, a lo que se añadía un sentimiento de inseguridad que venía a ser caldo de cultivo para un panorama de crisis.

Por otra parte, los trabajadores, pobladores y pueblo en general proclive al gobierno, vivía momentos álgidos de desarrollo de su compromiso y conciencia, lo que había quedado reflejado en la “batalla de la producción” que habían estado dando en todos los frentes, especialmente en la coyuntura del “paro de octubre” de 1972. Esto también se expresó en las elecciones de marzo de 1973, donde el gobierno alcanzaría un alto respaldo de votantes a nivel nacional.

En este doble contexto, el gobierno y los vecinos dan nacimiento a las *Juntas de Abastecimientos y Precios* (JAP), las que se encargarían de distribuir una canasta básica a los

³⁷⁷ “Campesinos superan metas trazadas por el estanco”, *El Siglo*, 23 de febrero, p. 6.

³⁷⁸ “Aseguran abastecimiento y estanco del trigo en Concepción”, *El Siglo*, 8 de marzo, 1973, p. 5.

³⁷⁹ “Campesinos de la Tercera Zona superan meta del estanco”, *El Siglo*, 9 de marzo, 1973, p. 3.

³⁸⁰ *El Siglo*, 23 de febrero, p. 6.

pobladores y vecinos del país, expresión del esfuerzo del gobierno popular y de los trabajadores y pobladores en general, por abordar democráticamente uno de los problemas claves del gobierno popular, cual fue el abastecimiento y la lucha contra el mercado negro. Con esto se daba un paso decisivo en la lucha por el abastecimiento de la población, conjurando el panorama de escasez, avanzando, al mismo tiempo, en las prácticas organizacionales de la población.

A través de esta medida se construía socialismo sobre la base de la relación pueblo-gobierno, en un momento en que las tensiones que tendían a vulnerar esta relación alcanzaban algunas manifestaciones críticas en otros campos de la realidad social. Al respecto, en este terreno de la lucha por el abasto, la Unidad Popular al mismo tiempo que daba pasos decisivos en la lucha contra el desabastecimiento, apuntalaba la relación pueblo-gobierno en el seno mismo de las bases poblacionales, vulnerando uno de los puntos claves de la campaña de la reacción política.

Según lo decretado por la Resolución 112 de DIRINCO, dirigida por el general Bachelet, junto a la toma de razón de la Contraloría General de la República (publicadas en el *Diario Oficial* el 4 de abril de 1972) que crearon legalmente las JAP, estas se definieron como “la agrupación de trabajadores que lucha por mejorar las condiciones de vida del pueblo dentro de cada unidad vecinal, de preferencia esforzándose por lograr un adecuado abastecimiento, velando por un eficaz control de los precios, luchando contra la especulación y los monopolios, promoviendo el mejor aprovechamiento de los medios de subsistencia del pueblo y cooperando, en general, con todas las funciones de la Dirección de Industria y Comercio”³⁸¹. Dicha Resolución señalaba que las JAP podrían “atender los problemas de abastecimiento de los comerciantes detallistas y respaldar sus denuncias contra los intermediarios inescrupulosos o contra los funcionarios o inspectores que no cumplan correctamente su función; cooperar en el control de los precios teniendo al día en cada unidad vecinal las listas de precios oficiales y exigiendo a los comerciantes su cumplimiento mediante la persuasión y en caso contrario, mediante la respectiva denuncia”. Su función específica consistiría en confeccionar y mantener actualizado todo tipo de información (número de familias, cantidad de habitantes, cantidad y tipo de negocios) “que colabore a planificar una adecuada distribución y permita que cada familia logre en su lugar de residencia la cantidad indispensable de productos básicos”³⁸².

Como expresión de la nueva relación que, en el seno de las JAP se creaba entre el pueblo y el gobierno, el presidente Allende sostuvo en La Moneda, a fines de febrero de 1973, una reunión con todos los dirigentes comunales de las JAP de Santiago. En dicha reunión el general Bachelet, Secretario Nacional de Distribución, entregó a los dirigentes de las JAP un “Instructivo General para la organización y funcionamiento de las Juntas de Abastecimientos y Precios” que regularía su creación y funcionamiento. Allí se ratificaba la validez legal de las JAP, cuestionadas por la oposición, entregándoles atribuciones en el marco de la política de distribución del gobierno, asignándoles “un papel de primera importancia al convertirse en los organismos de

³⁸¹ “Distribución democrática al servicio del pueblo”, *El Siglo*, Santiago, 23 de febrero, 1973, p. 4.

³⁸² “General Bachelet: Las JAP son organismos legales y democráticos”, *El Siglo*, 22 de febrero, 1973, p. 17.

representación y vinculación de la comunidad con las autoridades de gobierno”. En el acto el general Bachelet se refirió a los actos de obstrucción que hacía la oposición respecto del normal abastecimiento de la población, generando una sensación de caos. Frente a esto, los vecinos, legítimamente constituidos y en forma voluntaria y democrática, buscaban darle una solución al abastecimiento, articulándose con el gobierno. “Los organismos del Estado se deberán considerar representativos de las inquietudes y aspiraciones de toda la población que se agrupan en relación a los problemas de distribución, abastecimiento, comercialización y control de los artículos de consumo básico”. En cada unidad vecinal debía existir una JAP, constituida por una asamblea de cien vecinos (o a lo menos más de 50), debiendo participar de ella los organismos de masas que formasen parte de la unidad vecinal (Juntas de Vecinos, Centros de Madres, Clubes Deportivos, Sindicatos, Agrupaciones de Comerciantes Detallistas, Centros de Estudiantes, etc.). Como instancia intermedia entre las JAP vecinales y DIRINCO, se organizaron las JAP Comunales, con la participación del 100% de las JAP vecinales, originando una directiva conformada por 9 a 15 miembros y cuya función fue coordinar el trabajo de distribución con las autoridades administrativas y el Cuerpo de Carabineros ³⁸³.

En la reunión sostenida en La Moneda, dialogó el presidente Allende con los dirigentes de las JAP. En la ocasión Allende señaló que las JAP “estaban colocadas en el sitio más álgido de la discusión pública”, reiterando su legalidad. Refiriéndose al significado de las JAP como “poder popular”, Allende manifestó: “Uds. forman parte del gobierno... No acepto que hayan organismos de poder popular al margen del Gobierno Popular, porque de lo contrario no estaría un minuto más como Presidente”. Aplausos. Puntualizó que las JAP eran organismos de poder popular en colaboración con el gobierno, que las JAP tienen atribuciones que son poder popular de acuerdo con el organismo que se las da y que es la DIRINCO ³⁸⁴. Con esto Allende dejaba claro lo que el gobierno y el pueblo debían entender por “poder popular”: la toma de atribuciones conferidas, la colaboración con el Gobierno Popular que era uno y lo mismo con el pueblo real.

Luego de ser encuestados por la Junta de Vecinos de la población acerca de cuántos vivíamos en nuestra casa, fuimos convocados en el verano del 73 para recibir una canasta familiar con los productos básicos para nuestro abastecimiento. Colgando bajo el brazo una bolsa de compras, acudimos con nuestra vecina, esposa de un militar, al llamado de la JAP vecinal. Hicimos una cola de no más de 15 minutos, conversando animadamente. Dentro ya del local comercial nos atendieron con prontitud. Un pollo, un kilo de carne, arroz, porotos, fideos, salsa de tomates y otra serie de productos componían nuestra canasta que pagamos a módico precio. Regresamos agradecidas de la voluntad organizadora de los compañeros y compañeras, comprometidas en el abastecimiento de la población. Semanalmente tendríamos derecho a abastecernos de estos productos, que junto a los carretones de pescada instalados casi a diario en la esquina de la pobla, componían nuestro cotidiano menú popular.

³⁸³ Ibid.

³⁸⁴ Ibid.

This page intentionally left blank

LA CULTURA EN LA UNIDAD POPULAR: PORQUE ESTA VEZ NO SE TRATA DE CAMBIAR UN PRESIDENTE

César Alborno^{*}

1. Palabras preliminares

Para la consolidación del socialismo en Chile era fundamental la construcción de una nueva cultura. Una cultura que superara los valores burgueses y los fundamentos del capitalismo, para encaminarse en la génesis de nuevos sentidos acordes con el sistema político que se quería instaurar. En el presente escrito se hace un análisis y descripción principalmente de cómo estos valores se plasmaron en la producción artística e intelectual. A sabiendas de que el elemento cultural es mucho más que ello, teniendo fundamental relevancia aspectos como la educación y la producción, y procesos como la reforma agraria, la nacionalización del cobre y las reformas educacionales, el abarcar la cultura en su sentido más global necesariamente merece un trabajo más largo y profundo.

Por ahora, creemos que un importante espejo donde se reflejó el sentido y la identidad del proceso cultural en Chile bajo el gobierno de Salvador Allende, fue por sobre todo la música, y junto a ella la plástica y la industria editorial, que marcaron una pauta y se transformaron en símbolo de aquella nueva sociedad truncada.

2. Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente. Será el pueblo quien construya un Chile bien diferente.

Luego de denodados intentos por alcanzar el gobierno, las fuerzas políticas de izquierda agrupadas en la Unidad Popular, de tendencia predominantemente marxista, ganaron las elecciones presidenciales del 4 de septiembre de 1970. La votación, ratificada en el Congreso Nacional al mes siguiente, significó la instauración en Chile de un gobierno socialista liderado por el doctor Salvador Allende Gossens.

^{*} Historiador. Investigador del Programa de Estudios Histórico Musicológicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

El proyecto político socialista se llevó a cabo durante los mil días que significaron tres años de revolución en Chile. El programa de gobierno había sido presentado el 22 de diciembre de 1969. Entre los puntos más importantes, más allá del análisis de coyuntura que vivía la sociedad burguesa en aquel entonces, y las expectativas esperanzadoras y viables con que se veía la instauración transitoria del socialismo en Chile, se encontraban la creación de una nueva Constitución, la conformación de una Asamblea del Pueblo y la nacionalización de la Gran Minería. Para conseguir todos estos objetivos, el programa planteó 40 medidas inmediatas. La última de ellas decía: “Crearemos el Instituto Nacional del Arte y la Cultura y escuelas de formación artística en todas las comunas”³⁸⁵.

Esta medida se enmarcaba en el planteamiento general que consideraba el gobierno para el área “Cultura y Educación”, que aparecía en el Programa. Se declaraba categóricamente que “el nuevo Estado procurará la incorporación de las masas a la actividad intelectual y artística”. Se reafirmaba toda aquella aspiración a la conciencia de clase y revolucionaria, superando los valores burgueses, basándose en un pueblo socialmente consciente y solidario. Entre los párrafos más elocuentes del programa, en cuanto a transformación y construcción de una nueva cultura, se señalaba:

“Los cambios que se harán necesitan de un pueblo socialmente consciente, solidario y educado para ejercer el poder y para defenderlo. La cultura no se crea con una ley, sino que surge de la lucha constante por la fraternidad contra el individualismo, por el trabajo contra su desprecio, por los valores nacionales sin sumisión a valores que no nos pertenecen”³⁸⁶.

La cultura fue así, desde el comienzo y como se puede presumir, una de las prioridades del gobierno de la Unidad Popular. Era el medio para, desde la creación artística-musical-intelectual, proponer una nueva sociedad donde los valores imperantes fueran los del proletariado en vez de aquellos burgueses que habían prevalecido a lo largo de gran parte de la historia nacional. El actor principal debía ser, por lo tanto, el pueblo. La voluntad del gobierno popular era la de transformar la creación en un agente de revolución, resguardando la libertad merecida por todo creador, pero tendiendo a que la obra fuera accesible y ejecutable por todos, que fuera verdaderamente democrática. ¿Cómo se presentó esto en la práctica?

Pues bien, desde el 5 de septiembre de 1970 la quimera debía hacerse praxis. Ante una opinión pública expectante, y a veces temerosa, del gobierno *ad portas*, y frente a intentos salvajes por parte de la reacción de evitar la asunción de Allende a la presidencia, la Unidad Popular asumió la conducción del Estado desde el juramento de su presidente por el período comprendido entre el 3 de noviembre de 1970 y el 3 de noviembre de 1976.

El evento significaba ponerse manos a la obra. Pero la obra, en sí, desde hacía mucho tiempo que se estaba realizando en manos de distintos creadores. La antigua esperanza ahora se

³⁸⁵ Allende, Salvador. *Chile: Historia de una ilusión*. Argentina: La señal, 1973, p. 242.

³⁸⁶ Programa de la Unidad Popular. Santiago; Imprenta Horizonte, 1970. “Cultura y Educación”

transformaba en realidad; el desafío ahora consistía, más que en proponer, denunciar o criticar, en construir.

La música desde hacía años que tenía un desarrollo donde presentaba los afanes de igualdad y superación de la pobreza, a través de compositores e intérpretes reconocidos ampliamente. Violeta Parra y su familia (Isabel, Ángel, Roberto), Víctor Jara, Rolando Alarcón, Héctor Pavez y muchos otros, desde la década de 1960 proponían una integración latinoamericana en un planteamiento común, reuniendo en una propuesta musical la realidad continental tanto en su forma como en su fondo. En su forma, al incorporar en Chile ritmos y géneros como la zamba, la guajira, el bolero, y un sinfín de estructuras propias del subcontinente. En su fondo, al hablar de la superación de la pobreza no solamente como una aspiración nacional, sino como un objetivo continental, primero, y universal, después. La revolución y la construcción del “hombre nuevo” tenía un sentido local, pero junto a él, y casi imperiosamente, un sentido continental. El movimiento musical fue conocido como Nueva Canción Chilena.

La Nueva Canción Chilena se desarrolló desde la década de 1960, consolidándose a fines de esos años y proyectándose hacia los primeros del decenio siguiente. Acompañó por ello, tanto la campaña como el gobierno de la Unidad Popular en su totalidad. No fue un producto del gobierno popular, sino el resultado de inquietudes políticas y culturales que terminaron construyendo el propio gobierno.

A través de este movimiento cultural, Chile se reconocía como un país latinoamericano tanto en sus problemas contingentes como en su sentido de nación. Su proceso histórico, representado a través de la música, era un todo junto con su hemisferio geográfico. Folkloristas como Violeta Parra, Margot Loyola, Gabriela Pizarro o Héctor Pavez, junto con poetas como Pablo Neruda y Nicanor Parra, incentivaron una labor musical a la que se sumó la influencia de compositores latinoamericanos como el argentino Atahualpa Yupanqui y el cubano Carlos Puebla. Sumándose a la denuncia de los problemas sociales, ejemplos políticos como la Revolución Cubana o la resistencia del pueblo vietnamita a la intervención militar de Estados Unidos, así como también personajes emblemáticos como Ernesto “Che” Guevara y algunos míticos como Joaquín Murieta, la Nueva Canción fue el referente cultural de la política de izquierda chilena. Artistas como Patricio Manns, Rolando Alarcón, Víctor Jara, Isabel y Ángel Parra, y algunos otros noveles, se enfrentaban al público en espacios precarios, pero íntimos y de gran actividad. Entre éstos, el de mayor relevancia fue la Peña de los Parra, fundada en 1965.

Habiendo tenido ya aquella música un desarrollo importante, en julio de 1969 la Vicerrectoría de Comunicaciones de la Universidad Católica de Chile organizó el Primer Festival de la Nueva Canción Chilena. Fue el momento en que la tendencia fue bautizada como tal, y por ende, desde ese instante el nombre “Nueva Canción Chilena” empezó a formar parte de la identidad musical del país. Su conductor fue Ricardo García, importante hombre de la radiodifusión quien siempre aportó en la promoción de la música chilena. Aquel primer festival tuvo dos canciones ganadoras: “La chilenera”, de Richard Rojas, y “Plegaria a un labrador”, de Víctor Jara.

“Plegaria a un labrador”, editada el año 1970 en el disco de larga duración *Pongo en tus manos abiertas*, por el sello de las Juventudes Comunistas, fue en aquella ocasión interpretada por su autor y el acompañamiento del grupo Quilapayún. Hablando de los problemas del campesino y su deber de construir una sociedad nueva (“libranos de aquel que nos domina en la miseria / danos tu fuerza y tu valor al combatir / sopla como el viento la flor de la quebrada / limpia como el fuego el cañón de mi fusil”), la canción fue el primer hito musical del movimiento, y una muestra de que la cultura que se pretendía construir en el gobierno de la Unidad Popular ya tenía una evolución previa; ya se hacía patente, por lo menos a través de la música. A su vez, Víctor Jara y Quilapayún se constituían en dos figuras ejemplares de la cultura “revolucionaria”.

Víctor Jara, quien había estudiado y desarrollado una fructífera e importante carrera teatral amparado en la Universidad de Chile, había editado su primer disco sencillo por el sello Demon en 1965 con las canciones “La cocinerita” y “El cigarrito”. Su primer disco larga duración, homónimo, fue editado por el sello Arena en 1966. Asimismo, era número frecuente de la Peña de los Parra y de otras peñas universitarias, tanto en Santiago como Valparaíso y todo Chile. Conjuntamente a ello, fue director musical del conjunto que lo acompañó en el Festival hasta el mismo año 1969.

Quilapayún, cuyo nombre significa “Tres barbas” en mapudungún, se inició en el invierno de 1965 con los hermanos Julio y Eduardo Carrasco y Julio Numhauser como integrantes. Su debut en un escenario fue en la peña de la Universidad de Chile de Valparaíso y su primer festival fue el Primer Festival Nacional de Folclore, que se realizó en Viña del Mar y donde resultaron ganadores. El disco que inició la carrera en estudio del conjunto, homónimo, lo habían grabado el año 1966. Luego de numerosos cambios de integrantes, grabaron su segundo disco, *Basta*, el mismo año 1969. Aseveraban con éste su posición política decidida, popular y revolucionaria. Afirmaban con energía: “Basta ya que el yanqui mande”.

El año anterior, el músico Luis Advis había escrito una serie de poemas luego de una visita a Iquique inspirado en los problemas sociales que se habían vivido en las salitreras a comienzos del siglo XX. Estos derivaron en una larga composición, fundacional en términos de que mezclaba elementos de la música docta con variables de la música popular folklórica, a lo que se le agregaba un patente mensaje temático de denuncia social. Al género se le llamó “cantata” en vista del nombre de la obra: *Cantata Popular Santa María de Iquique*. Luego de contactarse conjunto y compositor, el año 1969, y después de acuciosos ensayos, grabaron la obra en julio de 1970 para el sello Dicap, el que la editó en una lujosa presentación que incluía el texto completo y el relato a cargo del actor Héctor Duvauchelle. El estreno en vivo se realizó en agosto de 1970 en el Estadio Chile, en el marco del 2° Festival de la Nueva Canción Chilena. La interpretación estuvo a cargo del grupo Quilapayún y la narración, en la voz del actor Marcelo Romo.

Con la Cantata, la cultura popular a la que aspiraría el gobierno popular tendría un referente. La música de concierto, ligada históricamente a las elites, se hacía masiva; el pueblo era protagonista de un producto del que antes estaba totalmente ajeno.

El ejemplo fue seguido por otros compositores de formación clásica. Entre ellos, Sergio Ortega fue uno de los más importantes. Fue él quien compuso las melodías de uno de los discos más emblemáticos del fenómeno de gestación de una nueva cultura. Nos referimos a *Canto al programa*, disco de larga duración que musicalizaba las aspiraciones del entonces candidato Salvador Allende, interpretado por el conjunto Inti Illimani y que apareció en el mercado el mismo año de las elecciones. En esa obra, se afirmaba que el proceso electoral que venía no era una elección cualquiera: “Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente / Será el pueblo quien construya un Chile bien diferente”.

Los músicos de la Nueva Canción se transformaron en la cara visible, y fácilmente reconocible por el público masivo, de los nuevos valores que se proponían. Y éstos no dejaban de ser particulares. La sociedad chilena vivía un proceso en que la juventud se reconocía como un segmento distinto en el ámbito nacional; empezaba a fumar marihuana, a escuchar rock, le gustaba la “Música Libre”. Por otra parte, las melodías de Los Cuatro Cuartos, las Cuatro Brujas, Los del Sendero, y muchos otros grupos de raíz folklórica, le cantaban al sauce llorón, al arriero, al ovejero, pero todo románticamente, sin mayores cuestionamientos, sin mayor aspiración por generar un cambio estructural. Además, Buddy Richard, Gloria Benavides, Cecilia y muchos otros, proseguían en aquella fantasía del *star system* criollo con portadas en la prensa de espectáculos y presencia constante (aunque menor que algunos años antes) en las radioemisoras.

Pero la propuesta cultural de la Unidad Popular no era liviana: era militante, combativa, severa. No tenía nada que ver con el Festival de Piedra Roja, por ejemplo, que emulando al *gringo* Woodstock se realizaba en los contrafuertes cordilleranos cercanos a Santiago el fin de semana del 11 al 13 de octubre de 1970. Tampoco con Los Jaivas, quienes hacía poco habían tenido su debut discográfico y que algunos años más tarde serían tildados en la revista *Ramona*, de las Juventudes Comunistas, como: “Estos sí que son pájaros raros, Jaivas que vuelan”³⁸⁷. Menos tenía que ver con los *rockeros* Aguaturbia, que aparecían completamente desnudos en la carátula de su primer LP. aparecido en 1970.

Era así como la tarea que enfrentaba el gobierno de la Unidad Popular en el ámbito cultural, y en todos los aspectos, era particularmente compleja. Si bien se presentaba en la palabra como fundacional, debía recuperar toda esa evolución previa que tan bien demostraba la música. Si bien el objetivo era construir una cultura donde el protagonista fuera el pueblo y los trabajadores, debía ser cuidadosa con la libertad creativa esencial en toda producción cultural. Y tempranamente hubo voces de alerta sobre estas posibles dificultades.

Un grupo de escritores, entre los que se encontraban Enrique Lihn, Alfonso Calderón, Poli Délano, Luis Domínguez, Ariel Dorfman, Jorge Edwards, Cristián Huneeus, Hernán Lavín, Hernán Loyola, Germán Marín y Waldo Rojas, publicaba en 1970 un texto llamado “Por la creación de una cultura popular nacional”³⁸⁸. En el escrito llamaban a poner atención

³⁸⁷ *Ramona* N° 63, 9 de enero de 1973, p. 12.

³⁸⁸ *Cormorán* N° 8, diciembre de 1970.

justamente frente al peligro de la ortodoxia en la creación y la correspondiente limitación de la misma, en función de principios absolutos que, por muy urgentes que fueran, podían ser contraproducentes en la construcción de la nueva cultura. El escrito generó una gran controversia, que derivaría en una visión muy crítica de Lihn acerca la forma en que se concebía la cultura por algunos actores ligados al gobierno.

El hecho es que el gobierno de Allende asumía el poder. La vía chilena al socialismo empezaba su camino.

3. Hoy es el primer día del resto de tu vida.

Independiente de algunas instancias oficiales que generó la Unidad Popular para desarrollar e incentivar la cultura, como el Departamento de Cultura, en el primer año de gobierno se realizó una serie de importantes actividades, pero también se formuló una serie de dudas. Más allá de iniciativas oficiales, aquellos individuos que sentían en la aspiración socialista su sentido de acción, siguieron creando y componiendo.

El Departamento de Cultura de la Presidencia, dirigido por Waldo Atías, organizó en el verano de 1971 “El Tren de la Cultura”. Fue una caravana compuesta por artistas, poetas y folkloristas que recorrió más de mil quinientos kilómetros del país presentando sus creaciones a numerosos poblados que no tenían acceso a estas formas de expresión. La idea era incorporar a la masa, haciéndola partícipe del proceso revolucionario incipiente. La mejor herramienta para esto era, nuevamente, la música. En la gira, el peso lo llevaron conjuntos como Quilapayún, Inti Illimani, los hermanos Isabel y Ángel Parra, y varios más.

Los esfuerzos del gobierno por fomentar la cultura se notaban en las iniciativas del departamento recién mencionado, y desde algunos medios públicos, como Canal 7 de televisión y Chilefilms, intentando generar un acceso masivo a las grandes manifestaciones artísticas. Asimismo, la Consejería Nacional de Desarrollo Social, a través de su Departamento de Comunicaciones, disponía de una serie de instructores que se dirigían a las poblaciones del país para enseñar a los trabajadores a conquistar sus propios instrumentos culturales y sociales, para hacer frente a los poderosos medios de influencia masiva burguesa. El equipo tenía el nombre oficial de Grupo Motivador de Comunicaciones en Terreno (GMCT), y sus integrantes fueron conocidos popularmente como “Los Saltamontes”.

En el ámbito rural, mediante un convenio suscrito entre el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y la Confederación Ránquil, en julio de 1971, se formó una serie de centros culturales campesinos en todas las zonas agrarias del país. En este convenio se establecía la realización de cursos para encargados generales de cultura y monitores en las diversas ramas artísticas: teatro, folklore, títeres, artesanía, pintura mural y periodismo popular.

Más allá de una política gubernamental coherente, sistemática o efectiva, eran las iniciativas particulares, tanto a nivel institucional como individual o grupal, las que conseguían aportar eventos, muestras, proposiciones de una nueva cultura. Y ello en la más amplia gama de campos posibles.

En enero de 1971 se informaba sobre el nacimiento de la Compañía Teatral “El Ángel”, con sede en la sala San Antonio, ubicada en el pasaje Maru. Estaba integrada por Anita González, Alejandro Sieveking, Bélgica Castro, Dionisio Echeverría y Luis Barahona. Su intención era contar historias simples, nada de intelectuales ni de difícil comprensión, ofreciendo profesionales montajes sobre la obra de clásicos como Shakespeare o Chejov, constituyendo un teatro más “cultural” que de acción política directa, aunque igualmente con un sentido social al hacer cercana al público masivo aquella cultura que le parecía ajena.

También en este ámbito, la Central Única de Trabajadores, CUT., fundó el mismo año el Teatro Nuevo Popular, TNP. A diferencia del anterior, el objetivo de éste era generar arte desde el propio trabajador. Según explicaba Mario Jiménez, encargado de los asuntos culturales de la CUT:

“Nuestro propósito fundamental es llegar a los trabajadores que hasta ahora han estado marginados del espectáculo. Se trata de realizar un teatro más identificado con la realidad nacional. Y queremos que sean los propios trabajadores quienes aporten ideas y sugerencias al contenido de las obras”³⁸⁹.

Fruto de esta experiencia, la compañía montó en octubre de 1971 la obra “La maldición de la palabra”, experiencia mixta entre actores y asentados que obtuvo el primer lugar en un concurso de teatro social organizado por la misma CUT a mediados de dicho año.

Este mismo conglomerado sentó las bases de la Federación del Nuevo Teatro, organismo cuyo objetivo era coordinar y agrupar la actividad de diversas compañías dispuestas a asumir un papel activo en el proceso político encabezado por el gobierno. En la convocatoria, además, se incluía el Teatro del Nuevo Extremo, el Teatro Aleph, el Ballet Popular y los Mimos de Noisvander. El principal objetivo que se planteaba era:

“1.- Incorporar activamente a las grandes masas de trabajadores al proceso cultural, facilitando su participación en las expresiones teatrales”³⁹⁰.

Bajo el concepto que a través de la cultura se realizaría “la producción de identidades políticas y sociales funcionales al proceso revolucionario y a la consolidación de la sociedad socialista, relegando a un segundo plano las dimensiones propiamente estéticas o de entretenimiento inherentes a los hechos de cultura”³⁹¹, una de las modalidades que asumió el Estado fue la de apropiarse de empresas que ya tenían una trayectoria de producción cultural importante.

³⁸⁹ *Mayoría* N°1, 20 al 26 de octubre de 1971, p. 14.

³⁹⁰ *Mayoría* N° 44, 16 de agosto de 1972, p. 25.

³⁹¹ Catalán, Carlos; Guilisanti, Rafael y Munizaga, Giselle. *Transformaciones del sistema cultural chileno entre 1920-1973*. Santiago: Cenecla, 1987, pp. 35-36.

El caso más significativo fue el de Zig-Zag. La acción más relevante y que generó mayores resultados, fue la fundación de la Editorial Nacional Quimantú.

Quimantú fue el nombre que recibió Zig-Zag luego de haber sido comprada por el Estado. La empresa tenía problemas de solvencia económica, cosa que se plasmaba en las condiciones laborales de los trabajadores. Fue así como éstos iniciaron una huelga el 6 de noviembre de 1970, por cierto influenciados por el frenesí reivindicativo que vivía la clase obrera en torno a la asunción del gobierno popular. Los delicados hechos condujeron a la formación de un tribunal arbitral integrado por representantes de la empresa, trabajadores y el Gobierno, lo que permitió la reincorporación a las faenas. Al constatarse la incapacidad de los dueños para resolver la situación, se acordó la venta completa de las instalaciones al Estado. Fue así como el 12 de febrero de 1971 se firmó el documento de estatización entre el Gobierno, representado por el ministro de Economía y Comercio, Pedro Vuskovic, y el director del Instituto de Economía de la Universidad de Chile, Jorge Arrate; y la Empresa Editora Zig-Zag, representada por su presidente, Sergio Mujica Lois. Nació así, oficialmente, Editorial Nacional Quimantú.

En aquella ocasión Salvador Allende, en su discurso, señaló:

“Desde nuestro punto de vista, el paso que hemos dado significa el inicio de una nueva etapa en la difusión de la cultura en nuestro país. La nueva Editorial del Estado contribuirá eficazmente a la tarea de proveer a los estudiantes chilenos de sus textos de estudios, de promover la literatura nuestra y de permitir que el libro sea un bien que esté al alcance de todos los chilenos...”³⁹².

Al poco andar, Editorial Nacional Quimantú se transformó en el referente cultural del gobierno. Desde sus dependencias se otorgó a la población colecciones, revistas, documentos de trabajo y, en fin, numerosos impresos coherentes con la política de democratización de la cultura. La “cultura para todos” parecía rendir sus frutos.

Se constituyeron dos departamentos, encabezados por el escritor Joaquín Gutiérrez: Departamento Editorial, dirigido por Luciano Rodrigo, y Publicaciones Especiales, a cargo de Alejandro Chelén Rojas. El Departamento Editorial tenía por objetivo publicar las colecciones “Quimantú para todos”, “Cordillera”, “Conversaciones con...” y “Letras hoy”, todo esto en materia exclusivamente literaria. También le correspondía a esta sección la edición de textos escolares y cuentos infantiles. El caso de Publicaciones Especiales, que pretendía convertir al libro en un mecanismo de información y de vehículo que relacionara a todos los chilenos, contaba con dos líneas de trabajo: la colección “Nosotros los Chilenos”, dirigida por Alfonso Alcalde, y los “Cuadernos de Educación Popular”, escritos por Marta Harnecker y Gabriela Uribe.

Un último proyecto, que finalmente no se concretó, era la publicación de una Historia de Chile narrada en fascículos con abundantes fotografías e ilustraciones que perseguía “dar una

³⁹² *La Nación*, 13 de febrero de 1971, p. 5.

visión real de la historia, no acudiendo a las fuentes tradicionales de información, sino a aquellas que permitan analizar momentos históricos y temas antes olvidados como la historia del trabajo o del sindicalismo. Para ello se cuenta con la asesoría de seis profesionales universitarios, encabezados por Hernán Ramírez Necochea y Julio César Jobet³⁹³.

En noviembre de 1971 se informaba la emisión de un libro por semana, con un gran tiraje, que se instalaría en los quioscos y a un precio completamente accesible (12 escudos)³⁹⁴. Los impresos se ordenarían en distintas ediciones, cada una con un sentido particular. La primera era “Nosotros los chilenos”, conjunto de estudios del acontecer histórico y cultural del país “cuya tarea esencial es permitir que los chilenos nos conozcamos a nosotros mismos”³⁹⁵, destacando los momentos más importantes de la historia del pueblo chileno y redescubriendo a personajes históricos, dentro de los que el anónimo trabajador era el más importante. Esta colección se dividió en tres partes: “Hoy contamos”, “Nosotros trabajamos” y “Primera persona”. El objetivo inicial de esta colección era que estuviera integrada por 56 libros, cada ejemplar de 96 páginas y con 50 a 60 fotos, y de aparición quincenal.

La segunda colección era “Quimantú para todos”, consistente en una selección de la mejor literatura del mundo, particularmente latinoamericana. “Cuadernos de educación popular”, la tercera de la serie, eran textos ideológicos y de educación política que ayudaban en la comprensión del proceso al socialismo, “cuya misión es llevar a los trabajadores una serie de obras de estudio y análisis”³⁹⁶. Finalmente, “Camino abierto” era una serie de textos que recopilaban los diversos debates y discusiones que provocaba el momento histórico. Entre noviembre y diciembre de 1971, contando estas cuatro colecciones, se vendieron 265 mil 321 escudos en libros que se distribuyeron por intermedio de las instituciones y los sindicatos.

En el mismo período se anunciaba la aparición de nuevas colecciones como “Clásicos del pensamiento social” (escritos marxistas), “Colección Cordillera” (clásicos de la literatura) y “Cuentos infantiles”. A la misma fecha Quimantú estaba lanzando ediciones de 50 mil ejemplares de libros semanales, fenómeno nunca visto en el país. La labor de difusión la reseñaba el encargado del área, Enrique Penjean, de la siguiente forma: “Por ejemplo, de los 50 mil ejemplares de una obra, 30 mil son distribuidos en los quioscos (20 mil en Santiago y 10 mil en provincias) y 20 mil a través de otros canales (librerías, instituciones, organizaciones sindicales, centros de estudio)”³⁹⁷.

El *slogan* de los libros de la editorial era: “Una llave para abrir cualquier puerta”. La culturización del pueblo, su acceso efectivo a la cultura, se intentaba a través de la industria editorial. Precios bajos, ediciones numerosas, distribución masiva, todo ello formaba parte del concepto que se intentó generar con Quimantú.

³⁹³ *Ahora*, N° 29, 2 de noviembre de 1971, p. 45.

³⁹⁴ *Mayoría*, N° 3, 3 de noviembre de 1971, p. 7.

³⁹⁵ *Ibid.*

³⁹⁶ *Mayoría*, N° 9, 15 de diciembre de 1971, p. 20.

³⁹⁷ *Ibid.*

El fenómeno Quimantú abarcó a otras empresas. Tanto por motivos de competencia comercial como por convicción principista, generó un importante auge de ediciones y colecciones masivas, accesibles a casi todo público. Esta explosión editorial se plasmó en hechos como que Editorial Nascimento, dirigida por Hernán Loyola, abriera hacia fines del año 1971 su Biblioteca Popular; que la editora Austral, por su parte, inaugurara, esta vez sí con claro tinte ideológico, la Colección Camino de Victoria; que las Ediciones de Prensa Latinoamericana continuaran con nuevos bríos su colección América Nueva; y que las universidades, en general, incrementaran notablemente sus impresiones. Editorial Universitaria, por ejemplo, editó en 1971 ciento treinta y cuatro títulos, 84 de ellos pertenecientes a la Colección Cormorán (que era la que presentaba el formato masivo, de gran distribución), y 50 textos escolares. En ejemplares se publicaron más de un millón, según contaba el gerente de la editorial, Eduardo Carrasco³⁹⁸. El mismo año nació Editorial Huda, propiedad de Hugo Debandi, la que se proyectaba a partir de octubre con la emisión de diez títulos.

El libro de bolsillo, soporte principal de esta nueva cultura editorial masiva y popular, se transformaba en uno de los principales símbolos del acceso generalizado a la cultura formulado e incentivado por la Unidad Popular. La idea de cambiar el concepto de libros y cultura: que había que combatir las librerías cerradas a la hora que se sale del trabajo, los altos precios de los libros, los bajos tirajes, el poco conocimiento de los valores literarios nacionales y -lo más esencial- el concepto del libro como mercancía, se estaba cumpliendo.

Conjuntamente a esto, Quimantú ofreció al público una serie de revistas, de distribución semanal, quincenal o mensual, que abarcaban distintos temas cotidianos y que en parte se transformaban en una respuesta a la cultura ofrecida por la industria hasta el momento³⁹⁹. La gama de revistas abarcó todos los aspectos posibles. En el ámbito de la historieta, destacaban títulos como *El Manque*, *Delito*, *Agente Silencio* o *Espía 13*. En términos de realidad nacional, los títulos fueron *Ahora* y *Mayoría*. La revista *La Firme: revista de información popular* tenía el objetivo de mostrar a la población valores y objetivos del gobierno popular mediante un formato de historietas. *La Quinta Rueda*, por su parte, fue la revista cultural por excelencia. Dirigida por Hans Ehrmann, su nombre hablaba justamente de la Cultura como la quinta rueda del carro que había que empujar, y en sus páginas se leía debate intelectual e información cultural de muchas de las más prestigiadas mentes del país.

De las dirigidas a segmentos definidos de la población, las significativas fueron: *Paloma*, destinada a la mujer; *Cabrochico*, revista infantil; y *Onda*. Esta última merece especial mención,

³⁹⁸ *Mayoría*, N° 14, 19 de enero de 1972, p. 23.

³⁹⁹ Debemos precisar que hubo algunos títulos de continuidad respecto a la anterior Zig-Zag. Un ejemplo fue *Vivir mejor*, continuación de la anterior *Saber comer...vivir mejor*, que había aparecido en marzo de 1965. Bajo Quimantú se publicó entre junio y diciembre de 1971.

El segundo título, que ha sido una de las revistas más interesantes aparecidas en Chile en la segunda mitad del siglo XX por su variedad y profundidad temática, fue *Hechos Mundiales*. La revista fue la continuación de *Sucesos*, cuyo primer número apareció en junio de 1967. El cambio de nombre se dio aún bajo la administración de Zig-Zag, en el número correspondiente a junio de 1969.

pues fue la revista dirigida al segmento juvenil el cual, ya por aquella época, estaba consolidado con una identidad propia y potencialidad definitoria dentro de cualquier progreso social. Su slogan fue “Hoy es el primer día del resto de tu vida”, sobre el cual incluso se compusieron dos canciones para su promoción, interpretadas por el grupo Amerindios, integrante del movimiento Nueva Canción Chilena. Fue producida con la participación de la Dirección Nacional de Centros Juveniles, la Consejería de Desarrollo Social, ODEPLAN y el Departamento de Educación de la Universidad de Chile, y en sus páginas se podían leer temáticas como el despertar sexual, el compromiso político, biografías de estrellas de cine, crítica cultural, música rock, Nueva Canción Chilena, etc.

La revista *Onda* fue una muestra de cómo la cultura propuesta por el gobierno popular, debía mezclarse con elementos de la cultura burguesa para, aprovechándose de esta última, generar el esperado cambio. Si bien la temática estaba claramente definida por los intereses de la vía chilena al socialismo, en su contenido incorporaba temáticas anexas. La misma canción de promoción distaba, en su estilo, de la música de raíz folklórica tan identificada con las reivindicaciones sociales.

En cuanto a la literatura presentada, Quimantú se preocupó de editar varios clásicos universales, pero también una serie de novelas donde la temática principal era la denuncia del conflicto social. Varios escritos de autores chilenos daban cuenta de problemas contingentes, así como obras de literatura universal se presentaban dentro del marco teórico que implicaba la búsqueda del socialismo a través del gobierno en curso.

Entre las obras chilenas, hubo algunas emblemáticas. La principal fue *...Y corría el billete*, de Guillermo Atías, editada el primer semestre de 1972 y tildada por el mismo autor como “novela-tabloide”. En sus páginas se relataba el drama de los trabajadores de las empresas estatizadas debido a los intereses de privados⁴⁰⁰. El libro tuvo una segunda edición lanzada el 21 de diciembre de 1972, luego de agotar una tirada de treinta mil ejemplares.

Otro libro importante fue *El miedo es un negocio*, de Fernando Jerez, novela que hablaba sobre el pánico financiero que desataron los sectores reaccionarios desde el 4 de septiembre de 1970, pánico reflejado en su protagonista, a la sazón un empleado bancario⁴⁰¹.

Promoviendo la labor literaria desde el compromiso social, Quimantú convocó a un concurso de poesía el año 1972. Se presentaron más de 300 escritores al concurso, de los cuales fueron seleccionados diez. El primer premio lo ganó Fernando Quilodrán con su obra “Los materiales”. En el jurado habían representantes de la Sociedad de Escritores de Chile, Ministerio de Educación, Universidad de Chile, CUT y Quimantú. Se publicó un libro con los autores seleccionados, cuyo prólogo lo escribió Jorge Jobet, académico de Literatura General de la Universidad de Chile. En éste se señalaba:

⁴⁰⁰ Atías, Guillermo. *...Y corría el billete*. Santiago; Editorial Quimantú, 1972, p. 5.

⁴⁰¹ Jerez, Fernando. *El miedo es un negocio*. Santiago; Editorial Quimantú, 1973.

“En este salto le cabe al escritor una responsabilidad grande. Es, por condición, uno de los motores del cambio. Su misión humana y artística cobra un valor trascendental, por contener su mensaje las angustias y esperanzas del hombre en su eterna lucha por alcanzar los propósitos más elevados de su espíritu; los sucesos y contingencias que lo rodean; la realidad que ensombrece o exalta a la persona; los perfiles característicos de los grupos o las comunidades; las fuerzas primarias y bestiales en pugna con el bien y la justicia; los desbordes del odio, del abuso o del menosprecio sobre el amor, la equidad y la dignidad del hombre. En fin, la descripción, interpretación y explicación de la existencia dentro de los márgenes propios de la naturaleza creadora de su arte. El escritor es un hombre comprometido con su tiempo, que lo alimenta y vivifica, compromiso que no debe significar sujeción a consignismos determinados, sino libre expresión de nuestro ser moral”⁴⁰².

Éste era el sentido de la propuesta cultural del gobierno popular: la libertad creadora responsable con el proceso de cambios que estaba viviendo Chile. Quimantú pretendía constituirse en el reflejo de esta intención, de lo cual daban justa cuenta sus numerosas publicaciones. Su oposición fue ciertamente severa, tanto como lo era la oposición política del momento. El edificio de la empresa terminó sufriendo un atentado con cinco bombas molotov a mediados de octubre de 1972.

Paralelamente, en medio de un ambiente donde la música foránea tenía importante presencia en los medios de comunicación, la Nueva Canción Chilena seguía pretendiendo ser la alternativa que el país en transición al socialismo necesitaba.

Fue así como el 20 y 21 de noviembre de 1971 se realizó el Tercer Festival de la Nueva Canción Chilena, esta vez auspiciado por un organismo oficial como lo era el Departamento de Cultura de la Presidencia. El evento se enmarcó en las Jornadas de la Nueva Moral del Trabajo impulsadas por la misma instancia, que también incluía una serie de concursos de serigrafías, teatro, libretos de radio y de televisión con contenido social. Asimismo, dentro de las actividades se generaron talleres de estudio y foros sobre temas como la participación popular en la producción, los medios de comunicación de masas o la educación, con el objetivo de recoger críticas ante las experiencias del gobierno y encaminarlas a la creación cultural.

El festival fue particularmente relevante, pues provocó una serie de cuestionamientos acerca de la labor que debía realizar el canto popular y la necesidad de adecuarse a los nuevos tiempos en vista del avance de la historia.

En términos prácticos, se presentaron 116 canciones, de las cuales se seleccionaron 16 que fueron presentadas en los dos días señalados. Para cada uno de estos temas, artistas del Taller de Gráfica Popular, vinculado al organismo oficial patrocinante, dedicaron un grabado, los que quedaron impresos en el programa-cancionero exhibido durante la muestra.

⁴⁰² *Poesía 72 Quimantú. Concurso Carlos Pezoa Véliz*. Santiago; Editorial Quimantú, 1972, p. 8.

Si bien la mayoría de las canciones estaban interpretadas por músicos vinculados al movimiento, llamó la atención una canción compuesta por Óscar Cáceres e interpretada por José Alfredo Fuentes, “El Pollo”, ídolo de la época y de nula relación con el acontecer del canto social comprometido. A pesar de ello la letra del tema, que hablaba de los problemas de los pescadores, era absolutamente acorde con la atmósfera del proceso. En una de sus partes decía: “Que en el mar es rey / dictará su propia ley / sin cercos de alambre / ni vallas que indiquen / prohibido pasar”.

La conducción estuvo nuevamente a cargo de Ricardo García y el jurado estuvo integrado por Luis Domínguez, escritor; Cirilo Vila, músico; Fernando Barraza, periodista; Valentín Trujillo, músico; Julio Numhauser, músico y representante del Departamento de Cultura; y el propio animador.

El festival fue bastante elocuente de la nueva coyuntura. Lo que antes de 1970 era denuncia y propuesta, ahora debía ser aglutinamiento en torno a la construcción en apoyo al proceso político. La música debía ser reflejo de ello y aparentemente este evento fue una muestra de que el asunto no era tan así. El día sábado 20 eran las 8 de la tarde y en el recinto no había más de tres mil personas, al nivel que el conductor Ricardo García pedía al público que se arrimara más cerca del escenario.

El número inicial fue una historia de la Nueva Canción, en una narración acompañada de música de Aucán, Inti Illimani, Amerindios y Tito Fernández. La competencia fue de buena calidad, tanto en cuanto a música como lírica. Sin embargo, el público se vio completamente ajeno en entusiasmo y convocatoria. ¿Qué pasaba con la Nueva Canción? ¿Funcionaba solamente como denuncia o protesta, mas no como constructiva, como “oficial”? ¿Por qué no se vislumbraba ese fervoroso público de antes? Luisa Ulibarri, periodista, opinaba al respecto:

“...llegó el momento de cambiar el giro a las fuentes de inspiración. Llegaron tiempos mejores; la protesta debía evaporarse de las canciones. A partir del 4 de septiembre la mayoría de los cantantes decidió abrirle paso al optimismo en las creaciones. Hubo necesidad de apoyar musicalmente aquellas conquistas sociales logradas por el Gobierno popular, necesidad que surgió del compromiso personal que la mayoría de los integrantes de la Nueva Canción tiene con el proceso político chileno. Y surgieron temas dedicados a las obreras de una fábrica textil estatizada, al minero, o alabanzas a las revoluciones chilena y cubana. Una iniciativa valiosa que falló en su ejecución”⁴⁰³.

Respecto al motivo por el cual las propuestas musicales y artísticas parecían no tener una gran popularidad o generar un importante entusiasmo en la masa, se le adjudicaba responsabilidad importante a las barreras impuestas por los industriales de la música.

Había una responsabilidad de la industria. Sin duda. Pero era el propio movimiento el que protestaba contra ella. Sobre su propia base se había estructurado una industria alternativa,

⁴⁰³ *Ahora* N° 33, 30 de noviembre de 1971, p. 40.

en la que el sello Dicap era sintomático e IRT se transformaba en importante apoyo. Por otro lado, el fuerte de la propuesta era, más que la transmisión de esta música a través de los medios de comunicación masivos, las presentaciones en vivo: sus intérpretes constantemente recorrían el país realizando actuaciones, más aún ahora con el apoyo del gobierno. Y no solo en Chile, sino también en el extranjero. Si bien la Nueva Canción siempre quiso abarcar la mayor cantidad de público posible, su propuesta no era masiva; su público siempre fue restringido, más aún cuando la mayoría de sus integrantes asumió una posición militante al lado del gobierno. Si bien algunas canciones fueron éxito de popularidad, como lo había sido algunos años antes “Arriba en la cordillera”, de Patricio Manns, y en menor medida, posteriormente, algunas cumbias de Quilapayún como “La Batea”, sus obras nunca fueron grandes éxitos de venta ni tuvieron gran difusión. Y la responsabilidad era compartida por la industria musical, al no ver la potencialidad comercial de la música, y por los propios artistas, quienes no podían esperar masividad a su intransigente y honesta propuesta.

El Estado, por otra parte, no era capaz de generar los mecanismos suficientes para que se garantizara el acceso real de esta música a los medios de comunicación masivos, la mayor parte privados. Las opiniones de dos de los exponentes del movimiento son bastante sintomáticas de todo lo antes expresado. Isabel Parra reflexionaba: “Los creadores e intérpretes de la Nueva Canción Chilena tendremos que ponernos en veda un tiempo para observar, vivir y dar una respuesta creadora en lo musical al fenómeno político que se desarrolla en Chile”⁴⁰⁴. Payo Grondona, por su parte, decía: “No debía quedar su difusión [refiriéndose a la música] en manos de locutores antojadizos que no logran romper la barrera entre los intérpretes y la gran masa”⁴⁰⁵. Los Curacas opinaban frente a lo mismo: “Hay problemas en la Nueva Canción Chilena –acusar-. Se notó en el último evento. El sectarismo, la falta de temática, las cosas poco claras... Muchos se han quedado. Esto quiere decir que urge una reestructuración total a nivel de todos los folkloristas del país”⁴⁰⁶.

A pesar de que, efectivamente, el movimiento tenía una relación distante con la industria, contaba con un sello que le permitía grabar y emitir la mayoría de sus obras. Era Dicap, Discoteca del Cantar Popular. El sello nació el año 1969, reemplazando el anterior de las Juventudes Comunistas (cuyo logotipo era J.J.) y su director hacia 1971 era Juan Carvajal. Realizaba un promedio de doce grabaciones al año, de las cuales la mayoría era de intérpretes de la Nueva Canción.

En el mismo noviembre de 1971, durante la semana comprendida entre los días 22 y 28, se realizó en Valparaíso el 3º Festival de la Canción Comprometida. Fue en ese tiempo cuando Payo Grondona, quien cantaba “Ahora sí el cobre es chileno”, editaba su segundo Lp. donde aparecían canciones como “Elevar la producción es también revolución” y “No meteremos las manos, quizás los pies”, de claro contenido contingente; y cuando visitó Chile Joan Baez, importante cantante vinculada a la contracultura estadounidense.

⁴⁰⁴ *Ahora* N° 32, 23 de noviembre de 1971, p. 49.

⁴⁰⁵ *Ibid.*

⁴⁰⁶ *Onda* N°9, enero de 1972, p. 29.

Pero Chile no solo era visitado por músicos de tendencia política definida. En noviembre de 1971 se presentó en el Teatro Caupolicán el afamado intérprete de jazz Duke Ellington, en el marco del inicio del Festival de Música Contemporánea organizado por la Vicerrectoría de Comunicaciones de la Universidad Católica. Era el mes en que el conjunto Tiempo Nuevo, integrado por Roberto Rivera, Raúl Celis y Sergio Celis, editaba su nuevo álbum llamado *Ahora es tiempo nuevo*, grabado con el acompañamiento de la orquesta de Henry Collins.

El viernes 3 de diciembre el conjunto Amerindios, integrado por Julio Numhauser, Mario Salazar y Patricio Castillo⁴⁰⁷, presentaba en el Teatro La Reforma su espectáculo “Uh Morada”. La presentación consistía en una serie de canciones satíricas, humorísticas y de todo tipo, coordinadas a través de un relato del escritor y crítico Ariel Dorfman y apoyadas por la presentación de diapositivas y filmaciones.

A fines del año 1971, un conjunto de artistas realizaba una gira por el norte, bajo el auspicio del Departamento de Cultura de la Presidencia y el apoyo de los Comités Provinciales de Cultura. Durante diciembre, músicos como Rolando Alarcón, Nano Acevedo, Héctor Pavez, el grupo Chagual y el Ballet Folklórico Loncurahue, recorrieron las provincias de Atacama y Coquimbo interpretando e investigando música chilena. El mismo mes el conjunto Quilapayún componía una cantata al héroe de la guerra de Vietnam Nguyen Van Troi, reafirmando el compromiso internacional que tenía la causa antiimperialista en el proceso cultural que vivía Chile. Víctor Jara, por su parte, ingresaba al cuerpo de artistas estables de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad Técnica del Estado (UTE), editaba su quinto álbum y recibía el premio Laurel de Oro como mejor compositor del año.

Este quinto disco de Víctor Jara llevaba por nombre *El Derecho de Vivir en Paz*. Sin renunciar a su propuesta comprometida y acabada en términos musicales, se atrevía a incorporar nuevos elementos a su música. Fue así como las dos primeras canciones del álbum, la homónima y “María abre la ventana”, fueron grabadas junto el grupo Los Blops. Éste era un conjunto más bien vinculado al rock progresivo, género para muchos “extranjerizante” e incluso “alienante”. Otorgando evidentes aires jóvenes y musicalmente interesantes, Víctor se abría a nuevas propuestas sin abandonar el fundamento básico de denuncia social, el que reafirmaría algunos meses después con su Lp. *La población*. La misma innovación habían realizado Amerindios con su canción “Hoy es el primer día del resto de tu vida” y realizarían más tarde con su “Cueca beat”. ¿Estaban traicionando la nueva cultura proletaria, al utilizar elementos de la cultura capitalista?

La cultura como muestra de libertad, dinamismo, innovación, creatividad, pero también responsabilidad política y compromiso social, tuvo su controversia.

⁴⁰⁷ Numhauser y Castillo habían formado parte anteriormente del conjunto Quilapayún, y posteriormente Numhauser se haría cargo de la dirección del sello IRT.

Enrique Lihn llamaba la atención sobre posturas obtusas que se negaban a utilizar ciertas herramientas que había otorgado históricamente el capitalismo, y a reconocer toda trayectoria creativa que se había desarrollado en una sociedad burguesa que debía ser abolida. El tono del escrito estaba ciertamente influido por la crítica que había tenido un documento por él firmado junto a otros escritores en 1970, “Por la creación de una cultura popular nacional”⁴⁰⁸, del que antes hacíamos mención; y por las consecuencias que tuvo el Caso Padilla para todo el ambiente intelectual de la izquierda latinoamericana⁴⁰⁹.

En un tono sumamente crítico, y a veces hasta agresivo, Lihn se demostraba partícipe del sentido real de la cultura que se quería provocar. Afirmaba, parafraseando a Lenin:

“La gente habla más de la cuenta y con demasiada locuacidad acerca de la cultura proletaria. Deberíamos darnos por satisfechos con la verdadera cultura burguesa para empezar, y nos alegraríamos, para empezar, de poder prescindir de los tipos más rudimentarios de cultura preburguesa, es decir, la cultura burocrática o servil, etc. En cuestiones de cultura, el apresuramiento y las medidas arrebatadas es lo peor que puede pasar’

Es lo peor que nos puede pasar”⁴¹⁰.

El tono del documento de Lihn era abiertamente contrario a la posición deificada de algunos intelectuales que se asumían la cara visible del proyecto socialista, los verdaderos representantes de la cultura oficial y, por ende, los mejores ejemplos de la cultura proletaria. Entre ellos, el punto de referencia de Lihn fue Armand Mattelart⁴¹¹, sociólogo belga

⁴⁰⁸ Lihn afirmaba que “...nuestro documento proponía como otra de las muchas tareas de creación, organización y difusión de una nueva cultura la necesidad de *poner al alcance del pueblo las herramientas de análisis, ‘traducirlas’, cuando el lenguaje especializado las haga inabordables...*”, mostrándose definitivamente irritado por las críticas que recibió de propios militantes de la Unidad Popular. Entre sus reacciones, la siguiente: “Si el ser social determina la conciencia, ello no es incongruente con la idea de que ‘la transformación de nuestra sociedad debe darse en término de una comprensión de nuestro ser que haga el proceso (de transformación social) y que recoja sus experiencias’. La herejía habría consistido acaso en señalar que: *De este otro modo, incluso el intento mismo de transformación de nuestra estructura económica resultara viciada*. La herejía, se entiende, para un criterio economicista, desde siempre superado, según creo, por el marxismo”, Lihn Enrique. “Política y cultura en una etapa de transición al socialismo”. En “La cultura en la vía al socialismo”. Santiago; Universitaria, 1971. Artículo recopilado en Lihn, Enrique *El circo en llamas*. Santiago; Lom ediciones, 1997, pp. 454 y 437.

⁴⁰⁹ Sobre esto Lihn publicó una Carta Abierta sobre el Caso Padilla en Revista *Marcha* N° 1541, del 30 de abril de 1971, carta que costó mucho que fuera publicada por medios ligados al gobierno. Al respecto, el autor señaló: “Lamentable es...el que no exista hasta ahora en Chile una publicación que recoja y haga público el debate de la izquierda para la izquierda, en el subentendido de que *la verdad es revolucionaria*, como lo es también la búsqueda de la misma”. Lihn Enrique. “Política y cultura en una etapa de transición al socialismo”. En “La cultura en la vía al socialismo”. Santiago; Universitaria, 1971, p. 40.

⁴¹⁰ Lihn Enrique. “Política y cultura en una etapa de transición al socialismo”. En “La cultura en la vía al socialismo”. Santiago; Universitaria, 1971. Artículo recopilado en Lihn, Enrique. *El circo en llamas*. Santiago; Lom ediciones, 1997, p. 459.

⁴¹¹ El libro referente era: Mattelart, Biedma y Funes. *Comunicación masiva y revolución socialista*. Santiago de Chile, Prensa Latinoamericana, 1971, 334 pgs.

nacido en 1936 y que a la fecha trabajaba en el Centro de Estudios de la Realidad Nacional, CEREN, organismo fundado por Jacques Chonchol, dependiente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y que se convirtió en uno de los principales centros generadores y emisores de ideología durante el régimen de Salvador Allende.

Reafirmando su propuesta desde aquel antiguo documento, Lihn afirmaba:

“Nuestro documento hablaba ... de ‘una política cultural errónea, paternalista, inspirada en la noción general de que bastaría culturizar al desposeído’, entendiéndolo, en cambio como el protagonista del proceso de culturización. Pero preveía la coexistencia de un trabajo político e ideológico con la obra de creación individual; distinguiendo así, como lo habría hecho Lenin, el papel de la *literatura del partido* –en este caso al servicio del programa de la Unidad Popular- sometida al control de una ideología, surgida, entre nosotros, del pluralismo político, de la literatura o el arte en general que para aquel serían fecundados a largo plazo por la ideología socialista, pero que no podía ser intervenida y administrada por el Estado.

...

En la perspectiva teórica abierta por Mattelart –si es que propone una perspectiva única, y lo hace, en verdad, de una manera laberíntica- ese proyecto nuestro tendría que estimarse como reaccionario.

Es que para Mattelart, hasta la propia noción de estética –para no hablar de la libertad y la personalidad– es un producto del autoritarismo burgués, un instrumento de dominación”⁴¹².

Como conclusión el poeta afirmaba:

“Se hace cada vez más urgente... precisar una política cultural que acompañe, desde adentro, el proceso de cambios revolucionarios que está ocurriendo en Chile, en el camino de una democracia socialista. Pero hay que hacerlo en los términos que se ajusten tanto al momento que se vive cuanto a la dirección de este proceso. Sin atrasarse ni adelantarse a él por completo. Conviene distinguir correctamente las funciones que, en virtud de un mismo proyecto global, asumirán las distintas formas de producción cultural. Mientras no se decida que el arte, la ciencia, la literatura, la política y la ideología son una y la misma cosa, y que sus mensajes respectivos carecen de toda especificidad.

Se precisa especificar los diferentes niveles en que se abrirá el frente de la cultura, a la búsqueda de una nueva formulación de la misma, con los medios de que se dispone y lo que sea preciso crear en el curso del proceso. Se trata de no caer en el liberalismo y la confusión ideológica, por una parte, ni por la otra, en nivelaciones desde abajo, como no sea en el campo de la educación masiva.

⁴¹² Lihn. Op. cit. p. 463.

Es necesario contar con el carácter pluralista de la sociedad chilena, diseñando el amplio contorno a que debe extenderse la creación de una nueva cultura”⁴¹³.

¿Había una contradicción entre cultura popular y libertad creativa? Sí, desde el punto de vista que manifestaciones ligadas a la cultura tradicional, o “alta cultura”, y otras de origen extranjero, particularmente estadounidense como era el caso del rock, por muchos no se consideraban dignas del nuevo proceso, y tampoco se valoraban como expresión real. Por lo mismo, la capacidad para sintetizarlas en un todo común, nuevo y transgresor, pero igualmente comprometido y revolucionario, fue esporádica y marginal. La música fue posiblemente la que más se acercó a aquello con ejemplos como los que mencionamos anteriormente.

Pero la crítica frente a la política cultural oficial también se dio desde los mismos partidos. La más importante fue la vinculada a uno de los principales conglomerados del gobierno, como lo fue el Partido Comunista. En la Asamblea Nacional de Trabajadores de la Cultura del PC, realizada los días 11 y 12 de septiembre de 1971, se concluía que los logros del gobierno no eran suficientes, pues el gran desafío histórico que el momento planteaba era lograr que la ideología del proletariado llegara a ser el contenido cultural dominante de la nueva sociedad que se estaba construyendo.

Con el principio de que la cultura emerge del trabajo y por lo tanto es decisivo el aporte de la clase obrera, se argüía la posibilidad real esta vez de renovar la cultura, por el hecho de estar modificando la forma de existencia social, requisito indispensable. Se daba, así, una contradicción dialéctica entre la cultura burguesa y la proletaria, donde esta última se planteaba como la síntesis del conflicto: “...lo específico de este combate es que su objetivo no es aniquilar ni distribuir las manifestaciones del adversario, sino superarlas en calidad, en contenido y dar paso a una cultura digna de la futura sociedad socialista”⁴¹⁴.

¿Cómo se evaluaban las políticas gubernamentales en este sentido? Volodia Teitelboim era categórico:

“Pero, diciendo francamente un secreto a voces, revelando un misterio público, en verdad hasta ahora no ha existido aún de parte de la Unidad Popular, como movimiento, ningún planteamiento sistemático, completo, teórico y práctico sobre la naturaleza, características, premisas y elementos substanciales a la revolución cultural en Chile. El presidente Allende lo ha echado de menos”⁴¹⁵.

Sin plantear una crítica de fondo, como lo era la del poeta Lihn, el PC llamaba a acelerar el proceso, sobre todo mediante la organización de los actores culturales. Si bien por un lado se sugería la creación del Instituto Nacional del Arte y la Cultura, como organismo que concertara la política cultural a lo largo del país (labor que no había cumplido a cabalidad el

⁴¹³ Op. cit., p. 365.

⁴¹⁴ Maldonado, Carlos. *La Revolución Chilena y los problemas de la Cultura. Documentos de la Asamblea Nacional de Trabajadores de la Cultura del P.C., realizada los días 11 – 12 de septiembre*. Santiago, 1971, p. 8.

⁴¹⁵ Op. cit., p. 30.

Departamento de Cultura de la Presidencia), lo más importante era la organización de los propios agentes de cultura:

“Por otra parte, pensamos que la acción transformadora de la cultura requiere de una nueva organización de artistas, escritores e intelectuales... Hoy necesitamos que sean centros de planificación de trabajo; talleres amplios de creación y discusión. Debemos, además, reanimar nuestros Comités de Unidad Popular.

Los trabajadores de la cultura que no laboran en un frente específico de este campo, deben readecuar su militancia partidaria, de preferencia en bases de industria y poblaciones. Necesitamos que se produzca un íntimo diálogo entre el pueblo y sus creadores, pero no solo a través de sus obras o de encuentros ocasionales, sino en un conocimiento vital y diario”⁴¹⁶.

La concepción cultural de fondo que planteaba la Asamblea, no era el recuperar la libertad creativa ni rescatar elementos de la cultura burguesa. Al contrario; era conseguir definitivamente el triunfo de la cultura proletaria a través de la generación de una nueva conciencia apoyada en los valores de la clase obrera y la participación comprometida de los trabajadores con ese proceso. La intervención de Teitelboim fue muy clara al respecto:

“La tarea esencial de la revolución cultural es la lucha por la conciencia revolucionaria. Y esta lucha no se da en frío ni en el vacío, sino a través de la participación en la tarea práctica de construir una nueva sociedad, tarea de todos los días, para todo el pueblo. Su realización exige el reemplazo de una falsa conciencia creada por siglos de alienación reaccionaria, substituyéndola en un proceso prolongado y complejo, para ir creando dialécticamente esa fresca conciencia que debe caracterizar al forjador de la nueva sociedad”⁴¹⁷.

Dos posiciones distintas, las de Lihn y Teitelboim, pero igualmente críticas. La política gubernamental parecía no responder a las expectativas cifradas, pero objetivamente la actividad cultural se plasmaba en el ambiente. ¿Qué sucedía? Pues que la actividad respondía al convencimiento y compromiso individual de aquellos mismos creadores que, por años, postulaban al “hombre nuevo” en sus obras. El encauzamiento que debía provocar el gobierno no era suficiente; las manifestaciones seguían dispersas, pero el público, la masa, el pueblo, tenía mucho más cercano a su propio acontecer la experiencia sublime que otorga el arte y la creación en cualquiera de sus formas.

⁴¹⁶ Op. cit., p. 25.

⁴¹⁷ Op. cit., p. 51.

4. Joven camarada que construyes tu esperanza. Alumbra los muros con rojo grito de libertad.

La propuesta plástica, el arte en su acepción más clásica, también se manifestaba en su nueva formalidad, relacionándose con la masa popular tanto en su gestación como en su presentación.

Uno de los hechos más significativos en este sentido fue la creación del Instituto de Arte Latinoamericano, I.A.L., por el decreto N° 15.843 del 29 de diciembre de 1970. Dependiente de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y al cual se anexaron el Instituto de Extensión de Artes Plásticas y el Centro de Arte Latinoamericano, su preocupación inmediata fue crear las condiciones adecuadas para respaldar la gestión de Salvador Allende, sumando desde el principio a los intelectuales y artistas como agentes del gobierno popular. El I.A.L. suscribió el primer semestre de 1971, junto a la Casa de las Américas, la “Declaración de La Habana”, en la cual se afirmaba que la actitud que le debía caber al artista era la de lucha contra la enajenación que genera la cultura burguesa; el sujeto real de la revolución cultural era el pueblo como creador, debiendo los artistas traer y llevar el arte al pueblo.

Fue bajo este principio que numerosas instituciones culturales, no directamente vinculadas al Estado, fueron generando una serie de exposiciones, experiencias artísticas y talleres plásticos, con un claro sentido popular y una temática contingente. El 9 de junio de 1970, por ejemplo, el Instituto de Extensión de la Universidad de Chile montó la exposición “América, no invoco tu nombre en vano”, que pretendía afirmar el sentir continental de la expresión plástica.

Algunos meses después, en noviembre del mismo año, se montó en la sala 666 de calle Teatinos, perteneciente a la Universidad de Chile, la exposición “El homenaje al triunfo del pueblo”. Estuvo organizada por la Facultad de Bellas Artes y el Instituto de Extensión de la Universidad de Chile, bajo las direcciones respectivas de Pedro Miras y Miguel Rojas; la Sala Universitaria, y el Museo de Arte Contemporáneo. El sentido de la presentación era claro: “La muestra no pretende definir un estilo, sino que simplemente afirma la actitud militante y de absoluto respaldo de los artistas chilenos y extranjeros para contribuir a la construcción de una sociedad nueva”⁴¹⁸.

Otra de las labores emblemáticas fue la realizada por el Museo de Arte Contemporáneo bajo la dirección de Guillermo Núñez. En abril de 1971 se anunciaba una exposición de trabajos de las brigadas Ramona Parra e Inti Peredo; una exposición plástica de las cuarenta medidas de la UP, y otra titulada “Los enemigos del pueblo”. Todo, con el fin de acercar ese arte considerado como patrimonio de las elites, al pueblo mismo:

“A esta gente [se refiere a la “comunidad populosa y modesta”] no se le puede obligar a respetar lo artístico. Eso irá naciendo poco a poco. La gente viene al museo a pie

⁴¹⁸ Catálogo Homenaje al Triunfo del Pueblo. Santiago, 4 de noviembre, 1970.

pelado, se siente en su casa. Si este museo tiene olor a cebolla, será fantástico.

Así imagina el pintor Guillermo Núñez el futuro del museo que dirige. No le interesa el público de elite. Quiere hacer un museo entretenido, que sea un instrumento social y políticamente útil”⁴¹⁹.

La plástica se desarrolló públicamente, de modo muy cercano a la masa, y el mayor ejemplo de ello fue la pintura mural. El muralismo, en su sentido, se presentaba como una manifestación pública, colectiva y militante, capaz de provocar a través de una experiencia estética acabada. Fue el paradigma del arte social. Su principal agente, la brigada muralista, fue el símbolo de aquello.

Las brigadas muralistas nacieron con una finalidad práctica: hacer publicidad política. Lo que inicialmente fue solo un mensaje contingente, con el tiempo fue adquiriendo evidentes elementos de valor artístico, donde símbolos como la paloma, la estrella, la espiga, la hoz y el martillo, el obrero y otros, se transformaron en la imagen visual del arte comprometido. Las brigadas Ramona Parra, Inti Peredo o Elmo Catalán intervinieron la ciudad con sus mensajes y obligaron al chileno a contemplar, y a veces soportar, su obra.

La labor que causó mayor impacto público fue la realizada por la Brigada Ramona Parra, dependiente de las Juventudes Comunistas⁴²⁰. Si bien gran parte de Santiago se pintó con sus colores, la obra más reconocida fue aquella que pintaron en los tajamares del río Mapocho: a lo largo de unos doscientos metros se pintó una serie de murales que narraban la historia del movimiento obrero chileno y la historia del PC, dos historias que se superponían para transformarse en una sola. La obra fue realizada en 1970, en medio de la vorágine de la elección presidencial, y participaron miembros de la BRP, alumnos y profesores de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile, y artistas como Pedro Millar, María Luz Donoso y Hernán Meschi.

Los murales en los tajamares del Mapocho tuvieron una segunda etapa. Esta se inició el domingo 26 de diciembre de 1971 sobre los dibujos de Alejandro “Mono” González, Moncho Meneses (ambos miembros de la Brigada Ramona Parra), José Balmes (a la sazón, director de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile), Pedro Briones, Francisco Brugnoli, Mario Castillo y César Hologaray. La obra tenía una primera etapa donde se intentaba sintetizar la lucha de la clase obrera: las primeras huelgas, el nacimiento del Partido Comunista, la represión, hasta llegar al triunfo popular. Luego se presentaba una interpretación del presente, destacando los logros y construcción del futuro de los trabajadores y su gobierno, donde la batalla por la producción y la nacionalización del cobre constituían los ejes temáticos.

⁴¹⁹ *Ahora* N° 2, 27 de abril de 1971, p. 45.

⁴²⁰ La BRP había nacido el año 1968 y su objetivo en la propaganda política era aprovechar el paisaje urbano para contrainformar, es decir, “generar un contradiscurso que se oponga al discurso dominante, y promueva un proceso desalienante de la realidad elaborada por los medios de comunicación de masas”. Longoni, Ana. “Brigadas Muralistas: La persistencia de una práctica de comunicación política-social”. *Revista Crítica Cultural* N° 19, noviembre de 1999, s/n.

Pero no solo las calles, puentes o tajamares. El muralismo se exhibió también en espacios tradicionales. Fue presentado desde instancias como el I.A.L., dirigido por Miguel Rojas Mix, y el Museo de Arte Contemporáneo, conducido por Guillermo Núñez. La primera patrocinó la muestra “Las Brigadas Muralistas”, realizada en 1971 en las dependencias del museo recién mencionado con la participación de las brigadas Inti Peredo (del Partido Socialista) y Ramona Parra (del Partido Comunista), transformándose una expresión eminentemente callejera, en otra digna de los espacios destinados a la “alta cultura”. El mismo Instituto organizó una exposición en la Sala Universitaria, perteneciente a la Universidad de Chile, con las obras del “Mono” González.

El “Mono” Alejandro González, joven de 25 años a la fecha, era el director artístico de la BRP. Activo militante comunista, artista plástico y diseñador teatral del Instituto de Teatro de la Universidad de Chile, ITUCH, era la figura referencial del muralismo político y tuvo la oportunidad de exhibir sus trabajos en esa exposición. Se inauguró el 2 de noviembre de 1972, ocasión en que el artista dio a entender la importancia del evento:

–“Tú le das gran importancia a los murales y al arte callejero, ¿cómo se explica entonces esta exposición ‘a puertas cerradas’?”

–También es importante hacer este tipo de exposiciones para poder golpear no solo en la calle, sino que al mismo tiempo en este medio de artistas e intelectuales”⁴²¹.

Un fuerte respaldo a este formato pictórico lo dio Roberto Matta, prestigioso artista chileno residente en Europa, quien en noviembre de 1971 visitó Chile apoyando al gobierno de Salvador Allende, y realizando una serie de obras junto a miembros de brigadas muralistas y público en general, destinadas a sindicatos, edificios públicos y otras instituciones. Destacó en este sentido la colaboración prestada por Matta a la BRP para pintar el mural “Primer gol del pueblo chileno”, en la Municipalidad de la comuna de La Granja, precisamente en la piscina del establecimiento⁴²².

El concepto del mural también fue asumido por artistas consagrados. Con una técnica algo más sofisticada que aquellos callejeros, pero una temática igualmente social y comprometida, el período fue testigo de una serie de pinturas de ese amplio formato a lo largo de Chile. Fue el caso del mural de Gabriela Mistral, ubicado en el cerro Santa Lucía, obra de Fernando Daza inaugurada el 22 de octubre de 1971. El mismo autor pintó en aquel período un mural en el casino de la industria Ex-Sumar, como regalo a sus trabajadores, y uno titulado “La Búsqueda”,

⁴²¹ “Los ‘monos’ de la BRP en las salas de arte”. *Ramona*, 4 de noviembre de 1972, p. 19.

⁴²² En una entrevista que se le hace al artista por este trabajo, Matta señalaba:

–“Roberto, ¿qué importancia crees que tiene para la Brigada Ramona Parra este trabajo en conjunto contigo?”

–Tiene un valor político, es como la primera ‘chuteada’ de un juego. La BRP tendría que jugar no solo conmigo, sino que con otros pintores. Sacar a los artistas de esa especie de ‘isolamiento’ (en castellano diríamos asilamiento)”. “Roberto Matta y las BRP.: Un arte sin cuello ni corbata”. *Ramona*, 3 de diciembre de 1971, p. 6.

pintado en el Club de la República, comenzado en septiembre de 1972 y terminado a comienzos de 1973. El mismo año 1973 se pintó un mural en homenaje al Presidente Allende por la Nacionalización del Cobre, realizado en el local del Sindicato de El Teniente. En este mural participó el pintor y profesor ayudante de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile, Alfonso Puente Guajaro.

Más allá del muralismo, se realizó una serie de exposiciones y actividades a través de instituciones establecidas. Una de las primeras y más controvertidas muestras de arte comprometido, proletario y antiburgués, fue la exposición de “Las 40 medidas”. La representación de ellas a través de la plástica fue una notable y ejemplar experiencia.

La muestra se realizó en el Museo Nacional de Bellas Artes en julio de 1971. Las obras fueron realizadas en su parte más consistente, por estudiantes de la Escuela Experimental de Educación Artística del Ministerio de Educación y pobladores de distintos sectores de Santiago, siempre con el apoyo y orientación de artistas de trayectoria. Se trabajó en pintura, escultura, materiales mixtos y otros formatos, y participaron más de cien artistas divididos en 16 grupos, los que refundían varias medidas afines, las analizaban, las discutían en términos políticos y luego las plasmaban en su obra. Se desarrolló así una dinámica de trabajo colectivo pocas veces aplicada a la creación artística, absolutamente coherente con el principio del abandono del artista como ser individual, para constituirse en un ser social integrado dentro de un proceso de cambios.

La exposición tuvo severas críticas de forma y fondo. Se le tildó de concientizadora y panfletaria. Y sin duda que lo era; fue una muestra de arte que presentaba el objetivo de un gobierno socialista, y que se realizaba de acuerdo al ideal de construcción cultural dentro del sistema⁴²³.

Paralelamente la cultura de masas proseguía su curso. Si bien surgían propuestas alternativas directamente vinculadas a los intereses oficiales, los medios de comunicación seguían ofreciendo productos de aquella cultura burguesa tan denostada y rechazada por muchos militantes de la Unidad Popular. Se daban, sin embargo, algunos hechos curiosos. En el Festival de Viña de febrero de 1972, en cuya competencia internacional triunfó el tema “Julie”, representante de Aruba, Antillas Holandesas, e interpretado por Julio Bernardo Euson, se presentó como una de las grandes atracciones del show a la cantante Miriam Makeba. La intérprete del popular “Pata pata” sorprendió a todos al demostrar en el escenario, y desde la televisión hacia todo Chile, su apoyo al Presidente Allende. Las rechiflas y aplausos que

⁴²³ La crítica de un medio oficial decía respecto a la muestra: “La calidad de los trabajos no es pareja. En muchos de ellos no se logró un justo equilibrio entre lo plástico y lo didáctico. Sin embargo, lo más importante ocurrió antes de que se realizaran los trabajos; en las discusiones previas. Los pobladores de La Granja que participaron en la obra denominada ‘La Nueva Cultura’ vivieron esa experiencia. A las reuniones de discusión asistieron obreros, dueñas de casa, integrantes de las juntas de vecinos y estudiantes de artes plásticas. En ellas se analizó largamente el problema de la cultura”. *Ahora* N° 14, 20 de julio de 1971, p. 48.

provocó su intervención alertaba sobre la división progresiva de una sociedad chilena que no solamente escuchaba sobre un pueblo unido que jamás sería vencido o sobre la intransigencia del avance de las políticas gubernamentales. El público, el pueblo, independiente de su posición política, más allá de que disfrutara o no de los murales o de las cantatas, también se reía con Bigote Arrocet y cantaba “Mi viejo”, del argentino Piero. Los jóvenes podían participar en los trabajos voluntarios, trabajar en talleres literarios en poblaciones, pero también disfrutaban de “Música Libre” independiente de que en la prensa oficial se dijera de sus integrantes: “Nosotros creíamos que eran jóvenes, pero eran solo monos de cuerda”⁴²⁴. Era, ciertamente, un “ballet” mucho más popular que el Ballet Folklórico Nacional dirigido por Rodolfo Reyes, dependiente del Ministerio del Interior.

Mientras las contradicciones se agudizaban y la cultura popular persistía en su intento por superar a la “cultura burguesa”, los espectáculos que aparentemente eran contrarios a los intereses del pueblo persistían. En enero de 1972 se presentaba en la discotheque Eve de Vitacura la obra de teatro “Todos los pelos, el pelo”. Montada por un grupo de teatro argentino y emulando la opera rock *Hair*, sus desnudos, mensajes y precios no se conllevaban con los intereses de un país que desde el gobierno intentaba superar la pobreza y cultivar los valores de nuestra tierra. En la prensa oficial se decía respecto al espectáculo: “Los peludos sin ropa –por un lado– que con la chiva ‘hippie’ le hacen empeño al buen billete; y los ricos espectadores de a melón [referido al precio de E° 1.000] por pareja –por el otro– que se dejan encandilar por cualquiera ‘rareza’ que les haga apartar los ojos de la vida gris y sacrificada que lleven las restantes cuatro quintas partes de todos los chilenos”⁴²⁵.

Conjuntamente, la música seguía produciéndose y sugiriendo cambios, enseñando sobre la historia del movimiento obrero, testificando los logros y problemas de la clase trabajadora, denunciando los embates de la oposición. En este proceso el conjunto Quilapayún se transformaba en el más importante.

En septiembre de 1972, en el Teatro Municipal y el Estadio Chile, estrenaron su obra *La Fragua. Canto para chilenos*, compuesta por Sergio Ortega. La obra, que respondía al género de “cantata”, trataba sobre la historia del movimiento popular chileno y estaba compuesta por doce canciones agrupadas en cuatro partes: Las claves, Las luchas, La Herencia y Los Trabajadores de la Patria. En la presentación, cuyo montaje contó con el importante apoyo de la Universidad Técnica del Estado, los relatos estuvieron a cargo del actor Roberto Parada y el acompañamiento fue con orquesta sinfónica dirigida por el maestro Eduardo Moubarach.

La Fragua fue grabada al poco tiempo y distribuida en Chile por el sello Dicap. Paralelamente uno de los temas del conjunto obtenía gran popularidad. Era una cumbia llamada “La batea”, festiva canción cuya letra se modificaba constantemente dependiendo de la contingencia. Junto

⁴²⁴ Onda N° 18, 12 de mayo de 1972, p. 49.

⁴²⁵ “El show que desnuda por E° 500. Cuán fuera de onda están ciertos burgueses”. *Ramona* N° 14, 1 de febrero de 1972, p. 20.

a ésta, “La merluza”, “El enano maldito” y otras, plasmaban en la música el duro debate político mediático.

El evento de estreno de *La Fragua* coincidió con la visita a Chile de tres de las figuras más importantes del canto latinoamericano. Efectivamente, en septiembre de 1972 visitaron Chile los tres principales exponentes de la Nueva Trova Cubana, movimiento de gran riqueza musical y notoriamente comprometido con el proceso revolucionario encabezado por Fidel Castro: Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Noel Nicola. Los músicos se reunieron con sindicatos, estudiantes y artistas chilenos, y tuvieron como uno de los centros de operaciones la Peña de los Parra. Ángel Parra, de hecho, grabó al corto tiempo la canción “Chile va”, compuesta colectivamente por los tres visitantes. El evento corolario de la gira fue un recital gratuito en el Estadio Chile, tan gratuito como los recitales que realizaban por aquel entonces todos los jueves distintos artistas chilenos (Quilapayún, Inti Illimani, Tito Fernández, etc.) en el teatro Gran Palace.

En octubre de 1972 Víctor Jara daba a conocer su último álbum, *La población*, donde daba cuenta del padecer de los ciudadanos sin casa, de la dignidad del poblador y del éxito de sus luchas reivindicativas. Gracias al disco, personajes como Luchín o Herminda de la Victoria se constituyeron en símbolos populares. Al mes siguiente, el sello Dicap lanzaba al mercado un disco de larga duración con la cantata *Oratorio de los trabajadores*, interpretada por el conjunto Huamari, con música del joven compositor Jaime Soto León y letra del poeta Julio Rojas.

El mismo sello, afirmando su propuesta de editar no solo música comprometida sino aportar en el desarrollo general de la música y la cultura nacional, puso en circulación el disco de larga duración *Chile en cuatro cuerdas*. El musicólogo y compositor Gastón Soublette llevó a los dominios de la música de concierto obras de compositores populares como Violeta Parra, Margot Loyola, Jorge Urrutia, las hermanas Acuña y Calatambo Albarracín. Se configuró así una grabación en que, con todo el rigor interpretativo y la atmósfera de “la música de elite” que aportaba el Cuarteto Chile, del Instituto de Música de la Universidad Católica, se expresaban obras eminentemente populares.

Illapu, por su parte, hacía su debut discográfico en su LP homónimo. Los jóvenes antofagastinos, liderados por los hermanos Márquez, aportaban savia nueva a una Nueva Canción que perseveraba en su militancia.

Sin embargo, la música chilena más popular, más interpretada por las radios y vendida en formato de single, no era ésta. Hacia julio de 1972 y durante prácticamente todos los meses siguientes, Los Jaivas ocupaban los primeros lugares de los *rankings* con su tema “Todos juntos”, grabado para el sello IRT. No es malo advertir que en el mensaje de la letra estaba el cuestionamiento: “para qué vivir tan separados / si la tierra nos quiere juntar / si este mundo es uno y para todos / todos juntos vamos a vivir”. Sin posición política aparentemente definida, Los Jaivas no parecían ser del gusto de los medios oficiales. Sus hábitos controvertidos –como fumar marihuana, usar pelo largo o vivir en comunidad– no parecían ser el ejemplo del hombre nuevo a construir:

“En momentos en que el pueblo construye, en momentos en que lo mejor de la juventud chilena se sacrifica en los trabajos voluntarios, Los Jaivas resultan ser una flor exótica, trasplantada incluso, que tiene poco o nada que ver con nuestro país, que en el fondo imita la ‘onda’ hippie europeizante, el modo pretendidamente ‘libre’ de vivir, pero en los hechos falsamente libre, y sí prisionero de las formas más decadentes de escapar del mundo que ha difundido la burguesía”⁴²⁶.

La producción de discos en Chile había aumentado de modo considerable: de 2.859.000 unidades en 1971 había pasado a 6.307.000 el año siguiente, para luego tener una breve merma el año 1973 con 5.934.000 discos. IRT, Industria de Radio y Televisión, antigua RCA, dirigida por Julio Numhauser, hacia 1972 había alcanzado la cifra récord de 3.250.000 discos vendidos⁴²⁷. Uno de sus mayores éxitos fue, justamente, el *single* “Todos Juntos”.

Pero las críticas a la eficiencia de la política cultural, como a las políticas en general implementadas por el gobierno, seguían siendo significativas. Carlos Maldonado, encargado del frente de cultura del Partido Comunista, seguía afirmando en octubre de 1972 la carencia de una política cultural consistente. Era urgente la participación popular en el proceso cultural y definitivamente acabar con el concepto de “cultura” como privilegio de un segmento social. Junto a la implementación definitiva del prometido Instituto Nacional del Arte y la Cultura, debían generarse Centros de Cultura Popular, “organización de masas que se preocupa de atender, planificar e impulsar las necesidades culturales en un sindicato, en una Junta de Vecinos, en un Asentamiento Campesino o Centro de Reforma Agraria, en una Asociación de Empleados, en un colegio, en un barrio o en un villorrio”⁴²⁸, y otras actividades masivas que sirvieran de base a la expresión cultural del pueblo.

Siendo severa su crítica ante la permanencia de la ecuación arte = cultura, que sigue considerando a la expresión cultural como patrimonio de una elite, Maldonado afirmaba:

“La cultura no es un adorno ni un mero pasatiempo para ociosos. Cultura es la capacidad de un pueblo para construir su futuro de acuerdo con las peculiaridades de su medio, de su propio pensar, sentir y hacer. Ésta comprende desde sus formas de organización, pasando por sus objetivos políticos, económicos y sociales, sus conceptos morales, etc., hasta sus auténticas expresiones musicales, literarias o teatrales..

El pueblo no es ni ha sido nunca ajeno a este quehacer. Posee sus propias manifestaciones culturales que debe enriquecer y desarrollar”⁴²⁹.

Las apelaciones eran directamente dirigidas a los encargados culturales del gobierno, quienes no hicieron esperar la respuesta. Enrique Rivera, a la sazón Director de Cultura de la Presidencia, apuntaba sobre el reconocimiento de los logros obtenidos por el Estado en

⁴²⁶ *Puro Chile*, 18 de enero de 1973, p. 19.

⁴²⁷ Catalán, Carlos; Rafael Guisilanti y Munizaga, Giselle. *Transformaciones del sistema cultural chileno entre 1920-1973*. Santiago: Ceneca, 1987.

⁴²⁸ Maldonado, Carlos. “¿Dónde está la política cultural? *La Quinta Rueda*, octubre 1972, p. 13.

⁴²⁹ *Ibid.*

aquel campo, sobre todo en lo referido a la industria editorial, y ponía el punto de inflexión en que la labor efectiva dependía en gran parte de la voluntad de los propios creadores individuales y las consecuencias del propio proceso de concientización de clases:

“La cultura, en oposición al concepto naturaleza, comprende el producto total de la actividad humana históricamente considerada. Se manifiesta como un sedimento material y espiritual que la humanidad acumula para su propio progreso y que las sociedades divididas en clases usufructúan en beneficio del desarrollo y consolidación de sus sectores dominantes. Todo bien material o espiritual producido por la humanidad es un bien cultural si está asociado al sentido de progreso y perfeccionamiento social que preside la mayoría de los actos humanos. Y la producción de bienes culturales es consecuencia de las aptitudes creadoras y laborales y de la capacidad de organización social de la humanidad”⁴³⁰.

Los intentos de construcción cultural, implementados por el Estado o llevados a cabo por las propias personas convencidas de la posibilidad de una nueva cultura, eran constantes. Pero la sociedad toda no siempre los acogía ni se veía interpretada.

5. Y el que no crea que haga la prueba. No nos moverán...

En Valparaíso, al aire libre, se realizó el 26 de enero de 1973 el 4° Festival de la Canción Comprometida. Bajo el lema “Dale un golpe de fuego a tu guitarra, levántala quemando, es tu bandera”, actuaron Inti Illimani, Quilapayún, Nano Acevedo, Ángel e Isabel Parra, Víctor Jara e Illapu, y artistas extranjeros como el uruguayo Daniel Viglietti y el brasileño Manduca. Los participantes tuvieron otras actividades: asistieron a una ceremonia oficial donde Allende recibía un aporte en máquinas de la RDA, asistieron a un encuentro con los trabajadores de la Empresa de Transportes del Estado, compartieron con estudiantes y organizaciones de base, etc. En el mismo mes se realizaba en Olmué el Festival del Huaso. De corte más masivo y tradicional, poco tenía que ver con la música comprometida que se escuchaba en Valparaíso. En el evento hubo una actuación que fue particularmente controvertida:

“Con el repudio de un gran sector de la ciudadanía se realizó el Festival del Huaso. El prestigio ganado por el Festival a través de años de esfuerzo de la gente de Olmué se fue por tierra por cuenta de los folkloristas, huasos con humita, de Los Quincheros; estos cantores aprovecharon el escenario para lanzar pullas en contra del pueblo y de su Gobierno. Usaron para este objeto, entre otras canciones, ‘El patito’, cuya letra adaptaron a su amaño para dar cabida a un humorismo grosero y pedestre”⁴³¹.

⁴³⁰ Rivera, Enrique. “Política cultural. Para comenzar a hablar”. *La Quinta Rueda*. noviembre 72, pp. 8-9.

⁴³¹ *Onda* N° 37, enero de 1973, p. 60.

El mes siguiente, cuando en el Festival de Viña de febrero de 1973 se dio la fuerte polémica por la deserción de Los Quincheros en el show, y las divisiones en la reacción del público que generó la presentación del grupo Quilapayún, se hizo patente el hecho de que aquella cultura comprometida, popular, no tenía un asidero suficiente en la masa como se había esperado. La construcción no se estaba cumpliendo a cabalidad. En el marco de la campaña para las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, Chile vivía a través de la televisión, que transmitió el festival a todo el país, el enfrentamiento entre dos culturas que no se estaban tolerando, tanto como no se toleraban las posiciones políticas a las cuales representaban.

En aquellas elecciones la Unidad Popular obtuvo la segunda mayor votación de su historia. Consiguió un 43 % de los votos, frente al 54,6 % que consiguió la oposición agrupada en el CODE. El triunfo fue importante, significativo, una victoria frente a la reacción, pero había una real mayoría porcentual que no compartía los postulados oficiales, que no se sentía partícipe de una cultura que no transaba en la consecución de la urgente tarea de construcción del socialismo.

La pugna política se veía reflejada en la cultura. Difícil era, por lo mismo, construir un socialismo cuando lo urgente era combatir la sedición. Poco importante resultaba para el proyecto popular la visita del músico indio Ravi Shankar en mayo de 1973. Más importante fue la visita de Dean Reed, cantante estadounidense quien viajaba por el mundo apoyando la causa socialista y quien se definía como un firme opositor al capitalismo y sus manifestaciones⁴³².

La votación obtenida por la Unidad Popular pareció fortalecer las acciones extremas de la oposición más reaccionaria. A las acusaciones constitucionales contra los ministros se sumaban constantes protestas y enfrentamientos callejeros. Uno de los proyectos emblemáticos de la Unidad Popular, la Escuela Nacional Unificada, ENU., que sí podría haber generado una cultura popular real como la pedían algunos partidarios críticos del gobierno, se vio truncado por la férrea e intransigente oposición. En junio, por su parte, los mineros de El Teniente liderados por el demócratacristiano Guillermo Medina, iniciaron una huelga que trajo serios problemas a la economía del país.

En mayo del año en curso el sello DICAP editaba el álbum *La Semilla*, con letra de Violeta Parra, música de Luis Advis e interpretación de Isabel Parra y el grupo Inti Illimani. Gracias al disco se podían escuchar a través de las décimas de Violeta, la historia de su familia y, por ende, los orígenes de su canto, que era todo un canto.

Pero las manifestaciones culturales comprometidas también debían encarar el conflicto. La agudización de las contradicciones así lo exigía. Se realizó un gran evento llamado Ofensiva Cultural Antifascista, en el Pueblito del Parque O'Higgins, los días 23 y 24 de junio. Luego de la inauguración a cargo del Ministro de Educación Aníbal Palma, hubo teatro, cine, música y

⁴³² Tanto era así que sobre el *soul*, reconocido y masivo género norteamericano, opinaba: "No la conozco". Mientras, acerca de la música folklórica, decía: "Es la música que ha dado esperanza a los pueblos que luchan por su liberación. Es progresista". *Onda* N° 40, marzo de 1973, p. 55.

numerosas actividades. Participaron, entre muchos otros, los escritores Volodia Teitelboim, Antonio Skármeta y Ariel Dorfman; los músicos Patricio Castillo, “Piojo” Salinas, Nano Acevedo, Inti Illimani, Quilapayún, Illapu y Cuncumén; los cineastas Patricio Guzmán, Pedro Chaskel, Álvaro Ramírez y Claudio Sapiáin; el Ballet Folklórico de Cantos y Danzas “Aucamán”, etc.

Pero la adversidad se hacía patente. El 29 de junio el Regimiento Blindado N° 2, al mando del coronel Roberto Souper, se levantaba en armas contra el gobierno. La respuesta fue inmediata. Mientras Ángel Parra llamaba a asistir “al mitin de las seis en el centro / donde estará todo el pueblo gritando / a defender lo que se ha conquistado”, en julio se realizaba el Primer Festival de la Canción Popular. En Santiago, en el Estadio Chile, y en Valparaíso, en el Fortín Prat, y con la animación de Ricardo García acompañado por la cantante Pachi, se presentaron artistas como Inti Illimani, Quilapayún, Aparcoa y los hermanos Parra. Y junto a ellos, cantantes que nada tenían que ver con la propuesta comprometida, como Marcelo, Patty Chávez o Patricio Renán.

Hacia septiembre de 1973 Quilapayún se encontraba en Francia para realizar una serie de recitales dando a conocer la cultura chilena. Inti Illimani estaba a punto de lanzar al mercado su disco *Canto de Pueblos Andinos*. Víctor Jara tenía ardua labor en la Universidad Técnica del Estado.

El golpe de Estado encontró la actividad cultural chilena en plena marcha. Superando las críticas, creando sobre la adversidad, asumiendo el papel que les exigían las circunstancias, los protagonistas de la cultura UP se encontraron con un quiebre severo, posible pero impredecible, demasiado brutal. Por radio Magallanes se emitía la canción del grupo Tiempo Nuevo, “No nos moverán”. El tema, que en una de sus partes decía: “Ni con un golpe de Estado / No nos moverán / Y el que no crea que haga la prueba / No nos moverán”, fue violentamente silenciado por el bombardeo a las antenas emisoras. Fue la última canción vinculada a la Nueva Canción Chilena que se escucharía en la radio por muchos años.

6. Palabras finales: *Vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo...*

Desde el golpe de Estado en Chile se declaraba Estado de Sitio. Mientras Quilapayún se aprestaba a realizar un recital en el Olimpia de París, Víctor Jara era detenido en las dependencias de la Universidad Técnica, conducido al Estadio Chile, brutalmente torturado y finalmente asesinado. Durante su prisión, Víctor escribió: “Canto, que mal me sales cuando tengo que cantar espanto”. Su cadáver se encontraría a los pocos días, a un costado de un canal de regadío en la periferia de Santiago. Los protagonistas del gobierno popular eran encarcelados, perseguidos, ajusticiados. Las instituciones culturales generadas en los últimos mil días eran abolidas. Los murales de las distintas calles, de los tajamares del río Mapocho, de los sindicatos y edificios públicos, se reemplazaban por lisas paredes o motivos

nacionalistas. Guillermo Núñez partía al exilio, así como también Isabel y Ángel Parra (previo, en este último caso, un largo confinamiento en el campo de prisioneros Chacabuco) y los integrantes de Inti Illimani. Quimantú dejaba de ser tal para llamarse Editorial Gabriela Mistral. A muchos de los libros que siguieron circulando con la impresión original, les eliminaron el prólogo. Se constituyó prácticamente en un delito usar el pelo largo, dejarse la barba y tocar instrumentos andinos. Toneladas de cinta de celuloide fueron quemadas en el allanamiento a Chilefilms. El Museo de Arte Contemporáneo se cerraba y entraban en receso casi todas las muestras culturales. Se hacía cargo de la difusión de la cultura Benjamín Mackenna, el solista de Los Quincheros, simbolizando el aparente triunfo del “Patito chiquito”.

Rumbo a Argentina, sin soportar la situación vigente, partieron todos juntos tanto Los Jaivas como Mario Salazar (integrante de Amerindios) y Julio Numhauser (director de IRT, fundador de Quilapayún y de Amerindios).

Pero la cultura generada bajo el gobierno de la Unidad Popular no eran solamente sus instituciones. Constituía todo un conjunto de valores, propuestas, sensibilidades, que las superaban notoriamente, y cuyo origen se había dado años antes de 1970. Por tanto, si bien todo lo fundado en el período se eliminó de raíz, la semilla era mucho más profunda. Aquella cultura donde el trabajador era el protagonista; aquellas manifestaciones que debían manifestar los intereses de la clase obrera por sobre los componentes de la cultura burguesa, siguieron teniendo en la música su principal expresión.

El ajusticiamiento de Víctor Jara fue simbólico de lo peligrosa que era la música para la dictadura. Tanto que no pudo ser eliminada. Tanto en Chile como en el extranjero, se transformó en el principal testimonio de un gobierno socialista y en la principal muestra cultural opositora.

La cultura en la Unidad Popular, más allá de sus logros concretos y del cumplimiento de los objetivos que se habían planteado en el programa, a través de la música se transformó en uno de los principales referentes de identidad chilena. Fue el testimonio vivo, y aún vigente, de que un hombre nuevo es incapaz de ser derrotado en su libertad creadora y conciencia social.

“TODOS JUNTOS SEREMOS LA HISTORIA: VENCEREMOS”⁴³³

UNIDAD POPULAR Y FUERZAS ARMADAS

Verónica Valdivia Ortiz de Zárate
Universidad de Santiago de Chile

“O dependencia colonial, o independencia nacional
Misión Imposible, Cita con la Historia
Los Vengadores, Ni un paso atrás
Eso es progreso, Chile siglo XX
Ayúdeme Ud. compadre
Buenas noches Santiago
la prensa del mundo está preocupada
de esta larga y angosta faja”
(Los Jaivas, música para la película “Palomita Blanca”)

“Campesinos, soldados y obreros,
la mujer de la patria también,
estudiantes, empleados, mineros,
cumpliremos con nuestro deber”
(“Venceremos”, en Canto al Programa)

Desde los años sesenta, América Latina fue una de las zonas del mundo donde las fuerzas armadas comenzaron a redefinir su papel a nivel social en medio de un recrudecimiento de la Guerra Fría, producto de la trayectoria socialista que tomó la Revolución Cubana. Si bien, éste era un continente donde los militares habían tenido un fuerte protagonismo desde el momento mismo de la Independencia de España a comienzos del siglo XIX, favoreciendo un clima de inestabilidad política e institucional y un débil desarrollo democrático, las intervenciones castrenses de la década del sesenta correspondieron a otros fenómenos, acotados por la lucha norteamericana contra la expansión del ejemplo cubano en el resto del continente, adquiriendo un marcado tinte ideológico anticomunista. Dicho esfuerzo, como es sabido, se materializó en la Doctrina de Seguridad Nacional, la cual identificó como enemigo interno a los Partidos Comunistas existentes en los distintos países al sur del Río Bravo, agentes a partir de los cuales vendría la amenaza marxista contra los gobiernos latinoamericanos,

⁴³³

Esta frase es parte del himno de la campaña presidencial de la Unidad Popular “Venceremos”.

que eran parte del área de influencia de Estados Unidos en el marco del enfrentamiento global con la Unión Soviética. La Doctrina de Seguridad Nacional o contrainsurgencia –como también se la denominó–, buscó alinear a las fuerzas armadas contra dicho enemigo interno, a través de una uniformación ideológica anticomunista, redefiniendo sus funciones dentro de las respectivas políticas nacionales, al asignárseles la tarea de la sobrevivencia de la nación y de la estabilidad institucional. Ello significó destinarlas a tareas que excedían el marco de la defensa de la soberanía externa.

Esta nueva situación transformó la posibilidad de instalar en la región gobiernos de orientación marxista, en un conflicto interamericano y en un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y el país en cuestión. Para evitar la atracción cubana, el presidente John Kennedy diseñó la estrategia de la Alianza para el Progreso, un programa que auspiciaba reformas estructurales en América Latina con ayuda de ese país, a la par del reforzamiento de las políticas de contrainsurgencia para las fuerzas armadas. El período, sin embargo, estaba cruzado también por el candente proceso de descolonización asiático y africano y por la fuerza alcanzada por el pensamiento nacionalista tercermundista, que propiciaba una vía de desarrollo e independencia nacional a través de una perspectiva antiimperialista, ajena a ambos bloques, el cual adquirió forma en el Movimiento de Países No Alineados. En otras palabras, el socialismo antiimperialista estaba a la orden del día, dificultando la contraofensiva norteamericana.

Tal fue el contexto en el que se produjo el triunfo del candidato de la Unidad Popular, alianza marxista, en septiembre de 1970. Esto es, una victoria que suponía un probable conflicto con Estados Unidos y un experimento muy peligroso, considerando la orientación ideológica anticomunista de la oficialidad chilena, entrenada en los institutos castrenses de la potencia del norte.

El presente artículo busca analizar la política militar desarrollada por el gobierno del presidente socialista Salvador Allende, discrepando de aquellas interpretaciones que sostienen que la Unidad Popular estaba destinada al fracaso desde un comienzo, porque las fuerzas armadas eran furibundamente contrarias a la ideología que sustentaba la coalición gobernante, las cuales han hecho hincapié en la influencia norteamericana y la tesis del enemigo interno⁴³⁴. Asimismo, disiente de otras apreciaciones, que aseguran la inexistencia de parte de la Unidad Popular de una política militar propiamente tal. Para esta óptica, dentro del proyecto de la alianza para 1970 no se contempló seriamente la creación de condiciones que hicieran posible el alejamiento de la oficialidad de sus tareas represivas,

⁴³⁴ Tapia, Jorge. *Terrorismo de Estado* (Ed. Nueva Imagen:1980); Reiman, Elizabeht y Rivas Sánchez, Fernando *Las fuerzas armadas de Chile: un caso de penetración imperialista* (La Habana:1976); Genaro Arriagada y M.A. Garretón “América Latina a la hora de la Doctrina de la Seguridad Nacional”, en Pérez, María A. (Editora) *Las fuerzas armadas en la sociedad civil* (Cisec:1978); Arriagada, Genaro *El pensamiento político de los militares* (Ed. Privada: 1981); Viera-Gallo, José A. “La Doctrina de Seguridad Nacional y la militarización de la política en América Latina”, Chile-América, Centro de Estudios y Documentación, Roma:1977. En una mirada más compleja e histórico-sociológica, Varas, Augusto; Bustamante, Fernando y Agüero, Felipe *Chile, democracia, fuerzas armadas* (Flasco: 1980).

neutralizando la presión de las fuerzas contrarrevolucionarias. Dicha carencia derivó, finalmente, en el golpe de Estado⁴³⁵. Por último, hay quienes aseguran que el problema estuvo en la ‘ingenuidad’ de la Unidad Popular, al confiarse del supuesto carácter democrático y la tradicional subordinación al poder civil de los uniformados, desconociendo la verdadera naturaleza política de sus institutos castrenses⁴³⁶.

Desde el punto de vista de este trabajo, la creatividad de la Unidad Popular tocó también el tema de las fuerzas armadas y el papel a cumplir en el proceso revolucionario. Las tesis que afirman la inexistencia de una política militar, se sostienen en gran medida en el carácter burgués de esos profesionales y en la necesidad de la Unidad Popular de plantearse el problema del poder y la violencia de clases que ésta desataría, cuestión que, a juicio de algunos, no se hizo, especialmente en el caso del Partido Comunista y de los sectores allendistas del Partido Socialista, pues si ellos lo hacían la vía pacífica no era posible. Una apreciación de ese tipo, nos parece, olvida que el proyecto de la Vía Chilena al Socialismo se apoyaba en la convicción de que era posible transitar al socialismo, sin necesidad de una ruptura violenta con la legalidad burguesa y que el proceso duraría más de un período de gobierno. En ese sentido, es necesario colocar el tema militar en la perspectiva de un proceso de transformación del Estado en un plazo mediano y no inmediato. Por otra parte, los argumentos que enfatizan la ‘ingenuidad’ de confiar en el constitucionalismo militar, desconocen la existencia dentro de las fuerzas armadas de tendencias nacionalistas de naturaleza tercermundista y por ende anti-imperialista, que no hacían ilusoria la perspectiva de la Unidad Popular de sumar a las fuerzas armadas al proceso de cambio revolucionario. Finalmente, la interpretación del anticomunismo castrense como determinante, no se hace cargo de la evolución del pensamiento militar chileno en el siglo XX.

La hipótesis que subyace a este artículo es que la Unidad Popular sí tuvo una política militar, la cual se ajustaba a la etapa que en el tránsito al socialismo ocuparía el gobierno de esa coalición marxista entre 1970 y 1976. A diferencia de todos los gobiernos desde 1932 en adelante, los cuales alejaron a los militares de la vida nacional, despreocupándose de ofrecerles un lugar y una misión social, y abandonado su perfeccionamiento técnico-profesional, la administración de Salvador Allende revirtió esa tendencia, intentando articular por primera vez en el siglo desde la civilidad una nueva función social castrense. Esa política tenía dos ejes principales: la mantención de la subordinación militar al mando civil, reiterando su carácter constitucionalista, y la incorporación de las fuerzas armadas a las tareas del desarrollo nacional y al proceso de cambio económico, social y político, sin romper el marco de subordinación, sino tratando de darle una fundamentación doctrinaria relacionada con la

⁴³⁵ Almeyda, Clodomiro. *Pensando a Chile* (Terranova Ediciones:1986); Corvalán Lepe, Luis *El gobierno de Salvador Allende* (Lom:2003); Alvarez, Rolando *Desde las sombras. Una historia de la clandestinidad comunista* (Lom:2003).

⁴³⁶ Smirnow, Gabriel *La revolución desarmada. Chile 1970-1973* (Era:1977).

modernización y el desarrollo. Esta estrategia suponía la transformación a mediano y más largo plazo de unas fuerzas armadas comprometidas con el proceso chileno y la no creación de una milicia paralela, destinada a reemplazar al ejército profesional existente. Esta estrategia requería el control del aparato estatal para proceder a integrar a los militares gradualmente y asentar su nuevo papel social, al mismo tiempo que el Estado se estaba reestructurando. Fue esta inconsistencia en el proyecto de transición al socialismo lo que hizo imposible el éxito de la política militar de la Unidad Popular.

Es importante destacar que el objetivo de este artículo es explicar la política militar de la Unidad Popular y no la conspiración que derivó en su derrocamiento. En primer lugar, porque éste es un libro sobre la Unidad Popular, sobre lo novedoso de su experiencia y, en segundo lugar, porque parte de la convicción que un importante número de los miembros de las fuerzas armadas, tanto en su oficialidad, y mayoritariamente, en la suboficialidad y tropa, no estaban a favor de una salida golpista, a pesar de existir un significativo anticomunismo. El punto es que el propio pensamiento militar abría la posibilidad del éxito de la estrategia de la alianza socialista.

1. ¿Un gobierno sin política militar?

Luego de los años de turbulencia política vivida por Chile durante la década de 1920 y comienzos de la siguiente, el país entró en una nueva fase de estabilidad, sostenida en los consensos mínimos alcanzados por todo el espectro político. Como ya se ha establecido, el ocaso de la hegemonía oligárquica con la irrupción del reformismo alessandrista implicó una redefinición del Estado, el cual adquirió nuevas atribuciones en los ámbitos económicos y sociales, modificando su relación con la sociedad, mientras paralelamente se hacían reformas al sistema político que buscaban incorporar más activamente a algunos grupos hasta entonces marginados. Estos cambios no concitaron el consenso necesario, generando las condiciones para la irrupción de las fuerzas armadas a partir de 1924, quienes terminaron por imponer una nueva Carta Fundamental, la aplicación de un Código del Trabajo que reguló las relaciones entre trabajadores y patrones, comenzando a repensar la estrategia de desarrollo. La pugna entre civiles y militares –representada por Arturo Alessandri y el general Carlos Ibáñez– terminó en medio de los efectos dramáticos provocados por la Depresión, la que obligó al general Ibáñez a abandonar el poder y la emergencia de nuevos liderazgos militares que presionaban por el abandono de la política civil en contra de las fuerzas armadas y por la mantención de las reformas hechas en la etapa inmediatamente anterior. El impacto generado por la República Socialista de junio de 1932, hizo posible el acercamiento de la clase política y el acuerdo en torno a puntos centrales, lo cual permitiría el retiro de las fuerzas armadas a sus cuarteles y la reposición de la legalidad vigente. En concreto, las

bases del consenso político se refirieron al reconocimiento por parte de todos los exponentes partidarios –derecha, centro e izquierda– de la institucionalidad burguesa y sus reglas del juego, abandonándose las tendencias golpistas y revolucionarias; la mantención de las reformas políticas, sociales y económicas del período Alessandri-Ibáñez; y el retiro de los militares de la vida política, concentrándose en sus tareas profesionales⁴³⁷.

El retiro de los militares a partir de 1932 significó no solo el fin de su intervencionismo y deliberación frente a la contingencia, sino también la reposición de la autoridad civil, a través del Ministro de Defensa y la designación de Comandantes en Jefe institucionales que aseguraran la prescindencia política de los uniformados. Tal estrategia se logró con un nuevo concepto de profesionalismo, el cual aludió estrictamente a la defensa de la soberanía externa y la preparación de un contingente nacional para una guerra eventual mediante el Servicio Militar Obligatorio. En medio de los efectos sociales de la Depresión y debido a la decisión de consolidar la autoridad civil, estas tareas castrenses no fueron consideradas prioritarias, de manera que el presupuesto asignado a Defensa se redujo notoriamente en relación al período militar, no hubo una preocupación mayor por la modernización del material de guerra, como también hubo períodos en que se limitó el número de reclutas. En otras palabras, los gobiernos civiles se concentraron en otros proyectos de desarrollo, abandonando a las fuerzas armadas a una suerte caracterizada por el deterioro y la desvalorización. La rígida política impuesta por los propios Comandantes en Jefe, quienes no toleraron el más mínimo síntoma de indisciplina, terminó por expulsar de las filas militares gran parte del fermento deliberativo –siempre quedaron algunos pequeños grupos–, consolidar la obediencia al mando civil y un profesionalismo que se nutría de la prescindencia política, de la labor cívica del Servicio Militar y de la vida en los cuarteles. Este alejamiento del conflicto político contribuyó al mito de la excepcionalidad de los militares y de la democracia chilena, en oposición a lo que ocurría en el resto de América Latina; mito internalizado en especial por los partidos y los políticos. El sociólogo Augusto Varas ha afirmado que ese alejamiento devino en “orfandad doctrinaria”, en tanto desde la civilidad no se estructuró una doctrina que avalara o diera sentido a la subordinación, lo cual unido al abandono, dejó a estas instituciones “al garete”, orfandad que habría venido a ser resuelta con la llegada de la Guerra Fría y la Doctrina de Seguridad Nacional, la cual les asignó la tarea de asegurar la existencia de la nación, especialmente en relación al enemigo interno⁴³⁸.

A pesar de compartir la importancia de la contrainsurgencia, otros estudios han contemplado el hecho que el abandono gubernativo no implicó un abismo ideológico insalvable entre el mundo civil y militar, conservándose mucho del ideario castrense reformista de los años veinte, especialmente en lo atinente al papel del Estado en el desarrollo económico y

⁴³⁷ Sobre esta etapa consúltese Verónica Valdivia O. de Z. *La Milicia Republicana. Los civiles en armas, 1932-1936* (Dibam:1992); de la misma autora *Marineros, trabajadores y soldados. Chile bajo la Depresión, 1931-1932* (inédito); Jorge Rojas *La dictadura de Ibáñez y los sindicatos, 1927-1931* (Dibam:1993).

⁴³⁸ Varas, Agüero y Bustamante, op. cit.

social, y la ampliación del sistema político para ir integrando cada vez un mayor número de ciudadanos. En ese sentido, se habría conservado la anterior doctrina –asociada al “Ibañismo”–, pero con un fuerte retraimiento en el plano del activismo político militar. La doctrina anticomunista norteamericana no habría caído, por lo tanto, en el vacío, sino se habría juxtapuesto sobre la anterior, dando lugar a una mixtura entre ambas⁴³⁹. Ello explicaría que frente a la experiencia del gobierno demócratacristiano de los sesenta, los militares hicieran una doble lectura, apareciendo un sector de uniformados que leyó la tesis de la seguridad nacional preferentemente en términos contrasubversivos, acercándose a una posición de neutralizar por todos los medios el desarrollo y posible ascenso de las fuerzas populares de orientación marxista, poniendo más atención en los fenómenos guerrilleros latinoamericanos. Por otro lado, hubo oficiales que hicieron una lectura más global de la seguridad nacional, incluyendo los problemas del desarrollo, en el marco de lo que fue la estrategia kennediana, la cual –como se señaló– contenía ambos perfiles. En otras palabras, para estos uniformados no había posibilidad de detener el comunismo si simultáneamente no se luchaba contra la pobreza, la desigualdad y el estancamiento económico, razón por la que fueron partidarios de una reforma agraria con un sistema justo de propiedad, e insistieron en continuar el proceso de industrialización en su segunda etapa. Eran oficiales que daban prioridad al tema del desarrollo económico y social, como el más importante agente de cohesión social.

Esta doble mirada se expresó en el principal motín militar de la segunda mitad del siglo, el “Tacnazo” ocurrido en octubre de 1969, cuando el general Roberto Víaux M. se acuarteló en el Regimiento Tacna, recibiendo el respaldo de la mayoría de la oficialidad de las tres ramas armadas. Víaux planteó serias quejas y exigencias al gobierno de Frei Montalva, relacionadas con la situación de abandono militar y la obsecuencia total de las autoridades institucionales que impedían una participación más activa en el desarrollo nacional, dado su porfiado profesionalismo militar. Detrás del “Tacnazo” hubo movimientos nacionalistas decididamente anticomunistas, como también nacionalistas de izquierda, tercermundistas, los cuales admiraban la experiencia del general Velasco Alvarado, quien encabezaba la nacionalización de las riquezas básicas y hacía una reforma agraria en las tierras peruanas⁴⁴⁰.

La existencia de una perspectiva “ibañista” en las fuerzas armadas hacia el momento de la elección presidencial de 1970, partidaria de hacer reformas estructurales, es lo que, en parte, no hacía ‘ingenua’ a la Unidad Popular al pensar en la posibilidad de transitar al socialismo sumando a las fuerzas armadas al proceso. Es importante tener claro que ese reformismo militar estaba más asociado a las estrategias de la Alianza para el Progreso y a las experiencias nacionalistas del Tercer Mundo, como las del socialismo árabe y de Gamal Abdel Nasser en particular, y con algunos rasgos del populismo latinoamericano, que a las tesis desarrollistas cepalianas, más influyentes en el caso peruano. Los planteamientos

⁴³⁹ Valdivia O. de Z., Verónica. *El golpe después del golpe. Leigh vs Pinochet. Chile 1960-1980* (Lom: 2003).

⁴⁴⁰ Ibid. Véase también Varas, Agüero y Bustamante, op. cit.

de Raúl Prebisch y de la Escuela de la Cepal no estaban ausentes del análisis militar chileno, o las de Gino Germani, pero no eran hegemónicas, compartían el espacio de debate con los escritos de Gunnar Myrdal, los ejemplos peruanos, pero sobre todo, de Nasser en Egipto. Queremos apuntar a que la mezcla de “Ibañismo” y Doctrina de Seguridad Nacional dio lugar a un nacionalismo socialista, no marxista, que aspiraba a la independencia soberana con desarrollo económico y social, pero sin comprometerse con ninguno de los bloques. Eran anticomunistas, pero no reacios a los cambios estructurales, que entendían como urgentes. Por eso, tal vez, el general Carlos Prats afirmó a finales de 1969 que “las fuerzas armadas están integradas en un 80% de su personal por una planta de tendencia centro-izquierdista, no proclive al marxismo”⁴⁴¹. Coherente con ello, si bien no eran partidarios de la Unidad Popular, precisamente por sus partidos marxistas, compartían el anhelo de modernización estructural, su nacionalismo antiimperialista y la necesidad de mayor justicia social. En ese sentido, Allende y la Unidad Popular no fueron ilusos, ni confiaban por ceguera mítica en el carácter constitucionalista de los uniformados, sino que había un canal por donde hacer posible la comunicación. Esta idea se refuerza si se considera que al momento del “Tacna-zo”, el Partido Socialista emitió una declaración defendiendo a los oficiales amotinados, afirmando que en tal suceso se reflejaba la parálisis económica que sufría el país, como también la búsqueda de la oficialidad por tener un papel en una sociedad en transición, persistiendo una tensión entre quienes seguían viéndolas fundamentalmente como un aparato represivo y quienes deseaban insertarlas constructivamente en el quehacer nacional, colocando su organización y su conciencia al servicio de los ideales de emancipación. Se señalaba: “los segundos... aspiran a que las fuerzas armadas se decidan a asumir un papel coincidente y convergente con el de aquellas fuerzas sociales y políticas que luchan, como lo hicieron en el pasado siglo los padres de la patria, por asentar la independencia y soberanía del país, recuperando para Chile sus riquezas básicas...”⁴⁴².

En ese marco debe insertarse la factibilidad de la Vía Chilena al Socialismo, proyecto de transición que partía de la premisa que era posible hacerlo desde la propia institucionalidad burguesa, la cual ofrecía los instrumentos para ir socializando los medios de producción y financieros, e ir integrando a los trabajadores a la gestión de ellos, sin necesidad de una destrucción violenta del aparato estatal. La Vía Chilena era una apuesta por recuperar la naturaleza humanista del socialismo y por escapar al sino de la revolución, es decir, a la violencia. Como explica Tomás Moulian, el origen violentista de todas las revoluciones contraía el riesgo de la burocratización del poder y del aborto de los ideales superiores del socialismo⁴⁴³. La Unidad Popular parecía intuir aquella tragedia y buscaba un camino alternativo, para el cual debía evitarse la violencia –no el conflicto con quienes resistirían la

⁴⁴¹ Prats, Carlos. *Memorias. Testimonios de un soldado* (Pehuén: 1985), p. 141.

⁴⁴² Declaración del Comité Central del Partido Socialista, citado por Fernando Casanueva y Manuel Fernández *El Partido Socialista y la lucha de clases en Chile* (Stgo:1973), pp.227-228.

⁴⁴³ Moulian, Tomás. *Conversación interrumpida con Allende* (Lom: 1998).

transformación–, sumando fuerzas a los cambios. Como señala uno de los asesores de Allende, la vía pacífica significaba la permanencia de los mecanismos de control social a lo largo del período de transformación de la anterior estructura de dominación, con capacidad suficiente para imponerse a las fuerzas anómicas, de modo de poder imponer una dirección a la sociedad en transformación. Era fundamental que el aparato del Estado no se derrumbara antes que la clase obrera acumulara el poder suficiente, y así evitar que las instituciones armadas –depositarias de la violencia– irrumpieran para imponer la supremacía de una clase⁴⁴⁴. En esto jugaba un papel trascendental el carácter transicional de la Vía Chilena, primera fase en que se nacionalizarían las áreas estratégicas de la economía, se profundizaría la reforma agraria y se recuperarían las riquezas básicas en manos extranjeras. Era la fase anti-imperialista y antioligárquica de la revolución, a la cual se le introdujeron elementos más radicales como el poder popular y la adopción de un sistema unicameral.

El Programa de la Unidad Popular recogía, aunque escuetamente, estas tendencias y ópticas, al referirse al tema de la defensa nacional. Explicitaba su decisión de atender preferentemente a la mantención de la soberanía externa, sosteniendo una actitud de alerta ante cualquier peligro eventual sobre las fronteras, estimulado por el imperialismo o las “oligarquías que se entronizan en países vecinos y que junto con reprimir a su pueblo alientan afanes expansionistas y revanchistas”. La soberanía se asentaría en una definición de las fuerzas armadas como nacionales y, por ende, no destinadas a la represión del pueblo o para “participar en acciones que interesen a potencias extrañas”. El segundo elemento constitutivo de ese concepto sería el imperativo de su formación técnica, abierta a los avances de la ciencia militar, los cuales estarían conformes a la independencia nacional, la paz y la amistad entre los pueblos. En tercer lugar, se consideraba necesaria su integración y aporte “en diversos aspectos de la vida social. El Estado Popular se preocupará de posibilitar la contribución de las fuerzas armadas al desarrollo económico del país sin perjuicio de su labor esencialmente de defensa de la soberanía”. Todo esto sería posible asegurando a estas instituciones los recursos materiales y técnicos, remuneraciones justas, como también promociones profesionales que garantizaran a los oficiales, suboficiales, clases y tropas su seguridad económica y la posibilidad de ascenso por razones de mérito. Desde el punto de vista internacional, la Unidad Popular pretendía defender la soberanía mediante la denuncia de los pactos interamericanos, ya fuera por su carácter de instrumento del imperialismo norteamericano, o porque revestían una limitación a la soberanía, como era el caso del Tratado de Asistencia Recíproca (TIAR) o el Pacto de Ayuda Militar⁴⁴⁵.

Si se observa, el Programa reconocía implícitamente la necesidad de diseñar una estrategia con respecto a los institutos castrenses, pues las presiones sobre ellos eran de todos conocidas. Aunque en general es clara una actitud asertiva, expresada en el rechazo al imperialismo y a

⁴⁴⁴ Garcés, Joan. *Allende y la experiencia chilena* (Bat: 1990), pp. 136 y ss.

⁴⁴⁵ Unidad Popular. “Allende Presidente. Programa básico de gobierno” (Stgo: 1970).

los tratados interamericanos que implicaban el alineamiento del continente contra el comunismo, también es evidente la necesidad de tranquilizar a los militares y sus adversarios políticos, asegurando la ausencia de una intención de lucha continental a favor de la causa socialista, sino a favor de la paz. Esto iba a la par de un reconocimiento de la 'hipótesis de conflicto', al plantearse como primera prioridad el problema de la soberanía en clara alusión a Perú y Bolivia. Esto es importante, pues una de las críticas más duras de los oficiales contra el gobierno de Frei era su excesiva confianza en los mecanismos diplomáticos y en la solidaridad latinoamericana, despreciando la posibilidad de un conflicto, que sorprendería al país en una posición débil. El Programa recogía, igualmente, la convicción de terminar con la separación del mundo militar e integrarlo a los desafíos del desarrollo, pero como complemento a lo que se entendía era su principal misión; la defensa externa. Más aún, se hacía cargo del problema económico, eterna área de queja de los uniformados. En suma, la Unidad Popular fue el primer gobierno civil en el siglo que dio respuesta a las demandas de las fuerzas armadas: un salario justo y digno, actualización técnico-profesional para enfrentar en condiciones óptimas una eventual dificultad limítrofe, y su inserción activa en el desarrollo económico-social.

Si estas líneas no estaban, quizás, muy articuladas antes de septiembre de 1970, empezaron a adquirir una fisonomía más clara casi inmediatamente después de la elección, cuando se produjo el asesinato del Comandante en Jefe del Ejército, general René Schneider. Como es sabido, el intento de sectores de la derecha nacionalista chilena, de altos oficiales del Ejército y de la Marina, vinculados con la CIA, de impedir el ascenso al poder de la Unidad Popular se materializó en el "Plan Alfa", el cual consistió en secuestrar al Comandante en Jefe del Ejército para crear las condiciones de un golpe militar. Esta tentativa fracasó, pero clarificó a los dirigentes socialistas el futuro que enfrentarían. Joan Garcés explica que desde antes de la asunción, Allende y sus colaboradores tuvieron claro que el presidente Richard Nixon y su ministro Henry Kissinger, como sectores importantes de la derecha chilena, eran partidarios de una salida golpista al triunfo e inminente toma del poder por parte de la izquierda. De allí, que la Unidad Popular se concentrara en los factores que hicieran imposible el contexto para el enfrentamiento, siendo lo primero el respeto a la jerarquía del mando en la nominación del reemplazante de Schneider, designando al general Carlos Prats, de modo de no confirmar los temores de una desintegración del Ejército, con fines revolucionarios. Lo segundo, sería el desarrollo de los ejes de la política militar: reafirmar su carácter constitucionalista y su incorporación a las tareas de transformación.

Para entender esta insistencia en la eficacia que podría tener el tema de la tradicional obediencia y respeto a las normas constitucionales, no debe perderse de vista el profundo impacto que entre la oficialidad provocó el asesinato de Schneider, la cual a pesar de no ser partidaria de Allende, no fue parte del complot y mucho menos compartió la decisión de los conspiradores de matar a su Comandante en Jefe. Su muerte fortaleció la unidad institucional y debilitó la oposición más radical. Debe mantenerse presente que la posibilidad de

arrastrar a las fuerzas armadas a un golpe, retrocedió sustancialmente a partir de octubre de 1970 y no volvió a tomar cuerpo hasta fines de 1972. Ello no es sinónimo de la desaparición total de pequeños grupos conspirativos al interior de estos institutos –como lo probó el Plan Septiembre a la cabeza del general Alfredo Canales en 1972–, pero que constituían una minoría. Fue esta realidad la que explicó el que desde un comienzo Allende confiara en la factibilidad de su estrategia y se haya dado a la tarea de dar forma a una nueva doctrina para la función social de las fuerzas armadas, en cada discurso formulado y decreto firmado.

La política militar de la Unidad Popular se afirmaba en la hipótesis del profundo sentido que para la oficialidad tenía el peso de una tradición constitucionalista, de respeto al mando civil y de prescindencia política. Esto, que ha sido muy cuestionado después del golpe de Estado de 1973, no tenía una base irreal, pues si bien había una fuerte crítica castrense al abandono institucional, a la excesiva politización de las organizaciones sociales, al crecimiento que el marxismo había ido alcanzando, a unos partidos políticos ineficientes y egoístas y un deseo de mayor autoridad, en general ella no rebasaba el marco del respeto a las instituciones y apuntaba a la necesidad de un reacomodo de acuerdo a las nuevas condiciones sociales. La oficialidad –tanto del Ejército, como de la Fuerza Aérea– anhelaba participar de los problemas nacionales, más allá de su labor en la preparación de reclutas, deseaba un retroceso del poder partidario y un desarrollo de las organizaciones sociales “despolitizadas”, como también reconocía la necesidad de una nueva era de modernizaciones para enfrentar el atraso. Tales críticas, sin embargo, no se traducían en un deseo mayoritario por un régimen corporativo, o neoliberal, sino de ciertos ajustes, dentro de los cuales los militares fueran contemplados⁴⁴⁶. Esto explica que en reiterados discursos, Allende u otras autoridades de la coalición, insistieran en esos conceptos. Durante su discurso del 21 de Mayo de 1971, el presidente Allende aseveró: “han dicho que las fuerzas armadas y carabineros... no aceptarían garantizar la voluntad popular decidida a edificar el socialismo en nuestro país. Olvidan la conciencia patriótica de nuestras fuerzas armadas y de carabineros, su tradición profesional y su sometimiento al poder civil... Y afirmo que las Fuerzas Armadas chilenas y el Cuerpo de Carabineros, guardando fidelidad a su deber y a su tradición de no interferir en el proceso político, serán el respaldo de una ordenación social que corresponda a la voluntad popular expresada en los términos que la Constitución establezca... la firmeza democrática de las Fuerzas Armadas y de Carabineros velarán porque Chile avance con seguridad por el camino de la liberación”⁴⁴⁷. Aunque al final rompieran esa promesa, lo cierto es que durante los dos primeros años de gobierno y a pesar del conflicto ya abierto, las fuerzas armadas resistieron las enormes presiones que se ejercían sobre ellas para derrocar a la Unidad Popular. Recuérdese la política del Partido Nacional de deslegitimar al gobierno

⁴⁴⁶ Valdivia O. de Z., Verónica. *El golpe después del golpe*, cap.1 y 2; “Nacionalismo, Ibañismo, fuerzas armadas: el ocaso del populismo militar”, *Contribuciones Científicas y Tecnológicas*, No116:1997.

⁴⁴⁷ *Patria Nueva*, No.3, mayo de 1971, p. 42.

desde todas las instituciones a su alcance (Congreso, tribunales, Contraloría, prensa), llamar a la “desobediencia civil” y a los militares a sacar al gobierno. Los grupos nacionalistas, por su parte (‘Patria y Libertad’ y ‘Tacna’), desde un comienzo estuvieron por una solución militarista y presionaron cada vez más a la oficialidad para que optaran por ese camino⁴⁴⁸. La resistencia militar a dichas presiones, en parte, se sostenía en la convicción entre los oficiales de que los graves problemas debían ser solucionados por los civiles y no por los militares. Quien revise las revistas castrenses podrá encontrar más de un llamado a la civilidad, incluso a días del golpe de Estado; la urgencia de un acuerdo entre el gobierno y la Democracia Cristiana⁴⁴⁹.

La Unidad Popular dio solidez y contenido al constitucionalismo militar al refrendar su carácter de ‘tradición’. Durante una visita al Regimiento de Caballería No.7 “Guías” de Concepción, el Presidente Allende recordó el nacimiento de ese centro de Infantería por mandato de Bernardo O’Higgins, como escolta suya en el campo de batalla, haciendo hincapié en su vínculo con los albores de nuestra historia en su lucha por la independencia. Las figuras históricas aparecían frecuentemente en las argumentaciones de las autoridades, porque a ellas se debía la función dada a las fuerzas armadas. Desmintiendo ciertos rumores, el general Prats recordó que “desde que el ministro Portales, con el severo sentido de autoridad que lo caracterizaba, trazó nuestra vía constitucional... las fuerzas armadas chilenas nunca han participado en opiniones de izquierdas ni de derechas”⁴⁵⁰. Esta constante apelación a recursos históricos tiene sentido con los principios de la carrera militar, las denominadas “virtudes militares”, una de las cuales es la tradición. Según la comprensión militar, la tradición es el origen de la patria, el cómo se constituyó, de ahí la importancia del pasado histórico y el aporte de héroes y mártires. En otras palabras, el historial dejado por O’Higgins, Portales o Montt tenía un peso en otra virtud castrense, como era el “cumplimiento del deber”, cumplir con la tarea asignada, siendo leal a su superior. Esto fue lo que dio sostén a la “Doctrina Schneider”, tan socorrida por la Unidad Popular, porque la decisión irrevocable del Comandante en Jefe de respetar el resultado eleccionario de 1970 y no permitir que el Ejército violara su deber de prescindencia política, confirmaba la virtud militar de la tradición, que aseguraba su constitucionalismo. Conmemorando su muerte, dijo el Presidente: “Ayer, en todos los regimientos de Chile la bandera de la patria flameó a media asta, para señalar que un mártir de las fuerzas armadas del ejército de Chile señala con su ejemplo lo que es, ha sido y será la conciencia de ustedes, soldados orgullosos de la tradición de ayer que comienza con el Padre de la Patria, O’Higgins, y que se perpetúa en el ejemplo y en el sacrificio de un General y Comandante, como René Schneider Chereau”⁴⁵¹. Así, de O’Higgins a Schneider había una sola historia y un solo sentido del honor.

⁴⁴⁸ Valdivia O. de Z., Verónica. “Camino al golpe. El nacionalismo a la caza de las fuerzas armadas”, UCBC, Serie de Investigaciones, No.11:1996.

⁴⁴⁹ Mayor Juan Barriga “Lo que debemos saber de seguridad y defensa nacional”, *Memorial del Ejército de Chile*, N° 373, mayo-agosto 1973.

⁴⁵⁰ *Patria Nueva*, No.13, marzo de 1972, p. 26; N° 11, enero 1972; No.12, feb. 1972.

⁴⁵¹ *Patria Nueva*, No.8, octubre de 1971.

El segundo eje de la política militar de la Unidad Popular era la apuesta por la posibilidad de unir a campesinos, soldados, obreros, mujeres, estudiantes y mineros a la construcción de un Chile Nuevo, más justo y solidario. Si se retiene el cancionero de la Unidad Popular, se recordará su permanente repiqueo por la unidad, unidad de la que solo estaban excluidos los capitalistas monopolistas, ni siquiera la burguesía en su conjunto. Parte de ella, eran los soldados, como lo explicitaba el himno “Venceremos”. La demanda de los uniformados por integrarse a la sociedad venía de hacía décadas, siendo escuchados solo por el general Ibáñez en su segunda Presidencia, cuando instauró el Servicio Militar del Trabajo, esto es, su incorporación a tareas de bien público, ya fueran obras viales, ferroviarias, en caso de catástrofes, entre otros. Los sucesivos Presidentes mantuvieron este Servicio, pero no le dieron sustancia ni proyección y, en el caso de Frei, lo usó como reemplazo de mano de obra para la política de promoción popular y como rompehuelgas. Había mucha frustración en los oficiales en los años sesenta. La Unidad Popular escuchó ese llamado y decidió modificar la función militar, dándole un rango cuasi legal a lo que había sido y sería el Servicio Militar del Trabajo y la incorporación castrense a las tareas del desarrollo. Ello significó acentuar el carácter antiimperialista del proceso de Independencia y homologarlo con los intentos anti-norteamericanos que realizaba la Unidad Popular, uniendo tradición con permanencia de anhelos liberadores. Así se señalaba: “¿Qué fue la Guerra de Independencia sino una fragosa campaña por la liberación del yugo extranjero que entrañaba opresión y servidumbre económica, obligaciones inaceptables de comprar solo en la Península, mientras la Península se llevaba de nuestras tierras las riquezas naturales que los colonizadores codiciaban y que nosotros no podíamos comerciar con los clientes que más nos convinieran?”⁴⁵². En uno de los discursos posteriores al triunfo de septiembre de 1970, Allende explicitó el sentido modernizador y de liberación que tenía el proyecto de la Unidad Popular: “Somos los legítimos herederos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda Independencia, la Independencia económica de Chile”⁴⁵³. Esto es coherente con la tónica antiimperialista que invadía el proyecto, que suponía una nueva Independencia para el país, con la ruptura de la subordinación a Estados Unidos: no era “¿dependencia colonial o Independencia nacional”, como rezaba la canción? Los oficiales, en su gran mayoría, también participaban de ese anhelo de nacionalización de las riquezas básicas y del salto al desarrollo. Fue a esa gran tarea que Allende los invitó. Durante la ceremonia de entrega de la espada O’Higgins y condecoraciones a los Altos Mandos, el Presidente expuso: “Fuerzas Armadas cuyos valores permanentes he destacado, pero que, al mismo tiempo, deben comprender las etapas temporales que, como instituciones, tienen que vivir. Una de estas etapas es la que hoy controla a Chile, que hace por voluntad del pueblo, su propia revolución. Revolución dentro de los cauces democráticos y legales,

⁴⁵² *Patria Nueva*, No.1, enero-feb. 1971.

⁴⁵³ TVN, Informe Especial, “Cuando Chile cambió de golpe”, cap. “El camino de Allende a La Moneda”, 29 de julio de 2003.

pero que implica hondas y profundas transformaciones en el campo político, económico, cultural y social... Por eso y pensando en alta voz en el sentido profundamente profesional que orgullosamente podemos decir que detentan las fuerzas armadas chilenas, *creemos que ellas no pueden estar ausentes en estos cambios que significan, repito, luchar por dignificar la vida y existencia del hombre*⁴⁵⁴. Efectivamente, la tarea era grande, la pobreza, enorme, se requería de un esfuerzo mancomunado, al que llevaran su entusiasmo y su experticia los profesionales, los jóvenes, pero también los uniformados.

Tempranamente, la Unidad Popular comprendió el vínculo entre revolución socialista, desarrollo y fuerzas armadas. Un poco más tarde en ese discurso, el Presidente relacionó la capacidad de estas instituciones con el grado de desarrollo de su nación, existiendo una clara relación entre subdesarrollo y ejércitos poco poderosos, de lo que se colegía la urgencia también para ellas de superar el estancamiento. Allende explicitó claramente su nuevo papel: “No hay fuerzas armadas poderosas si hay pueblos diezmados por la enfermedad o castigados por la incultura. No hay fuerzas armadas poderosas en países dependientes en lo económico, lo cultural y, a veces, y con demasiada frecuencia, en lo político. Por eso, sin olvidar jamás la esencia vital que destaca señeramente el hecho tan significativo de ser ustedes profesionales en el más alto sentido de la técnica y de la ciencia, de la jerarquía y de la disciplina, *como Generalísimo, por mandato de la Constitución, de las Fuerzas Armadas de Chile, yo reclamo su presencia en esto, que es un esfuerzo de Chile por un Chile donde la justicia, el trabajo, la salud, el derecho al descanso y la recreación, sean patrimonio de todos los chilenos*”⁴⁵⁵.

2. “Todos juntos seremos la historia”: La vía chilena al socialismo

La decisión socialista de sumar a las fuerzas armadas al proceso, pasaba por revertir la tendencia de las últimas décadas y del período democratacristiano, de que la guerra era una posibilidad muy lejana, siendo esa la razón de la rebaja presupuestaria y la escasa importancia dada a lo militar. La Unidad Popular se esforzó por demostrar su utilidad social, pero no en el marco represivo, sino de creación, tomando las tesis castrenses de que los militares tienen funciones “manifiestas”, es decir, la guerra, y “latentes”, su aporte social, siendo ésta la tendencia de la época, una era de lucha por el desarrollo. Se persuadía a la comunidad que ellas: “No son corporaciones pasivas, de simple ornato, financiadas por el Presupuesto sin rendimiento palpable, sino que se desenvuelven en acciones vivas... que contribuyen a nuestro progreso”⁴⁵⁶. Esto significaba que las fuerzas armadas tendrían una función específica

⁴⁵⁴ *Patria Nueva*, No.2, marzo-abril 1972. El énfasis es nuestro para destacar la convocatoria.

⁴⁵⁵ *Ibid.* El énfasis es nuestro.

⁴⁵⁶ *Patria Nueva*, No.1, junio de 1971. Sobre las funciones militares, Claudio López. “Las fuerzas armadas en el Tercer Mundo”, *Memorial del Ejército de Chile*, No.356, julio-agosto 1970.

en la Revolución Chilena y esa era su participación en las transformaciones económicas y sociales y la defensa de las fronteras que pertenecían a todos los chilenos. Su presencia era lo que hacía posible hacer los cambios, sin que ellos derivaran en el enfrentamiento.

Es importante aclarar que tal política recogía la línea desarrollista de la Doctrina de Seguridad Nacional, la cual aseguraba que ella implicaba la consecución de objetivos nacionales, acrecentando su poder, por lo cual el poder de una nación no comprendía solo lo militar, sino también su potencial económico, su armonía social y la estabilidad política. Las palabras de Allende citadas al final de la primera sección, eran un reflejo de ese pensamiento y la convicción de ser posible torcer el sentido estadounidense de la doctrina y “democratizar” a las fuerzas armadas. Como señalaban los socialistas: “Las charlas, foros, academias, cursos especializados, etc., han dado sus frutos y hoy nuestras fuerzas armadas –basadas en el moderno concepto de la seguridad nacional–, están estudiando la temática socio-económica del país y del mundo. Ya no constituyen un compartimento estanco ajeno a la realidad, sino que surgen como eficaces instrumentos para la construcción del hombre del mañana”⁴⁵⁷. El segundo ministro de Defensa, José Tohá, reforzó esta idea cuando, contestando a quienes criticaban esta integración, insistió en la importancia de la cohesión nacional para ser un país fuerte y poder defenderse y contribuir efectivamente a la preservación del Estado. Un pueblo necesitaba “que los conceptos de Patria, Nación y Estado sean resultado de una verdadera conciencia. Por lo tanto, para que exista una verdadera cohesión nacional debe haber participación generalizada unánime del pueblo en todos los aspectos del quehacer nacional”⁴⁵⁸. En concreto, se trataba de sumarlas a las áreas estratégicas de la economía, de la investigación y los servicios.

La primera área en recibirlos fue la económica, siendo integrados dentro del Estado y la administración pública, incorporándolos a los frentes estratégicos de producción como eran las empresas del cobre, el hierro y el salitre. Como director de la Compañía de Cobre Chuquicamata S.A fue nombrado el general de Brigada, Pedro Palacios C., ingeniero químico militar y profesor de metalurgia, quien además actuó como miembro de la Comisión Administradora “a nombre del Estado de Chile”. Igual caso fue el del coronel de Aviación Claudio Sepúlveda, en la Sociedad Minera El Teniente S.A., y el Capitán de Navío, Horacio Justiniano en la Compañía de Cobre El Salvador S.A. Asimismo, hubo nombramientos en la minera Exótica, Andina y Sagasca. Muchos de estos oficiales, como era el caso de Pedro Palacios, tenían estudios ingenieriles, en química, que durante años no tuvieron reconocimiento, en tanto equivalencia, en el ámbito civil y se concentraban en tareas propiamente militares. La nueva tónica de las relaciones cívico-militares hizo posible integrar su conocimiento a las áreas que al gobierno popular le interesaba desarrollar en mayor medida. Esto se acentuó cuando en julio de 1971, la Gran Minería del Cobre fue nacionalizada y con ella otras riquezas básicas del país. A partir de ese momento, las fuerzas armadas no solo fueron parte del

⁴⁵⁷ Noticias de Última Hora, 17 de julio de 1970, p. 7; véase también Patria Nueva, No.19, sept. 1972.

⁴⁵⁸ Chile Hoy, No.55, junio-julio 1973.

desarrollo del país, sino de una estrategia nacionalista, que suponía la expropiación de recursos en manos de empresas extranjeras. En la revista del Alto Mando del Ejército, la nacionalización del cobre fue recibida con júbilo y como un gran paso en la lucha por la independencia nacional⁴⁵⁹.

Este proceso incorporativo se mantuvo a lo largo de los dos primeros años de la Unidad Popular, a medida que se creaba el Área de Propiedad Social, es decir, las empresas y entidades financieras, comerciales y productivas que pasaron a manos del Estado. Un oficial del Ejército fue el escogido como Director de la Industria Química Du-Pont, ingresada al área de propiedad social, mediante la compra de acciones a través de Corfo y Petroquímica Nacional, empresa que producía el 75% de los explosivos del país que se empleaban para la explotación de minerales. La empresa quedó bajo la dirección del coronel Sergio Nuño Bawden, quien asumió como gerente general⁴⁶⁰. Como el general Pedro Palacios, Sergio Nuño también era ingeniero y se desempeñaba hasta entonces como director del Instituto de Investigaciones y Control del Ejército.

Dadas las tendencias nacionalistas existentes entre la oficialidad, ellas fueron parte de la demanda por la nacionalización de la Compañía de Teléfonos de Chile, cuando la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, conformada por representantes del gobierno, de la Corfo, de los trabajadores y de las FF.AA., lo solicitaron: “La defensa nacional comprende todas las actividades del país: económicas, sociales, políticas y culturales. No solo las FF.AA. Éstas están en íntima relación con todas las actividades nacionales. Por eso que un sistema deficiente de comunicaciones entraba la situación económica y social del país y, por lo tanto, entraba y pone en peligro la seguridad del país”⁴⁶¹. Seguridad nacional, autonomía y desarrollo.

Como explicitaba, por otra parte, el Programa de la Unidad Popular, se aceleraría la reforma agraria, ámbito productivo del que no estuvieron ajenos los militares. Para poder salir del grado de atraso que aún afectaba a la agricultura, se necesitaba gran número de mano de obra que pudiera comprender el manejo de los nuevos elementos técnicos que se incorporaban a las faenas. En ese sentido, la Fábrica de Material de Guerra del Ejército, Famae, construyó implementos agrícolas, los cuales fueron comprados por la Corporación de Reforma Agraria, Cora. Por su parte, el Instituto Geográfico Militar colaboraba en el levantamiento de planos para una mejor utilización de suelos y recursos; la Dirección General de Remonta Veterinaria impartía cursos para cuidadores de ganado y asistencia técnica; mientras las Brigadas Forestales creaban en cada unidad del Ejército contingentes para la defensa de la riqueza forestal. En general, la labor de las distintas ramas armadas que participaban en el desarrollo agrícola se orientaba a la capacitación de campesinos para mejorar su desempeño,

⁴⁵⁹ Ahora, 22 de junio de 1971; *Patria Nueva*, No.2, marzo-abril 1971; No.14, abril de 1972; *Memorial del Ejército de Chile*, 1971.

⁴⁶⁰ *Patria Nueva*, No.14, abril 1972.

⁴⁶¹ Departamento de Relaciones Públicas del Ejército, *Ahora*, 21 de septiembre de 1971.

especialmente de los “asentados”, es decir, aquellos que pasaron a formar parte de la tierra reformada, los llamados “asentamientos”, especie de sociedades mixtas entre los inquilinos que recibían tierras y el Estado –a través de Indap–, que les ofrecía créditos y asesoría técnica. Igualmente, la Dirección General de Reclutamiento llevaría un registro de los hijos de campesinos que acudieran al Servicio Militar o a su planta, de modo de darles preferencia en los cursos de perfeccionamiento que se dictaban en el período normal del Servicio Militar. Una de las áreas de mayor desarrollo entre las que realizaban los uniformados estaba la del Servicio de Tractoristas, en la que se les enseñaba el manejo de tractores y mecánica. Estos cursos se hacían en dos niveles: para los campesinos que solo asistían al curso y para el contingente que estaba realizando su servicio militar. Aunque los oficiales –según confesaban– al principio temían por sus resultados, al final quedaron bastante orgullosos, como lo señaló el Comandante Gabriel Molina: “Cuando recién llegaron venían con sus bolsitas y ninguno sabía nada de mecánica ni de tractores, pero todos fueron aprobados. Los cien asentados cumplieron sus obligaciones correctamente, no hubo necesidad de castigos o suspensiones. Después de estar un mes en el curso dominaban todas las materias. Junto con el Vicepresidente de Cora tomamos los exámenes y todos los aprobaron con distinción”⁴⁶². Estos cursos se seguirían impartiendo en otras unidades.

Por su parte, los conscriptos en el Servicio Militar hacían el curso por siete meses; los que lo hicieron en Santiago, por ejemplo, lo realizaron en el Regimiento Buin y existía un convenio con el Instituto Nacional de Capacitación Profesional, Inacap. Estaba pensado de preferencia para contingentes campesinos y mapuches, con el fin de que más tarde pudieran asumir mayores responsabilidades en las tareas agrícolas y cumplir así la meta de aumentar la producción y la productividad en los campos. Como expresaba José Catrileo –uno de esos reclutas–, proveniente de esas zonas, pensaba volver a su tierra, por lo que estos cursos de tractorista le aseguraban el trabajo al regreso. Por su parte, Hipólito Guajardo, presidente del asentamiento de Coipué de Temuco, agradeció la iniciativa por su novedad –era la primera vez que se realizaban– como porque permitían a los campesinos aprender a trabajar mejor, sacándole mayor provecho a la maquinaria. Como ellos, habían 225 reclutas-campesinos que participaban en dicha instrucción a lo largo del país: Arica, Quillota, Santiago, Chillán, Angol, Temuco, Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas. La Unidad Popular esperaba que esta colaboración fuerzas armadas-Cora provocara un nuevo tipo de relación humana entre los uniformados y la civilidad, especialmente el pueblo⁴⁶³.

Una de las actividades más importantes realizadas durante la Unidad Popular fue la celebración de la III Conferencia de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas, Unctad, a reunirse en Santiago en abril y mayo de 1972, para la que se designó como vicepresidente al general Orlando Urbina, Comandante en Jefe de la Segunda División del Ejército y Juez

⁴⁶² *Ahora*, 21 de septiembre de 1971.

⁴⁶³ *Ahora*, 21 de septiembre y 26 de octubre de 1971; *Noticias de Última Hora*, 10 de sept. De 1971, p. 2.

Militar de Santiago. Como señalamos en la primera sección, los años de la Unidad Popular correspondieron a una etapa de auge de los países tercermundistas subdesarrollados, dado el proceso de descolonización, expresados en las Naciones Unidas con la creación de esta Conferencia en 1964 como un órgano permanente de la Asamblea para favorecer los objetivos económicos de la Carta de la ONU, estimulando un programa de cooperación internacional. Se buscaba acentuar el comercio entre naciones para acelerar el desarrollo en países atrasados. De acuerdo al coronel Benjamín Videla: “Chile está consciente de promover y orientar las tareas de los países en desarrollo, especialmente de América Latina para superar el subdesarrollo que afecta a millones de analfabetos... espera que en esta Conferencia se materialicen acuerdos para acelerar el desarrollo económico, proporcionar asistencia técnica y modificar el régimen de comercio internacional para ponerlo al servicio de los países en desarrollo”⁴⁶⁴. La presencia de un alto oficial, como Urbina en la Unctad –tercero en la escala del mando después de Prats y Pinochet–, revela no solo el deseo de las autoridades de gobierno de contar con el apoyo de los uniformados, sino también que ello los puso en contacto con situaciones propias del proceso revolucionario en curso. En este caso, los obreros que participaban en la construcción del edificio que albergaría a los conferenciantes, se habían ‘tomado’ la empresa a cargo de la construcción, cuestión que no afectó la relación del general Urbina con ellos, pues se aseguraron que los trabajos siguieran su curso. Así lo expresó el vicepresidente de la Unctad: “Los trabajadores han respondido eficazmente ante esta obra en que está comprometido el país y que tiene tanta trascendencia internacional. Los trabajadores de SEC Ingeniería, conscientes de que el prestigio y el interés nacional están en juego, cumplieron con los compromisos que esa empresa contrajo con las obras de la Unctad III. Desde el 1 de marzo los obreros de SEC tomaron el control de la maestranza, pero evitaron que el conflicto laboral repercutiera en el avance de esta gigantesca obra en que se trabaja día y noche”⁴⁶⁵. El general Urbina valorizaba el aporte que sería el edificio para la Conferencia, pues una vez terminada se convertiría en un centro cultural, cobijando a todas las expresiones de cultura que florecieran en el país. Para el general Urbina, esta tercera reunión tenía un sentido especial, pues su punto central era el problema del desarrollo, cuestión que no había ocurrido en las dos anteriores: “La segunda, en Nueva Delhi, solo ocupó dos mesas de trabajo. Esto demuestra que los problemas están mejor configurados y más simplificados y se perfilan soluciones más reales y concretas. El Tercer Mundo ha aprendido mucho de economía, de desarrollo y de comercio, a través de estos años. En 1945, al crearse las NU, la palabra desarrollo no aparece en parte alguna. Pero ya se vislumbran los problemas económicos que afligen al mundo. Y nacieron las comisiones técnicas que han evolucionado hasta llegar a las conferencias político-técnicas”, concluía en la misma entrevista recién citada.

⁴⁶⁴ Tte. Coronel Benjamín Videla. “Unctad”, *Memorial del Ejército de Chile*, No.364, nov.-dic.1971; Simon Stancic “Un hogar chileno para la humanidad. Entrevista al general Orlando Urbina”, *Memorial del Ejército de Chile*, N° 364, nov.-dic. 1971.

⁴⁶⁵ *Patria Nueva*, N° 13, marzo de 1972.

En otras palabras, la preocupación castrense por el desarrollo en su vertiente de la urgencia de aumentar la producción y la productividad, como un punto nodal en la lucha contra la miseria, los transformó en colaboradores de los procesos de transformación que en el área de la producción y, especialmente, en el área social, se estaban produciendo, no convirtiéndose en un obstáculo al cambio. Desde su óptica profesional, ayudaron a la reforma agraria y al esfuerzo productivo de las empresas estratégicas.

Una segunda área para integrarlos fue la de investigación, que era parte sustantiva de la batalla contra el subdesarrollo, la cual no podía darse solo en el frente de la producción, sino en el nivel más especializado de la investigación científica. Ello determinó a la Unidad Popular a requerir la participación de uniformados en la Comisión de Energía Nuclear y en el Consejo de Investigación y Desarrollo Científico que integraban las universidades del país.

Estas instituciones estarían representadas en el Consejo Directivo de la entidad de energía nuclear, por un oficial de cualquiera de las tres ramas, siendo el primero el general de brigada, Raúl Contreras Fischer. Se esperaba que dicha Comisión elaborara planes de investigación y desarrollo, para la utilización y control de la energía nuclear en distintos ámbitos que promovieran el desarrollo nacional. Durante años, las fuerzas armadas habían ido formando un significativo número de ingenieros a través de Escuelas Politécnicas como centros de enseñanza profesional, a las cuales acudían oficiales de distintas ramas de las fuerzas armadas. Estas se habían ido acercando cada vez más a áreas que, en estricto rigor, no eran parte de la profesión militar en un sentido restringido de la defensa, y que la revolución tecnológica de la segunda post guerra fue haciendo posible. Algo así había estado ocurriendo en áreas como control de materiales radioactivos de importancia estratégica, en la confección de una Carta Nacional Mineralógica. En el afán de reforzar esta preparación, se firmaron convenios con distintas universidades estatales e institutos en el país, pudiendo el personal uniformado, tanto los oficiales como la suboficialidad y cuadros permanentes –soldados, sargentos y cabos–, seguir cursos de especialización o carreras técnicas y/o profesionales. Un ejemplo de ello fue la Universidad Católica –a través de su rector, Fernando Castillo Velasco–, la cual firmó un convenio con el Alto Mando del Ejército, por medio del que se facilitaría la especialización de los oficiales en áreas técnicas, científicas y humanistas mediante programas especiales y escalonados. Asimismo, hubo un acuerdo con la Fuerza Aérea para que los militares de esa rama dispusieran de cursos equivalentes en esa Universidad relacionadas con materias de su ámbito, tales como meteorología, geografía física, aerofotogrametría. Algo similar ocurrió con la Universidad Técnica Santa María para el personal de la Armada y con el Instituto Nacional de Capacitación, Inacap, con el que la Fuerza Aérea firmó un convenio para que sus suboficiales realizaran cursos para supervisores educacionales. Los primeros supervisores recibieron su diploma en abril de 1971⁴⁶⁶.

⁴⁶⁶

Ahora, 21 de sept. 1971; *Patria Nueva*, No.15, mayo 1972.

Esta nueva relación significó, paralelamente, la presencia de oficiales en los organismos directivos de esas entidades, como fue el caso del coronel de Aviación, Carlos Castro, quien pasó a integrar el Consejo de la Universidad Católica.

Como expresión de este aporte militar, el Ejército preparó un Plan Sexenal de desarrollo, que se incorporó a los programas generales del gobierno y cuyos aspectos específicos para 1971, tenían relación con la industria, la agricultura y los servicios del Estado, los cuales se canalizaban a través de Famae. Esto significaba su participación en la industria de la construcción, automotriz (ejes para chasis, por ejemplo); empresas mineras (elaboración de materiales para vagones y estructuras metálicas diversas), así como labores de riego. Algo similar realizaba Asmar, el cual adquirió gran relevancia dadas las perspectivas del transporte marítimo, el incremento que se le daría a la Marina Mercante y el fomento a la pesca. Para esto último, la Marina elaboró un Plan a diez años de investigaciones oceanográficas: 1970-1980, con el propósito de recabar información acerca de las posibilidades que ofrecía el mar con miras a una explotación pesquera intensiva, como también se inquiriría en relación a las riquezas geológicas de la plataforma continental.

Si se considera que, además de estos nuevos cargos, la Unidad Popular mejoró los sueldos de todo el personal de las fuerzas armadas y mejoró la dotación de material de guerra –por lo menos hasta 1972, cuando la importación de repuestos se hizo más difícil–, se puede entender la desazón de la derecha y su comentario de que: “Las fuerzas armadas se entregaron por un automóvil nuevo, por una casa, por un aumento de sueldo”⁴⁶⁷. Estas palabras reflejan claramente la imposibilidad de la derecha de conseguir atraer a los oficiales a sus afanes golpistas y el éxito que la política militar socialista estaba teniendo.

La tercera área de incorporación era la de servicios, es decir, aquella relacionada más estrechamente con lo que tradicionalmente había sido el Servicio Militar del Trabajo. Este Servicio se dedicaba a la ejecución de trabajos de beneficio público, bajo la dirección de los organismos técnicos de la Administración Pública, dependiendo directamente del Comandante en Jefe del Ejército, quien dirigía y encauzaba el accionar del personal del Arma de Ingenieros, en las diversas obras planificadas, en coordinación con los organismos interesados. Las labores principales de este Servicio abarcaban obras de vialidad, construcción, urbanización, forestación y riego, como también la construcción de embalses y pozos profundos. La ayuda en caso de catástrofe era otra de ellas, como lo demostraron los terremotos de 1960, 1965 y 1971, o situaciones de nevazones o sequías como ocurrió en 1971 y 1968, respectivamente. En general, el Servicio Militar del Trabajo tendía a reemplazar la ausencia de civiles en algunas áreas de gran necesidad por encontrarse aisladas, o el caso de otras más pobladas, pero con carencia de algunos profesionales, por lo cual los uniformados se involucraban en áreas médicas, educacionales, forestales, etc., convirtiéndose en ejes de la comunidad en provincias.

⁴⁶⁷ Noticias de Última Hora, 5 de diciembre de 1971.

Sin embargo, existía una cierta especialización, pues cada rama actuaba en alguna área específica. Por ejemplo, la Armada tenía como principal tarea vigilar el extenso litoral del país, como la mantención de las más importantes líneas de comunicación marítimas, actividad más cercana a su función de defensa territorial. Junto a ella, desarrollaba otras de servicio a la comunidad, de preferencia en la zona sur, donde entre Talcahuano y Punta Arenas la Armada enviaba continuamente destructores, buques oceanográficos, patrulleros y barcazas, con la finalidad de mantener en condiciones óptimas los servicios de faros, boyas, señales de nieblas y otros elementos de ayuda en la navegación, informándose rápidamente al Instituto Hidrográfico de cualquier anomalía que requiriera atención. Tan importante como aquello, la Armada desarrollaba una función “médica” en las zonas más alejadas de los centros poblados y en las numerosas islas desperdigadas del sur del país. Para ello existía desde 1965 el “Cirujano Videla”, lancha construida años antes por Asmar y para entonces propiedad del Servicio Nacional de Salud. Su misión consistía en la atención médica y entrega de leche de acuerdo a las necesidades del Ministerio de Salud en la zona de Chiloé continental, tales como control pediátrico, de mujeres embarazadas, incluyendo partos, cirujías menores, desinfecciones y tratamientos dermato-infecciosos. Se señalaba que uno de sus aportes más destacados era el combate contra la tuberculosis y la labor sanitaria, a través de programas de prevención y educación entregados por técnicos del Servicio Nacional de Salud. Durante la Unidad Popular, estos programas se incrementaron, como también su participación en una de las “40 medidas de la Unidad Popular”, como fue la entrega de medio litro de leche a cada niño. Una obra semejante realizaba la barcaza “Morel”, que regularmente transportaba carga y pasajeros entre Punta Arenas y la isla Tierra del Fuego hasta Navarino, zonas muy australes de Chile, con serios problemas de integración y ayuda. Como señalaba el capitán de navío Ismael Huerta: “Debemos dar protección al país para que los gobernantes puedan imprimir con tranquilidad el ritmo de desarrollo a que aspiramos. Es elemental cuidar lo que se construye, y si el desarrollo requiere autonomía, hay que defenderse de las presiones que actúan desde afuera y desde adentro”⁴⁶⁸. El extremo sur era el área de acción preferente de la Marina.

La Fuerza Aérea, por su parte, cumplía primordialmente tareas de rescate, para lo cual existía un Servicio Aéreo bajo su mando que se dedicaba a la búsqueda y salvamento de arrieros extraviados, aviones que no comunicaban su ubicación, salvamentos en el mar. A juicio de su Comandante en Jefe, César Ruiz Danyau: “La Fuerza Aérea de Chile va mucho más allá de lo militar y se proyecta a la comunidad con infinitud de maneras”, como lo demostraba su participación en las labores de ayuda y rescate con motivo de la erupción del volcán Huemules, cuyos helicópteros lograron salvar a miles de ciudadanos y ganado perdido en medio de la catástrofe en la zona. Como en el caso de la Armada, la Fuerza Aérea revestía un importante vehículo de integración de zonas marginadas, abasteciendo a pobladores de inhóspitos e inaccesibles lugares, retirando enfermos y sirviendo de puente para el

⁴⁶⁸ Ahora, 21 de septiembre de 1971.

intercambio comercial con Puerto Montt, Ancud o Castro, en Chiloé. En el norte, igualmente realizaban actividades de rescate, tareas para las que el gobierno los dotó de una moderna unidad aérea adquirida en Estados Unidos a mediados de 1972⁴⁶⁹.

Una de las tareas que unió a todas las ramas fue el reparto del medio de litro de leche diario a los niños, política pensada e implementada por el Presidente, Doctor Salvador Allende, como una eficaz herramienta para combatir la desnutrición infantil, todavía un grave problema en el país. Como el territorio es extenso y algunas áreas no estaban muy integradas, se requería la ayuda de aquellas instituciones que hicieran posible ese acceso, llevando el alimento en forma oportuna. Las fuerzas armadas se incorporaron a esa tarea, como mencionamos para el caso de la Armada, pero también lo hizo la Aviación a través de su transporte de helicópteros, llegando la leche a zonas apartadas, donde residían tribus indígenas yaganes y onas. En el caso del Ejército, esa labor la hacía en las zonas agrarias, ocupando sus camiones y otros vehículos motorizados.

El Servicio Militar Obligatorio recibió un nuevo aliento, al enfatizarse la urgencia por vencer la ignorancia, cuestión en la que los supervisores educacionales y los oficiales a cargo de los reclutas desarrollaban una labor de alfabetización. En Concepción, el general Ervaldo Rodríguez, Jefe de la Tercera División, “integrado plenamente al proceso de renovación mental que viven actualmente las fuerzas armadas”, se encargaba de desarrollar a toda su capacidad la alfabetización en la zona, entre otras tareas de ayuda a la comunidad⁴⁷⁰.

Una de las actividades en las que más destacaron las fuerzas armadas en ese período fue la denominada “Operación Invierno” durante el año de 1971. Antes de comenzar esa estación, el gobierno decidió prevenir los efectos dramáticos que cada año producía el invierno, especialmente en las poblaciones de menos recursos, que vivían en lugares sin servicios de urbanización. Por eso la Operación se enfocó de preferencia a las poblaciones suburbanas de Santiago, despejando vías de acceso, limpiando basurales, com también desagües y se trazaron calles en las poblaciones marginales. Una actuación significativa en esto, la tuvo el Ejército.

Quisiéramos destacar un aspecto de la “Operación Invierno”, por las consecuencias que, posiblemente, tuvo a mediano plazo. Tal fue el trabajo que personal del Ejército realizó en 26 campamentos del Gran Santiago. A través de un acuerdo entre la Corporación de la Vivienda, Corvi, la Jefatura de Ingenieros Militares y el Servicio Militar del Trabajo se ejecutaron una serie de trabajos de estabilización de calles, en un plan de sesenta mil metros cuadrados. El jefe del Cuerpo del Trabajo coronel Luis Arce Moyano, explicó que ella correspondía como otras a “la acción cívica del Ejército” que sobrepasaba la misión institucional. A cargo de ella estaba el mayor Jaime Bachler y los trabajos se realizaban con personal, herramientas y maquinaria pesada del Cuerpo Militar del Trabajo. Se trató de construir caminos para facilitar el acceso de las personas a sus respectivas casas habitaciones, evitando que el barro

⁴⁶⁹ Ahora, 21 de sept. 1971 y 26 de oct. 1971; *Patria Nueva*, No.16, junio de 1972

⁴⁷⁰ *Patria Nueva*, No.4, junio 1971 y No.12, feb. 1972.

y las lluvias –que solían acumularse en este tipo de poblaciones marginales–, lo impedirían. Como explicaba el mayor Bachler: “Este no es un camino de primera calidad, pero sirve al fin perseguido, que es el de permitir el tránsito de las personas y de vehículos por el interior del campamento poblacional... Su duración puede llegar hasta los cuatro años. Hay que entender que se trata de enfrentar fundamentalmente la emergencia que representa el invierno para estos campamentos”⁴⁷¹.

De acuerdo a la información de prensa, las actividades desplegadas en esos 26 campamentos aliviarían la realidad de más de cien mil personas, que eran las residentes en ellas. Para mediados de 1971, el Cuerpo Militar del Trabajo desarrollaba su labor en las comunas de Conchalí y especialmente en Ñuñoa, en el sector de Lo Hermida, donde existían siete campamentos y se esperaba construir treinta mil metros cuadrados de calles. Según las declaraciones del Mayor Bachler, no habían encontrado problemas en esos lugares y, más aún, estaban estimulando a los dirigentes vecinales a la plantación de árboles, recalcando la importancia de las áreas verdes.

El trabajo en los campamentos fue importante, porque vinculó a los uniformados con uno de los sectores sociales más convulsionados con los proyectos de democratización, proceso que ya se había iniciado con la Promoción Popular del período de la Democracia Cristiana y, como se ha visto en otro capítulo de este libro, se acentuó en los años de la Unidad Popular. Santiago parecía una ciudad en permanente construcción y los pobladores se constituyeron en uno de los actores más importantes de la revolución chilena, donde los sectores más radicalizados de la Unidad Popular –los socialistas– como de fuera de ella, como el Mir, alcanzaron mayor fuerza. Los comandos comunales fueron familiares en lugares ocupados por pobladores sin casa, emergiendo líderes emblemáticos, como Víctor Toro o Alejandro Villalobos, alias “El Mickey”. En otras palabras, el Servicio Militar del Trabajo durante los años de la Unidad Popular, permitió a la oficialidad conocer de cerca la realidad social, pero también las tendencias políticas existentes allí, acentuándose todas las reticencias ideológicas y políticas del pensamiento militar.

Si se evalúa la integración de las fuerzas armadas al proceso de cambio revolucionario que fue la Unidad Popular, es posible percibir que ella encajó dentro de una de sus preocupaciones más importantes a lo largo del siglo XX, como era el problema de la modernización económica y el desarrollo. Esto confirma que la experiencia de la Unidad Popular, incluso en aquellos oficiales que más tarde derivarían a la conspiración golpista, como Sergio Nuño o Ismael Huerta, no fue un trauma, ni el socialismo que inspiraba ideológicamente a sus conductores actuó como obstáculo insalvable para haber hecho inevitable su final. Por otra parte, los oficiales tenían, desde su óptica profesional por cierto, una noción de justicia social que hacía posible su cooperación. Ella se relacionaba con su noción de pueblo, en tanto nación, la idea de una comunidad, hermanada por su origen y destino, la cual debía

⁴⁷¹ *Patria Nueva*, No.2 marzo-abril de 1971.

mancomunar sus esfuerzos por el bien de la patria y, por ende, de todos sus hijos. Esa idea de justicia social, se apoyaba también en la constatación de la pobreza y de la miseria que afectaba a miles de compatriotas, palpables por ellos a través del Servicio Militar Obligatorio, pero agudizado desde los años cincuenta por el auge de la migración campo-ciudad, que desató las poblaciones marginales y las tomas de terrenos abandonados, que luego derivaron en los campamentos. Por último, también se sostenía en la concepción del ser humano que tenía la oficialidad, como un ser con derechos espirituales y materiales y por ello debía responderse a ambas necesidades⁴⁷². Estas concepciones son claramente identificables en los acápites que hemos desarrollado a lo largo de esta sección: la unidad de todos los chilenos daría por resultado la superación de la pobreza, requisito de un país que saltaba al desarrollo. Quien mejor expresó este sentimiento fue el general Prats: “Dentro del cuadro confuso que presenta en la actualidad nuestra nación... termino por llegar a una conclusión: había llegado para Chile la hora de entrar por la senda de una profunda modernización y, por uno u otro camino... Ha correspondido al presidente Allende poner en marcha a nuestra patria. Siento como chileno y como soldado el deber de estar, no con la Unidad Popular, no con éste o aquel partido de gobierno, sino de estar con el proceso histórico que vivimos, con mayúscula”⁴⁷³. Este es el sentido que debe darse a la colaboración militar y el inicial éxito de la política de la Unidad Popular, lo cual hacía posible sustraer a la oficialidad a las demandas por el derrocamiento, a pesar de su anticomunismo.

Hemos querido terminar esta sección con esta referencia a las dos preocupaciones más importantes para la oficialidad en los años de la experiencia socialista en Chile –la modernización económica y la justicia social que haría más digno a cada chileno y eso evitaría la atracción marxista– para rebatir la tesis de la ingenuidad de la Unidad Popular y de Allende. El ex dirigente socialista Carlos Altamirano tiene razón cuando afirma: “Allende tenía el apoyo incondicional del general Augusto Pinochet Ugarte, del Jefe de la Marina, del Jefe de la Aviación y de otra serie de generales que no quiero ni nombrar, porque algunos de ellos estuvieron en contra del golpe, otros cambiaron, los Brady, los Urbina, almirantes, bueno... o sea, no era una locura de Allende, un abandono de la realidad de Allende, el estar trabajando ese día 10 en un llamado a un plebiscito cuando ya había una movilización importante de las tropas”⁴⁷⁴.

¿Qué pasó con esta convocatoria a la unidad, a trabajar todos juntos por un Chile más digno? ¿Por qué los Brady, los Urbina, los Nuño, los Huerta, terminaron en el otro bando?

⁴⁷² Estas ideas están más desarrolladas en Verónica Valdivia O. de Z. *El golpe después del golpe*, cap.4.

⁴⁷³ Prats, Carlos. *Diario del general de ejército Carlos Prats, ex Comandante en Jefe del Ejército Chileno* (Ed. Fundamentos: 1984), p.10. La cita corresponde al día 5 de feb. de 1973.

⁴⁷⁴ Informe Especial, TVN “Cuando Chile cambió de golpe”, cap. “El origen del golpe”, 12 de agosto de 2003.

3. El ocaso de un proyecto histórico: participación, politización y sedición

Hemos dicho al comienzo que el éxito del proyecto de la Unidad Popular dependía en gran medida de poder incorporar a las fuerzas armadas al proceso de desarrollo, pero manteniendo su carácter no deliberante y obediente al poder civil, de modo que en el tránsito al socialismo ellas fueran comprometiéndose con el proceso de cambio. Ello requería del control del aparato del Estado para dominar la política puesta en vigor, graduando su integración y asentando su nuevo papel social, al mismo tiempo que el Estado se re-estructuraba. Dijimos, también, que para ello el no derrumbamiento del Estado burgués era un imperativo mientras la clase obrera no hubiera acumulado suficiente fuerza. Desde nuestro punto de vista, lo ocurrido desde octubre de 1972, fue el cese de estas condiciones, las cuales habían hecho posible la prescindencia política y la participación simultánea de los militares en la experiencia socialista. Desde el intento de derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular con el paro de octubre de 1972, Allende ya no pudo contar con gran parte del aparato del Estado, perdiendo capacidad de maniobra y debió recurrir a las fuerzas armadas, ya no en calidad de colaboradoras, sino como el único recurso para evitar el triunfo de la estrategia golpista de la oposición. La diferencia con la etapa previa se haya en que desde mediados de 1972, el acercamiento Democracia Cristiana-Partido Nacional se tradujo en una mayoría opositora en el Congreso, lo cual le impidió a la Unidad Popular alcanzar algunas mayorías en el Parlamento para legitimar el avance en materia de socialización y seguir avanzando. Las sucesivas conversaciones entre la DC y el gobierno no pudieron traducirse en acuerdos parlamentarios, de modo de afirmar las medidas tomadas. En otras palabras, el gobierno perdió uno de los principales poderes del Estado, pues éste se convirtió decididamente en un recurso de la oposición. A su vez, el Poder Judicial fue convirtiéndose cada vez más en un reducto de quienes resistían a la Unidad Popular, en la medida que no se acataban sus órdenes en materia de tomas. Igual cosa ocurrió con la Contraloría. En suma, el gobierno perdió capacidad de influencia en los otros poderes del Estado y quedó circunscrito al Ejecutivo, reduciéndose sustancialmente sus posibilidades de controlar el proceso de cambio. Esto impidió una neutralidad total a las instituciones castrenses, al percibirse a las autoridades como ilegales e ilegítimas, facilitando su politización.

Este distanciamiento, además, fue favorecido, por la propia naturaleza de la presencia uniformada en el gobierno a partir del primer gabinete militar de noviembre de 1972 y mucho más con el de agosto de 1973, en los cuales las fuerzas armadas entraron de lleno a las áreas centrales del conflicto entre el gobierno y la oposición, como eran: el problema del desabastecimiento y la necesaria distribución; y la aprobación de la ley de control de armas. Ambas cuestiones colocaron a la oficialidad en el núcleo del enfrentamiento y las politizaron de tal manera, determinando su ubicación en bandos claramente identificados, antesala del golpe de Estado.

Si bien la oposición no tuvo a lo largo de la experiencia socialista una sola estrategia o actitud respecto del gobierno, desde febrero de 1972 la Democracia Cristiana y el Partido Nacional empezaron a actuar cada vez más como bloque, iniciando lo que, acertadamente, Augusto Varas llama “la convergencia de la oposición”⁴⁷⁵. Al comienzo, los sectores empresariales y partidarios habían actuado en forma independiente, tratando los primeros de negociar la presencia de la empresa privada dentro del proceso de socialización que advenía, mientras los partidos intentaron acotar la acción gubernativa a través de los instrumentos legales y parlamentarios a su disposición. Ambas estrategias fallaron durante 1971, año en que la Unidad Popular avanzó en su programa de creación del área social. Ello favoreció una actitud de mayor rechazo al uso de los mecanismos constitucionales que estaba haciendo Allende, por parte no solo de parlamentarios, sino también del Poder Judicial y de la Contraloría General de la República, las cuales acentuaron la recepción de recursos de queja o las acusaciones de ilegalidad o legalidad sobrepasada de algunas expropiaciones. Paralelamente, los sectores empresariales y comerciantes comenzaron su política de acaparamiento y mercado negro, derivando en los primeros síntomas de desabastecimiento a fines de 1971, pero sin lograr obligar a la Unidad Popular a retroceder en su plan socializador. Esta impotencia de la oposición facilitó una actitud más violentista, con la aparición de grupos paramilitares, como la Brigada “Rolando Matus”, además de la de los grupos nacionalistas, entre los que destacaba “Patria y Libertad”, y la puesta en vigencia de una segunda forma de confrontación como fue la movilización de masas, iniciada a fines de ese año, cuya máxima expresión fue la “marcha de las cacerolas vacías”, en diciembre. En febrero de 1972, con la reforma constitucional sobre el área social comenzó el acercamiento democratacristiano y nacional, al cual se sumaron más tarde los gremios patronales, los que recibieron el apoyo de gremios medianos, asustados por el intervencionismo estatal y la “persecución” al comercio privado. Persuadida la oposición que la acción partidaria era insuficiente para detener o derrocar a la Unidad Popular, se experimentó una nueva fórmula, la desobediencia civil, planificándose la parálisis total mediante un paro gremial productivo, comercial, de transporte y, más tarde, de los Colegios Profesionales (médicos, abogados) con la finalidad de derrocar al gobierno por su incapacidad de resolver los problemas esenciales del país⁴⁷⁶. El “paro de octubre de 1972” representó el punto culminante de la estrategia “civilista” de la oposición, pues se buscaba la caída del gobierno utilizando a los sectores productivos y las capas medias asustadas por el desabastecimiento y el discurso obrerista del gobierno. Como se sabe, la estrategia fracasó, pues la Unidad Popular logró frenar sus efectos caotizantes, pero su posición quedó muy debilitada desde la perspectiva de su capacidad de maniobra y para seguir imponiéndole

⁴⁷⁵ Varas, Augusto. “La dinámica de la oposición durante el gobierno de la Unidad Popular”, Flacso, D.T. No.43: 1977.

⁴⁷⁶ Moulian, Tomás y Garretón, M.A. *La Unidad Popular y el conflicto político en Chile* (Stgo.:1983), Moulian, Tomás. “Lucha política y clases sociales”, (Stgo.:1973); Campero, Guillermo. *Los gremios empresariales en el período 1970-1983* (Ilet: 1984).

una dirección al proceso. Fue entonces, cuando las fuerzas entre gobierno y oposición quedaron equiparadas, que el primero debió recurrir a los militares.

Fue esta recuperación de la iniciativa por parte de la oposición y su articulación con capacidad evidente de presión, lo que reactivó también la conspiración militar. Hasta septiembre de 1972, los militares que mantenían la estrategia golpista eran una minoría y estaban directamente vinculados a los grupos nacionalistas de derecha y a oficiales en retiro –como Víaux o Labbé– que desde fuera presionaban, pero que se estrellaban con la resistencia de la mayoría institucional. La agudización de la crisis política y los acuerdos de la derecha con los demócratacristianos, quitaron soporte al respeto militar por las autoridades, a las que unánimemente la oposición calificaba de actuar ilegalmente y ello facilitó el trabajo de socavamiento de los principios de no deliberación y prescindencia que la derecha y los nacionalistas venían haciendo⁴⁷⁷. El paro de octubre fue un hito en ese proceso de desgaste.

Aunque la Unidad Popular y las fuerzas sociales que la apoyaban revirtieron el curso del paro, Allende tuvo plena conciencia de la imposibilidad de mantener el proceso sin un dique, capaz de bloquear los afanes golpistas de la oposición, y los únicos que podían constituirse en tal eran las fuerzas armadas. El paro había puesto en peligro la sobrevivencia de la población, amenazando la seguridad nacional, razón por la que Allende empleó –de acuerdo a sus facultades en Estado de Emergencia– a los militares como garantía de orden y salvaguarda económica. En otras palabras, las fuerzas armadas estuvieron junto al gobierno. Según Allende “¡Nosotros defendimos la vía democrática! ¡El pueblo y las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones estuvieron junto al gobierno... Por eso es que dí forma y vida al nuevo gabinete, integrado por representantes de las fuerzas armadas, de los partidos populares y de la Central Única de Trabajadores... Repito que este gabinete nació de la realidad de los hechos que viviera en octubre nuestro país y que yo había denunciado en septiembre”⁴⁷⁸. Los oficiales incorporados fueron el general Carlos Prats en Interior, el Almirante Ismael Huerta, en Obras Públicas, y el general de Aviación Claudio Sepúlveda en Minería. La presencia de los oficiales buscaba una solución, ya fuera por la vía de obligar a Allende a retroceder (caso de Huerta) o de impedir el triunfo de la sedición de derecha (Prats y Sepúlveda). Esta esperanza constitucionalista en los uniformados no era una simple opinión de Allende, sino era compartida por otros personeros de la coalición de gobierno, que vieron en el gabinete con militares la forma de “terminar con la crisis política creada por el paro sedicioso”, pues al asegurar la institucionalidad ayudaron a que el programa siguiera. Por eso la oposición rechazó la presencia de la oficialidad, pues a juicio del senador nacional Francisco Bulnes: “si los ministros de las FF.AA. han ido al gobierno para servir las posiciones políticas y el programa de la Unidad Popular... no cabe duda que faltarían gravemente a la misión que les señalan la Constitución y las leyes... ya que están mezclándose en política partidista”⁴⁷⁹.

⁴⁷⁷ Verónica Valdivia O. de Z. “Camino al golpe”, sección 3.

⁴⁷⁸ Discurso del 28 de noviembre, en *Patria Nueva*, No.22, diciembre 1972.

⁴⁷⁹ *Chile Hoy*, No.22 10 nov. De 1972; No.23, 17 de nov. 1972; Carlos Prats *Diario*, pp.10-11.

Esta imagen se vio reforzada con la solución que se le dio al problema del desabastecimiento, la Secretaría Nacional de Distribución, a cargo de general de Aviación, Alberto Bachelet. Al producirse las primeras manifestaciones de desabastecimiento e iniciarse las “colas”, surgieron como respuesta las Jap, las Juntas de Abastecimiento y Precio, organizaciones vecinales que buscaban regular la distribución de alimentos y artículos esenciales para hacer frente a la distribución clandestina hecha por el mercado negro, para lo cual las familias debían inscribirse en la Junta de su barrio, recibiendo una tarjeta que le aseguraba el abastecimiento. Como el paro de octubre apuntaba directamente a la desarticulación económica, las Jap se constituyeron en uno de los frentes con los cuales la Unidad Popular resistió el embate. En enero de 1973 se llegó a la conclusión que las condiciones estaban dadas para asegurar las cuotas de consumo y no dejar al mercado actuar libremente, implementando mecanismos de control, asegurándose para sí una capacidad mínima de transporte y la solución del problema de la distribución. La nueva política económica significó la creación por decreto de la Secretaría Nacional de Distribución y Comercialización, colocando a cuatro uniformados en servicio activo y uno en retiro en la jefatura de las empresas distribuidoras estatales, siendo su Secretario el general Alberto Bachelet, el que programaría los abastecimientos, la distribución y el trabajo con los pobladores. El segundo decreto se refirió al Funcionamiento de las Jap, ordenado por el ministro, general Carlos Prats, el cual apuntaba a un control sobre su localización y la regularidad de su constitución, dando vida a los Inspectores, quienes debían registrarse en las comisarías de carabineros. Esta medida, según fuentes de gobierno, impediría la creación de Jap paralelas por la oposición y evitaría choques con las fuerzas de derecha provocadores de hechos violentistas⁴⁸⁰. Es decir, ambos decretos apuntaban a bloquear una de las principales armas de la oposición –la desarticulación económica–, cuestión que estuvo en la raíz de la decisión de designar un militar en su jefatura, pues a comienzos de 1973 se rumoreaba la intención de un segundo paro, amenaza que se cumplió en julio de ese año.

El cargo asignado al general Bachelet era el segundo en importancia después del de Prats, por su ubicación en la sensible área del abastecimiento y, aunque los oficiales aseguraban no estar ahí como partidarios del gobierno, sino como fuerzas obedientes y no deliberantes, lo cierto es que se le dio a su actuación una connotación política, pues se trataba de cumplir las órdenes del gobierno: “La política nuestra –afirmó el general Bachelet–, la que nos impartió el Presidente, es que haya distribución equitativa para diez millones de chilenos: que tengan todos acceso a la misma cantidad de alimentos, proporcional a la familia y a la población en que se vive y podamos distribuir por igual lo que tengamos”⁴⁸¹. Bachelet, como buen oficial, se dedicó a organizar la Secretaría y asegurar su buen funcionamiento, atacando, en primer lugar, la “sicosis de la gente de querer comprar más de lo que va a

⁴⁸⁰ *Chile Hoy*, N° 31, 12 de enero de 1973 y N° 33, 26 de enero de 1973.

⁴⁸¹ *Chile Hoy*, N° 34, 2 de feb. de 1973.

consumir”. Por otra parte, lograr que las Jap cumplieran cabalmente su función social, esto es, determinar la densidad poblacional, las necesidades del comercio, controlar que las empresas distribuidoras entregaran los productos en la cantidad suficiente y a tiempo y al precio fijado. Todo esto requirió desmentir a la oposición acerca de la ilegalidad de las Jap. La derecha había iniciado toda una campaña de desprestigio de las Jap acusándolas de arbitrariedades y abusos, y de ser organismos ilegales de presión política, por lo que debía ordenarse su disolución. Los militares a cargo debieron intervenir, bloqueando la estrategia de este sector político, pues insistían en que las Jap representaban los intereses del consumidor corriente y era deber del gobierno asegurar el abastecimiento en esa situación compleja. Más aún, de acuerdo a la información del Secretario de Distribución, el área social solo controlaba el 30% de la industria de alimentos, mientras que el sector privado retenía el 70% restante y por eso era importante la política que se estaba implementando. Bachelet llamaba a la población a confiar en las Jap e inscribirse en ellas: “Las Jap como organismos asesores y colaboradores, juegan papeles bien esenciales, claves. Pienso que toda la población debe sumarse a ellas, no importa que se llamen Jap o Cap (Comités de Abastecimiento Popular)”⁴⁸². Como era necesario alcanzar toda la producción posible, los oficiales se vieron involucrados en la lucha contra los acaparadores, contra el mercado negro, arma económica de la derecha. Como reflexionaba desesperanzado el general Prats: “Al acercarse marzo crece la propaganda. Todo se pone en juego... El argumento principal contra el gobierno es el desabastecimiento echándole toda la culpa al gobierno, en circunstancias que no pasa un día sin que descubramos depósitos de bodegas clandestinas con toneladas de productos alimenticios y artículos desaparecidos del comercio. Solo en la primera semana de febrero se encontraron más de cien depósitos de este tipo”⁴⁸³.

En otras palabras, Bachelet, Prats y los otros oficiales comprobaron fehacientemente las armas usadas por la oposición. Esto es importante para entender el respaldo que hasta el final mantuvieron los oficiales colaboradores del gobierno, pues el acaparamiento, la política de someter por el hambre, era un problema de seguridad nacional, de patriotismo, algo incomprensible para su mentalidad. La política debía, según el análisis del general Prats, haber llegado a muy bajo nivel para optar por ese tipo de medidas. Estos oficiales, y otros como ellos, aparecieron como responsables directos del fracaso de los objetivos políticos de la oposición y, por ende, de alguna manera tomaron posición.

Por el contrario, hubo uniformados que estuvieron en otro espacio del conflicto y que terminaron situándose en el bando contrario a la Unidad Popular: fueron a quienes correspondió la aplicación de la ley de control de armas aprobada a fines de 1972. Como es sabido, el demócratacristiano Juan de Dios Carmona envió un proyecto de ley por el cual se entregaba a las fuerzas armadas el control de la circulación de armas entre la población civil, iniciativa

⁴⁸² *Chile Hoy*, N° 39, 9 de marzo de 1973.

⁴⁸³ Prats, Carlos. *Diario*, p.11. Prats también reproduce un instructivo de Patria y Libertad sobre “12 recomendaciones destinadas a los industriales del sector privado” para ocultamiento de mercancías.

a la que respondió una del Presidente de la República, coincidiendo en darle a esas instituciones dicha función, en el marco de lo que fue el paro de octubre; la ley entró en vigencia el 21 de octubre de 1972. Esta Ley, sin embargo, no se aplicó hasta julio de 1973, es decir, cuando la conspiración en contra del gobierno de la Unidad Popular ya estaba en marcha en su fase definitiva. El hito demarcatorio fue el levantamiento del Regimiento Blindado No.2, a cargo del coronel Roberto Souper, en combinación con Patria y Libertad y otros grupos opositores, el día 29 de junio de 1973 (el “Tancazo”), que buscaba derrocar al gobierno. El Comandante en Jefe del Ejército, general Carlos Prats, detuvo personalmente la conspiración, pero no pudo detener el proceso de politización que se apoderó de su institución y de las otras, ya atrapadas por las presiones del ambiente político y porque a esas alturas, la oposición centraba todas sus esperanzas en la intervención golpista de las fuerzas armadas para deshacerse del gobierno marxista. Debe recordarse que, si bien la conspiración comenzó en diciembre de 1972 en Valparaíso, no logró una real articulación hasta después del “Tancazo”, cuando tras la reunión del Grupo de los 15, el 1 de julio de ese año, los complotadores descubrieron que había la recepción suficiente para dar curso al golpe⁴⁸⁴.

Esto tal vez incidió en el carácter que asumió la aplicación de la norma, pues ella se centró en operativos y allanamientos contra los centros de trabajo y poblaciones. Los militares hicieron una aplicación selectiva del control de armas, pues no se usó contra las organizaciones de derecha, especialmente contra “Patria y Libertad”, directa involucrada en el motín, sino como un instrumento de represión contra los trabajadores, realizándose constantes allanamientos. La ley facultaba a los militares para allanar cualquier lugar si había una denuncia de existencia de armas, en busca de “arsenales”, sin necesidad de una orden judicial. Los allanamientos comenzaron a tener un carácter cada vez más violento y con gran despliegue militar y, aunque en general no se encontraban armas en las fábricas y los cordones industriales⁴⁸⁵, ello fue alienando a los uniformados que participaban en estas acciones, dada la campaña de la prensa derechista de que se preparaba una guerra civil.

El asesinato del edecán del Presidente Allende, comandante Arturo Araya en julio de 1973, según Prats introdujo un nuevo elemento de tensión hacia el gobierno de Allende, exacerbando los ánimos, especialmente en la Marina, donde la irritación subió de grado. La aplicación de la ley de control de armas parece haberse convertido en un desquite, ampliándose el uso de recursos bélicos: la FACH utilizó hasta helicópteros, provocando más violencia. El caso más emblemático de la brutalidad que adquirieron los allanamientos fue el ocurrido en Punta Arenas, donde la acción realizada por la Fuerza Aérea y la Armada sobre distintos centros industriales, y en otros al mando de general Manuel Torres de la Cruz –uno de los conspiradores–, terminó con la muerte

⁴⁸⁴ González, Mónica. *La conjura. Los mil y un días del golpe* (Stgo.: 2000) y Pérez, David “La Fronda Militar. El 11 de septiembre”, Tesis de Magister en Ciencias Políticas, UCH:2000.

⁴⁸⁵ Años después del golpe, el general Gustavo Leigh G. aseguró que para el 11 de sept. de 1973 los cordones no estaban armados como se aseguró entonces y por años. TVN “Medianoche”, Programa especial con motivo de la muerte del general Leigh (septiembre de 1999).

por ametrallamiento del trabajador Manuel González y el ataque a bayoneta del obrero Guillermo Calixto. Durante la operación se usaron tanques armados de ametralladoras⁴⁸⁶.

Esto trajo como consecuencia, altercados directos entre las fuerzas armadas y las organizaciones de trabajadores, las que hicieron duras declaraciones, buscando responsables. El Partido Socialista, la CUT y el MIR criticaron abiertamente la actitud antiobrera de esas instituciones.

Así, hacia la primavera de 1973, no solo la conspiración marchaba a pasos agigantados, sino los oficiales estaban cada vez más involucrados en el conflicto político, delinéndose claramente dos bandos distintos. El miedo del general Prats a la posibilidad de una guerra civil parecía acercarse cada vez más a su concreción en la medida que las fuerzas armadas se dividían. Su renuncia el 22 de agosto de 1973 a la Comandancia en Jefe del Ejército, abriendo el camino al golpe, fue la última expresión del ocaso de la política militar de la Unidad Popular. La mañana del 11 de septiembre de 1973, la dualidad de la respuesta uniformada frente al experimento socialista llegó a su fin. A partir de entonces, hubo una sola posición aceptable.

La política militar de Allende y la Unidad Popular sucumbió a la reestructuración de la oposición a partir de 1972 y el uso que pudieron hacer de los otros poderes del Estado –Judicial y Legislativo–, con lo cual el gobierno no tuvo cómo controlar la presencia de las fuerzas armadas en el gobierno, las que fueron arrastradas al fragor de la lucha política, provocando el debilitamiento de su doctrina de no deliberación y llevándolas a tomar posiciones en el conflicto. La convergencia de los grupos opositores y la grave amenaza que significó el paro de ocubre significó la llegada de los militares a los núcleos del conflicto con la oposición: su arma económica (el desabastecimiento) y la existencia de grupos supuestamente armados. La pelea por la distribución y el control de armas hizo imposible su prescindencia política. Los que se quedaron en las distintas entidades estatales creían que “su deber” era impedir el triunfo de la estrategia opositora de lograr la total desarticulación de la economía y con ello la confrontación; los que cambiaron de bando, pensaban que “su deber” era terminar de una vez con el gobierno marxista.

Allende y la Unidad Popular no pudieron completar su sueño de unas fuerzas armadas modernas, democráticas y plenamente integradas al desarrollo nacional como era también el sueño de muchos oficiales, y de la suboficialidad y tropa.

⁴⁸⁶ *Chile Hoy*, N° 59, 27 de julio y N° 61, 10 de agosto de 1973; Carlos Prats *Diario*, pp. 25-27.

Presentación	5
Hacer la revolución en Chile JULIO PINTO V.	9
1. La Revolución: objetivo compartido	9
2. ¿Cómo hacer la Revolución?	15
3. Réquiem para una revolución	32
La vía chilena al socialismo:	
Itinerario de la crisis de los discursos estratégicos de la Unidad Popular TOMÁS MOULIAN E.	35
1. Las complejas relaciones entre práctica y teoría	35
1.1 El “deber ser” del proceso y su apariencia	35
1.2 La discusión estratégica que no se hizo	37
1.3 Pendiendo de un hilo	38
2. La geneología de una ruptura	40
2.1 Las modificaciones de las tesis estratégicas de los socialistas	41
2.2 Los comunistas, la tesis del Frente de Liberación Nacional y de la transición pacífica	44
2.3 Las principales discusiones entre socialistas y comunistas en la década del sesenta	46
2.4 La crisis estratégica de la Unidad Popular	50
Construyendo “las poblaciones”:	
El movimiento de pobladores durante la Unidad Popular MARIO GARCÉS D.	57
1. La habitación popular	57
2. La organización poblacional	59
3. El Estado bajo presión: los planes de vivienda	61
4. Los pobladores y el gobierno de la Unidad Popular	63
5. Construir más viviendas	64

6. Operación invierno y balnearios populares para el verano	68
7. Que el Estado construya: la “ejecución directa”	69
8. La autonomía del movimiento de pobladores	71
9. Congreso de Pobladores de San Miguel	72
10. La población Nueva Habana	73
11. La crisis del abastecimiento y las JAP	77

Construyendo “Poder Popular”:

El movimiento sindical, la CUT y las luchas obreras en el periodo de la Unidad Popular

FRANCK GAUDICHAUD

81

1. Fuerza y límites de la estructuración sindical chilena	84
2. Participación, estrategia sindical y división política del movimiento obrero	87
3. Conquistas sociales, institucionalización sindical y desbordamiento en la base	91
4. El Octubre chileno, la CUT y los Cordones Industriales	94
5. Ensayo de Balance general: “El pasado siempre es importante”	104

La Iglesia que nace del pueblo:

Relevancia histórica del Movimiento

Cristianos por el Socialismo

MARIO AMORÓS

107

1. Del anatema al diálogo	107
2. La opción por el socialismo	112
3. De Medellín a Santiago	117
4. Derrota, condena episcopal y martirio	120
5. Conclusiones	125

“El cuerpo nuestro de cada día”:

El pueblo como experiencia emancipatoria

en tiempos de la Unidad Popular

MARÍA ANGÉLICA ILLANES O.

127

1. La encarnación	128
2. La sanación	133
3. La alimentación: leche, pan y canasta popular	138

La cultura en la Unidad Popular:		
Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente	CÉSAR ALBORNOZ	147
1. Palabras preliminares		147
2. <i>Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente.</i>		
<i>Será el pueblo quien construya un Chile bien diferente.</i>		147
3. <i>Hoy es el primer día del resto de tu vida</i>		152
4. <i>Joven camarada que construyes tu esperanza.</i>		
<i>Alumbras los muros con rojo grito de libertad.</i>		166
5. <i>Y el que no crea que haga la prueba. No nos moverán...</i>		173
6. Palabras finales: <i>Vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo</i>		175
“Todos juntos seremos la historia: Venceremos”		
Unidad Popular y Fuerzas Armadas	VERÓNICA VALDIVIA O. DE Z.	177
1. ¿Un gobierno sin política militar?		180
2. “Todos juntos seremos la historia”: La vía chilena al socialismo		189
3. El ocaso de un proyecto histórico: participación, politización y sedición		200

**ESTE LIBRO HA SIDO POSIBLE
POR EL TRABAJO DE**

Comité Editorial Silvia Aguilera, Mauricio Ahumada, Carlos Cocña, Mario Garcés, Luis Alberto Mansilla, Tomás Moulán, Naín Nómez, Julio Pinto, Paulo Slachevsky, Hernán Soto, José Leandro Urbina, Verónica Zondek **Asistente editorial** Verónica Sánchez **Proyectos** Ignacio Aguilera **Secretaría Editorial** Alejandra Céspedes **Dirección de Arte** Txomin Arrieta **Diseño y Diagramación Editorial** Ángela Aguilera, Paula Orrego, Alejandro Millapan **Corrección de Pruebas** Raúl Cáceres **Exportación** Ximena Galleguillos **Página web** Leonardo Flores **Comunidad de Lectores** Olga Herrera, Francisco Miranda **Secretaría Distribución** Sylvia Morales **Ventas** Elba Blamey, Luis Fre, Marcelo Melo, María Olga Fuentealba **Administración distribuidora** Francisco Cerda **Bodegas** Jaime Arel, Servando Maldonado, Jorge Peyrellade **Librerías** Nora Carreño, Ernesto Córdova **Secretaría Gráfica LOM** Tatiana Ugarte **Comercial Gráfica LOM** Juan Aguilera, Marcos Sepúlveda **Servicio al Cliente** Elizardo Aguilera, José Lizana, Guillermo Bustamante **Diseño y Diagramación Computacional** Claudio Mateos, Nacor Quiñones, Luis Ugalde, Luis Gálvez **Coordinador de diagramación** Ingrid Rivas **Producción imprenta** Pedro Pablo Díaz **Secretaría Imprenta** Jazmín Alfaro **Impresión Digital** Carlos Aguilera, Efraín Maturana, William Tobar **Preprensa Digital** Daniel Véjar, Felipe González **Impresión Offset** Eduardo Cartagena, Freddy Pérez, Rodrigo Véliz, Francisco Villaseca **Corte** Eugenio Espíndola, Sandro Robles **Encuadernación** Alexis Ibaceta, Rodrigo Carrasco, Sergio Fuentes, Aníbal Garay, Pedro González, Carlos Muñoz, Luis Muñoz, Gabriel Muñoz **Despachos** Miguel Altamirano, Pedro Morales, Felipe Gamboa **Supervisión de costos** Jorge Slachevsky **Administración** Mirtha Ávila, Alejandra Bustos, Diego Chonchol.

LOM EDICIONES